

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE DERECHO**  
**Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política I**



**DERECHO DE EXTRANJERÍA Y CRISIS DEL ESTADO  
SOCIAL**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR  
PRESENTADA POR**

**Emilio J. Ramírez de Matos**

Bajo la dirección del doctor

Javier Roiz Parraíguez

**Madrid, 2013**

©Emilio J. Ramírez de Matos, 2012

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política

**DERECHO DE EXTRANJERÍA Y CRISIS DEL ESTADO SOCIAL**

**TESIS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE DOCTOR**

Director: Prof. Dr. D. José Iturmendi Morales

Autor: D. Emilio J. Ramírez de Matos

Madrid, Noviembre 2012.

# **INDICE**

- **INTRODUCCION**
- **CAPITULO I: DESARROLLO LEGISLATIVO DEL DERECHO DE EXTRANJERIA DESDE SUS INICIOS AL AÑO 2010**
  - La Ley Orgánica 7/1985 y el Real Decreto 1119/1986
  - La política de contingentes y el RD 155/1996
  - Evolución legislativa del año 2000 al año 2005
    - Las Leyes Orgánicas 4/2000, 8/2000 y el Real Decreto 864/2001
    - Las Leyes Orgánicas 11/2003, 14/2003 y el Real Decreto 2393/2004
  - Evolución legislativa del año 2005 al 2010
- **CAPITULO II: PANORAMA LEGISLATIVO ACTUAL**
  - Evolución constitucional de los derechos y libertades de los extranjeros
    - Marco constitucional de los derechos y libertades de los extranjeros en España.
    - Doctrina del Tribunal Constitucional, en materia de Derecho de Extranjería.
    - Limitación legislativa, a raíz de la doctrina constitucional.
    - Últimas sentencias del Tribunal Constitucional en Derecho de Extranjería.
  - Derechos y Libertades de los extranjeros en España, en la actualidad.

- **CAPITULO III: TRABAJO POR CUENTA AJENA Y PROPIA, SU RENOVACION Y LA RESIDENCIA NO LUCRATIVA.**

- Previo.
- La autorización de residencia temporal y trabajo.
- Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
- Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.
- Trabajadores transfronterizos.
- Referencia especial al catalogo de ocupaciones de difícil cobertura.
- Régimen de visados.
- Cuadro comparativo.

- **CAPITULO IV: LA RESIDENCIA NO LUCRATIVA Y LA RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES**

- La residencia no lucrativa.
- La autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones de protección internacional.
- La autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias.
- La autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razón de colaboración con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales.
- Prorroga y cese de las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales.
- La residencia temporal con exceptuación de permiso de trabajo, su renovación y el régimen de visados.
- Cuadro comparativo.

- **CAPITULO V: LA REAGRUPACION FAMILIAR**

- La residencia en virtud de reagrupación familiar.
- La renovación de la reagrupación familiar.
- Régimen de visados.
- Cuadro comparativo.

- **CAPITULO VI: EL ARRAIGO**

- La autorización por razón de arraigo.
- El arraigo laboral.
- El arraigo social.
- El arraigo familiar.

- **CAPITULO VII: LA NACIONALIDAD**

- Previo.
- Concepto de nacionalidad.
- Formas de adquisición de la nacionalidad española: Originaria y Derivativa.
- Pérdida de la nacionalidad española: Voluntaria y Forzosa.
- Recuperación de la nacionalidad española.
- La doble nacionalidad.

- **CAPITULO VIII: EL REGIMEN COMUNITARIO**

- Previo.
- Certificado de registro de residente comunitario.
- Modificación o baja en el registro central de extranjeros.
- Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
- Familiares de ciudadano español.

- Renovación de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
- Certificado de registro de residente comunitario permanente.
- Régimen de visados.

- **CAPITULO IX: MENORES**

- Marco normativo
- La tutela
- La protección de los menores
- Los menores extranjeros no acompañados
- Desplazamiento temporal de menores extranjeros por vacaciones, enfermedad o escolarización.
- La residencia de hijo de residente legal.
- Residencia de menores tutelados por la comunidad autónoma.
- Renovación de la residencia de menores tutelados por la comunidad autónoma.
- Residencia de menores tutelados por la comunidad autónoma que alcanzan la mayoría de edad, sin haber obtenido la autorización de residencia.

- **CONCLUSIONES**

- **BIBLIOGRAFIA**

*Patria mea totus hic mundus est.*

*Mi patria es todo este mundo. (Seneca)*

## **INTRODUCCIÓN.**

Con la presente Tesis, intentamos dar una visión general de cómo los derechos de muchos de nuestros ciudadanos se están viendo mermados a consecuencia de la grave crisis económica en la que nos encontramos, y de cómo esa crisis económica esta irremediabilmente convirtiéndose en una crisis del estado social, como esa economía nos esta haciendo perder alguno de nuestros valores o creencias que hasta el momento pensábamos afianzadas. Intentamos dar una visión general de cuales son los derechos de los extranjeros y de cómo algunos de ellos están mermando a consecuencia de la crisis económica que estamos sufriendo, y que arrastra a una irremediable crisis del estado social.

Por ello, a lo largo de este trabajo, es nuestra intención dar una perspectiva de cual ha sido esa evolución, de donde estamos ahora, para finalmente, proponer, como no puede ser de otro modo, posibles soluciones.

Los procesos migratorios, como sabemos, no son un producto de nuestro siglo, puesto que los desplazamientos de personas en busca de mejores condiciones de vida, han existido desde la prehistoria. Sin embargo, los flujos migratorios han experimentado un incremento cualitativo y cuantitativo en las ultimas décadas. Movimiento este, que es observado con preocupación por parte de los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales, por la gran repercusión que tienen en las relaciones sociales y políticas, no solo entre los países de origen y receptores de la inmigración, sino también a nivel global, toda vez que, en una sociedad globalizada, como en la que nos encontramos, ha quedado acreditado que los problemas que sufren las naciones individualmente consideradas, normalmente, de una forma u otra tienen consecuencias en el resto de los países, sobre todo en los países limítrofes a estos.

En los últimos tiempos, nuestra posición geográfica ha configurado, a España como una puerta a Europa, por parte de los países Africanos, esto junto con la identidad cultural que tenemos con los países iberoamericanos ha hecho que confluyan en nosotros estas dos importantes corrientes de inmigración. Si bien, como veremos a lo largo de este trabajo, la tendencia, esta comenzando a invertirse, por las razones que más adelante enunciaremos.

Mas como tradicionalmente, [España](#) ha sido un país de [emigración](#), su [producción legislativa](#) se ha centrado en este ámbito, mientras que la legislación relativa a la extranjería era fragmentaria. El primer intento de paliar esto se dio con la Ley Orgánica 7/[1985](#), de [1 de julio](#), sobre Derechos y Libertades de los extranjeros, que fue fuertemente criticada, por su tratamiento policial del fenómeno migratorio, su regulación restrictiva en materia de derechos de los extranjeros, y la deficiente técnica legal que mostraba. En ese intento de evitar ser esa puerta a Europa, nuestros legisladores configuraron la que quizás fue la ley de inmigración mas dura de toda Europa. Por ello, la misma fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, resuelto por la [Sentencia](#) del [Tribunal Constitucional](#) 115/[1987](#), de [7 de julio](#), que anuló varios preceptos de la norma y marcó un cambio de la doctrina constitucional en materia de extranjería, hacia una línea más progresista. Las deficiencias de la Ley y la transformación del [fenómeno migratorio en España](#) a finales de los años 80 y en la década de los 90, mostró la necesidad, de una nueva ley adaptada a las circunstancias.

La reforma se produjo finalmente por la Ley Orgánica 4/[2000](#), que es la que, tras experimentar diversas modificaciones, está actualmente en vigor. Esta Ley supuso un cambio importante, al introducir políticas de integración, ampliar los derechos de los inmigrantes y establecer un principio general de igualdad con los españoles. Sin embargo, la Ley en conjunto empeoraba la situación de los inmigrantes, especialmente de los indocumentados. Ya que entre otras cosas impedía que estos pudieran acceder a la legalización de su situación en nuestro país.



El Reglamento de la Ley de Extranjería adoptado por Real Decreto 864/[2001](#), de [20 de julio](#), y derogado en la actualidad por el [Real Decreto 557/2011](#), de [20 de junio](#) de 2011, sufrió, en trece de sus artículos la nulidad por el [Tribunal Supremo](#), en su sentencia de [20 de marzo](#) de [2003](#), por violación del [principio de legalidad](#). En ese mismo año [2003](#), en que se dictó la sentencia, la Ley fue reformada dos veces. La primera, por la LO 11/[2003](#), de [29 de septiembre](#), que afectó fundamentalmente a la expulsión de los extranjeros y estableció la conmutación de [penas](#) de prisión, de hasta seis años, por la expulsión. La segunda, por la LO 14/[2003](#), de [20 de noviembre](#), que incorporó con rango de Ley Orgánica, muchos de los preceptos del Reglamento, anulados por el Tribunal Supremo. Además, según afirma su Exposición de Motivos, la reforma pretendía adaptar la norma a los cambios en el fenómeno migratorio, incorporar instrumentos que permitieran una regulación de los flujos migratorios, mejor y más sencilla e introducir las decisiones tomadas en el seno de la [Unión Europea](#) en los años anteriores, seguíamos entonces recortando esos derechos.

En definitiva, y como desarrollaremos mas adelante, que el derecho de extranjería en nuestra legislación, ha sido y es de todo, menos “pacífico”. Y ello, por la materia que aborda, muy sensible desde un punto de vista social, pero todavía mucho mas delicado desde un punto de vista puramente económico, y en la situación en la que nos encontramos actualmente, ese devenir económico esta afectando duramente a toda la sociedad, y a los derechos ya consolidados de parte de los extranjeros.

Sin duda, lo ideal seria un tratamiento eficaz y serio de la materia, dejando al margen ideologías políticas, que desde la rigidez de los partidos, de la denominada centro-derecha, hasta la permisibilidad de los partidos de centro-izquierda, han hecho que esta materia, en lugar de tener como seria lo deseable, una seguridad jurídica en su tratamiento, haya estado siempre al albur de quien gobierne.

Si a lo reseñado añadimos la incuestionable situación de crisis económica en la que nos encontramos inmersos actualmente, el “coctel” esta servido.

La presente Tesis analiza y constata una realidad jurídica. Trata de acreditar ese deterioro en los derechos y libertades que de un tiempo a esta parte viene sufriendo parte de nuestros ciudadanos, y decimos así, pues aunque les pese a muchos partidos políticos, el extranjero forma parte del tejido social, y como no, económico de la sociedad española actual, y olvidarlo, relegarlo, e incluso desterrarlo, es algo que no podemos permitirnos.

No abogamos ni mucho menos por una inmigración sin normas o reglas. Todo lo contrario. Desde esta Tesis lo que queremos es proponer, sugerir, o indicar que una reglamentación que parta desde la igualdad es posible y que además, muy al contrario del pensar actual de algunos sectores de la sociedad, puede ayudar a salir de la crisis económica en la que nos encontramos inmersos.

No podemos asegurar que con una reglamentación restrictiva, haremos posible que no vengan inmigrantes, o que éstos deseen irse, no podemos poner puertas al mar, debemos de convivir con esa realidad social, realidad que por otra parte nos enriquece, y que hemos de apreciar y cuidar, pues hasta hace bien poco, nuestro país fue un país de emigrantes, e incluso hoy, con la crisis que nos acucia el numero de ciudadanos que empiezan a marcharse de nuestra “casa” es superior al de los que llegan, por primera vez en mucho tiempo. De hecho desde enero de 2011 mas de un millón de españoles han emigrado. Se habla ya de la “generación exilio”.

Una reglamentación restrictiva como la que estamos viviendo, y constatamos en el cuerpo de esta Tesis, no va a impedir la llegada de personas que deseen venir a trabajar y vivir en España. Va a originar sin duda, una economía sumergida, pues es indudable, que el ser humano tiene que trabajar para vivir, siendo además ello un derecho, y a ese extranjero relegado a la ilegalidad solo le quedaran dos caminos, o bien formar parte de esa economía sumergida, con el empobrecimiento que ello conlleva a la sociedad (impago de impuestos, impago de seguridad social, cuotas de paro y jubilación, etc...) o la delincuencia, con el problema de inseguridad que ello podría representar para la sociedad española.

Es por tanto esta materia, un tema difícil, sensible, delicado, en el que hay que mediar y trabajar con mesura y equilibrio, pues tan nefasta es la rigidez absoluta de reglamentación, como la falta de normas o reglas que regulen la cuestión.

En esta Tesis vamos a abordar cual es la realidad actual, y cómo hemos llegado hasta ella a partir del año 1985, año en que se dicta la primera regulación específica sobre esta cuestión. Veremos comparativamente el actual Reglamento de Extranjería y su inmediato antecesor, pues hacerlo de todos los anteriores excedería con mucho de lo que debe ocupar un trabajo de estas características, si bien no lo relegamos, pues es un tema muy interesante y que podríamos tratar en posterior momento.

No podemos terminar esta Introducción sin hacer mención a la génesis constitucional de la materia que nos ocupa, toda vez que es nuestra Constitución la que establece ese parámetro de igualdad entre los españoles y los extranjeros, ese parámetro al que sin duda debemos de orientar la regulación de la cuestión inmigratoria, pues solo de ese modo, conseguiremos una sociedad igualitaria plenamente real. Nuestra Carta Magna en su artículo 13.1 dice:

*1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley.*

Por ultimo, conviene puntualizar que la presente Tesis es fruto de mi experiencia profesional, después de mas de quince años trabajando como letrado, en la materia objeto de este trabajo, intento que mi praxis y conocimientos adquiridos durante estos años sobre Derecho de Extranjería ayuden a resolver problemas, dudas en la medida de lo posible a todas las personas que de una manera u otra estén involucradas o interesadas en la misma. Hemos igualmente de advertir, que al ser fruto de una experiencia profesional no quede reflejado soporte doctrinal alguno de autores que se dediquen al estudio de la extranjería. Sin duda, y para una posterior publicación total o parcial de esta tesis, y siguiendo las indicaciones de mi Director, las mismas serán incluidas.

## **CAPITULO I: DESARROLLO LEGISLATIVO DEL DERECHO DE EXTRANJERIA DESDE SUS INICIOS A LA ACTUALIDAD**

Con anterioridad a la primera ley orgánica de derechos y libertades del año 1985, la carencia legislativa en la materia de extranjería era absoluta, por las razones anteriormente indicadas, lo que hizo que fueran los tribunales los que actuaran como garantes de los derechos de los extranjeros, del mismo modo a como harán después con la existencia de una norma propiamente de extranjería, dado que como veremos mas adelante, han sido los tribunales en muchas ocasiones lo que han tenido que corregir ese exceso de celo del gobierno de tuno.

Así las cosas, antes del año 1985 los tribunales, tomando como referencia la Constitución y de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por España, consiguieron proteger de una forma adecuada los derechos de los extranjeros en nuestro país.

Con ello llegamos al año 1985, en el que se promulga la primera ley de extranjería, la cual subsiste hasta el año 2000, fecha en la que el crecimiento progresivo de los flujos y la impotencia para modificar la normativa básica, provocó la reforma de los instrumentos de desarrollo de la misma en una realidad social en profundo cambio.

## **La Ley Orgánica 7/1985 y el Real Decreto 1119/1986**

Una de las principales virtudes de la LO 7/1985, de 1 de julio, de derechos y libertades de los extranjeros en España, vigente hasta el 1 de febrero de 2000, fue la de reunir en un solo texto la múltiple normativa dispersa que existía al respecto. Ciertamente ésta era una regulación pensada para controlar las entradas de extranjeros en España y que establecía un régimen de sanciones de gran discrecionalidad para los inmigrantes que no se encontraran en situación regular. No resulta, por tanto, extraño que cuestiones como la entrada, la expulsión y la devolución, constituyeran la base de esta norma. Estábamos entrando en la UE y la presión de los organismos europeos, así como el miedo del propio gobierno a ser la puerta de entrada de la inmigración africana hacia Europa, hicieron que la referida norma fuera sin duda de las más rígidas y estrictas del panorama legislativo europeo de entonces, se trataba de dar seguridad a los estados europeos de que España no sería un coladero de inmigrantes en un ámbito europeo en el que Estados como Alemania o Francia habían cerrado, en buena medida, sus puertas a la inmigración desde la crisis del petróleo de principios de los setenta.

Con esta norma para la entrada legal se exigía ya el visado obtenido en el país de origen, en un contexto en el que apenas existían los vínculos internacionales necesarios para que los empresarios entraran en contacto con los trabajadores extranjeros. Además de este primer filtro en el que una parte significativa de nacionales de terceros estados estaban exonerados de la obligación de obtener visado en función de los convenios bilaterales que se hubieran suscrito con España, así como la existencia de ciertas circunstancias por las cuales el visado quedaba eximido (por ejemplo, padres de menores nacidos en España, etc...) existía una segunda supervisión de los documentos y del cumplimiento de las condiciones de entrada que se realizaba en los puestos fronterizos que hubieran sido habilitados para ello.

El control en el momento de la entrada era uno de los pilares de la ley de 1985. Además incorporaba, junto a las medidas ya indicadas, otras de alejamiento como el rechazo en frontera o la devolución. La precaria regulación de este tipo de previsiones favorecía la discrecionalidad administrativa a la hora de concretar la norma aplicable, constituyendo una invitación a la arbitrariedad administrativa, lo cual llevo a una serie de abusos fronterizos difícilmente controlables por el poder judicial, pues esa arbitrariedad hacia que los tribunales no tuvieran suficiente base legislativa para poder ponerle “coto” al indicado abuso.

El reglamento de ejecución de la ley fue aprobado por el RD 1196/1986, de 26 de mayo. Dentro de los márgenes del principio de jerarquía normativa, esta disposición de desarrollo venía a reproducir los defectos legales añadiendo alguno más. Así, por ejemplo, introdujo el control policial de la documentación personal de los extranjeros sin que existiera una disposición legal en la que ampararse para justificar dicha medida que sólo quedó legitimada con posterioridad al amparo de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

El amplio margen de discrecionalidad contemplado en la norma básica fue reforzado por la regulación reglamentaria, consagrando un régimen de infracciones y sanciones sin gradaciones, en el que existía un amplio margen de actuación a la hora de concretar medidas como el rechazo en frontera, la devolución o la expulsión.

El sistema legal era rígido y la política sancionadora acababa en la mayoría de casos en expulsión. En efecto, la norma se centraba básicamente en el control de entrada, en las medidas sancionadoras y no se contemplaba siquiera la posibilidad de reagrupación familiar puesto que la inmigración no era concebida, todavía, como de asentamiento o permanente. Por todo ello la aplicación de la ley, en un entorno en el que los flujos iban creciendo progresivamente pero sin llegar a alcanzar los niveles de los años sucesivos, no dejó de generar problemas.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo dio lugar a la STC 115/1987, de 7 de julio, que, entre otras cuestiones, suprimió las restricciones al derecho de reunión (por vincularlo a la autorización de residencia, como volvió a ocurrir con la LO 8/2000 siendo de nuevo declarado inconstitucional) o el de asociación (que permitía su suspensión por el Gobierno). Asimismo se concretó la disposición legal relativa al internamiento preventivo de los extranjeros para la expulsión que la ley contemplaba en el artículo 26.2, admitiendo el plazo legalmente establecido de cuarenta días como duración máxima del internamiento pero puntualizando respecto al mencionado precepto «que aún cuando utiliza el término «imprescindible» sólo respecto a la duración, implícitamente parece dar a entender que ha de ser también imprescindible la propia pérdida de libertad, de modo que no es la sustanciación del expediente de expulsión, sino las propias circunstancias del caso, por razones de seguridad, orden público, etc., las que han de justificar el mantenimiento de esa pérdida de libertad, siendo el Juez, guardián natural de la libertad individual, el que debe controlar esas razones. Este carácter restringido y excepcional de la medida de internamiento se refleja también en la existencia de una duración máxima, de modo que la medida de internamiento no puede exceder, en ningún caso, de cuarenta días, que es también la duración máxima de la prisión preventiva de los extranjeros» (fundamento jurídico no 1, STC 115/1987).

El valor de esta sentencia es que al anular las limitaciones de la ley a los derechos de los inmigrantes dejaba claro que tales derechos no dependían de los Tratados y las leyes (en la estricta denominación constitucional), sin límites, sino que es exigible el respeto a los derechos al menos en su contenido esencial, de acuerdo con el artículo 53.1 de la Constitución.

Así se iniciaba la línea de reconocimiento constitucional progresivo de los derechos de los extranjeros que continúa hasta nuestros días con sucesivas llamadas de atención, a través de la interposición de recursos de inconstitucionalidad, en las diferentes reformas legislativas.

### **La política de contingentes y el RD 155/1996**

A principios de los noventa se produce una notable mejora de la situación económica en España. La relativa estabilidad política y económica que se va afianzando, a consecuencia de la necesidad de converger con Europa, influirá en la demanda de mano de obra en determinados sectores a los que se asociará la inmigración como la construcción y la agricultura. Esta realidad supuso un lento pero progresivo aumento de los flujos migratorios hacia nuestro país al que la norma legal vigente no consiguió dar una respuesta generalizada.

En 1991, la situación de irregularidad de los extranjeros en España devino en insostenible, por lo que se produjo un proceso extraordinario de regularización y renovación de permisos que dio como resultado la concesión de un permiso de residencia y trabajo a más de 100.000 extranjeros que hasta entonces estaban en situación irregular, pero sin embargo produjo el denominado “efecto llamada” de forma que se incrementaron sensiblemente sectores de población como los marroquíes o los ecuatorianos.

La experiencia de este proceso extraordinario puso de manifiesto la necesidad de arbitrar un mecanismo legal que tratara de canalizar los flujos de entrada. Así surge el denominado contingente anual que establecía las cuotas legales de entrada en el territorio español cada año. Aunque en su concepción teórica se había previsto como un mecanismo al que pudieran acogerse los extranjeros que deseaban venir a España a trabajar, siendo así la vía legal de entrada, la realidad entre 1993 y 1999 demostró que funcionaban como una especie de regularización encubierta. Durante este período quienes se acogieron al contingente fueron los extranjeros que ya se encontraban en territorio español, con la finalidad de regularizar su situación.



Este mecanismo aunque suponía una aparente solución resultó ser una falacia, puesto que, el gobierno era consciente de que por esta vía no llegaban nuevos inmigrantes en situación legal sino que se aprovechaba, ante la ausencia de otra alternativa al efecto, para regularizar la situación de las personas que habían quedado al margen de la normativa administrativa.

Quedo claro de nuevo que el marco legal no era suficiente para la realidad social, pues no debemos de olvidar, que en materia de extranjería, la realidad social ha ido siempre un paso por delante de la legislación. Así las cosas, en lugar de modificar la ley, el gobierno optó por la elaboración de un nuevo reglamento de ejecución, con las consiguientes limitaciones que ello supondría al estar circunscrito a las previsiones legales de la norma de 1985.

El Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, derogó íntegramente el de 1986, intentando aunar las diversas disposiciones administrativas que se habían dictado en los últimos años. A pesar de sus limitaciones, este reglamento concretó los derechos de los extranjeros y algunas cuestiones vinculadas a la integración.

En una de las previsiones legales más controvertidas, como era el régimen sancionador, introdujo importantes novedades como la gradación de las infracciones en leves, graves y muy graves (evitando que se aplicara la expulsión por cualquier infracción). Estableció las bases de un procedimiento con mayores garantías incorporando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los centros de internamiento y prohibió el internamiento cuando procediera la devolución remitiéndola, de forma cuestionable, al régimen de ejecución forzosa de la expulsión. Mantuvo, sin embargo, la discrecionalidad administrativa en la apreciación de los motivos de entrada, por ejemplo, en la ausencia de la documentación necesaria o en la acreditación de los medios económicos suficientes, por parte de los funcionarios de fronteras, lo que llevo a los consecuentes abusos.

Entre algunos de sus aspectos positivos, puede destacarse el reconocimiento de los permisos permanentes de residencia y trabajo a partir de los cinco años que resolvía muchos problemas de renovación y proporcionaba al inmigrante, en el ámbito de la regularidad, una cierta situación estable.

El año 1996 puede considerarse como un punto de inflexión que hace de la inmigración uno de los rasgos estructurales de nuestro país. España se enfrentaba de forma simultánea al ejercicio de la libre circulación, y con ella a la residencia de los ciudadanos comunitarios, lo que hace necesario una regulación de este nuevo tipo de inmigración, como veremos en el capítulo correspondiente mas adelante.

España comienza a ser vista como un destino económicamente atractivo y en su mercado de trabajo se perfilan los sectores que aglutinarán mayoritariamente a la población inmigrante (construcción, servicio doméstico, agricultura y servicios en general) sectores que el ciudadano español empieza a desechar totalmente

Al mismo tiempo otros estados de mayor tradición migratoria han comenzado ya con políticas fuertemente restrictivas en la entrada de flujos, de forma que en España se empiezan también a quedar aquellos extranjeros que han utilizado nuestro país como puerta de entrada y no han podido seguir hacia Francia, Alemania, etc...

Lo cual hace que comencemos a tener un gran numero de inmigrantes irregulares, y que el único medio para solucionar este problema sean los procesos extraordinarios de regularización. Así hasta un total de seis procesos de este tipo se han dado en territorio español en los años 1986, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005 coincidiendo en la mayoría de ocasiones con reformas legales o reglamentarias (1986, 1996, 2000, 2001, 2005) pero en otros casos más allá de éstas como en 1991.

De dichos procesos requiere especial atención el denominado proceso de normalización de 2005 así llamado en el intento de establecer una pauta de diferenciación respecto a los anteriores, dotándolo de una supervisión añadida en lo relativo al ámbito laboral. En este caso la regularización no se condicionó a una mera oferta de empleo, sino a su efectiva formalización mediante el alta en la Seguridad Social del trabajador, unido a una tramitación especial para los empleados de hogar.

## **EVOLUCION LEGISLATIVA DEL AÑO 2000 AL AÑO 2005**

### **Las Leyes Orgánicas 4/2000, 8/2000 y el Real Decreto 864/2001**

La actual norma de extranjería la LO 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, vino a derogar la anterior LO 7/1985. Esta nueva regulación nace marcada por las conclusiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea los días 16 y 17 de octubre de 1999 en Tampere sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. La ley no tiene exposición de motivos, no presenta ni justifica su objetivo, por tanto no alude a Tampere como referencia aunque su influencia es evidente.

Aún siendo la LO 4/2000 aprobada el 11 de enero, en menos de un año fue reformada (lo que no se había conseguido en los quince años anteriores) de forma que la exposición de motivos de la LO 8/2000, que como veremos es de 22 de diciembre ya afirmaba que se habían detectado «durante su vigencia aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma» a pesar de su corta aplicación, viendo a reconocerse que la realidad social había superado cualquier previsión legislativa

Uno de los puntos cruciales a destacar en la LO 4/2000 viene marcado por el programa de Tampere. Éste apostaba por una política de integración encaminada a conceder a los extranjeros residentes derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como a fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y al desarrollo de medidas contra el racismo y la xenofobia. En esta línea la ley incorpora expresamente en su título la noción de integración que aunque no es desarrollada en el articulado va a suponer, en la concreción de los derechos de los extranjeros, un importante viraje respecto a la regulación anterior.

Entre las principales virtudes de esta norma es imperativo señalar la visualización jurídica del extranjero en situación irregular. A diferencia de la LO 7/1985 en la que el extranjero irregular por tal condición era concebido a nivel jurídico casi exclusivamente como potencial sujeto de expulsión, la LO 4/2000 le reconoce derechos a pesar de esa situación administrativa, entre ellos el de educación o asistencia sanitaria, vinculando su ejercicio a la inscripción padronal. A partir de este momento el padrón municipal se convierte en un instrumento vinculado a la política de extranjería cuya relevancia ha ido aumentando en los últimos años.

Una segunda línea de acción se centraba en combatir la irregularidad sobrevenida, como problema recurrente que la ley no había sabido atajar, desde esta perspectiva de menor estigmatización del colectivo irregular. Así la LO 4/2000 contemplaba por primera vez una vía de regularización ordinaria que suponía una excepción a la expulsión para los extranjeros que se podían acoger a ella, de tal forma que algún sector de la doctrina considera que el paso de la expulsión a la regularización como mecanismo para afrontar la irregularidad sobrevenida configura la verdadera columna vertebral del nuevo sistema de infracciones y sanciones.

El tercer componente para completar una posible fórmula que fuera más allá del férreo control de la normativa anterior, lo constituyen las modificaciones que de forma transversal se incorporan en la concreción del estatuto jurídico del extranjero en España. Por ejemplo, se incluye el derecho a la reagrupación familiar y se reconoce de forma amplia la asistencia jurídica gratuita tanto en los procedimientos administrativos que pueden llevar aparejada la expulsión como en los judiciales. En derechos como el de sufragio, que venía claramente determinado por la interpretación constitucional apuntada por la ya mencionada STC 107/1984 que lo excluía del ámbito de la extranjería, se intentaron articular mecanismos paralelos, una especie de sucedáneo por el cual los extranjeros residentes en un municipio podían elegir a sus representantes para participar en los debates y las decisiones municipales que les afectarían.

La modificación que llevó a cabo la LO 8/2000, de 22 de diciembre, sólo es posible entenderla si se toma en consideración el especial panorama político del momento, tras unas elecciones generales en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta después de que la LO 4/2000 saliera adelante sin su apoyo. Esta nueva ley se presentó como una «contrarreforma» y contó con la oposición de todos los grupos parlamentarios que habían apoyado la LO 4/2000. Especialmente desde el ámbito social, en concreto en la sociedad civil organizada, la reforma se consideró como una ruptura del aparente consenso social que había supuesto la ley anterior y una voluntad legislativa de reintroducir medidas más restrictivas en el ámbito de la extranjería.

La LO 8/2000, en su exposición de motivos, comenzaba reconociendo que la inmigración en España era un hecho estructural; que se había convertido en un país de destino de los flujos migratorios y, por su situación, también en un punto de tránsito hacia otros Estados, cuyos controles fronterizos en las rutas desde el nuestro habían sido eliminados o reducidos sustancialmente; y por ello era necesaria una normativa que se integrara dentro de un planteamiento global y coordinado en el tratamiento del fenómeno migratorio, no sólo desde una única perspectiva, como la del control de flujos, la de la integración de residentes extranjeros, o la del desarrollo de los países de origen, sino todas ellas conjuntamente.

El punto más controvertido de la LO 8/2000 fue la negación a los inmigrantes en situación irregular de determinados derechos, entre ellos: reunión y manifestación, asociación, sindicación, huelga y la educación no obligatoria. La ley propiamente no negaba la titularidad de tales derechos a los extranjeros en situación irregular sino que introducía el artificio de considerar que éstos sólo se podían ejercer por aquellos que estuvieran en situación regular, semejante distinción vaciaba de contenido la regulación legal. De hecho esta cuestión fue recurrida por inconstitucionalidad y resuelta por el Tribunal Constitucional en la sentencia 236/2007 (BOE de 10 de diciembre de 2007) y siguientes que la ratificaron (SSTC 259/2007, de 19 de diciembre de 2007; STC 260/2007; STC 261/2007; STC 262/2007; STC 263/2007; STC 264/2007, y STC 265/2007, todas ellas de 20 de diciembre de 2007, salvo la primera, y publicadas en el BOE de 22 de enero de 2008). El alto tribunal declaró la inconstitucionalidad de los mencionados artículos pero, (salvo en el caso de la educación no obligatoria (STC 236/2007) y la huelga (STC 269/2007 en que sí se contempla la nulidad de los preceptos), no los anuló emplazando al legislador a que modificara la norma como de hecho ha ocurrido con la LO 2/2009. Como ha considerado una parte de la doctrina la sentencia tiene la elogiable voluntad de establecer unos criterios generales para concretar el régimen jurídico de los extranjeros en España, a partir de una interpretación del artículo 13 CE. Sin embargo no lo hace con claridad ni añade más argumentos a los que ya se desprenden de la jurisprudencia existente sobre la materia. Su pauta interpretativa se basa en el vital criterio de la dignidad humana que, sin embargo, define de forma difusa y poco solvente. No puede olvidarse que todo derecho fundamental, en cuanto tal, presenta una íntima conexión con la dignidad de la persona y que establecer gradaciones en la dignidad nos aleja del terreno de la seguridad jurídica y nos acerca al de la subjetividad.

No sólo los mencionados derechos fueron limitados, sino también otros como el de reagrupación familiar, respecto al que no se estimó la existencia de inconstitucionalidad.

Las modificaciones incorporadas en el ámbito de las infracciones y sanciones demuestran el carácter restrictivo de esta reforma, respecto a la LO 4/2000. En efecto, con la LO 8/2000 se concretan las sanciones a las compañías de transporte y las que van dirigidas contra las redes de tráfico de seres humanos. Así se incluyen, conforme a los compromisos internacionales suscritos por España, como miembro del acuerdo Schengen, sanciones a los transportistas que trasladen a extranjeros hasta el territorio español sin verificar que cumplen los requisitos para la entrada. Respecto a las sanciones dirigidas contra el tráfico de personas, se contemplan medidas para profundizar en la lucha contra la explotación de seres humanos, permitiendo el control de determinadas actividades vinculadas al mismo o facilitando la neutralización de los medios empleados por los traficantes.

Un importante retroceso respecto a la LO 4/2000 se produce en relación a los mecanismos articulados para evitar la inmigración irregular. Se reinstaura, tal como había existido en la LO 7/1985, como infracción sancionable con expulsión la permanencia de forma ilegal en el territorio español. Asimismo es especialmente criticable la incorporación de un procedimiento preferente de expulsión que permite llevarla a cabo en 48 horas. Este corto plazo de tiempo pone en tela de juicio la garantía de derechos como el de tutela judicial efectiva, y los que a él van aparejados como la asistencia jurídica y el derecho a intérprete, por la premura en la ejecución.

La dimensión legal más restrictiva queda consolidada con la LO 8/2000. De hecho, algunos de los objetivos que la ley dice perseguir, como el de la integración de los inmigrantes, se pierden en la lectura de su articulado salvo por contadas excepciones como la referencia al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes cuya función se revisa para enfocarlo a la consulta, la información y el asesoramiento.

La transformación que la LO 4/2000 ya había supuesto y las reformas incorporadas con la LO 8/2000 demandaban un nuevo instrumento de ejecución. Tras la LO 8/2000, el RD 864/2001 aprobó el nuevo reglamento de desarrollo. Esta norma consta de un complejo contenido que podría sintetizarse en la característica del doble examen que era posible en la mayoría de casos: la concurrencia de causas imperativas de denegación, y una vez superadas, la valoración que aún permitía denegar o aceptar la solicitud de manera discrecional por la Administración (Roig, 2002, 21-22).

### **Las Leyes Orgánicas 11/2003, 14/2003 y el Real Decreto 2393/2004**

Tras la LO 8/2000 la siguiente reforma que afectó a la legislación de extranjería se realizó a través de una norma que no se ocupaba propiamente de esta materia. El propio título de la LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, aparentemente invitaba a relacionar los tres términos que enunciaba consolidando el modelo de control migratorio ya apuntado. El proyecto de ley fue aprobado y divulgado por el gobierno una semana antes de las elecciones locales y autonómicas, vinculando el aumento de la inmigración con el incremento de la delincuencia.

Entre las medidas que incorporó la LO 11/2003 puede señalarse, en primer lugar, la sustitución de la pena impuesta por comisión de un delito por expulsión. Se introdujeron cambios en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 89 del Código Penal, para que el juez penal pudiera acordar la sustitución de la pena impuesta al extranjero no residente legalmente en España que hubiera cometido un delito, por su expulsión. En concreto, se establecía que, en el caso de extranjeros que, además de no ser residentes legalmente en España, cometieran un delito castigado con pena de prisión inferior a seis años, la regla general sería la sustitución de la pena por la expulsión. Si la pena de prisión fuera igual o superior a seis años, una vez que cumplieran en España las tres cuartas partes de la condena o alcanzaran el tercer grado de tratamiento penitenciario, se acordaría, también como regla general, la expulsión.



Paralelamente se reformó el artículo 108 del Código Penal para establecer, con carácter general, la expulsión de los extranjeros no residentes legalmente en España en sustitución de las medidas de seguridad aplicadas por el juez o tribunal a consecuencia de la comisión de un delito. La pretensión de que los extranjeros delincuentes no permanecieran en España era obvia.

Desde la vía procesal se arbitró la tramitación simultánea de los procedimientos administrativo y penal. La solución que se adoptó consistía en prever que cuando un extranjero se encontraba procesado o inculcado en un procedimiento judicial por delito o falta castigado con una pena privativa de libertad inferior a seis años, si existía orden de expulsión debidamente dictada, se autorizara judicialmente la expulsión.

También se incorporaron modificaciones relativas al tráfico ilegal de personas que pasó a ser castigado con prisión de cuatro a ocho años. Con la modificación de los artículos 318 y 318 bis del Código Penal (y la necesaria adaptación técnica a los mismos del 188) las penas resultantes intentaban satisfacer los objetivos de armonización que contenía la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregular.

Se tipificó el delito de mutilación genital o ablación, así se modificó el artículo 149 del Código Penal, mencionando expresamente en su nuevo apartado 2 la mutilación genital, en cualquiera de sus manifestaciones, como una conducta que encajaría entre las lesiones de dicho artículo, castigadas con prisión de seis a doce años. Se indicaba, además, que, si la víctima era menor de edad o incapaz, se aplicaría la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, si el juez lo estimaba adecuado al interés del menor. La LO consideraba que en la mayoría de las ocasiones, eran los padres o familiares directos de la víctima quienes obligaban a someterse a este tipo de mutilaciones, por lo cual la inhabilitación especial resultaba absolutamente necesaria para combatir estas conductas y proteger a la niña de futuras agresiones o vejaciones.

Una última modificación a destacar afectaba a la reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio para garantizar la protección de la mujer frente a nuevas realidades sociales vinculadas al fenómeno de la inmigración. Se reformó el artículo 107 del Código Civil estableciendo que se aplicaría la ley española cuando uno de los cónyuges fuera español o residente en España, con preferencia a la ley que fuera aplicable si esta última no reconociera la separación o el divorcio, o lo hiciera de forma discriminatoria o contraria al orden público. Con ello se pretendía ofrecer alternativas a la aplicación del estatuto personal, especialmente en el caso de ciertas mujeres extranjeras, fundamentalmente de origen musulmán, que solicitaran la separación o el divorcio.

Antes de los dos meses desde la aprobación de la LO 11/2003, se produce de nuevo la modificación directamente, no a través de otra norma, de la ley de extranjería en esta ocasión con la LO 14/2003, de 20 de noviembre.

El creciente número de residentes extranjeros en España en los últimos años y la lucha contra la inmigración ilegal siguen siendo, en palabras de la propia ley, los motivos que justifican la reforma. Junto a ellos, otras de las razones que pretende avalar la LO 14/2003 es la de adaptar la normativa interna en esta materia a las decisiones que durante los dos últimos años (2001-2002) habían sido tomadas en el seno de la Unión Europea.

Desde la perspectiva de la técnica legislativa la LO 14/2003 incorporó algunas cuestiones como resultado de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2003, relativa a la necesaria regulación en la citada ley orgánica, de determinados preceptos del Reglamento de ejecución de la LO 4/2000, aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.

En efecto con la mencionada sentencia, el Tribunal Supremo anuló diversos artículos del reglamento de 2001 por entender que vulneraban el principio de legalidad. Bien porque el reglamento había optado por ampliar la discrecionalidad a favor de la Administración, o bien por extender medidas restrictivas de los derechos más allá del ámbito estrictamente legal, por falta de rango o por invasión de la reserva de ley. En lugar de modificar el reglamento de desarrollo se acudió a la reforma legal.

La LO 14/2003 contemplaba, entre otros, objetivos como la mejora de la gestión, mediante la simplificación de los trámites administrativos; el reforzamiento de los medios e instrumentos sancionadores para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos; la colaboración con las compañías de transportes en orden a contar con mayor información sobre las personas que fueran a ser trasladadas hasta el territorio español; el refuerzo de los procedimientos de devolución de extranjeros que accedieran ilegalmente a nuestro país, extendiendo las conductas tipificadas como infracciones graves a todas las personas que, con ánimo de lucro, indujeran, favorecieran, promovieran, o facilitasen la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino a España, o su permanencia en nuestro país, etc. Sin embargo insistió en la idea de que esta nueva regulación no afectaba a los derechos de los extranjeros en España.

Si se tiene en cuenta las previsiones que incorporó la LO 14/2003 no es posible compartir esta falacia. Así desde una dimensión restrictiva se limitaron las denominadas reagrupaciones en cadena y se incorporó, con carácter general, la personación del interesado en la presentación de solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo, que debían realizarse en los registros de los órganos competentes para su conocimiento.

Los derechos se vieron afectados con medidas indirectas, entre ellas las que introdujeron modificaciones en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local en lo relativo al padrón municipal. La LO 14/2003 estableció la necesidad de la renovación de la inscripción padronal cada dos años para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente; e introdujo una habilitación genérica de acceso al Padrón Municipal a favor de la Dirección General de la Policía con el objeto de mejorar el ejercicio de las competencias legalmente establecidas sobre el control y permanencia de los extranjeros en España. Esta habilitación se formuló en términos de reciprocidad con el Instituto Nacional de Estadística, al establecer la obligación de la Dirección General de la Policía de comunicar a dicho Instituto, con el fin de mantener actualizado el contenido del Padrón, los datos de los extranjeros de que tuviera constancia que pudieran haber sufrido variación en relación con los consignados en aquél.

Sobre esta reforma se ha señalado que se ha aplicado de forma muy parcial porque en realidad las primeras inscripciones parronales afectadas por dicha disposición no caducaban hasta el 21 de diciembre de 2005, sin que ninguna norma reglamentaria las desarrollara; y que tampoco se ha producido el traslado masivo de datos entre el padrón y la policía, limitándose la aplicación del supuesto concreto a casos puntuales para la investigación de delitos. Lo que me parece que no se puede poner en duda es la consideración del padrón como instrumento de control de la política española de extranjería, como veremos que se evidencia de nuevo en la reforma de la LO 2/2009.

En lo relativo al procedimiento administrativo común, el artículo cuarto introdujo una nueva disposición adicional en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la finalidad de incorporar en el texto de esta ley, con carácter expreso, una remisión a la Ley Orgánica 4/2000, para que a los procedimientos regulados en ésta se les aplicaran las peculiaridades

procedimentales que en la misma se introducen con las consiguientes excepciones a las garantías generales.

Tras la anulación parcial por parte de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2003, de parte del reglamento de 2001 y con la nueva LO 14/2003 la opción para el nuevo gobierno socialista (tras las elecciones de marzo de 2004, con vistas a la legislatura 2004-2008) era reformar la ley o aprobar un nuevo reglamento acorde a la última modificación legal, se escogió esta segunda vía. En general el RD 2393/2004, de 30 de diciembre, se define por su carácter marcadamente laboral. Una de sus mayores virtudes fue la recuperación del sistema general de contratación como vía para la inmigración legal (con el reglamento de 2001 se había potenciado más el contingente, ahora se intentaba impulsar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura como mecanismo más ágil y realista para adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo en la medida en que era revisado cada tres meses, sin que las cuotas anuales dejaran de existir), y la consagración del arraigo social y laboral para mantener un canal de regulación individual. Su Disposición Transitoria 3a dio lugar al ya mencionado proceso de normalización de 2005 en un intento de hacer aflorar la economía sumergida y las bolsas de irregularidad a ella unidas para que no lastraran la aplicación del nuevo desarrollo reglamentario.

## **EVOLUCION LEGISLATIVA DEL AÑO 2005 AL 2010**

En línea de continuidad con las medidas señaladas hasta finales de 2005 y principios del 2006, todas las previsiones entorno al control e intento de gestión de los flujos migratorios se articularon en la segunda mitad de los 2000 dentro de los objetivos ya reiterados: protección del mercado nacional de empleo, lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas, e integración.

En 2007 se intentó dar respuesta a una de las clásicas reivindicaciones en el ámbito de la inmigración: la integración, pero sin emplear la ley como vía de realización. En febrero de 2007 se aprobó el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (PECI), que se dirigió al conjunto de la población y fue ampliamente consensuado, articulándose a través tres principios: igualdad, ciudadanía e interculturalidad, pero sin perder de vista la lógica antidiscriminatoria imprescindible para conseguir una sociedad cohesionada. Como el propio Plan señalaba la pretensión era establecer un marco político que orientara las actuaciones del conjunto de la sociedad en ese proceso bidireccional, de adaptación mutua, que la integración debería ser. La integración en el Plan era concebida, como un proceso continuo, dinámico y resultado de distintas fases y aspectos, a corto, medio y largo plazo. Otras premisas especialmente reseñables venían a completar esta concepción inicial de la integración, entre ellas: la convicción de que el proceso de integración y su gestión debía de compartirse entre las distintas administraciones y también los actores sociales; la consideración del PECI como un marco de colaboración que podía permitir dinamizar políticas; la necesidad de un enfoque global; el hecho de articular las distintas medidas para el conjunto de la ciudadanía; y la consideración transversal de las cuestiones relativas a la integración de la población inmigrada en el marco de todas las políticas públicas relevantes.

Con el PEGI se intentaba, por primera vez, articular un modelo que cohesionara la intervención autonómica, de tal forma que el Estado se implicara en las políticas de integración. Una de las características a destacar era que la financiación que el Estado aportaba se completaba en parte por las respectivas Comunidades Autónomas, pero eran éstas las que decidían en qué políticas concretas invertirían esos recursos económicos atendiendo a sus necesidades específicas. Este Plan puede considerarse relevante, entre otras cuestiones, porque intentó establecer por primera vez en España, un marco político para la integración de y con los inmigrantes; formuló unos principios políticos de carácter inclusivo; puso en marcha un conjunto de dispositivos para avanzar en la integración; ofreció un marco de cooperación para participar todas las administraciones y la sociedad civil organizada; y fue elaborado con un fuerte compromiso de participación y consenso; incluyendo, además, un presupuesto significativo.

Tras cinco años en los que la ley de extranjería no había sido reformada, a pesar de que se habían producido notables modificaciones en el conjunto normativo en esta materia tanto por la vía de jurisprudencia como por los cambios introducidos en los instrumentos inferiores de desarrollo, a finales de 2009 se aprueba la que será la cuarta modificación de la alterada LO 4/2000.

La necesidad de la LO 2/2009, de 11 de diciembre, se justifica por la exigencia de transponer determinadas directivas europeas y adaptar la norma a la nueva realidad migratoria española con distintas características y retos desde la última ley. Una tercera causa, la más objetiva, es la urgencia de incorporar a dicha Ley Orgánica la ya mencionada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencias 236/2007 y siguientes), dando para ello una nueva redacción, acorde con la Constitución, a los artículos introducidos por la LO 8/2000 cuyo contenido había sido declarado inconstitucional.

Entre sus objetivos, la ley presenta de forma expresa su voluntad de ordenar los flujos migratorios laborales, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo (en un contexto que había sido discriminador) aumentar la eficacia de la lucha contra la inmigración irregular; fortalecer la integración; y adaptar la normativa a las competencias de ejecución laboral previstas en los Estatutos de Autonomía.

No se consuma la transposición de la Directiva 2003/86/CE sobre reagrupación familiar. En efecto, no ha habido transposición formal de la misma ni en la LO 14/2003 ni en la última reforma. Sin embargo, es cierto que sólo en la reforma de la LO 2/2009 se han hecho operativas las posibilidades brindadas por el artículo 10 de la Directiva permitiendo, por ejemplo, la reagrupación en el caso de relaciones afectivas análogas. Una parte de la doctrina ha mostrado las carencias y contradicciones legales para avalar que no se ha producido la transposición formal; otro sector en cambio sostenía que ha habido una transposición no formal de la Directiva en la LO 14/2003, pues en el contenido sí había sido indirectamente adoptada. Podían sostenerse dos argumentos a favor, a diferencia de la Directiva 2003/109, para apoyar la transposición no formal: España no había sido condenada por incumplimiento ante el ahora denominado Tribunal de Justicia de la Unión Europea (antes del Tratado de Lisboa designado como «de las Comunidades Europeas») y sólo había un defecto de forma por incumplimiento del artículo 20 de la Directiva que obliga a la transposición formal. De hecho, no puede olvidarse que la Directiva genera una obligación de resultado y no de contenido o directa como el reglamento. El argumento de transposición informal, parece que cobra fuerza con la última reforma.



Con la reforma de la LO 2/2009, dos momentos pasan a ser especialmente significativos en relación a la cuestión de la integración. El primero el relativo a la vía ordinaria de regularización más común, el arraigo social, respecto al cual el artículo 68.3 a propósito de la coordinación de las Administraciones públicas exige con carácter previo a la concesión de autorizaciones por arraigo, que las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos, emitan un informe sobre la integración social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio. Reglamentariamente se determinarán los contenidos de dicho informe, teniendo en cuenta el período de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y medios de vida, los vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales.

Un segundo momento en el que la valoración de la integración adquiere especial significación es el de la renovación de la residencia a la que se refiere el artículo 31.7 tras la redacción dada por la LO 2/2009. Así para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará, entre otras circunstancias, el esfuerzo de integración del extranjero que aconseje su renovación, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el ya mencionado artículo 2 ter de la Ley.

De forma panorámica, en la LO 2/2009 hay aspectos positivos recalables, entre ellos:

1. La nueva redacción de los artículos en relación a derechos afectados por la inconstitucionalidad ya señalada.
2. La concesión de forma automática de la autorización de trabajo a las personas reagrupadas, en concreto para el cónyuge y los hijos cuando lleguen a la edad laboral, sin necesidad de tener que realizar ningún otro trámite.

- 3 En los supuestos de violencia de género se arbitran medidas de protección a la víctima como la de solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando se haya dictado una orden de protección a su favor o se tenga un informe positivo del ministerio fiscal, con previsiones que pretenden facilitar la denuncia de estos hechos.
- 4 En el caso de personas víctimas de la trata de seres humanos también se contemplan medidas de protección, por ejemplo, la posibilidad de que los órganos administrativos competentes para la instrucción del expediente sancionador, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informen a la persona interesada sobre las previsiones legales, y eleven a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión según lo previsto reglamentariamente. Durante este período, se le autorizará la estancia temporal y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas.
- 5 Se pretende impulsar la protección del menor inmigrante, contemplando un campo mayor de acción en lo relativo a su capacidad de obrar y articulando la posibilidad de asistencia tanto en los casos de repatriación cuanto en los de integración en la sociedad de acogida.
- 6 Se intenta potenciar el papel de las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes de tal forma que podrán firmar convenios con las Administraciones competentes en materia de asistencia y protección a los inmigrantes y podrán visitar los centros de internamiento según las condiciones que reglamentariamente se desarrollarán.

Sin embargo, los aspectos mas oscuros no pueden olvidarse

- 1 La ampliación del plazo de internamiento, como indicábamos, de 40 a 60 días que va más allá incluso de lo que se permite en casos de extradición penal por los tratados internacionales.
- 2 Los nuevos requisitos añadidos para la reagrupación de los ascendientes mayores de 65 años, respecto a los cuales es necesario que existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. Excepcionalmente también por razones humanitarias se les podrá reagrupar, lo cual se tendrá que concretar reglamentariamente. Además, éstos familiares solo pueden ser reagrupados cuando el reagrupante haya adquirido la residencia de larga duración (5 años, no como en los otros casos que basta con la renovación).

Uno de los aspectos más destacable de la LO 2/2009 es el endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones. Así para combatir la inmigración irregular se incorporan dos nuevas infracciones graves: por un lado, promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización; por otro, consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal, por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.

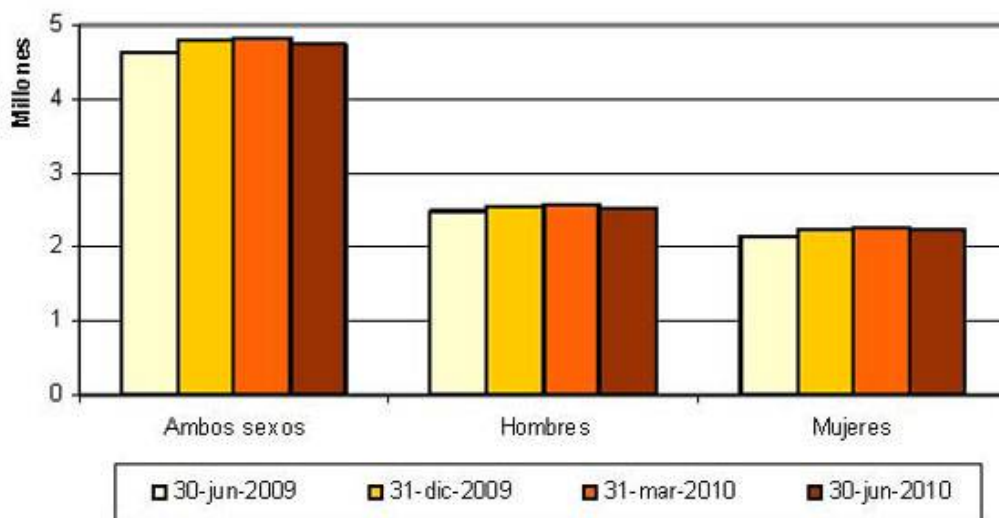
En ambos casos se coloca bajo sospecha tanto al inmigrante como a su entorno más cercano y sobre todo se reafirma el padrón como instrumento de control en la política migratoria lo cual es totalmente desaconsejable si se tiene en cuenta su vinculación con el ejercicio de derechos sociales.

Con todo el tenor literal de la Ley de Bases del Régimen Local no deja lugar a dudas sobre el derecho-deber que el empadronamiento supone, también para los extranjeros, y en el mismo sentido se pronuncia con perspicuidad el informe de la Abogacía General del Estado en relación al estricto cumplimiento de la mencionada ley .

Se contempla también como infracción grave el conocido como matrimonio de conveniencia, es decir, contraer matrimonio o simular relación afectiva análoga si dichas conductas se realizan con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito.

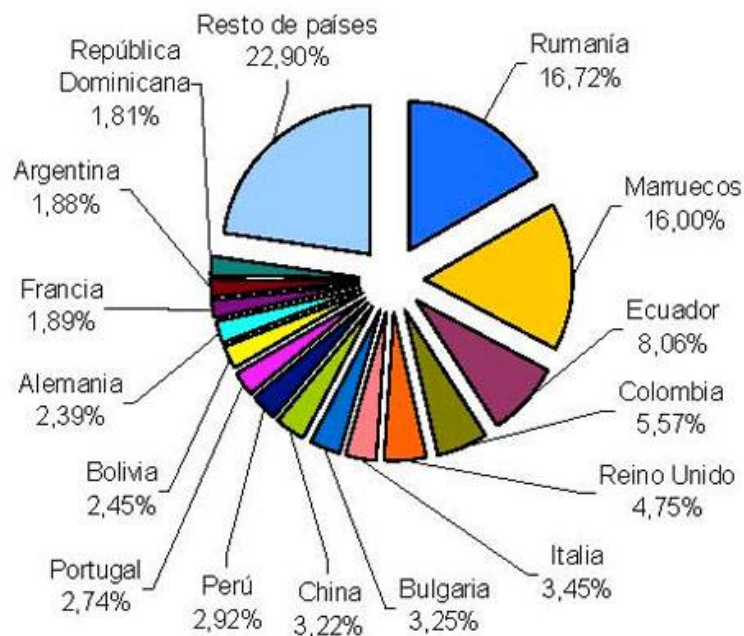
Así las cosas, es interesante analizar algunos datos que nos ilustren acerca del referido auge del fenómeno migratorio en España.

**Gráfico 1. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor según sexo**



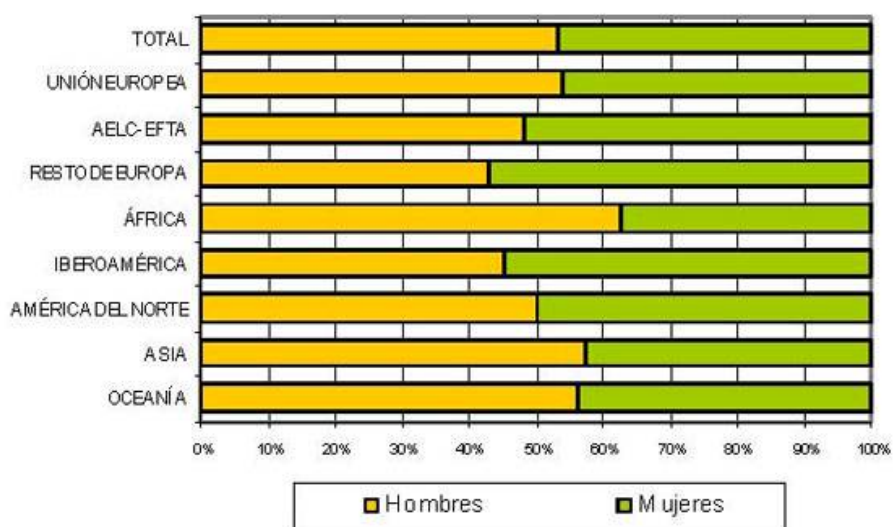
Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración.

**Gráfico 2. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Principales nacionalidades. 30-06-2010**



Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración.

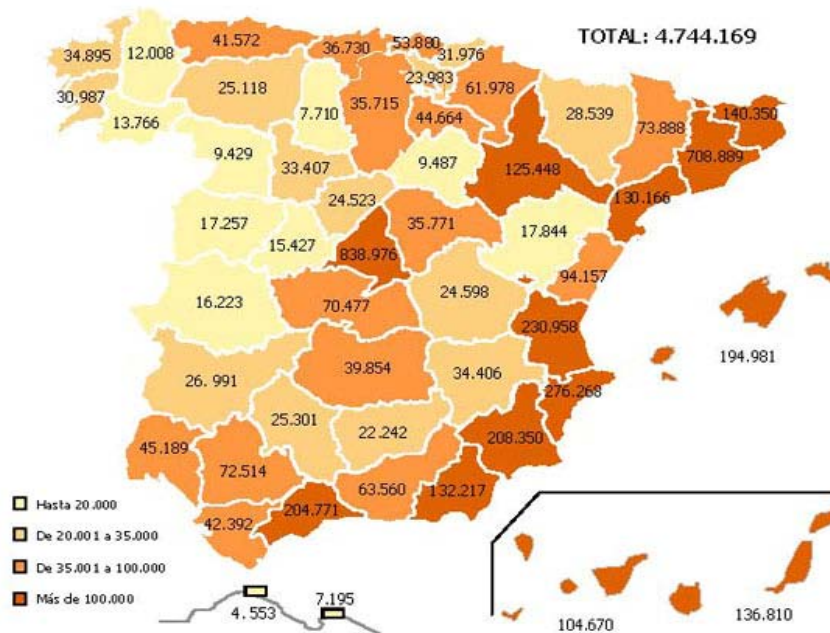
**Gráfico 3. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor según continente y sexo. 30-06-2010**



Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración.

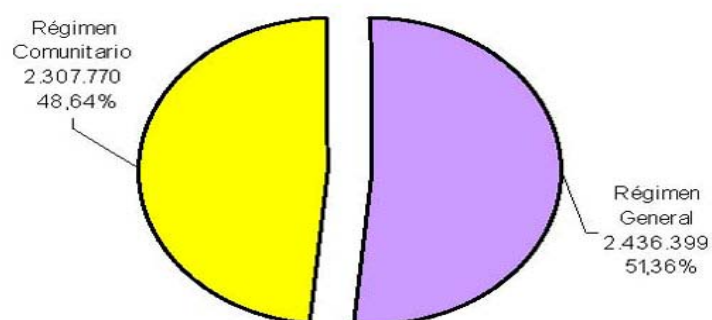
No obstante este crecimiento no ha sido homogéneo en todo el territorio nacional, más del 55 % de la población inmigrante, en la actualidad, se concentra sólo en 3 Comunidades Autónomas: Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

**Gráfico 4. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor según provincia. 30-06-2010**



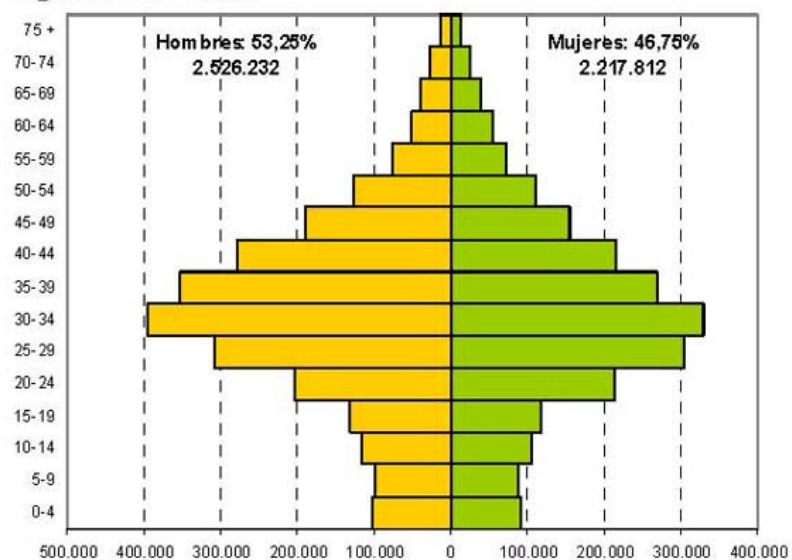
Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración.

**Gráfico 5. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor según régimen de residencia. 30-06-2010**



Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración.

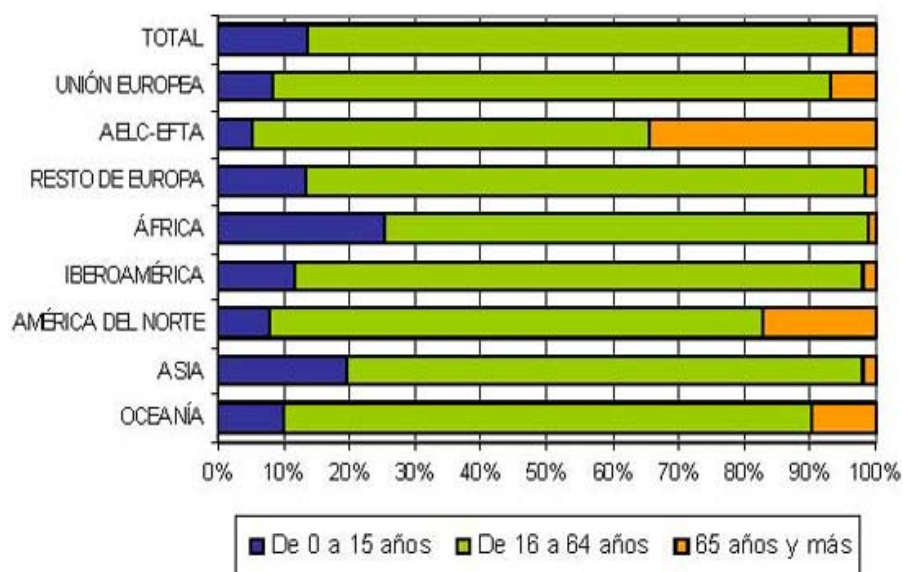
**Gráfico 6. Estructura de edad y sexo de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. 30-06-2010.**



Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración.

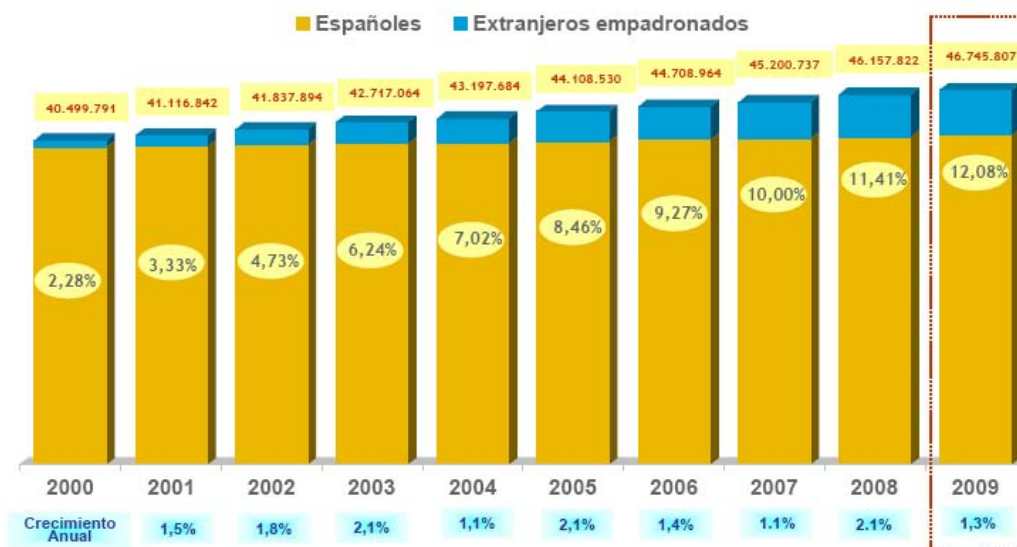


**Gráfico 7. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor según continente y grupo de edad. 30-06-2010**



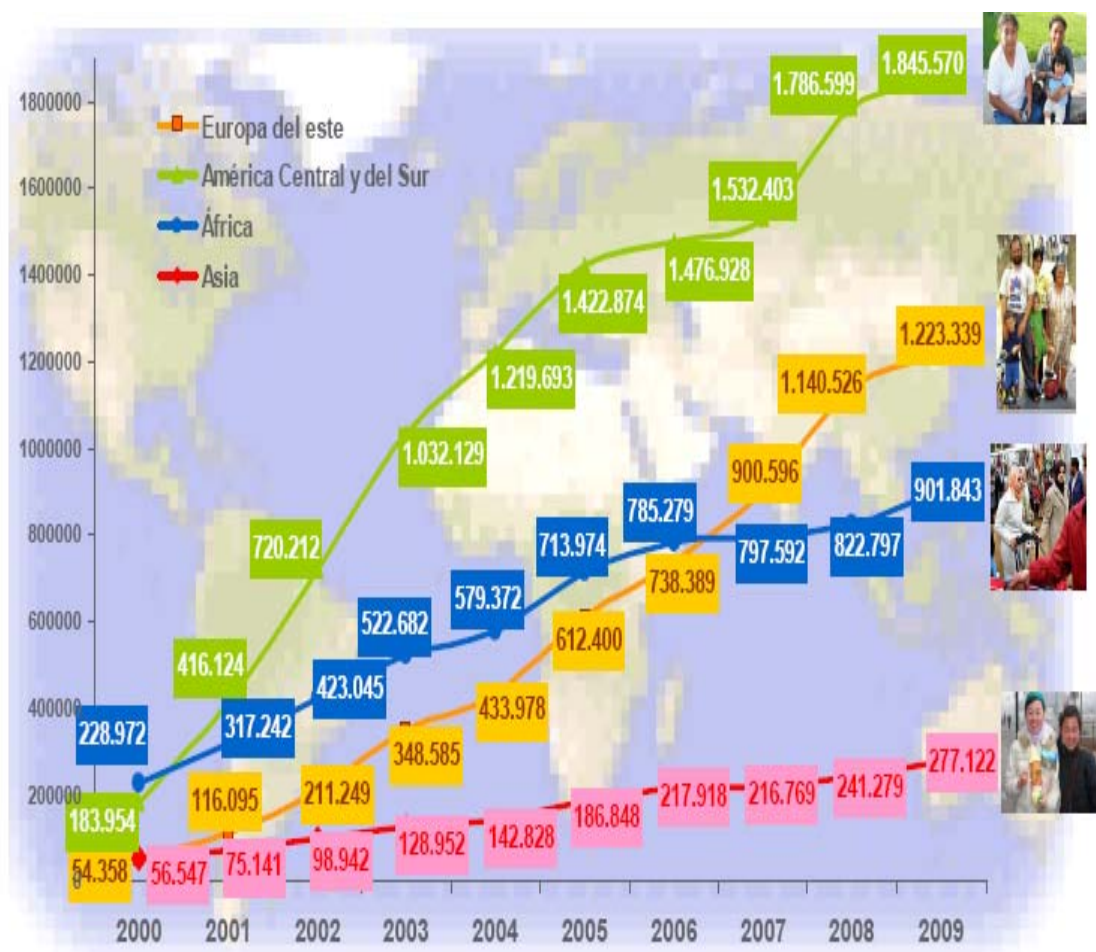
Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración.

**Gráfico 8. Evolución de la población española 2000-2009.**



Fuente: INE y The Nielsen Company.

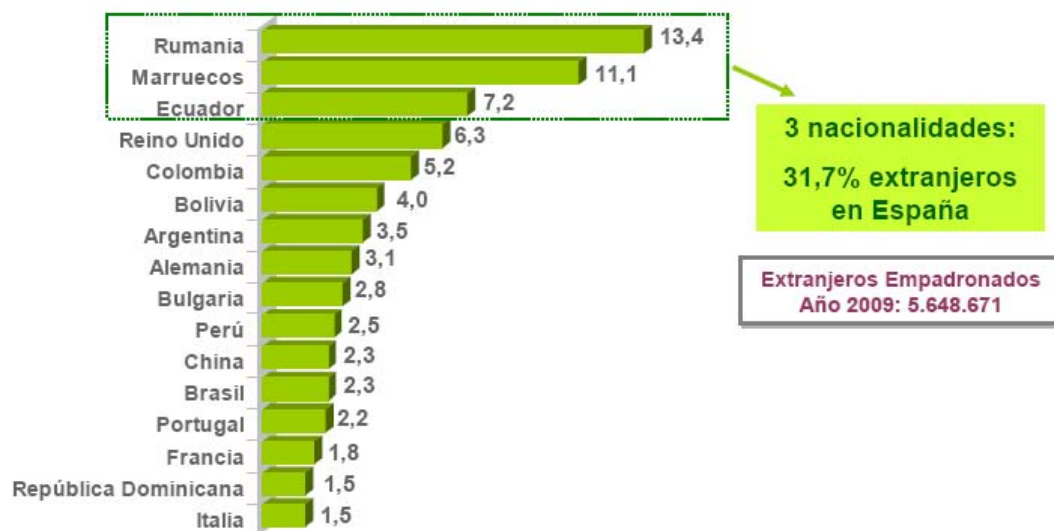
**Gráfico 9. Evolución de los extranjeros empadronados en España (2000- 2009). Grupos de nacionalidad (%).**



Fuente: INE y The Nielsen Company.

Los principales países de procedencia de estos “nuevos residentes” en España son: Rumania, Marruecos, Ecuador, Reino Unido y Colombia; seguidas por Bolivia, Argentina, Alemania, Bulgaria y Perú.

**Gráfico 10. Principales países de procedencia de los extranjeros empadronados en España. Año 2009 (%).**



Fuente: INE y The Nielsen Company.

## **CAPITULO II: PANORAMA LEGISLATIVO ACTUAL**

Una vez relatado el devenir legislativo en la materia del Derecho de Extranjería, y antes de adentrarnos en los puntos que deseamos destacar, se hace necesario un breve examen de la situación legislativa actual, una breve descripción de la misma, así como de la doctrina constitucional que ampara su evolución.

### **MARCO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA**

#### **Evolución de los derechos y libertades de los extranjeros en España desde el prisma constitucional.**

El **artículo 13.1** de la Constitución establece que *“Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas del presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”*.

De este precepto se deduce que los extranjeros son titulares de los derechos y libertades reconocidos a los españoles y que las condiciones del ejercicio de dichos derechos y libertades se remiten a lo que dispongan los Tratados y la Ley.

El problema principal que dicho precepto plantea no es otro que determinar el alcance de esa remisión, esto es, establecer con claridad los límites que el legislador deberá, en todo caso, respetar.

El artículo 13.2 confirma implícitamente el significado que le hemos dado al primer párrafo, al dejar solamente a los españoles la titularidad de los derechos recogidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Excepción que se justifica por la conexión histórica existente entre el derecho de participación política y el estatuto de ciudadanía.

**El Título I** de nuestra Carta Magna, donde se encuadra el citado precepto, lleva por título “De los derechos y libertades fundamentales” y recoge los derechos subjetivos y libertades de las personas que el ordenamiento jurídico positivo garantiza y que están íntimamente relacionadas con la vida, la libertad, la igualdad, el principio de no discriminación, la promoción social, la participación política o la seguridad, así como también incluye los mecanismos necesarios para salvaguardar estos derechos frente a los intentos de vulnerarlos.

Es destacable también **el artículo 10** de la Constitución en el que se dispone que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, añadiéndose, en su párrafo segundo que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Volviendo a lo dispuesto en el referido artículo 13.1, las libertades públicas de las que pueden ser titulares los ciudadanos extranjeros vendrán fijadas por las estipulaciones de los tratados internacionales y por las leyes que se dicten sobre esta materia.

Como hemos referido en el anterior capítulo, la Ley Orgánica 4/2000 es la que está actualmente en vigor con las modificaciones de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, también modificada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, así como por la Ley 2/2009, de 11 de diciembre, y, por último, por la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio.

La última reforma de la L.O. 4/2000 se ha producido muy recientemente por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 24 de abril que entró en vigor en ese mismo día.

La Ley Orgánica 4/2000 vino en alguna medida a subsanar los olvidos de la Ley de 1985, remarcando el camino iniciado por el artículo 13 de la Constitución, dotando de contenido pleno aquellos derechos, siguiendo las pautas constitucionales y recogiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional y del Supremo.

Dichos derechos deben interpretarse, no solo a la luz de esta Ley Orgánica y del artículo 13 del texto constitucional, sino de acuerdo a los numerosos convenios y tratados internacionales suscritos por España que forman parte de nuestro Derecho positivo según dispone el propio artículo 10 de la Constitución, transcrito con anterioridad, debiéndose enumerar, entre ellos, a título meramente enunciativo:

- Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948.
- Pacto internacional de derechos civiles y políticos.- Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.- Nueva York, 1966.
- Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.- Roma, 1950.
- Convención de los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989.
- Convenio sobre el estatuto de los refugiados.- Ginebra, 1951.
- Convención sobre el estatuto de los apátridas.- Nueva Cork, 1954.
- Carta Social Europea.- Turín, 1961.
- Convenio europeo relativo al estatuto jurídico del trabajador migrante.- Estrasburgo, 1977.
- Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastrich. En 1992, y modificado por el Tratado de Ámsterdam de 1997.
- Acuerdo de Schengen de 1985.
- Acuerdo europeo sobre régimen de circulación de personas entre los países miembros del Consejo de Europa.- París, 1957.

La reforma de la Ley Orgánica 4/2000 por la L.O. 8/2000 supuso un claro retroceso en materia de estos derechos ya que los reconoció únicamente para los residentes legales, perdiéndose una gran oportunidad de avanzar hacia una auténtica ley que regulara la inmigración con una vocación integradora. Esta reforma supuso la merma de diversos derechos fundamentales que como sabemos nuestra Constitución reconoce, en su mayoría, a “todos”, sin diferenciar entre españoles y extranjeros, y, entre éstos, sin importar que tengan residencia legal o no.

Así pues, la modificación de la L.O. por la 8/2000, de 22 de diciembre, estableció los derechos que se reconocen a todos los extranjeros, en igualdad con los españoles (derecho a la tutela judicial efectiva, al recurso contra los actos administrativos, a la asistencia jurídica gratuita, a la documentación, a la sanidad y a la educación), y aquéllos en los que se subordina su ejercicio a la estancia legal (derechos de reunión y manifestación, de libertad de asociación, de huelga y de sindicación...).

Las reformas introducidas por la Ley Orgánica 11/2003, así como las que se incluyen en la Ley Orgánica 14/2003, no inciden apenas en esta materia de derechos y libertades fundamentales de los extranjeros, siguiéndose aplicando las modificaciones establecidas en la Ley Orgánica 8/2000.

La reforma de la L.O. 14/2003 introduce un nuevo apartado en el derecho a la documentación, artículo 4, apartado 2º, así como otras modificaciones relativas a la reagrupación familiar en los artículos 17,18 y 19, y relaciona los derechos de los extranjeros internados, en los artículos 62 bis, 62 ter, quáter, quinquies y sexies.

Algunos de los cambios que introdujo la Ley 8/2000 motivaron la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra la misma. El Tribunal Constitucional ha resuelto los indicados recursos de inconstitucionalidad, entre otras, en las sentencias 236/2007, de 7 de noviembre, y 259/2007, de 19 de diciembre, reconociendo que la exigencia que la indicada ley imponía a los extranjeros para el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, asociación, sindicación y huelga, de que tuvieran residencia legal en España, constituía una restricción injustificada y, por tanto, contraria a la Constitución, ya que según la misma los indicados derechos alcanzan a todas las personas por el hecho de serlo.



Consecuentemente con ello, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica 4/2000 que regulaban los indicados derechos fundamentales, lo que se recoge en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que la reforma.

La L.O. 10/2011, de 27 de julio, de reforma de la L.O. 4/2000 se centra en la regulación de la violencia de género y en la trata de seres humanos evitando la incoación de expedientes sancionadores a las víctimas que denuncien dichos delitos.

Por último, la reforma más reciente se ha producido por el RD-L 16/2012 que en relación con la condición de asegurado, en su Disposición final tercera, modifica el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, precepto que no tiene naturaleza orgánica según establece la disposición final cuarta de dicha ley.

De esta forma, el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tendrá ahora la siguiente redacción:

*«Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria.  
Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos  
previstos en la legislación vigente en materia sanitaria.»*

Nos encontramos de nuevo ante un retroceso, sin duda llevado por la situación económica actual, que hace que la Sanidad española, tenga que ser recortada en sus prestaciones a todos aquellos extranjeros que no coticen a las arcas publicas, de forma y modo que de nuevo la cuerda se rompe por el lado mas débil.

## **LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHO DE EXTRANJERIA**

En 1984, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional se pronunció, por unanimidad, sobre la previsión contenida en el artículo 13.1 de la Constitución en la Sentencia 107/1984, donde se indica que la Constitución no dice que los extranjeros gozarán en España de las libertades que le atribuyan los tratados y la ley, sino de las libertades “que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley” de modo que los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros siguen siendo derechos constitucionales y, por tanto, dotados de la protección constitucional.

Para nuestro supremo intérprete de la Constitución, la libertad de configuración del legislador no alcanza a aquellos derechos que por su propia naturaleza resultan imprescindibles para la garantía de la dignidad humana. De modo que lo que el legislador disponga sobre estos derechos no podrá venir determinado en función de la nacionalidad de los sujetos titulares.

En esta sentencia, en el fundamento jurídico cuarto, nuestro Alto Tribunal realiza una gradación basada en la mayor o menor fundamentalidad de los derechos que le permite formular una clasificación que hoy sigue siendo básica, más de veinte años después, para realizar cualquier aproximación al estatuto jurídico de los extranjeros.

Señala que existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen también derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los reconocidos en el artículo 23 de la Carta Magna, según dispone el artículo 13.2 y con la salvedad incluida en este precepto); y, por fin, existen otros derechos que pertenecerán o no a los extranjeros según lo que dispongan los tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio.

Sin embargo, tres años después, el Tribunal realiza un cambio significativo en la sentencia 115/1987, donde se abandona la tesis de la mayor o menor fundamentalidad de los derechos y la sustituye por otra jurídicamente más controlable.

De este modo, se indica que el legislador no puede ignorar que, por deseo expreso del constituyente, hay derechos que, aunque pueda discutirse su carácter esencial para la preservación de la dignidad humana, pertenecen también a los extranjeros habida cuenta de la titularidad genérica con la que se incorporan a la Constitución.

Combinando ambas tesis, expuestas en ambas sentencias, se puede realizar la siguiente clasificación:

- **Los derechos vinculados a la dignidad de las personas**, en los que los españoles y extranjeros se encuentran en una posición de igualdad respecto a su titularidad y ejercicio.

Son derechos inherentes a las personas, derechos derivados de los contenidos en los tratados internacionales: derecho a la vida, a la integridad física y moral, derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, derecho a la libertad y seguridad, derecho al honor e intimidad personal, etc...

- **Derechos que la Constitución reconoce indistinta y genéricamente a españoles y extranjeros**, aunque no se encuentren vinculados a la dignidad humana; la titularidad de los mismos alcanza por igual a españoles y extranjeros, si bien el legislador puede establecer diferencias en cuanto a las condiciones del ejercicio de los derechos.

Derechos de reunión, de manifestación, de asociación, de educación, de sindicación, de huelga...

- **Derechos que la Constitución atribuye a los españoles**, en los que el legislador es libre de extender o no su titularidad a los extranjeros y de regular diferentes condiciones de su ejercicio para españoles y extranjeros.

Derecho a elegir su residencia y a la libre circulación por el territorio nacional.

- **Los derechos contenidos en el artículo 13.2 pertenecen, por expreso mandato constitucional, exclusivamente a los españoles**, por lo que su eventual extensión a los extranjeros requeriría, necesaria e inexcusablemente, la previa reforma constitucional.

Derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes (artículo 23.2 de la Constitución).

### **LIMITACION LEGISLATIVA A RAIZ DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL**

En la referida Sentencia 115/1987, el Tribunal Constitucional admite expresamente la posibilidad de que el legislador establezca condicionamientos adicionales al ejercicio de derechos fundamentales por parte de los extranjeros. No obstante, al regular el contenido de los derechos, se encuentra limitado por su contenido esencial. Es, por tanto, la propia jurisprudencia constitucional la que nos obliga a distinguir entre titularidad, ejercicio y contenido de los derechos.

Y conviene recordar que entre los condicionamientos adicionales que se tienen por constitucionalmente admisibles figura el de hallarse legalmente en España para poder ejercer numerosas libertades públicas.

En la actualidad, el Alto Tribunal sostiene que en aquellos casos en que el legislador goza de una auténtica facultad constitutiva, esto es, de la facultad de atribuir o no la titularidad de determinados derechos a los extranjeros (los no imprescindibles para preservar la dignidad humana, y atribuidos por la Constitución a los españoles), no está limitado por el contenido constitucionalmente garantizado del derecho en cuestión, sino por la regulación propia de los tratados internacionales (STC 94/1993).

La distinción entre los derechos fundamentales y las libertades públicas permiten determinar los derechos que gozan de un contenido esencial inalterable por el legislador frente a las libertades públicas que no tienen más contenido que el dispuesto por los tratados y la ley.

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución integran así el bloque de constitucionalidad del régimen jurídico público de los derechos fundamentales de los extranjeros en España. Y se configuran como parámetro de constitucionalidad de la ley que, teniendo por objeto la regulación de los derechos de los extranjeros en España, pretenda limitarlos.

En este sentido, posteriores sentencias (STC 28/1991, 42/1994, 91/2000 y 292/2000) afirman que tanto los tratados y acuerdos internacionales, a que se remite el artículo 10.2 de la Constitución, como el derecho comunitario derivado, no poseen rango constitucional y, por tanto, no constituyen canon de la constitucionalidad de las normas con rango de ley, por más que se erigen en criterios válidos para interpretar el significado y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce.

Por tanto, los límites del legislador en esta materia son los siguientes:

- En relación con los derechos conectados directamente con la dignidad humana, o que la Constitución al reconocerlos no hace distinción en cuanto a su titularidad por nacionales o extranjeros, el límite que el legislador ha de respetar es el configurado por el contenido esencial del derecho constitucionalmente garantizado.
- Respecto a los derechos que no guardan conexión inmediata con la dignidad humana, y a los que la Carta Magna atribuye a los españoles, dicho límite vendrá determinado por lo dispuesto en los Tratados Internacionales ratificados por España.

## **ÚLTIMAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHO DE EXTRANJERÍA**

Nos referiremos fundamentalmente a las sentencias del Alto Tribunal de 7 de noviembre y de 19 de diciembre de 2007 (BOE de 10/12/07 y de 22/01/2008, respectivamente,) recaídas en relación con los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica de Extranjería por el Parlamento de Navarra y por la Junta de Extremadura. Aunque son casi una decena las sentencias del Tribunal Constitucional que restituyen varios derechos a los ciudadanos extranjeros de los que se habían visto privados por la reforma 8/2000 de la Ley Orgánica de Extranjería.

En los siguientes comentarios nos referiremos siempre a los preceptos de la Ley Orgánica que estaban vigentes con anterioridad a la última reforma por Ley Orgánica 2/2009 para poder analizar su contenido a la vista de las sentencias del Alto Tribunal.

Dice este Tribunal que el legislador al que remite el artículo 13.1 del texto constitucional no goza de igual libertad para regular la titularidad y el ejercicio de los distintos derechos del Título I; una interpretación sistemática del repetido precepto impide sostener que los extranjeros gozarán en España sólo de los derechos y libertades que establezcan los tratados y el legislador, dejando en manos de éste la potestad de decidir qué derechos del Título I les pueden corresponder y cuáles no.

Nuestra jurisprudencia ha reiterado que existen derechos de dicho Título que “corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto de los españoles” puesto que gozan de ellos en condiciones plenamente equiparables a los españoles; estos derechos son los que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, esto es, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al artículo 10.1 es el fundamento del orden político español. También nos hemos referido a ellos como derechos inherentes a la dignidad de la persona humana: derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica, a la tutela judicial efectiva, a la asistencia jurídica gratuita, a la libertad y a la seguridad y el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El legislador se encuentra asimismo limitado al regular aquellos derechos que la Constitución reconoce directamente a los extranjeros, refiriéndonos en concreto, por ejemplo, a los derechos de reunión y asociación, por lo que no se los puede negar, aunque sí puede establecer condicionamientos adicionales.

Así pues, el referido precepto constitucional concede al legislador una notable libertad para regular los derechos de los extranjeros en España, pudiendo establecer determinadas condiciones para su ejercicio. Sin embargo, deberá tener en cuenta el grado de conexión con la garantía de la dignidad humana, el contenido preceptivo del derecho, cuando éste se reconozca directamente a los extranjeros por nuestra primera norma, y, en todo caso, el contenido delimitado para el derecho por la Constitución y los Tratados Internacionales. Por último, las condiciones de su ejercicio que establezca la ley deberán dirigirse a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos, y guardar adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida.

En lo referente al **derecho de reunión y manifestación**, se condiciona su ejercicio a la obtención de la autorización de estancia o residencia en España (artículo 7.1 de la anterior L.O.). Sin embargo, para el Alto Tribunal la definición constitucional del derecho de reunión realizada por nuestra jurisprudencia, y su vinculación con la dignidad de la persona, derivada de los textos internacionales, imponen al legislador el reconocimiento de un contenido mínimo de aquel derecho a la persona en cuanto tal, cualquiera que sea la situación en que se encuentre; formando parte el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación de aquellos derechos que, según el artículo 10 de la norma fundamental, son el fundamento del orden político y de la paz social, por lo que se ha vulnerado el artículo 21 de la Constitución, debiendo declararse inconstitucional.

Según lo dispuesto en el anterior artículo 8 de la L.O., todos los extranjeros tendrán el **derecho de asociación**, conforme a las leyes, que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. Para el Tribunal Constitucional este derecho está configurado como una de las libertades públicas capitales de la persona, al asentarse justamente como presupuesto en la libertad, viene a garantizar un ámbito de autonomía personal, y por tanto también el ejercicio con pleno poder de autodeterminación de las facultades que componen esa específica manifestación de la libertad; por lo que se encuentra, pues, vinculado a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad por cuanto protege el valor de la sociabilidad como dimensión esencial de la persona, debiéndose, en consecuencia, declararse este precepto inconstitucional.

El apartado 3 del artículo 9 de la anterior L.O. establecía que los extranjeros residentes tendrán **derecho a la educación de naturaleza no obligatoria** en las mismas condiciones que los españoles. Por tanto, se impide el acceso a la enseñanza no básica a los extranjeros menores de 18 años que no tengan residencia legal en España. El Alto Tribunal sostiene que el derecho a la educación garantizado en el artículo 27.1 de nuestra norma fundamental corresponde a “todos”, independientemente de su condición de nacional o extranjero, e incluso de su situación legal en España; conclusión obtenida del texto constitucional puesto en relación con textos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se utilizan las expresiones “toda persona tiene...”, o “a nadie se le puede negar...” el derecho a la educación. Así pues, el derecho a la educación no obligatoria de los extranjeros menores de edad forma parte del contenido del derecho a la educación, y su ejercicio puede someterse a los requisitos de mérito y capacidad, pero no a otra circunstancia como la situación administrativa del menor. Por lo que se declara inconstitucional el inciso “residentes” de este precepto.



Los extranjeros tendrán **derecho a sindicarse libremente...**, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España, de acuerdo con lo dispuesto en el anterior artículo 11.1 de la L. O. En nuestra jurisprudencia se ha vinculado la titularidad del derecho de libertad sindical a “todos” los trabajadores, recordando el Convenio 87 de la OIT que reconoce a todos los trabajadores, sin distinción alguna y sin autorización previa, los derechos de fundación de sindicatos y de afiliación a los mismos. Por tanto, el legislador puede fijar condiciones para el ejercicio de este derecho, siempre y cuando respete un contenido del mismo que nuestra Carta Magna salvaguarda por pertenecer a cualquier persona, independientemente de la situación en que se encuentre. Razonamientos que conducen a la inconstitucionalidad de este artículo.

El apartado 2 del anterior artículo 22 de la Ley Orgánica preceptúa la **asistencia jurídica gratuita** para los extranjeros residentes que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar, en iguales condiciones que los españoles. Partiendo de la conexión instrumental entre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho a la tutela judicial efectiva, conforme al artículo 24.1 de nuestra norma fundamental, al ser titulares de esta última, todas las personas, el Tribunal Constitucional estima también como inconstitucional que se exija el requisito de la residencia para los extranjeros a la hora de tener derecho a la asistencia jurídica gratuita.

## **DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD**

Haremos una breve introducción a los derechos y libertades de los extranjeros en España, para pasar mas adelante a analizar los mas destacados a nuestro entender, por ser de mayor relevancia su evolución negativa en el tiempo como consecuencia de nuestra crisis económica, como por ser sensibles a la sociedad.

*Artículo 4 L.O. Derecho a la documentación.*

*Los extranjeros en territorio español tienen el derecho y la obligación a conservar la documentación que acredite su identidad y no podrán ser privados de la misma salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.*

*Artículo 5.- Derecho a la libertad de circulación.*

*Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y leyes...*

*Artículo 6.- Participación pública.*

*Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales, en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley.*

*Artículo 7.- Libertades de reunión y manifestación.*

*Los extranjeros tendrán el derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles.*

*Artículo 8.- Libertad de asociación.*

*Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que los españoles.*

*Artículo 9.- Derecho a la educación.*

*Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria.*

*Artículo 10.- Derecho al trabajo y a la Seguridad Social.*

*Los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica... tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a acceder al acceso al sistema de Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente.*

*Artículo 11.- Libertad de sindicación y de huelga.*

*Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles.*

*Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que los españoles.*

*Artículo 12.- Derecho a la asistencia sanitaria.*

Recientemente modificado por RD-L 16/2012 que le ha dado la siguiente redacción:

*Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria.*

Como sabemos, esto ha supuesto un retroceso en los derechos de los extranjeros en España, al eliminar de “facto” el derecho a salud pública a los ciudadanos extranjeros, derecho, que hasta ahora venían disfrutando, y que se consideraba como una “conquista” social.

*Artículo 13.- Derecho en materia de vivienda.*

*Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes.*

En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

*Artículo 14.- Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales.*

*Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.*

*Artículo 15.- Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles.*

*Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles.*

*Artículo 20 de la L.O. Derecho a la tutela judicial efectiva.*

*“Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva”.*

La principal garantía constitucional de los derechos es la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución.

La condición o no de extranjero es irrelevante en relación con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y como dice el Tribunal Constitucional, dicho derecho resulta imprescindible para la garantía de la dignidad humana. Y en la tutela judicial efectiva encuentra el extranjero la más importante garantía jurídica para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Si que en este punto se hace necesaria una breve mención, dado que no es estrictamente de materia de extranjería, por afectar a todos los ciudadanos, lo que la merma de este Derecho a la tutela judicial efectiva va a significar el proyecto de la denominada “ley de tasas”, por medio de la cual para poder tener acceso a la Justicia, y por ende a esta tutela judicial, va a ser necesario el pago de ciertas tasas, lo cual va a significar un problema para muchos ciudadanos, entre los cuales el colectivo de extranjeros será quizás el mas afectado.

*Artículo 21.- Derecho al recurso contra los actos administrativos.*

*“Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a lo dispuestos en las leyes”.*

Este derecho forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, pero con la reseña indicada anteriormente.

*Artículo 22.- Derecho a la asistencia jurídica gratuita.*

*“Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.*

*Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de protección internacional, así como a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Estas asistencias serán gratuitas cuando carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.*

*En los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegación de entrada, devolución o expulsión, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita requerirá la oportuna solicitud realizada en los términos previstos en las normas que regulan la asistencia jurídica gratuita.”*

Con referencia al derecho a la asistencia de intérprete, si el extranjero no comprende nuestra lengua, el Alto Tribunal señala que el derecho de los recurrentes a ser asistidos de intérprete en sus comunicaciones con el abogado de oficio puede entenderse comprendido en los derechos fundamentales de defensa y asistencia letrada.

Siendo también clara la jurisprudencia constitucional en materia de asistencia jurídica gratuita al indicar que los derechos contenidos en el artículo 24 de nuestra Carta Magna son inmediatamente inherentes a la dignidad humana. Al respecto, ver la interesante Sentencia del Tribunal Constitucional 95/2003.

Una vez vislumbrada de forma rápida la situación actual, en los próximos capítulos analizaremos de forma mas profunda varios extremos del Derecho de Extranjería que consideramos importantes, por ser especialmente sensibles desde un punto de vista social, como por el retroceso que como consecuencia de la crisis actual han sufrido.

No es posible analizar todos los campos que abarca la materia, por ello, y por las razones anteriormente expuestas hemos escogido los mas significativos, puesto que el análisis de la totalidad de la materia excedería con mucho los limites de esta Tesis.

## **CAPITULO III: EL PERMISO DE TRABAJO**

### **PREVIO**

Antes de entrar a realizar el examen de este apartado, se hace necesario un análisis quizás mas exhaustivo del derecho al trabajo de los extranjeros en España a la vista de la actualidad legislativa, para a continuación de la misma, y como venimos haciendo, adentrarnos de una forma mas completa a analizar comparativamente la actual legislación con la anterior, así como las especialidades de la presente.

Dicho esto, y en este apartado en concreto, a lo que el derecho al trabajo se refiere, debemos de partir desde nuestra Carta Magna. Como se sabe, la Constitución española es una constitución normativa. Una Ley Fundamental que tiene plena eficacia en vida de las Instituciones del Estado y que tiene, en el Tribunal Constitucional, su mayor defensor y guardián. Si bien lo anterior es más una distinción de la ciencia jurídica, a nadie es ajeno que un derecho fundamental como el contenido en artículo 13 de la Constitución necesita una Ley Orgánica que los desarrolle. La formula que se escoja por el Legislador ordinario para configurar dicha Ley Orgánica va a condicionar completamente la futura reglamentación. Esto nos preocupa en la medida que una inadecuada redacción legislativa puede hacer inoperante el derecho fundamental en la realidad de los hechos cotidianos. De nada sirve la técnica legislativa más exquisita frente una deficiente interpretación jurídica que deje en nada el derecho de los extranjeros al trabajo.

- El procedimiento de autorización de trabajo.

La problemática del procedimiento de autorización de trabajo, bien sea por cuenta propia o por cuenta ajena esta en el hecho que la LOEX es el resultado de un conjunto de fuerzas políticas y se hace en necesario y directo desarrollo del artículo 13.1 de la Constitución. Sin embargo, el Reglamento de Extranjería es producto fundamentalmente de un solo partido político si bien con el consenso de los agentes sociales y los grupos representativos. Lo que no debemos olvidar es el hecho que la interpretación del derecho es tanto o más importante como el establecimiento y reconocimiento del derecho en si. De nada sirve, repetimos nuevamente, de nada sirve la técnica jurídica más avanzada si la interpretación de los operadores jurídicos anula el contenido esencial y fundamental del derecho al trabajo de los extranjeros en España.



- Interpretación al capítulo III y VII del Reglamento de Extranjería sobre derecho al trabajo de los extranjeros.

Una novedad importante a la hora de autorizar a un extranjero a trabajar en España, bien sea por cuenta ajena o cuenta propia lo será el alcance de los artículos 64.3 c segundo párrafo y 105.3 d segundo párrafo. En sendos artículos se determina los ingresos que debe percibir el extranjero para poder estar dentro de los supuestos del Reglamento de Extranjería. En el caso de la autorización para trabajar por cuenta ajena se señala que si el contrato de trabajo lo es a media jornada no así lo serán los ingresos del extranjero: se le exige una cantidad más elevada que aquella que percibiría un nacional en la misma situación laboral. Nos encontramos con un supuesto de discriminación que impone una carga más pesada al extranjero por el hecho de serlo y sin duda va en contra de la LOEX y una interpretación armónica y sistemática del artículo 13.1 de la Constitución.

Así mismo, el alcance de las consecuencias económicas del artículo 105.3 d segundo párrafo cuando habla que el extranjero deberá presentar la antepenúltima Declaración de la Renta o en su defecto de sus obligaciones fiscales impone una carga mayor que a un nacional en las mismas circunstancias razón por la cual el alcance de este último artículo excede las disposiciones de la LOEX así como del artículo 13.1 de la Constitución

Siendo la integración a través del empleo la estrategia predominante de la inmigración en España, el tema objeto de este capítulo versa sobre el acceso al trabajo de ciudadanos extranjeros, que pretenden establecerse en España para realizar una actividad lucrativa, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia.

El trabajo de los extranjeros en nuestro país está reconocido como un derecho recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social cuando dispone que *“los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a acceder al Sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente”*.

La citada L.O. 4/2000 establece en su artículo 1º.1 que: *“Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española”*, y el número 2 del mismo

precepto dice que “*Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte*”. Y en el número 3 acota su ámbito de aplicación al disponer que: “*Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables*”.

## **LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO**

La autorización de trabajo de extranjeros, con independencia del Régimen especial aplicable a los ciudadanos de los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, está sometido a un régimen de autorización administrativa previa, conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El artículo 36 de la citada Ley Orgánica dispone que: “*los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente*”

Y el artículo 62 del Reglamento aprobado por R.D. 557/2011, de 20 de abril dice: “*Se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un período superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena*”.

La efectividad de la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena quedará suspendida hasta la obtención por el trabajador extranjero, que resida fuera de España, del correspondiente visado que deberá solicitar personalmente en la Misión diplomática u Oficina consular en cuya demarcación resida, en el

plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización al empleador interesado, así como su posterior alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, en el plazo de tres meses desde su entrada legal en España y por el empleador que solicitó la autorización.

Las autorizaciones de trabajo y residencia tienen la siguiente duración:

- La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena tendrá una duración de un año, siendo renovable, y estando limitada a un ámbito geográfico provincial y a una ocupación, salvo en los casos en los que no resulte aplicable el requisito de que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador. Asimismo, la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia tendrá una duración de un año, será también renovable y se limitará a un ámbito geográfico autonómico y a un sector de actividad
- La primera y segunda renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, tendrán una duración de dos años cada una, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración, y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio nacional.
- La residencia de larga duración-UE es la situación en la que se encuentra el extranjero que haya sido autorizado a residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que los españoles. Tendrán derecho a obtener una autorización de residencia de larga duración-UE los extranjeros que hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante cinco años. La continuidad no quedará afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro del período de permanencia de cinco años exigible, salvo que las correspondientes salidas se hubieran efectuado de manera irregular.

### **AUTORIZACIONES INICIALES DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR CUENTA AJENA**

Como ya se ha indicado, la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena tendrá una duración de un año, podrá renovarse, y estará limitada a un ámbito geográfico provincial y a una

ocupación, salvo en los casos en los que no resulte aplicable el requisito de que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador. Habilitará a los extranjeros que residen fuera de España, siempre que hayan obtenido el correspondiente visado y hayan sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social dentro del plazo de tres meses desde su entrada legal en España, a residir y trabajar por cuenta ajena en España. En el caso de ciudadanos extranjeros que sean titulares de una autorización de residencia temporal, o si se hallan en situación de estancia por estudios, realizando actividades de investigación o formación, o realizando prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o privada, podrán acceder a la autorización de residencia temporal y trabajo sin que sea exigible el visado, siempre que, además, acredite cumplir los requisitos indicados en el artículo 199.1 del Real Decreto 557/2011.

### **Requisitos para las concesiones de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.-**

Para la concesión de una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, tanto el trabajador extranjero, como el empleador deben reunir una serie de requisitos. Al respecto, el artículo 38 de la L.O. 4/2000 dispone que: *“para la concesión inicial de la autorización de residencia y trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo”*. No obstante lo anterior, en el artículo 40 del citado texto legal se recogen una serie de supuestos específicos en los que no se considerará la situación nacional de empleo:

- Los familiares reagrupados en edad laboral, o el cónyuge o hijo de extranjero residente en España con una autorización renovada, así como al hijo de español nacionalizado o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Espacio Económico Europeo, siempre que estos últimos lleven, como mínimo, un año residiendo legalmente en España y al hijo no le sea de aplicación el régimen comunitario.
- Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación.
- Trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos.
- Los refugiados y apátridas.
- Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes españoles.
- Los extranjeros nacidos y residentes en España.

- Los hijos o nietos de español de origen.
- Menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia tutelados por la entidad de protección de menores competente, para las actividades que favorezcan su integración social.
- Los extranjeros que obtengan la autorización de residencia temporal por el procedimiento previsto en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica de Extranjería (situación de arraigo, razones humanitarias, colaboración con la justicia y otras circunstancias excepcionales) y, en todo caso, cuando se trate de víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.
- Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada durante dos años naturales, y hayan retornado a su país.
- Los extranjeros que renunciaron a su autorización de residencia y trabajo en el marco de un programa de retorno voluntario.

Tampoco se considerará la situación nacional de empleo:

- A los trabajadores designados para cubrir puestos de confianza y directivos de empresa. Se trata de ocupaciones propias de alta dirección a que se refiere el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985. A estos efectos, la Disposición Adicional decimoquinta del R.D. 557/2011 dispone que se considera que ocupan puestos de confianza aquellos trabajadores que desempeñen únicamente actividades propias de alta dirección por cuenta de la empresa que los contrate, basadas en la recíproca confianza y que ejerzan legalmente la representación de la empresa o tengan extendido a su favor un poder general. Tienen la misma consideración los trabajadores altamente cualificados que teniendo un conocimiento esencial para la realización de la inversión sean especialistas o desempeñen funciones relacionadas con la dirección, gestión y administración necesarias para el establecimiento, desarrollo o liquidación de la inversión.
- Los profesionales altamente cualificados, incluyendo técnicos y científicos contratados por entidades públicas, universidades o centros de investigación, desarrollo e innovación dependientes de empresas.
- Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro país que pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o grupo en España.
- Los artistas de reconocido prestigio.

Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo:

- A nacionales de Estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales a este efecto.

- Nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo enrolados en buques españoles en virtud de acuerdos internacionales de pesca marítima.

A la enumeración de los requisitos para la concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo se dedica el artículo 64 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril haciendo distinción entre:

1.- Requisitos en relación con la residencia:

- a) Que los trabajadores extranjeros no se encuentren irregularmente en territorio español.
- b) Que los trabajadores extranjeros que se pretenda contratar carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.
- c) Que no figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
- d) Haber transcurrido el plazo de compromiso de no regreso a España del extranjero, asumido por éste en el marco de su retorno voluntario al país de origen.
- e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia temporal.

2.- Requisitos en relación con la actividad laboral a desarrollar:

- a) El primer requisito es que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero (con las excepciones señaladas anteriormente), lo que se manifiesta en la insuficiencia de trabajadores capacitados para el desempeño de la profesión o puesto de trabajo solicitado. A tales efectos, el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la información suministrada por los Servicios públicos de empleo autonómicos y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para cada provincia o demarcación territorial que, en su caso, establezca la correspondiente Administración autonómica, así como para Ceuta y Melilla. La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización para residir inicialmente y trabajar por cuenta ajena dirigida al extranjero.

Asimismo, la situación nacional de empleo permitirá la contratación en las ocupaciones no calificadas como de difícil cobertura, cuando el empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes

con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno, mediante la gestión de una oferta de empleo en los Servicios Públicos de Empleo concluida con resultado negativo. El Servicio Público de Empleo emitirá, si procede, en el plazo máximo de cinco días contados a partir de la comunicación por parte del empleador del resultado de la selección, una certificación que acredite la insuficiencia de demandantes.

b) El empleador deberá presentar con la solicitud un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el mismo, que garantice al trabajador una actividad continuada durante el período de vigencia de la autorización inicial para residir y trabajar. Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo deberán ajustarse a las establecidas por la normativa laboral española y el convenio colectivo aplicable.

c) Que los empleadores solicitantes hayan formalizado su inscripción en el correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentren al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Además se podrá requerir al empresario que acredite los medios económicos, materiales y personales de los que dispone para su proyecto empresarial.

d) Asimismo, los empleadores deberán contar con medios económicos, materiales o personales, suficientes para hacer frente a las obligaciones asumidas con el trabajador en el contrato de trabajo, dentro de su proyecto empresarial.

e) Que el trabajador posea la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión. También será necesaria la colegiación, si las leyes así lo exigiesen (art. 36.3 de la L.O. 4/2000).

f) Haber abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta ajena.

### **Tramitación de las solicitudes iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.-**

En el caso de traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma en materia de autorización inicial de trabajo, todo procedimiento relativo a una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena supondrá la presentación de una única solicitud y finalizará con una única resolución administrativa.

El empleador deberá presentar personalmente o a través de quien válidamente tenga atribuida la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ante el órgano competente para su tramitación correspondiente a la provincia donde se vaya a

ejercer la actividad laboral, ya sea de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma en el caso de se le hubieran traspasado competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta ajena.

Por el Delegado del Gobierno para la Extranjería e Inmigración se dictó la Instrucción de 16 diciembre de 2003 aclaratoria de la aplicación de la L.O. 4/2000, tras la modificación llevada a cabo por L.O. 14/2003, en lo que se refiere al deber de presentación personal por el interesado ante los registros de los órganos competentes para su tramitación.

1. En el caso de empleadores o empresarios personas físicas deberá realizar la presentación el empleador personalmente, salvo en el supuesto de enfermedad o impedimento físico acreditado mediante certificado médico o informe hospitalario suscrito por médico colegiado en el que podrá actuar un tercero mediante poder notarial de representación.

2. En los casos de personas jurídicas constituidas como Sociedades Anónimas o Sociedades de Responsabilidad Limitada, el concepto “representación legal empresarial” a que se refiere la D.A. tercera de la Ley Orgánica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 128 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 124 del Reglamento del Registro Mercantil, debe entenderse circunscrito a los titulares de los órganos que están facultados para actuar en nombre de la Sociedad, con las especificaciones descritas en sus Estatutos o normas internas, y que, por lo tanto, pueden celebrar con carácter general actos o negocios relativos al objeto social en nombre de la misma.

No obstante, en estos casos se entenderán incluidos, dentro del concepto de los representantes legales empresariales que pueden presentar las solicitudes en los registros de los órganos competentes para su tramitación, y siendo equiparados a estos efectos a los administradores de la empresa, a:



- Las personas vinculadas a la empresa por una relación de carácter laboral y a cuyo favor se haya otorgado un apoderamiento general para todo tipo de actos (o un apoderamiento para la realización de actos específicos que incluya expresamente la presentación de solicitudes relativas a autorizaciones de residencia y trabajo), habiendo sido inscrito dicho apoderamiento en el Registro Mercantil, y debiendo acreditarse dicha situación de apoderamiento en el momento de presentación de la solicitud.
2. Cuando se trate de una Iglesia, Confesión o Entidad Religiosa, debidamente inscrita en el registro de Entidades religiosas del Ministerio de Justicia, deberán presentarse las solicitudes de autorización de residencia y trabajo personalmente por quien ostente válidamente la representación de la Entidad.

En el caso de Fundaciones o Asociaciones de naturaleza no religiosa, las solicitudes deberán asimismo ser presentadas personalmente por quien válidamente ostente la representación de la entidad según la inscripción realizada en el Registro Público correspondiente (miembros del Patronato de la Fundación, o miembros del órgano de representación de la Asociación.

4. En el supuesto de que el sujeto legitimado para solicitar una autorización de residencia y trabajo, como empleador, sea una Administración u Organismo Público, la solicitud deberá ser presentada por el funcionario o trabajador en el que el órgano del Departamento de dicha Administración u Organismo Público originariamente competente para la contratación laboral haya delegado la competencia, o en su caso la firma, para la presentación de dicha solicitud.

La solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se presentará en modelo oficial (Modelo EX03) debiendo acompañarse de la siguiente documentación:

· El NIF del empleador y, en el supuesto de que se trate de una persona jurídica, documento público que otorgue la representación legal de la misma a favor de la persona física que formule la solicitud. Tratándose de persona física, no será necesario aportar el NIF si el empleador accede a la verificación de sus datos a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

- Original y copia del contrato de trabajo, en el modelo oficial establecido.
- En su caso, certificado del Servicio Público de Empleo competente sobre la insuficiencia de demandantes de empleo para cubrir el puesto de trabajo.
- Documentos que acrediten los medios económicos, materiales o personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones que se deriven del contrato de trabajo. Tratándose de empleador persona física, deberá además acreditar que cuenta con medios económicos suficientes para atender sus necesidades y las de su familia. Si el empleador tiene la condición de empresa, esta circunstancia podrá acreditarse, entre otros medios de prueba admitidos en derecho, mediante la presentación o comprobación de la información relativa a su cifra de negocios, con el límite de los tres últimos años.
- Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del trabajador extranjero.
- La documentación acreditativa de que se tiene la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.
- Aquellos documentos que acrediten, de ser alegada por el interesado, la concurrencia de un supuesto específico, de los establecidos en el artículo 40 de la L.O. 4/2000 antes indicados, en los que no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, o por Convenio internacional.

Recibida la solicitud, el órgano competente procederá a su registro, dejando inmediata constancia de su presentación, resolviendo de forma motivada la inadmisión a trámite de la solicitud en el caso de concurrir alguna de las causas de inadmisión recogidas en la Ley. Admitida a trámite la solicitud, procederá a la instrucción del procedimiento y a su inmediata tramitación, comprobando de oficio la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social respecto al cumplimiento de obligaciones, en materia tributaria y de Seguridad Social, así como los informes de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y del Registro Central de Penados. En el caso de que sea necesario solicitar informes en el marco de este apartado, éstos serán emitidos en el plazo máximo de diez días. Asimismo, comprobada la solicitud y la documentación exigida, si estuviera incompleta se requerirá al interesado a efectos de que se subsanen los defectos observados en el plazo de diez días.

A la vista de la documentación presentada y de los informes obtenidos, el órgano competente resolverá de forma motivada en el plazo máximo de tres meses sobre la autorización solicitada. En el supuesto de

traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma en materia de autorización inicial de trabajo, los órganos competentes de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma dictarán una resolución conjunta denegando o concediendo la correspondiente autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Cuando la resolución fuese favorable, se suspenderá su eficacia hasta la obtención del visado por el trabajador, su entrada en España y posterior alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, en el plazo de tres meses desde su entrada en España y por el empleador que solicitó la autorización. No obstante, y en el supuesto de fallecimiento del empleador o desaparición del empleador que tenga la condición de empresa, el trabajador podrá ser dado de alta en el régimen de la Seguridad Social por otro empleador, siempre dentro del plazo de tres meses desde su entrada legal en España y previa realización de las actuaciones previstas en los apartados 8 y 9 del artículo 67 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000.

En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización al empleador interesado, el trabajador deberá solicitar personalmente el visado en la Misión Diplomática u Oficina Consular en cuya demarcación resida. Una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español en el plazo de vigencia de aquél, que será de tres meses. El visado le habilitará para la entrada en España y la permanencia en situación de estancia.

A partir de su entrada legal en España, el trabajador podrá comenzar su actividad laboral y el empleador deberá proceder a su afiliación, alta y posterior cotización en los términos establecidos por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación.

En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en la Seguridad Social, este deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, personalmente y ante la oficina de Extranjería o Comisaría de Policía

correspondientes. Si finalizada la vigencia de la autorización estancia del visado (tres meses), no existiera constancia de que el trabajador ha sido dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, tendrá obligación de salir del territorio nacional. Asimismo, se requerirá al empleador que solicitó la autorización para que alegue las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, se dará traslado del expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por posible concurrencia de una infracción grave, igualmente, se le advertirá de que podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente.

### **Denegación de las solicitudes de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.-**

Cuando la resolución relativa a una solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo dictada bien por el órgano competente de la Administración General del Estado, o bien de forma conjunta con el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, fuese desfavorable, habrá de ser motivada, recogiendo todas las causas específicas de denegación que concurran, tanto referidas a los aspectos laborales, como a los de residencia y expresando los recursos que contra ella procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarlo y plazo para interponerlos.

El órgano u órganos competentes denegarán las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en los supuestos señalados en el artículo 69 del Reglamento:

- . Cuando no se acredite cumplir alguno de los requisitos indicados anteriormente, bien relativos a la residencia, bien relativos a la actividad laboral a desarrollar, establecidos en el artículo 64 del Reglamento.
- . Cuando consten antecedentes penales del trabajador en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.
- . Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud el empleador haya amortizado los puestos de trabajo que pretende cubrir por despido improcedente o nulo, declarado por sentencia o reconocido como tal en el acto de conciliación, o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor.

- Cuando el empleador solicitante haya sido sancionado mediante resolución firme en los últimos doce meses por infracciones calificadas como graves o muy graves en la Ley Orgánica 4/2000, o en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.
- De así valorarlo el órgano competente para resolver, cuando conste un informe policial desfavorable.
- Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
- Cuando el empleador solicitante haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra los derechos de los trabajadores o contra ciudadanos extranjeros, así como contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
- Será causa de denegación, de entenderlo oportuno el órgano competente para la resolución del procedimiento, a la vista de las circunstancias concurrentes, cuando en los doce meses anteriores a la solicitud, el empleador haya extinguido el contrato que motivó la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena con anterioridad a la finalización de la vigencia de la autorización, e igualmente, si en los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, el empleador solicitante ha sido sancionado por comisión de la infracción prevista en el artículo 53.2.a de la L.O. 4/2000 (No dar de alta en la Seguridad Social al trabajador extranjero, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que se indicaron en la solicitud).
- Cuando en la fecha de solicitud de la autorización el empleador mantenga vigentes medidas de suspensión de contratos, en relación con los puestos de trabajo que pretende cubrir.

### **Renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.-**

Como se indicó al principio de este capítulo, la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena es susceptible de una primera y una segunda renovación por un período de dos años cada una de ellas. La renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo permitirá al trabajador extranjero el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio nacional, retrotrayéndose sus efectos al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.

Las solicitudes de renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena se podrán presentar personalmente, sin perjuicio de la existencia de fórmulas de representación voluntaria a través de actos jurídicos u otorgamientos específicos según expresa el apartado 7 de la Disposición adicional octava del Real Decreto 557/2011, en cualquier registro público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en modelo oficial (Modelo EX03).

El plazo para presentar las solicitudes de renovación es durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido. Deberán presentarse junto con la solicitud de renovación, los documentos acreditativos de que se reúnen las condiciones para su concesión, así como informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que acredite la escolarización de los menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria, en caso de no quedar acreditada la escolarización de los menores de edad, la Oficina de Extranjería pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autoridades educativas advirtiéndolo expresamente por escrito al solicitante que de no producirse la escolarización, la autorización no será renovada.

Para la concesión de la renovación se valorará, en su caso, previa solicitud de oficio de los respectivos informes:

- a) Que el trabajador extranjero haya cumplido la condena, haya sido indultado o se halle en situación de remisión condicional de la pena o de suspensión de la condena.
- b) Que el trabajador extranjero haya incumplido sus obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social.

Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del extranjero acreditado mediante informe de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia, que podrá ser alegado por el propio trabajador en el caso de no cumplir alguno de los requisitos para la renovación.

El plazo máximo para notificar las resoluciones de renovación de autorizaciones de residencia y trabajo será el general de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el

registro del órgano competente para tramitarlas. En estos supuestos, transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la solicitud de renovación ha sido estimada.

### **Supuestos en los que procede la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.-**

La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se renovará a su expiración en los siguientes supuestos:

- Acreditando la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende.
- Cuando se acredite la realización habitual de la actividad laboral durante un mínimo de seis meses por año y el trabajador haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las características de su autorización para trabajar, figurando en situación del alta o asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación o que disponga de un nuevo contrato de trabajo que reúna los requisitos exigidos en el artículo 64 del Reglamento y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de la renovación.
- Cuando el trabajador haya tenido un período de actividad de al menos tres meses por año, siempre y cuando acredite acumulativamente que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación pretende se interrumpió por causas ajenas a su voluntad, que ha buscado activamente empleo, mediante su inscripción en el Servicio Público de Empleo competente como demandante de empleo y que en el momento de solicitar la renovación tiene un contrato de trabajo en vigor.
- Cuando el trabajador extranjero estuviera percibiendo una prestación contributiva por desempleo o fuera beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.
- Cuando concurren supuestos de extinción o suspensión del contrato de trabajo como consecuencia de que la trabajadora sea víctima de violencia de género.

. Cuando el trabajador acredite alta en la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un período de doce, o de dieciocho meses en un período de veinticuatro, siempre que su última relación laboral se hubiese interrumpido por causas ajenas a su voluntad y haya buscado activamente empleo y su cónyuge cumpla con los requisitos económicos exigidos para reagrupar al trabajador. De igual manera, cuando el extranjero mantenga una relación de análoga afectividad a la conyugal en los términos previstos para la reagrupación familiar.

Notificada la resolución favorable, el extranjero deberá solicitar en el plazo de un mes la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Por el contrario, será causa de denegación de las solicitudes de renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo, además del incumplimiento de alguno de los requisitos antes indicados, la concurrencia de alguno de los supuestos de denegación previstos para las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo, excepto el relativo a la situación nacional de empleo.

A modo de resumen mucho se puede decir sobre este tema, quizás el más importante y extenso, solamente a modo indicativo señalar que, en el punto d) de los requisitos de residencia el plazo de compromiso de no regreso a España asumido por el trabajador se enmarca en el llamado programa APRE o Plan de retorno voluntario para trabajadores desempleados que surge a partir y en desarrollo del R.D.L. 4/2008 y el R.D. 1800/2008, de desarrollo de éste. En cuanto a los requisitos de la actividad laboral, el primero de ellos (que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador) plantea el tema de la emisión del certificado de “insuficiencia de demandantes” cuando la ocupación no figura en el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que conlleva la valoración por la Oficina de extranjería (bien del Estado o de la Comunidad Autónoma) del certificado expedido por el Servicio Público de Empleo, considerando la relación entre el número de trabajadores puestos a disposición del empleador y el de puestos de trabajo ofertados, o si el puesto podría (o no) ser cubierto por personas inscritas como demandantes de empleo tras una actividad formativa.



En relación con las renovaciones, se introducen dos aspectos importantes a tener en cuenta que facilitan la renovación de las autorizaciones. El primero es la posibilidad de renovar la autorización sin necesidad de presentar un contrato y oferta de trabajo acreditando unos períodos de cotización, siempre que la última relación laboral no se haya interrumpido por causa imputable al trabajador y éste se encuentre inscrito como demandante de empleo. En segundo lugar, como novedad importante, también se podrá renovar la autorización de residencia y trabajo, aunque el trabajador no haya cotizado lo suficiente, o incluso nada, pero su cónyuge o persona con la que tenga similar relación de afinidad, resida legalmente en España y acredite tener medios económicos suficientes para poder mantenerlo.

## **AUTORIZACIONES INICIALES DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA**

La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia tendrá una duración de un año, pudiendo renovarse, y se limitará a un ámbito geográfico autonómico y a un sector de actividad. Si la Comunidad Autónoma hubiera adquirido competencias en esta materia, podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización dentro de su territorio.

### **Requisitos para la concesión de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.-**

Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, será necesario acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos relativos tanto del ámbito de la residencia como del ámbito laboral. La enumeración de estos requisitos se recoge en el artículo 105 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril:

#### **. Requisitos en materia de residencia:**

- a) Que el trabajador que pretende obtener la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia no se encuentre irregularmente en territorio español.
- b) Que carezca de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.
- c) Que el trabajador no figure como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
- d) Haber transcurrido el plazo de compromiso de no regreso a España del extranjero, asumido por éste en el marco de su retorno voluntario al país de origen.
- e) Que se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia temporal.

#### **. Requisitos en materia de trabajo:**

- f) Cumplir con los mismos requisitos que la legislación vigente exige a los españoles para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.

- g) Poseer la cualificación profesional exigible o experiencia acreditada suficiente en el ejercicio de la actividad profesional, así como, en su caso, la colegiación cuando así se requiera.
- h) Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto sea suficiente y la incidencia, en su caso, en la creación de empleo.
- i) Que el extranjero cuente con recursos económicos suficientes para su manutención y alojamiento. Las cuantías a acreditar serán previstas en el artículo 54 del Reglamento para los supuestos de reagrupación familiar.
- j) Haber abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta propia.

### **Tramitación de las solicitudes iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.-**

En el supuesto de traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia, todo procedimiento relativo a una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia supondrá la presentación de una única solicitud y finalizará con una única resolución administrativa.

El trabajador extranjero no residente que pretenda iniciar una actividad económica por cuenta propia en España deberá presentar la solicitud, personalmente en modelo oficial (Modelo EX07) ante la Oficina Consular española correspondiente a su lugar de residencia.

- A la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia deberá acompañarse, además de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente, la siguiente documentación:
  - Copia del pasaporte completo, o documento de viaje en vigor del solicitante.
  - Relación de las autorizaciones o licencias que se exijan para la instalación, apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio profesional, que indique la situación en la que se encuentren los trámites para su consecución, incluyendo, en su caso, las certificaciones de solicitud ante los organismos correspondientes.
  - La documentación acreditativa de la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.

- Proyecto de establecimiento o actividad a realizar, con indicación de la inversión prevista, su rentabilidad esperada y, en su caso, puestos de trabajo cuya creación se prevea; así como documentación acreditativa de que cuenta con la inversión económica necesaria para la implantación del proyecto, o bien con compromiso de apoyo suficiente por parte de instituciones financieras u otras.

La Misión Diplomática u Oficina Consular registrará la solicitud y entregará al interesado la comunicación de inicio de procedimiento previa verificación del abono de las tasas por tramitación del procedimiento, o en su caso, resolverá la inadmisión a trámite.

En el supuesto de que a la solicitud no se acompañen los documentos indicados anteriormente, la Misión Diplomática u Oficina Consular requerirá al interesado y le advertirá expresamente que, de no aportarlos en el plazo de diez días o no proceder al pago de las tasas por tramitación del procedimiento, se le tendrá por desistido de la petición y se procederá al archivo del expediente.

Presentada en forma o subsanada la solicitud, la Misión Diplomática u Oficina Consular dará traslado de ella, bien electrónicamente a través de la aplicación informática correspondiente, o de no ser posible, se dará traslado físico de la misma, acompañada de la documentación correspondiente, al órgano competente de la Administración General del Estado o al de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio solicite la residencia el extranjero, si hubiese adquirido competencia en esta materia.

El órgano competente de la Administración General del Estado recabará de oficio el informe de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro Central de Penados, los cuales deberán ser emitidos en el plazo de siete días y resolverá lo que proceda sobre la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. Cuando se le hubieran traspasado competencias en materia de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta propia a la Comunidad Autónoma en la que residirá el trabajador extranjero, a esta le corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos en materia de trabajo, y, simultáneamente al órgano competente de la Administración General del Estado, los requisitos en materia de residencia, dictando de manera coordinada y concordante una resolución conjunta denegando o concediendo la correspondiente autorización.

La notificación al interesado de la resolución sobre la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia se realizará por la Misión Diplomática u Oficina Consular. Cuando la resolución fuese favorable, la eficacia de la autorización concedida quedará demorada hasta la obtención del

visado por el trabajador, se produzca su entrada en España y su alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, en el plazo de tres meses desde su entrada en España

Notificada la resolución favorable, el interesado deberá solicitar personalmente al visado en modelo oficial, ante la Misión Diplomática u Oficina Consular en cuya demarcación resida, en el plazo de un mes desde la notificación. Notificada la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes y deberá entrar en territorio español durante su plazo de vigencia que será de tres meses, habilitándole para la permanencia en España en situación de estancia. A partir de la entrada legal en España del trabajador por cuenta propia, podrá comenzar su actividad y producirse su afiliación, alta y posterior cotización en los términos establecidos por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación.

En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en la Seguridad Social, éste deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, personalmente y ante la oficina de Extranjería o Comisaría de Policía correspondientes.

Si finalizado el plazo de tres meses de estancia autorizado por el visado, no existiera constancia de que el trabajador se ha dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, tendrá obligación de salir del territorio nacional, incurriendo en caso contrario en infracción grave por encontrarse irregularmente en España.

Al igual que para las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia iniciales que formulen los interesados será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas, transcurrido este plazo, podrán entenderse desestimadas.

**Denegación de las solicitudes de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.-**

Cuando la resolución relativa a una solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia dictada bien por el órgano competente de la Administración General del Estado, o bien de forma conjunta con el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, fuese desfavorable, habrá de ser motivada, recogiendo todas las causas específicas de denegación que concurran, tanto referidas a los aspectos laborales, como a los de residencia y expresando los recursos que contra ella procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarlo y plazo para interponerlos.

El órgano u órganos competentes denegarán las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta propia cuando se no se cumplan los requisitos necesarios antes indicados, salvo en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales fuera de España, que se valorará por la Oficina Consular en relación con el visado. Igualmente, se denegarán las solicitudes cuando:

- Para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas o medie mala fe.
- De así valorarlo el órgano competente para resolver, cuando conste un informe policial desfavorable.
- Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

### **Renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.**

Al igual que las autorizaciones por cuenta ajena, la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia es susceptible de una primera y una segunda renovación por un período de dos años cada una de ellas. La renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia permitirá al trabajador extranjero el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio nacional, retrotrayéndose sus efectos al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.

Las solicitudes de renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta propia se podrán presentar personalmente, sin perjuicio de la existencia de fórmulas de representación voluntaria a través de actos jurídicos u otorgamientos específicos según expresa el apartado 7 de la Disposición adicional octava del Real Decreto 557/2011, en cualquier registro público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común y en modelo oficial (Modelo EX07) y se dirigirán al órgano competente para su tramitación.

El plazo para presentar las solicitudes de renovación es de sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido. Deberán presentarse junto con la solicitud de renovación, los documentos acreditativos de que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos para la concesión inicial y de que se reúnen las condiciones para su concesión. En todo caso, se deberá acompañar un informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que acredite la escolarización de los menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria, en caso de no quedar acreditada la escolarización de los menores de edad, la Oficina de Extranjería pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autoridades educativas advirtiéndolo expresamente por escrito al solicitante que de no producirse la escolarización, la autorización no será renovada.

La Oficina competente para la tramitación del procedimiento comprobará de oficio la información relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como recabará el certificado de antecedentes penales y resolverá.

El trabajador extranjero podrá alegar como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos, el esfuerzo de integración acreditado mediante informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de renovación de autorizaciones de residencia y trabajo es el general de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. En estos supuestos, transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la solicitud de renovación ha sido estimada.

## **Supuestos en los que procede la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.-**

La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia podrá ser renovada a su expiración cuando se acredite tanto la continuidad en la actividad que dio lugar a la autorización que se renueva como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. No obstante, podrá renovarse la autorización aun con descubiertos en la cotización a la Seguridad Social, siempre que se acredite la realización habitual de la actividad.

Igualmente, procede la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta propia:

- a) Cuando el cónyuge del trabajador o persona con la que mantenga una relación de análoga afectividad a la conyugal cumpla con los requisitos económicos para la reagrupación establecidos en el art. 54 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
- b) Cuando por el órgano gestor competente, conforme a la normativa sobre la materia, se hubiera reconocido al extranjero trabajador autónomo la protección por cese de actividad.

En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución, el titular deberá solicitar la renovación de la tarjeta de identidad de extranjero.

En este punto señalar que, como novedad, se limita el sector de actividad y ámbito geográfico de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. Por otro lado, reproducir aquí lo dicho para las solicitudes de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en lo referente al requisito de compromiso de no retorno a España adquirido por el trabajador dentro de un Plan de retorno voluntario para trabajadores y, asimismo en lo referente a las novedades introducidas respecto a las renovaciones de las autorizaciones.

## **AUTORIZACIONES DE TRABAJO POR CUENTA PROPIA O AJENA PARA TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS**

El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 contempla en su Título X, artículos 182, 183 y 184, una modalidad de autorización solamente de



trabajo, bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia, sin residencia, para trabajadores que residan en países fronterizos con España, que les permite venir a trabajar a nuestro país y que regresen a diario a sus países de origen.

Podrá ser concedida a los trabajadores que residan en la zona fronteriza de un Estado limítrofe al que regresan diariamente y desarrollan actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas de territorio español.

### **Requisitos para la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores transfronterizos.-**

La autorización inicial de trabajo para trabajadores transfronterizos tendrá una duración coincidente con la del contrato de trabajo en relación con el cual se conceda, o bien, en caso de trabajo por cuenta propia, en relación con la duración de la actividad proyectada, estando limitada en cuanto a su ámbito territorial al de la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma en cuya zona limítrofe reside el trabajador. A su expiración, esta podrá ser renovada, en tanto continúe la misma relación laboral o actividad por cuenta propia y subsistan las circunstancias que motivaron su concesión coincidiendo su vigencia con la del contrato o la actividad, con un máximo de un año. Se extinguirán, además de por concurrir las causas previstas para el resto de autorizaciones, por la pérdida de la condición de trabajador transfronterizo.

Para la concesión de una autorización inicial para trabajadores transfronterizos habrá que estar a lo dispuesto para la concesión de la autorización de trabajo que proceda, por lo que, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Para autorizaciones de trabajo por cuenta ajena:

- . Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.
- . No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
- . Residir en la zona fronteriza con territorio español de que se trate.
- . Que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero.

- . Que el empleador presente un contrato de trabajo, con fecha de comienzo condicionada a la eficacia de la autorización, y que garantice al trabajador una actividad continuada durante la vigencia de la autorización.
- . Que el empleador figure inscrito en la Seguridad Social y al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
- . Que las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas por la normativa española vigente y en el convenio colectivo aplicable.
- . Que el empleador cuente con medios económicos, materiales o personales suficientes para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones asumidas por el contrato frente al trabajador.
- . Que se tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.

b) Para autorizaciones de trabajo por cuenta propia:

- . Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.
- . No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
- . Residir en la zona fronteriza con territorio español de que se trate.
- . Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los españoles para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.
- . Tener la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión, así como la colegiación cuando así se requiera.
- . Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto sea suficiente y la incidencia, en su caso, en la creación de empleo.
- . La previsión de que el ejercicio de la actividad producirá desde el primer año recursos económicos suficientes para la manutención del interesado, deducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.

## **Tramitación de las solicitudes iniciales de trabajo por cuenta ajena o propia para trabajadores transfronterizos.-**

La admisión, tramitación y resolución de solicitudes y, eventualmente de los recursos administrativos, corresponderá de acuerdo con lo previsto anteriormente para cada tipo de autorización. Cuando la competencia en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia y ajena se hubiera transferido a la Comunidad Autónoma, será esta la competente.

Concedida la autorización y notificada al interesado, el trabajador habrá de darse de alta o ser dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la resolución. En el mismo plazo, deberá solicitar y obtener la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero que le acreditará la condición de trabajador transfronterizo, permitiéndole la entrada y salida del territorio nacional.

Las características básicas de este tipo de autorizaciones son que el solicitante resida en una zona limítrofe fronteriza y trabaje también en una zona limítrofe fronteriza que le permita de manera diaria entrar a trabajar en España y regresar a su país una vez finalizada su jornada laboral, siendo su país de origen el lugar donde deberá residir, no pudiendo mediante este tipo de autorización residir en España.

## **EL CATALOGO DE OCUPACIONES DE DIFICIL COBERTURA.**

El artículo 38.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su última reforma por Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, establece que “para la concesión inicial de la autorización de trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la **situación nacional de empleo** “.

El mismo precepto continúa diciendo que la situación nacional de empleo será determinada por el Servicio Público de Empleo Estatal con la información proporcionada por las Comunidades Autónomas y con aquella derivada de indicadores estadísticos oficiales y quedará plasmada en el Catálogo de Ocupaciones de Dificil Cobertura.

El artículo 65 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, ( que desarrolla lo preceptuado en el artículo 64.3.a) por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, recoge la primera referencia al Catálogo de Ocupaciones de Dificil Cobertura, cuando establece los requisitos para la concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, y en concreto el referido a que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero, entendiéndose que sucede cuando el empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno.

En tal sentido para concretar dicha situación nacional de empleo, el organismo que tiene atribuidas dichas competencias, el Servicio Público de Empleo Estatal, crea un instrumento para su determinación, que es el *Catálogo de Ocupaciones de Dificil Cobertura*.

El Catálogo se elaborará con periodicidad trimestral de acuerdo con la información suministrada por los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, para cada provincia, o demarcación territorial, que en su caso, establezca la correspondiente Administración Autonómica, así como para las ciudades de Ceuta y Melilla. En las provincias insulares el Catálogo podrá establecerse para cada isla o para agrupación de ellas.

La concreción del detalle con que una ocupación se debe incluir en el Catálogo se realizará teniendo en cuenta el grado de especialización requerido para el desempeño de la actividad.

Y, se prevee la no inclusión en el Catálogo de aquellas ocupaciones que por su naturaleza puedan ser cubiertas por demandantes de empleo tras su participación en acciones formativas.

*La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al trabajador extranjero.*

En cuanto a la elaboración del Catálogo, la resolución de 8 de febrero de 2005, del Servicio Público de Empleo Estatal establece el procedimiento, y de acuerdo con la misma se han elaborado los correspondientes a los dos últimos trimestres del año 2005.

Con posterioridad, en el seno de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración se han expresado por parte de los Agentes Sociales razonamientos críticos sobre la validez y utilidad para determinar la Situación Nacional de Empleo del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, así como sobre la metodología seguida para su elaboración y por otra parte la implantación del nuevo Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, que debe ser la base para su elaboración.

Estas circunstancias han motivado la necesidad de revisión de la resolución antes mencionada, dictándose Resolución el 14 de noviembre de 2005, por la que se establece un nuevo procedimiento en la elaboración del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.

Dentro de los primeros veinte días naturales de cada trimestre natural, el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará una propuesta sobre la base de la distribución territorial antes mencionada, que contendrá las ocupaciones, de conformidad con la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) que esté en vigor, calificadas como tales, sobre la base de la gestión de empleo estatal de los últimos cuatro trimestres.

Los datos que se toman en consideración para la elaboración de los indicadores que servirán de base para la determinación de la inclusión o no de una ocupación son :

- Media de demandas: media del número de demandantes que se encuentran inscritos en una determinada ocupación al final de cada mes. ( cada persona puede ser demandante hasta de 6 ocupaciones).
- Puestos ofertados: número de puestos de trabajo ofertados por los empleadores.
- Contratos: número de contratos comunicados al servicio público.
- Colocaciones: número de colocaciones de demandantes producidas.
- Trabajadores que entran: número de contratos en una provincia de trabajadores de otra.
- Trabajadores que salen: número de contratos de una provincia en otra provincia.
- Trabajadores que permanecen: número de contratos de una provincia en dicha provincia.

Los indicadores en los que se basa la propuesta son:

- Indicador de grado de penetración en el mercado de trabajo (IP): relaciona puestos ofertados con contratos comunicados para una misma ocupación.

- Indicador de escasez de demandantes (IE): relaciona la media de demandas existentes de una ocupación con el número de puestos ofertados.
- Indicador de dificultad de acceso al empleo (ID): relaciona demandantes que se colocan en una ocupación y demandas que solicitan ocuparse en la misma ocupación (expresa la probabilidad de que se cumplan las expectativas de empleo de los demandantes).
- Indicador de movilidad geográfica real (IM): relaciona el número de demandantes que se colocan en una provincia distinta de la que están inscritos como demandantes con aquellos que se colocan en la provincia de inscripción.

Y por último es de señalar la evolución que ha sufrido el Catálogo desde su incorporación a la tramitación de las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal y trabajo en el año 2005, recogiendo en sus orígenes un buen número de ocupaciones en todos los sectores de actividad, que implicaban tanto cualificación del trabajador como otras que no la exigen, hasta el momento actual, en los que es de destacar la inexistencia de catálogo en algunos trimestres en determinadas comunidades autónomas o algunas en las que se recoge solamente una ocupación, haciendo prácticamente imposible la contratación en origen por esta vía.

## **REGIMEN DE VISADOS**

### **CUENTA AJENA**

La regulación de los visados de residencia y trabajo por cuenta ajena se encuentra recogida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en los artículos 62 a 72 del Reglamento de Extranjería.

En el plazo de un mes desde la notificación al empleador, el trabajador debe solicitar personalmente el visado en la **Misión Diplomática u Oficina Consular en cuya demarcación resida**. Al igual que sucede en otros casos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, puede determinar la Misión Diplomática u Oficina Consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado. Excepcionalmente, la Misión Diplomática u Oficina Consular puede aceptar la presentación por representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el

viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad.

Ahora bien, el Reglamento de Extranjería, con objeto de evitar la posibilidad de regularizar situaciones irregulares, establece que cuando a través del poder de representación, de otros documentos aportados en la solicitud o de datos que consten en la Administración, se evidenciase que el extranjero para el que se solicita el visado se hallaba en España en situación irregular en la fecha en la que se presentó a su favor la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, se inadmitirá a trámite o, si tal circunstancia se advirtiera en un momento posterior, se denegará la solicitud de visado.

Una vez determinada la instancia en la que hay que presentar la solicitud de visado, es necesario determinar la documentación que debe presentar el solicitante. El extranjero debe presentar su solicitud en **modelo oficial** (impreso de solicitud de visado nacional), que debe acompañar de los siguientes **documentos**:

- a. Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.
- b. Certificado de antecedentes penales, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años y en el que no deben constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español.
- c. Certificado médico, para acreditar que no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
- d. Copia del contrato en relación con el cual se ha concedido la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, sellada por la Oficina de Extranjería.

En el momento de presentar la solicitud, deben abonarse asimismo las **tasas por la tramitación de la solicitud**. Estas tasas responden a los gastos administrativos de tramitación de la solicitud, con independencia de si después se expide o no el visado solicitado (como siempre, el hecho imponible es, por tanto, la tramitación). La tasa figura en la Orden AEC/4004/2006, de 22 de diciembre, por la que se establecen las cuantías de las tasas por la tramitación de visados. Para este tipo de visados, la tasa es de **60 euros**. Ahora bien, esta cantidad puede dejar de aplicarse en los casos que, de acuerdo con los usos y costumbres admitidos en derecho internacional, tengan un origen inmediato y directo en razones de política exterior o de carácter humanitario.

Las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, una vez ha sido presentada la solicitud de visado, deben estampar en el pasaporte del solicitante un **sello que deje constancia de que el visado ha sido solicitado**. Si finalmente se concede el visado, la etiqueta debe adherirse, en la medida de lo posible, sobre el sello de identificación de la solicitud. Si el visado es denegado, el sello permanece estampado en el pasaporte.

Durante la fase de tramitación de la solicitud del visado, la Misión Diplomática u Oficina Consular competente debe comprobar en primer lugar la identidad del solicitante, consultando en el **Sistema de Información Schengen (SIS)** si el solicitante se encuentra en el listado de personas no admisibles (véase el tema sobre los visados de corta duración para una explicación detallada de su funcionamiento). Si el solicitante se encuentra en el SIS, se debe denegar su solicitud. En ese caso sería aplicable el punto 8 de la Disposición adicional décima del Reglamento de Extranjería, que establece que: “Sin perjuicio de la eficacia de la resolución denegatoria, y con independencia de que el interesado haya o no presentado recurso contra ella, el extranjero conocedor de una prohibición de entrada por su inclusión en la lista de personas no admisibles podrá encauzar a través de la oficina consular una solicitud escrita dirigida al Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior si quisiera ejercer su derecho de acceso a sus datos o a solicitar su rectificación o supresión de los mismos en el sistema de información de Schengen”.

Por otro lado, las aplicaciones informáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de la Presidencia están conectadas, de modo que cuando se graba la solicitud de visado en la **aplicación informática de la Misión Diplomática u Oficina Consular**, en un plazo máximo de 48-72 horas se puede verificar si la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena consta en la base de datos del Ministerio de la Presidencia (que se alimenta de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno). De no poder hacerse esa verificación (porque, por ej. no se ha hecho bien la grabación), el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se pone en contacto con la Delegación o Subdelegación competente.



En caso necesario, la Misión Diplomática u Oficina Consular competente puede requerir al solicitante que subsane la **documentación** aportada o incluso que comparezca personalmente para mantener una **entrevista personal** con objeto de comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el plazo de quince días, produce el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento. Cuando se celebra una entrevista, en ella deben estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y debe quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se debe entregar copia al interesado.

Si la Misión Diplomática u Oficina Consular decide **conceder el visado**, porque considera que se cumplen todos los requisitos exigidos, debe notificar la concesión del visado. El interesado debe recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde la notificación. En caso de no hacerlo así, se entiende que ha renunciado al visado concedido y se archiva el procedimiento. Una vez recogido el visado, el solicitante debe entrar en el territorio español, en el plazo de vigencia del visado, y en ese plazo deberá producirse su afiliación, alta y posterior cotización en la Seguridad Social. El interesado debe solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su afiliación a la Seguridad Social, ante la oficina correspondiente, la tarjeta de identidad de extranjero. Una vez más hay que recordar que la posesión de un visado no confiere, por sí misma, un derecho irrevocable de entrada en el territorio nacional.

La Misión Diplomática u Oficina Consular denegará el visado en los siguientes supuestos:

- a) Cuando el extranjero se encontrara en situación irregular en España en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
- b) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo.
- c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.
- d) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
- e) Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información proporcionada por la Oficina de Extranjería o por el órgano autonómico competente sobre el contrato original.

Los visados de residencia y trabajo por cuenta ajena deben **denegarse siempre de forma motivada**. En caso de haberse celebrado una entrevista, se debe remitir una copia del acta al organismo que hubiera otorgado inicialmente la autorización.

## **CUENTA PROPIA**

La regulación de los visados de residencia y trabajo por cuenta propia se encuentra recogida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en los artículos 103 a 109 del Reglamento de Extranjería.

En este tipo de visados, el extranjero debe solicitar directamente la autorización de residencia y trabajo en la Misión Diplomática u Oficina Consular competente y, una vez cuente con dicha autorización, el visado correspondiente, a diferencia de lo que sucede en los casos anteriormente analizados.

En el plazo de un mes desde la notificación de concesión de la autorización al interesado, éste debe solicitar personalmente el visado en la **Misión Diplomática u Oficina Consular en cuya demarcación resida**. Al igual que sucede con la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, puede determinar la Misión Diplomática u Oficina Consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud. Excepcionalmente, la Misión Diplomática u Oficina Consular puede aceptar la presentación por representante cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad.

Una vez determinada la instancia en la que hay que presentar la solicitud de visado, es necesario determinar la documentación que debe presentar el solicitante. El extranjero debe presentar su solicitud en **modelo oficial** (impreso de solicitud de visado nacional) y debe acompañar:

- a. Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.
- b. Certificado de antecedentes penales, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, en el que no debe constar condenas por delitos previstos en el ordenamiento español.
- c. Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

En el momento de presentar la solicitud, deben abonarse asimismo las **tasas por la tramitación de la solicitud**. Estas tasas responden a los gastos administrativos de tramitación de la solicitud, con independencia de si después se expide o no el visado solicitado (el hecho imponible es, como siempre, la tramitación). La tasa figura en la Orden AEC/4004/2006, de 22 de diciembre, por la que se establecen las cuantías de las tasas por la tramitación de visados. Para este tipo de visados, la tasa es de **60 euros**. Ahora bien, esta cantidad puede dejar de aplicarse en los casos que, de acuerdo con los usos y costumbres admitidos en derecho internacional, tengan un origen inmediato y directo en razones de política exterior o de carácter humanitario.

Las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, una vez ha sido presentada la solicitud de visado, deben estampar en el pasaporte del solicitante un **sello que deje constancia de que el visado ha sido solicitado**. Si finalmente se concede el visado, la etiqueta debe adherirse, en la medida de lo posible, sobre el sello de identificación de la solicitud. Si el visado es denegado, el sello permanece estampado en el pasaporte.

Durante la fase de tramitación de la solicitud del visado, la Misión Diplomática u Oficina Consular competente debe comprobar en primer lugar la identidad del solicitante, consultando en el **SIS** si el solicitante se encuentra en el listado de personas no admisibles, al igual que sucede con los visados de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

La Misión Diplomática u Oficina Consular competente tiene un mes para resolver la solicitud de visado.

Si se **concede el visado**, porque se considera que se cumplen todos los requisitos exigidos, debe notificarse la concesión al interesado, que debe recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde dicha notificación. En caso de no hacerlo así, se entiende que ha renunciado al visado concedido y se archiva el procedimiento.

En el plazo de los tres meses posteriores a la entrada legal del trabajador en España deberá producirse su afiliación, alta y posterior cotización, en los términos establecidos por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación. El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en el mencionado plazo dotará de eficacia a la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, éste deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización y será retirada por el extranjero.

Si se decide **denegar el visado por incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la normativa, no es necesario motivar la denegación, pero sí hay que notificarla**. La Disposición adicional décima del Reglamento de Extranjería establece que “La resolución denegatoria de un visado se notificará al solicitante de forma que le garantice la información sobre su contenido las normas que en derecho la fundamenten, el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo”. Los recursos que cabe interponer contra una resolución denegatoria son un recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación y/o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación.

A continuación, y una vez analizada la cuestión de residencia, por medio de este anexo adjuntamos un cuadro comparativo del tratamiento que la misma tiene en el actual reglamento de extranjería en comparación a su inmediatamente anterior, resaltando en color rojo las diferencias para una mejor y más rápida comprensión, pudiendo ver claramente que los requisitos solicitados para el tema aquí tratado se han incrementado y a su vez endurecido.

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

TÍTULO IV. Residencia	TÍTULO IV. RESIDENCIA TEMPORAL
CAPÍTULO I. Residencia temporal	CAPÍTULO III. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
SECCIÓN 1ª. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena	
<p><b>Artículo 48. Supuestos.</b></p> <p>Se halla en situación de residencia temporal, con autorización para trabajar, el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia o ajena.</p>	<p><b>Artículo 62. Definición.</b></p> <p>Se halla en situación de residencia temporal <b>y trabajo por cuenta ajena</b> el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a <b>noventa</b> días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad <b>laboral</b> por cuenta ajena.</p>
<p><b>Artículo 49. Autorización de trabajo por cuenta ajena.</b></p> <p>1. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena habilitará a los extranjeros que residen fuera de España y que hayan obtenido el correspondiente visado a iniciar una relación laboral por cuenta ajena.</p> <p>2. La autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena tendrá una duración de un año y podrá limitarse a un ámbito geográfico y sector de actividad determinado en los términos establecidos en la normativa estatal aplicable.</p> <p>Cuando la comunidad autónoma tuviera</p>	<p><b>Artículo 63. Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.</b></p> <p>1. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena habilitará a los extranjeros que residen fuera de España, <b>siempre</b> que hayan obtenido el correspondiente visado <b>y hayan sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social dentro del plazo de tres meses desde su entrada legal en España, a residir y trabajar por cuenta ajena en España.</b></p> <p><b>Salvo en los casos en los que no resulte aplicable el requisito de que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador, la autorización inicial se limitará a un ámbito</b></p>

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>reconocidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización inicial dentro de su territorio.</p> <p>3. En los supuestos previstos en este Reglamento, los extranjeros residentes o los que se hallan en situación de estancia por estudios podrán acceder a la correspondiente autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, sin que sea exigible el visado. En el caso de los que hayan sido residentes, la duración de la autorización estará en función del tiempo que hayan residido previamente en España.</p> <p>El acceso a la autorización de residencia y trabajo de quienes sean titulares de un visado de búsqueda de empleo se regirá por las disposiciones específicas de este Reglamento y por el acuerdo sobre contingente.</p> <p>4. Los extranjeros que obtengan una autorización deberán solicitar la tarjeta de identidad de extranjero correspondiente en el plazo de un mes desde el comienzo de la autorización.</p>	<p>geográfico provincial y a una ocupación.</p> <p>No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso de no aplicación del requisito de que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador en base a los apartados a), b) y d) del artículo 40.2 de la Ley Orgánica 4/2000, la autorización inicial se limitará al tipo de relación laboral para la cual se haya concedido.</p> <p>2. En los supuestos previstos <b>en el título XII</b> de este Reglamento no será exigible el visado para la obtención de este tipo de autorizaciones.</p> <p>3. El acceso a la autorización <b>inicial</b> de residencia <b>temporal</b> y trabajo <b>por cuenta ajena</b> de quienes sean titulares de un visado de búsqueda de empleo se regirá por las disposiciones específicas de este Reglamento y por la Orden ministerial de gestión colectiva de contrataciones en origen.</p> <p>4. Los extranjeros que obtengan una autorización deberán solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero correspondiente en el plazo de un mes desde <b>su alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo.</b></p> <p>5. La autorización inicial de residencia <b>temporal</b> y trabajo por cuenta ajena tendrá una duración de un año y se limitará, <b>en lo relativo al ejercicio de la actividad laboral y</b> salvo en los casos previstos por la Ley y los Convenios Internacionales firmados por España, a un ámbito geográfico y a una ocupación determinada.</p> <p>Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización dentro de su territorio.</p>



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p><b>Artículo 50. Requisitos.</b></p> <p>1. Para la concesión de una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena será necesario acreditar, en cada caso, los requisitos que se establecen en este artículo relativos al ámbito de la residencia y laboral, respectivamente.</p> <p>2. Será necesario acreditar las siguientes condiciones, relativas al ámbito de la residencia, referidas a los extranjeros que se pretendan contratar:</p> <p>a) Que no se encuentran irregularmente en territorio español.</p> <p>b) Que carecen de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.</p> <p>3. Por otra parte, será necesario acreditar las siguientes condiciones relativas al ámbito laboral:</p> <p>a) Que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero.</p> <p>A los efectos de determinar dicha situación nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para cada provincia o demarcación territorial que, en su caso, establezca la correspondiente comunidad autónoma así como para Ceuta y Melilla, excepto en las provincias</p>	<p><b>Artículo 64. Requisitos.</b></p> <p>1. Para la concesión de una autorización <b>inicial</b> de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena será necesario <b>cumplir</b> los requisitos que se establecen en este artículo relativos <b>a la</b> residencia y <b>al trabajo</b>, respectivamente.</p> <p><b>2. En relación con la residencia de los extranjeros que se pretende contratar, será necesario que:</b></p> <p>a) No se <b>encuentren</b> irregularmente en territorio español.</p> <p>b) Carezcan de antecedentes penales, <b>tanto</b> en España <b>como</b> en sus países anteriores de residencia <b>durante los últimos cinco años</b>, por delitos <b>previstos</b> en el ordenamiento español.</p> <p>c) No figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.</p> <p><b>d) Haya transcurrido el plazo de compromiso de no regreso a España del extranjero, asumido por éste en el marco de su retorno voluntario al país de origen.</b></p> <p><b>e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia temporal.</b></p> <p><b>3. En relación con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se pretende contratar, será necesario que:</b></p> <p>a) La situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero <b>en los términos previstos en el artículo 65 de este Reglamento.</b></p> <p>b) El empleador presente un <b>contrato de trabajo firmado por el trabajador y por él mismo</b> y que garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización <b>inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.</b></p>
---	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>insulares, donde el catálogo podrá establecerse para cada isla o agrupación de ellas, de acuerdo con la información suministrada por los Servicios públicos de empleo autonómicos. Este catálogo estará basado en la información disponible sobre la gestión de las ofertas presentadas por los empleadores en los Servicios públicos de empleo, y se considerarán como ocupaciones las consignadas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones en vigor.</p> <p>La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida al extranjero. Asimismo, se considerará que la situación nacional de empleo permite la contratación en las ocupaciones no calificadas como de difícil cobertura cuando el empleador acredite la dificultad de contratación del puesto que pretende cubrirse, mediante la gestión de la oferta de empleo presentada ante el Servicio público de empleo concluida con resultado negativo. A este efecto, el Servicio público de empleo encargado de la gestión emitirá, en el plazo máximo de 15 días, una certificación en la que se exprese que de la gestión de la oferta se concluye la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles para aceptar la oferta.</p> <p>b) Que se garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización para residir y trabajar.</p> <p>c) Que las empresas solicitantes hayan formalizado su inscripción en el correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentren al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En los términos establecidos en el artículo siguiente, se podrá requerir además al empresario que acredite los medios económicos, materiales y personales de los que dispone para su proyecto empresarial.</p> <p>d) Que las condiciones fijadas en la oferta de empleo se ajusten a las establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad.</p>	<p>La fecha de comienzo del contrato deberá estar condicionada al momento de eficacia de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.</p> <p>c) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas por la normativa vigente y el convenio colectivo aplicable para la misma actividad, categoría profesional y localidad.</p> <p>En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser igual o superior al salario mínimo interprofesional para jornada completa y en cómputo anual.</p> <p>d) Que el empleador solicitante haya formalizado su inscripción en el correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.</p> <p>e) El empleador cuente con medios económicos, materiales o personales, suficientes para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones asumidas en el contrato frente al trabajador en los términos establecidos en el artículo 66 de este Reglamento.</p> <p>f) El trabajador tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.</p> <p>g) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta ajena.</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>e) Que se posea la titulación, en su caso, debidamente homologada o que se acredite la capacitación exigida para el ejercicio de la profesión.</p> <p>4. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en los supuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo a los nacionales de Estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales a tal efecto, así como a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo enrolados en buques españoles en virtud de acuerdos internacionales de pesca marítima. En este caso, se concederá validez de autorización para trabajar al duplicado de la notificación de embarque o renovación del contrato de tripulantes extranjeros en buques españoles.</p>	<p>4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en los supuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 <b>o por Convenio internacional</b>.</p> <p>Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo a los nacionales de Estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales a tal efecto, así como a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo enrolados en buques españoles en virtud de acuerdos internacionales de pesca marítima. En este caso, se concederá validez de autorización para trabajar al duplicado de la notificación de embarque o renovación del contrato de tripulantes extranjeros en buques españoles.</p>

**Artículo 65. Determinación de la situación nacional de empleo.**

1. A los efectos de determinar dicha situación nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la información suministrada por los Servicios públicos de empleo autonómicos y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para cada provincia o demarcación territorial que, en su caso, establezca la correspondiente Administración autonómica, así como para Ceuta y Melilla. En las provincias insulares, el Catálogo podrá establecerse para cada isla o agrupación de ellas.

El procedimiento de elaboración del Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura será establecido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Este Catálogo estará basado en la información disponible sobre la gestión de las ofertas

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

presentadas por los empleadores en los Servicios públicos de Empleo. También tendrá en consideración las estadísticas elaboradas por las administraciones públicas y, especialmente, la relativa a personas inscritas como demandantes de empleo en los Servicios públicos de empleo.

Se considerarán como ocupaciones las consignadas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones que esté en vigor.

La concreción del detalle con que una ocupación se debe incluir en el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura se realizará teniendo en cuenta el grado de especialización requerido para el desempeño de la actividad.

Podrán no ser incluidas en Catálogo aquellas ocupaciones que por su naturaleza podrían ser cubiertas por personas inscritas como demandantes de empleo tras su participación en actuaciones formativas programadas por los Servicios públicos de empleo.

La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero.

2. Asimismo, se considerará que la situación nacional de empleo permite la contratación en las ocupaciones no calificadas como de difícil cobertura cuando el empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno.

Para ello, deberá presentar una oferta de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, que estará formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo, sin contener requisitos que no tengan relación directa con su desempeño.

El Servicio Público de Empleo en el que se haya presentado la oferta de empleo, en el marco de sus competencias en materia de intermediación laboral, la gestionará promoviendo el contacto entre el empleador y los demandantes de empleo



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

que se adecúen a los requerimientos de la misma. Asimismo, durante un periodo de tiempo de al menos quince días, dará publicidad a la oferta de empleo en cualquiera de los espacios públicos destinados a la difusión de ofertas de que disponga el Servicio Público de Empleo, a fin de que los trabajadores que residen en cualquier parte del territorio español puedan concurrir a su cobertura.

Transcurridos veinticinco días desde la presentación de la oferta por el empleador, éste deberá comunicar al Servicio Público de Empleo el resultado de la selección de candidatos que se ha presentado para cubrir los puestos de trabajo vacantes.

El Servicio Público de Empleo emitirá, si procede, la certificación de insuficiencia de demandantes en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la comunicación por parte del empleador del resultado de la selección.

El certificado emitido por el Servicio Público de Empleo competente deberá contener información que identifique al empleador y la oferta y sobre el número de puestos de trabajo ofertados y de trabajadores puestos a disposición del empleador. Incluirá igualmente la cifra de personas inscritas en la provincia como demandantes de empleo para la ocupación de que se trate. Incluirá también una valoración sobre si se trata de una ocupación que podría ser cubierta por personas inscritas como demandantes de empleo tras su participación en actuaciones formativas programadas por los Servicios públicos de empleo.

La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración informará la normativa de desarrollo de lo dispuesto en este Reglamento sobre el contenido mínimo de los Certificados de los Servicios Públicos de Empleo.

En la valoración del certificado, la Oficina de Extranjería competente para la tramitación de la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena tendrá en consideración, especialmente, la relación entre el número de trabajadores puestos a disposición del

<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></p>
	<p>empleador y el de puestos de trabajo ofertados por éste, así como la valoración de si el puesto podría ser cubierto tras una actividad formativa programada por el Servicio Público de Empleo.</p>
	<p><b>Artículo 66. Medios económicos, materiales y personales a acreditar por el empleador para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo.</b></p> <p>1. El empleador deberá acreditar que cuenta con medios en cuantía suficiente para hacer frente a su proyecto empresarial y a las obligaciones derivadas del contrato firmado con el trabajador extranjero. Dicha cuantía deberá incluir el pago del salario reflejado en el contrato que obre en el procedimiento.</p> <p>2. Cuando el empleador requerido sea una persona física, deberá además acreditar que cuenta con medios económicos suficientes para atender sus necesidades y las de su familia. La cuantía mínima exigible se basará en porcentajes del IPREM según el número de personas a su cargo, descontado el pago del salario reflejado en el contrato de trabajo que obre en el procedimiento:</p> <p>a) En caso de no existir familiares a cargo del empleador: una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM.</p> <p>b) En caso de unidades familiares que incluyan dos miembros, contando al empleador solicitante: una cantidad que represente mensualmente el 200% del IPREM.</p> <p>c) En caso de unidades familiares que incluyan más de dos personas, contando al empleador solicitante: una cantidad que represente mensualmente el 50% del IPREM por cada miembro adicional.</p> <p>En los casos de unidades familiares que incluyan dos o más miembros, los medios económicos a acreditar resultarán de la suma de aquéllos con los que cuente cada una de las personas que integren la unidad familiar.</p>



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p><b>Artículo 51. Procedimiento.</b></p> <p>1. El empleador o empresario que pretenda contratar a un trabajador extranjero no residente en España, deberá presentar personalmente, o a través de quien válidamente tenga atribuida la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena ante el órgano competente para su tramitación, de la provincia donde se vaya a ejercer la actividad laboral.</p> <p>La indicada solicitud de autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena se presentará ante el órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio se vaya a desarrollar la relación laboral cuando dicha comunidad autónoma hubiera asumido competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta ajena. En tal caso, la solicitud podrá presentarse en aquellas oficinas del órgano competente para su tramitación dentro de la provincia establecidas por la normativa autonómica.</p> <p>2. Con la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena en modelo oficial deberá acompañarse la siguiente documentación:</p> <p>a) El NIF y documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social, o documento acreditativo de hallarse exento; y en el caso de que la empresa esté constituida como persona jurídica, documento público que otorgue su representación legal en favor de la persona física que formule la solicitud.</p> <p>b) El contrato de trabajo o la oferta de empleo en el modelo oficial establecido.</p>	<p><b>Artículo 67. Procedimiento.</b></p> <p>1. El empleador deberá presentar personalmente, o a través de quien válidamente tenga atribuida la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de autorización <b>inicial</b> de residencia <b>temporal</b> y trabajo por cuenta ajena ante el órgano competente para su tramitación, de la provincia donde se vaya a ejercer la actividad laboral.</p> <p>2. Con la solicitud de autorización <b>inicial</b> de residencia <b>temporal</b> y trabajo por cuenta ajena en modelo oficial deberá acompañarse la siguiente documentación:</p> <p>a) El NIF y, en el caso de que la empresa esté constituida como persona jurídica, documento público que otorgue su representación legal en favor de la persona física que formule la solicitud.</p> <p><b>Si el empleador fuera persona física, no se le exigirá la presentación del NIF si accede a la verificación de sus datos a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.</b></p> <p>b) <b>Original y copia del</b> contrato de trabajo, en el modelo oficial establecido.</p> <p><b>La Oficina de Extranjería sellará la copia del contrato a los efectos de su posterior presentación por el extranjero junto a la correspondiente solicitud de visado de residencia y trabajo.</b></p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>c) Cuando la autoridad competente lo considere necesario para asegurar que el empresario podrá hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo, éste deberá acreditar, con los documentos que expresa y motivadamente se le requieran, los medios económicos, materiales o personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a dichas obligaciones.</p> <p>d) Copia del pasaporte, o documento de viaje, en vigor, del trabajador extranjero.</p> <p>e) Aquellos documentos que justifiquen, si son alegados por el interesado, alguno de los supuestos específicos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>f) La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el ejercicio de la profesión, cuando proceda, debidamente</p>	<p>c) En su caso, certificado del Servicio Público de Empleo competente sobre la insuficiencia de demandantes de empleo para cubrir el puesto de trabajo.</p> <p>d) Los documentos acreditativos de los medios económicos, materiales o personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a dichas obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.</p> <p>La disponibilidad de medios no podrá acreditarse mediante la referencia a ingresos procedentes de subvenciones, subsidios y ayudas de carácter no contributivo o asistencial otorgadas por administraciones públicas españolas, salvo en el ámbito de la asistencia domiciliaria y el cuidado de menores.</p> <p>Cuando el empleador tenga la condición de empresa, podrá acreditar el cumplimiento de este requisito a través de, entre otros medios de prueba admitidos en Derecho, la presentación o la comprobación de la información relativa a su cifra de negocios, con el límite de los últimos tres años, y al promedio anual de personal contratado, teniendo en consideración las contrataciones realizadas, así como los despidos o bajas que se hayan producido. También podrá presentar, sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba admitidos en Derecho, una declaración relativa a los servicios o trabajos realizados anteriormente, con el límite de los tres últimos años y/o un extracto de las cuentas anuales referido a balance.</p> <p>e) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del trabajador extranjero.</p> <p>f) La acreditativa de que se tiene la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.</p> <p>g) Aquellos documentos que acrediten, de ser alegada por el interesado, la concurrencia de un supuesto específico de no consideración de la situación nacional de empleo, establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 o por</p>
--	--



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>homologada.</p> <p>3. Recibida la solicitud, el órgano competente la registrará, dejando constancia inmediata de su presentación, y la introducirá en la aplicación informática correspondiente, de tal manera que permita que los órganos competentes para resolver puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.</p> <p>La autoridad competente para resolver comprobará si concurre o no alguna de las causas de inadmisión a trámite que se recogen en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, y si apreciara su concurrencia resolverá de forma motivada declarando la inadmisión a trámite de la solicitud.</p> <p>Asimismo la autoridad competente para resolver comprobará si con la solicitud se acompaña la documentación exigida y que la misma permite acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y si estuviera incompleta, o no permitiera acreditar los indicados extremos, formulará al solicitante el oportuno requerimiento a fin de que se subsanen los defectos observados en el plazo de diez días advirtiéndole que de no subsanarse los mismos en el indicado plazo se le tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de su expediente, dictándose al efecto la oportuna resolución.</p> <p>Será órgano competente para resolver la inadmisión a trámite o para declarar el desistimiento y el archivo de las actuaciones el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando hubiera asumido competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta ajena, debiendo resolver, en todo caso, de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante emitido por el correspondiente órgano de la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no de las indicadas causas de inadmisión a trámite cuando afecten a la autorización de residencia.</p>	<p>Convenio internacional.</p> <p>3. Recibida la solicitud, el órgano competente la registrará, dejando constancia inmediata de su presentación, y la <b>grabará</b> en la aplicación informática correspondiente, de tal manera que permita que los órganos competentes para resolver puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.</p> <p>4. El <b>órgano</b> competente para resolver comprobará si concurre o no alguna de las causas de inadmisión a trámite que se recogen en la Ley Orgánica 4/2000, y si apreciara su concurrencia resolverá de forma motivada declarando la inadmisión a trámite de la solicitud.</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior que dicte el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma se notificarán por éste al interesado en la forma prevista en la normativa en vigor, y se introducirán en la aplicación informática correspondiente, de tal manera que permita el conocimiento de las mismas por parte de la Administración General del Estado en tiempo real.

Los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones que dicte el órgano autonómico sobre inadmisión a trámite y desistimiento y archivo de actuaciones serán resueltos por el órgano autonómico que sea competente de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante emitido por el órgano correspondiente de la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no de las causas de inadmisión cuando afecten a la autorización de residencia. En todo caso, el citado órgano deberá introducir los recursos y las resoluciones adoptadas en la aplicación informática correspondiente.

4. Admitida a trámite la solicitud se procederá a la instrucción del procedimiento y a su inmediata tramitación y se recabará de oficio el informe al respecto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, y del Registro Central de Penados y Rebeldes. Estos informes serán emitidos en el plazo máximo de diez días.

En el caso de que corresponda a la Comunidad Autónoma resolver sobre la autorización inicial de trabajo por cuenta ajena, será el órgano competente de la misma el que recabará los informes de la Administración Tributaria, incluida, en su caso, el de la propia Comunidad Autónoma, y el de la Seguridad Social con el fin de comprobar que el empleador está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y el órgano competente de la Administración General del Estado el que solicitará, simultáneamente, los informes de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y del Registro Central de Penados y Rebeldes. Estos

5. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la instrucción del procedimiento y a su inmediata tramitación y se **comprobará** de oficio **la información** de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social, así como los **informes** de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y del Registro Central de Penados. **En el caso de que sea necesario solicitar informes en el marco de este apartado, éstos** serán emitidos en el plazo máximo de diez días.

Asimismo, el órgano competente para resolver comprobará si con la solicitud se acompaña la documentación exigida, y si estuviera incompleta, formulará al solicitante el oportuno requerimiento a fin de que se subsanen los defectos observados en el plazo de diez días, advirtiéndole que de no subsanarse los mismos en el indicado plazo se le tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de su expediente, dictándose al efecto la oportuna resolución.

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

informes deberán ser emitidos en el plazo indicado en el párrafo anterior.

La solicitud y emisión de los informes a que se refiere este apartado se realizarán, siempre que sea posible, por medios telemáticos.

5. La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada y de los informes obtenidos, resolverá de forma motivada, atendiendo a los requisitos previstos en esta sección, sobre la autorización de residencia y trabajo solicitada, y notificará al empleador la misma a efectos de que, en su caso, proceda al abono de las tasas que procedan en el plazo correspondiente.

Cuando la Comunidad Autónoma hubiera asumido competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta ajena, a la vista de la documentación aportada y de los informes obtenidos, los órganos competentes de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma correspondiente deberán dictar, de manera coordinada y concordante, una resolución conjunta denegando o concediendo la correspondiente autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, que será firmada por los titulares de los órganos competentes de cada una de las Administraciones y expedida y notificada a los interesados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si concurre alguna causa de denegación referida bien a los aspectos laborales o bien a los de residencia, debiendo recogerse en la misma las causas específicas de denegación así como los órganos que, en su caso, deban conocer de un eventual recurso administrativo contra la resolución.

La autoridad competente introducirá de inmediato la resolución en la aplicación informática correspondiente de manera que las autoridades de los organismos afectados, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Misión diplomática u Oficina consular española correspondiente al lugar de residencia del

La solicitud y emisión de los informes a que se refiere este apartado se realizarán por medios electrónicos.

6. El órgano competente, a la vista de la documentación presentada y de los informes obtenidos, resolverá de forma motivada en el plazo máximo de tres meses, atendiendo a los requisitos previstos en esta sección, sobre la autorización solicitada.

El órgano competente grabará de inmediato la resolución en la aplicación informática correspondiente, de manera que las autoridades de los organismos afectados, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Misión diplomática u Oficina consular española correspondiente al lugar de residencia del trabajador, tengan conocimiento de la misma en

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>trabajador, tengan conocimiento de la misma en tiempo real.</p> <p>Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, le darán traslado de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción.</p> <p>Si la resolución es favorable se suspenderá su eficacia hasta la obtención del visado y hasta la efectiva entrada del extranjero en España, y así se hará constar en la propia resolución.</p> <p>La resolución conjunta a que se hace referencia anteriormente podrá ser impugnada ante cualquiera de los órganos que la firmen si bien se resolverá de forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos competentes de ambas Administraciones y se notificará a los interesados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.</p> <p>6. En el plazo de un mes desde la notificación al empleador o empresario interesado, el trabajador deberá solicitar personalmente el visado en la Misión diplomática u Oficina consular en cuya demarcación resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado. De acuerdo con lo previsto por la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, podrá realizarse la presentación por un representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad, o cuando se trate de un menor.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, cuando a través del</p>	<p>tiempo real.</p> <p>Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación le darán traslado de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción.</p> <p>7. Concedida la autorización, su eficacia quedará suspendida hasta la obtención del visado y posterior alta del trabajador en el régimen correspondiente de Seguridad Social, en el plazo de tres meses desde su entrada legal en España y por el empleador que solicitó la autorización. Estas circunstancias constarán en la resolución por la que se conceda la autorización.</p> <p>8. En caso de fallecimiento del empleador o de desaparición del empleador que tenga la condición de empresa, el trabajador podrá ser dado de alta por otro empleador, previa realización de las actuaciones previstas en este apartado y siempre que ésta se produzca dentro de los tres meses desde su entrada legal en España.</p> <p>A dichos efectos, el nuevo empleador deberá acreditar que cumple los requisitos previstos en los apartados b), c), d) y e) del artículo 64.3 de este Reglamento. El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social deberá realizarse en el ámbito territorial y la ocupación a los que esté limitada, en su caso, la autorización. De no estar limitada la autorización y producirse un cambio de ocupación, el nuevo empleador deberá acreditar, además, que se cumple el requisito previsto en el apartado f) de dicho precepto.</p> <p>El trabajador extranjero comunicará a la Oficina de Extranjería competente el fallecimiento o desaparición del empleador, a los efectos de que el citado órgano administrativo compruebe dicha circunstancia y emita un documento para constancia de la misma y de la titularidad de la autorización por el trabajador y el ámbito de limitación de ésta. Dicho documento será</p>
--	--



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>poder de representación, de otros documentos aportados en la solicitud o de datos que consten en la Administración, se evidenciase que el extranjero para el que se solicita el visado se halla en España en situación irregular, se inadmitirá a trámite o, si tal circunstancia se advirtiera en un momento posterior, se denegará la solicitud de visado.</p> <p>7. La solicitud de visado deberá ir acompañada de:</p> <p>a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.</p> <p>b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, en el que no debe constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español.</p> <p>c) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades susceptibles de cuarentena previstas en el Reglamento sanitario internacional.</p> <p>d) Copia de la autorización de residencia y trabajo condicionada.</p> <p>8. Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista personal, para comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el plazo fijado, que no podrá exceder de 15 días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.</p> <p>Cuando se determine la celebración de la entrevista, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y quedará constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará una copia al interesado.</p>	<p>entregado, en el plazo máximo de cinco días, al trabajador extranjero a los efectos de que éste pueda dirigirse al Servicio Público de Empleo competente y solicitar sus servicios de intermediación laboral.</p> <p>La solicitud de autorización del alta por un segundo empleador deberá ser presentada por éste ante la Oficina de Extranjería competente dentro del plazo de sesenta días desde la fecha de entrada del trabajador en territorio español.</p> <p>El procedimiento relativo a la solicitud del segundo empleador será resuelto en el plazo máximo de quince días, debiendo entenderse que la solicitud es desestimada si no se dicta resolución expresa en plazo.</p> <p>9. En caso de que el empleador que solicitó la autorización inicial comunique a la Oficina de Extranjería, en el plazo de quince días desde que el extranjero entró en territorio español, la no posibilidad de inicio de la relación laboral, dicha comunicación supondrá la apertura de un plazo de cuarenta cinco días en el cual un segundo empleador interesado en iniciar una relación laboral con el trabajador extranjero podrá dirigirse a dicha Oficina de Extranjería.</p> <p>A dichos efectos, el nuevo empleador deberá acreditar que cumple los requisitos previstos en los apartados b), c), d) y e) del artículo 64.3 de este Reglamento.</p> <p>Igualmente, una vez que el empleador que solicitó la autorización inicial haya comunicado la no posibilidad de inicio de la relación laboral, el trabajador extranjero podrá dirigirse a la Oficina de Extranjería a los efectos de solicitar la emisión de un documento para constancia de dicha comunicación y de su titularidad de la autorización y el ámbito de limitación de ésta. Dicho documento será entregado, en el plazo máximo de cinco días, al trabajador extranjero a los efectos de que éste pueda dirigirse al Servicio Público de Empleo competente y solicitar sus servicios de intermediación laboral.</p> <p>El procedimiento relativo a la solicitud del segundo</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>9. Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión de forma motivada y, en caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá copia del acta al organismo que hubiera concedido inicialmente la autorización.</p> <p>10. Notificada la concesión del visado, el trabajador deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde la fecha de notificación. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del expediente.</p> <p>11. Asimismo, una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del visado, que no será superior a tres meses.</p> <p>12. A partir de la entrada legal en España del trabajador, podrá comenzar su actividad y se producirá su afiliación, alta y posterior cotización en los términos establecidos por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación.</p> <p>13. En el plazo de un mes desde la entrada en España, el extranjero deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero, personalmente y ante la oficina correspondiente. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de residencia temporal y será retirada por el extranjero.</p> <p>14. Si en el momento de la solicitud de la tarjeta de identidad de extranjero, o transcurrido un mes desde su entrada en España, no existiera constancia de que el trabajador autorizado inicialmente a residir y trabajar ha sido afiliado y/o dado de alta en la Seguridad Social, la autoridad competente podrá resolver la extinción de la autorización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75.</p>	<p>empleador será resuelto en el plazo máximo de quince días, debiendo entenderse que la solicitud es desestimada si no se dicta resolución expresa en plazo.</p> <p>El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social deberá realizarse en el ámbito territorial y la ocupación a los que esté limitada, en su caso, la autorización. De no estar limitada la autorización y producirse un cambio de ocupación, el nuevo empleador deberá acreditar, además, que se cumple el requisito previsto en el apartado f) de dicho precepto.</p> <p>Lo previsto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero en relación con el primer empleador.</p>



<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
<p>Asimismo, la autoridad competente requerirá al empresario o empleador que solicitó la autorización para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente por considerar que no se garantiza la actividad continuada de los trabajadores.</p>	

**Artículo 68. Procedimiento en el caso de traspaso de competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta ajena a Comunidades Autónomas.**

1. Todo procedimiento relativo a una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena supondrá la presentación de una única solicitud y finalizará con una única resolución administrativa.

2. En el caso de que a la Comunidad Autónoma donde se vaya a desarrollar la actividad laboral se le hubieran traspasado competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta ajena para extranjeros, la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena se presentará ante el órgano autonómico que sea competente de acuerdo con la normativa autonómica.

3. El órgano autonómico ante el que se deba presentar la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena será competente para resolver la inadmisión a trámite o para declarar el desistimiento y el archivo de las actuaciones.

Deberá resolver, en todo caso, de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante de la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no de las indicadas causas de inadmisión a trámite, cuando afectena la residencia.

Las resoluciones que dicte el órgano autonómico en base al párrafo anterior se notificarán por éste

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

al interesado y se introducirán en la aplicación informática correspondiente, de tal manera que permita el conocimiento de las mismas por parte de la Administración General del Estado en tiempo real.

Los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones que dicte el órgano autonómico sobre inadmisión a trámite y desistimiento y archivo de actuaciones serán resueltos por éste, de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante emitido por la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no de las causas de inadmisión cuando afecten a la residencia. En todo caso, el citado órgano deberá introducir los recursos y las resoluciones adoptadas en la aplicación informática correspondiente.

4. Será el órgano autonómico competente el que comprobará el abono de las tasas correspondientes, y recabará los informes de la Administración Tributaria, incluida, en su caso, el de la propia Comunidad Autónoma, y el de la Seguridad Social, con el fin de comprobar que el empleador está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

El órgano competente de la Administración General del Estado solicitará, simultáneamente, los informes de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y del Registro Central de Penados.

5. A la vista de la documentación aportada y de los informes obtenidos, los órganos competentes de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma correspondiente deberán dictar, de manera coordinada y concordante, una resolución conjunta denegando o concediendo la correspondiente autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, que será firmada por los titulares de los órganos competentes de cada una de las Administraciones y expedida y notificada a los interesados por el órgano autonómico.

En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si concurre alguna causa de denegación referida bien a los aspectos laborales,



<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>bien a los de residencia, debiendo recogerse en la misma <b>todas</b> las causas específicas de denegación, así como los órganos que, en su caso, deban conocer de un eventual recurso administrativo o judicial contra la resolución.</p> <p><b>6.</b> La resolución conjunta a que se hace referencia anteriormente podrá ser impugnada ante cualquiera de los órganos que la firmen, si bien se resolverá de forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos competentes de ambas Administraciones y se notificará a los interesados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.</p>

<p><b>Artículo 53. Denegación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena.</b></p> <p>1. La autoridad o autoridades competentes denegarán las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena en los supuestos siguientes:</p> <p>a) Cuando consten antecedentes penales del trabajador en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.</p> <p>b) Cuando lo exija la situación nacional de empleo, sin perjuicio de los supuestos específicos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>c) Cuando las condiciones fijadas en el contrato de trabajo u oferta de empleo fueran inferiores a las establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad. También se denegará en el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, cuando, por la duración de la prestación de servicios, la retribución sea inferior al salario mínimo interprofesional, en cómputo anual, en proporción al tiempo de trabajo efectivo, salvo que se tratase del cónyuge no separado de hecho o de derecho de residente legal, o de hijo en edad laboral y menor de 18 años, previamente reagrupados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.6.</p> <p>d) Cuando en los 12 meses inmediatamente</p>	<p><b>Artículo 69. Denegación de las autorizaciones <del>iniciales</del> de residencia <del>temporal</del> y trabajo por cuenta ajena.</b></p> <p>1. <del>El órgano u órganos</del> competentes denegarán las autorizaciones <del>iniciales</del> de residencia <del>temporal</del> y trabajo por cuenta ajena en los supuestos siguientes:</p> <p>a) Cuando no se acredite cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 64.</p> <p>b) Cuando en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud <del>el empleador</del></p>
--	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>anteriores a la fecha de solicitud la empresa haya amortizado los puestos de trabajo que pretende cubrir por despido improcedente o nulo, declarado por sentencia o reconocido como tal en acto de conciliación, o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor.</p> <p>e) Cuando el empleador solicitante haya sido sancionado mediante resolución firme en los últimos 12 meses por infracciones calificadas como muy graves en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o por infracciones en materia de extranjería calificadas como graves o muy graves en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.</p> <p>f) Cuando el empresario o empleador no garantice al trabajador la actividad continuada durante la vigencia de la autorización de residencia y trabajo, o bien cuando, siendo requerido para ello en los términos establecidos en el artículo 51, no acredite los medios económicos, materiales y personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo.</p> <p>g) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos o formulando alegaciones inexactas, y medie mala fe.</p> <p>h) Cuando se carezca de la titulación especial exigida para el ejercicio de la concreta profesión o de la homologación o de la colegiación cuando así se requiera.</p> <p>i) Cuando conste un informe gubernativo previo desfavorable.</p> <p>j) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.</p> <p>k) Cuando el empresario solicitante haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra los derechos de los trabajadores o contra</p>	<p>haya amortizado los puestos de trabajo que pretende cubrir por despido improcedente o nulo, declarado por sentencia o reconocido como tal en acto de conciliación, o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor.</p> <p>c) Cuando el empleador solicitante haya sido sancionado mediante resolución firme en los últimos 12 meses por infracciones calificadas como <b>graves o</b> muy graves en la Ley Orgánica 4/2000, o por infracciones en materia de extranjería calificadas como graves o muy graves en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000.</p> <p>d) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, <b>o</b> medie mala fe.</p> <p>e) <b>De así valorarlo el órgano competente para resolver,</b> cuando conste un informe <b>policial</b> desfavorable.</p> <p>f) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.</p> <p>g) Cuando el <b>empleador</b> solicitante haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra los derechos de los trabajadores o contra los extranjeros, <b>así como contra la Hacienda</b></p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>ciudadanos extranjeros, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.</p> <p>2. Cuando la Comunidad Autónoma tenga atribuida la competencia ejecutiva sobre tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena, la apreciación de cualquiera de las causas de denegación correspondientes tanto al ámbito laboral como de residencia, implicará la denegación de la autorización inicial de residencia y trabajo por parte de ambas autoridades en la forma prevista en el artículo 51.</p> <p>3. La denegación habrá de ser motivada y expresará los recursos que contra ella procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarlo y el plazo para interponerlos.</p>	<p><b>Pública o la Seguridad Social</b>, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.</p> <p>h) De así entenderlo oportuno el órgano competente para la resolución del procedimiento a la vista de las circunstancias concurrentes, cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud el empleador solicitante haya decidido la extinción del contrato que motivó la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena con carácter previo a la finalización de la vigencia de la autorización.</p> <p>De así entenderlo oportuno el órgano competente para la resolución del procedimiento, será igualmente causa de denegación de una autorización que en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud el empleador solicitante haya sido sancionado por comisión de la infracción prevista en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.</p> <p>i) Cuando en la fecha de solicitud de la autorización el empleador mantenga vigentes medidas de suspensión de contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los puestos de trabajo que pretende cubrir.</p> <p>2. La denegación habrá de ser motivada y expresará los recursos que contra ella procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarlo y el plazo para interponerlos.</p>

**Artículo 52. Efectos del visado de residencia y trabajo por cuenta ajena.**

El visado de residencia y trabajo por cuenta ajena incorporará la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, y la vigencia de ésta comenzará desde la fecha en que se efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte o título de viaje.

**Artículo 70. Visado de residencia y trabajo y entrada en España.**

1. Serán requisitos para la concesión del visado:

a) Que el extranjero sea titular de una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, que carezca de antecedentes penales en su país de origen o en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>delitos previstos en el ordenamiento español.</p> <p>c) Que el extranjero no padezca ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.</p> <p>d) Que el extranjero haya abonado la tasa por tramitación del procedimiento.</p> <p>2. En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización al empleador interesado, el trabajador deberá solicitar personalmente el visado en la Misión diplomática u Oficina consular en cuya demarcación resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado.</p> <p>De acuerdo con lo previsto por la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, podrá realizarse la presentación por un representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad, o cuando se trate de un menor.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, cuando a través del poder de representación, de otros documentos aportados en la solicitud o de datos que consten en la Administración, se evidenciase que el extranjero para el que se solicita el visado se hallaba en España en situación irregular en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, se inadmitirá a trámite o, si tal circunstancia se advirtiera en un momento posterior, se denegará la solicitud de visado.</p> <p>3. La solicitud de visado deberá ir acompañada de la siguiente documentación:</p>





<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.</p> <p>b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, en el que no deben constar condenas por delitos <b>previstos</b> en el ordenamiento español.</p> <p>c) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece <b>ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.</b></p> <p>d) Copia del contrato en relación con el cual se ha concedido la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, sellada por la Oficina de Extranjería.</p> <p>De oficio, la misión diplomática u oficina consular verificará, en la aplicación informática correspondiente, que se ha concedido la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena condicionada.</p> <p>4. La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos:</p> <p>a) Cuando el extranjero se encontrara en situación irregular en España en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.</p> <p>b) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo.</p> <p>c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.</p> <p>e) Cuando concorra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.</p>



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

f) Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información proporcionada por la Oficina de Extranjería o por el órgano autonómico competente sobre el contrato original.

5. La misión diplomática u oficina consular resolverá sobre la solicitud y expedirá, en su caso, el visado de residencia y trabajo en el plazo máximo de un mes.

Notificada la concesión del visado, el trabajador deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde la fecha de notificación. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del expediente.

6. Una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo establecido en el título I, durante la vigencia de éste, que será de tres meses. El visado le habilitará para la entrada y la permanencia en situación de estancia en España.

7. En el plazo de tres meses desde la entrada del trabajador extranjero en territorio español, deberá producirse su afiliación, alta y posterior cotización, en los términos establecidos por la normativa sobre el régimen de Seguridad Social que resulte de aplicación; el trabajador podrá comenzar su actividad laboral; y el empleador quedará obligado a comunicar el contenido del contrato de trabajo a los Servicios Públicos de Empleo. El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social dotará de eficacia a la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

8. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en la Seguridad Social, éste deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía correspondientes. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización y será retirada por el extranjero.

9. Si finalizada la vigencia de la autorización de estancia no existiera constancia de que el

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>trabajador ha sido dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, éste quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo en caso contrario en infracción grave por encontrarse irregularmente en España.</p> <p>Asimismo, el órgano competente requerirá al empleador que solicitó la autorización para que <b>alegue</b> las razones por las que no se ha <b>iniciado la relación laboral</b> y por las que no se ha <b>cumplido la obligación de comunicación sobre dicha incidencia a las autoridades competentes, prevista en el artículo 38.4 de la Ley Orgánica 4/2000.</b></p> <p><b>En dicho requerimiento, se hará constar que, de no recibirse contestación al mismo en el plazo de diez días o de considerarse insuficientes las razones alegadas por el empleador, el órgano competente dará traslado del expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por posible concurrencia de una infracción grave de las previstas en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.</b></p> <p><b>Igualmente, le advertirá que, de finalizar el posible procedimiento sancionador con determinación de la concurrencia de la infracción señalada en el párrafo anterior, podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente por considerar que no se garantiza la actividad continuada de los trabajadores.</b></p>

**Artículo 54. Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena.**

1. La renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización,

**Artículo 71. Renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.**

1. La renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los **sesenta** días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los **noventa días naturales** posteriores a

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p> <p>2. Junto con la solicitud de renovación deberán presentarse los documentos acreditativos de que se reúnen las condiciones para su concesión, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.</p> <p>3. La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se renovará a su expiración, en el supuesto de que se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende.</p> <p>Asimismo, se procederá a la renovación cuando el trabajador acredite la realización habitual de la actividad para la que se concedió la autorización durante un mínimo de seis meses por año y se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:</p> <p>a) Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las características de su autorización para trabajar, y figure en situación de alta o asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación.</p> <p>b) Disponga de una nueva oferta de empleo que reúna los requisitos establecidos en el artículo 50, con excepción del párrafo a).</p> <p>4. Se renovará la autorización del trabajador que haya tenido un período de actividad de al menos tres meses por año, siempre y cuando acredite:</p> <p>a) Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se pretende se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.</p> <p>b) Que ha buscado activamente empleo, participando en las acciones que se determinen por el servicio público de empleo o bien en programas de inserción sociolaboral de entidades públicas o privadas que cuenten con subvenciones públicas.</p> <p>c) Que en el momento de solicitud de la renovación tenga un contrato de trabajo en vigor.</p>	<p>la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p> <p>2. La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se renovará a su expiración en los siguientes supuestos:</p> <p>a) Cuando se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende.</p> <p>b) Cuando se acredite la realización habitual de la actividad <b>laboral</b> para la que se concedió la autorización durante un mínimo de seis meses por año y <b>el trabajador</b> se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:</p> <p>1º. Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las características de su autorización para trabajar, y figure en situación de alta o asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación.</p> <p>2º. Disponga de <b>un nuevo contrato</b> que reúna los requisitos establecidos en el <b>artículo 64 y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de la renovación.</b></p> <p>c) Cuando <b>el</b> trabajador <b>haya</b> tenido un periodo de actividad <b>laboral</b> de al menos tres meses por año, siempre y cuando acredite, <b>acumulativamente:</b></p> <p>1º. Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se pretende se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.</p> <p>2º. Que ha buscado activamente empleo, <b>mediante su inscripción en el Servicio Público de Empleo competente como demandante de empleo.</b></p> <p>3º. Que en el momento de solicitud de la</p>
--	--



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>5. También se renovará la autorización cuando el trabajador se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 38.3.b) y c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>5 bis). La autorización de residencia y trabajo se renovará, asimismo, a su expiración cuando el trabajador acredite que se ha encontrado trabajando y en alta en Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro, siempre que su última relación laboral se hubiese interrumpido por causas ajenas a su voluntad, y haya buscado activamente empleo.</p> <p>5 ter). También procederá la renovación cuando el cónyuge cumpliera con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador.</p>	<p>renovación <b>tiene</b> un contrato de trabajo en vigor.</p> <p>d) Cuando el trabajador se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 38.6 b) y c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>e) De acuerdo con el artículo el artículo 38.6.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de que la trabajadora sea víctima de violencia de género.</p> <p>f) Igualmente, en desarrollo artículo el artículo 38.6.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando:</p> <p>1º. El trabajador acredite que se ha encontrado trabajando y en alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro, siempre que su última relación laboral se hubiese interrumpido por causas ajenas a su voluntad, y haya buscado activamente empleo.</p> <p>2º. El cónyuge cumpliera con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador. <b>Se procederá igualmente a la renovación, cuando el requisito sea cumplido por la persona con la que el extranjero mantenga una relación de análoga afectividad a la conyugal en los términos previstos en materia de reagrupación familiar.</b></p> <p>3. Junto con la solicitud de renovación deberán presentarse los documentos acreditativos de que se reúnen las condiciones para su concesión, de acuerdo con lo establecido <b>en el apartado anterior, así como informe emitido por la autoridades autonómicas competentes que acredite la escolarización de los menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria.</b></p> <p>4. En caso de que a partir de la documentación presentada junto a la solicitud no quede acreditada la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que estén a cargo del solicitante, la Oficina de Extranjería pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autoridades</p>
---	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

educativas competentes, y advertirá expresamente y por escrito al extranjero solicitante de que en caso de no producirse la escolarización y presentarse el correspondiente informe en el plazo de treinta días, la autorización no será renovada.

5. Para la renovación de la autorización se valorará, en su caso, previa solicitud de oficio de los respectivos informes:

a) Que el extranjero haya cumplido la condena, haya sido indultado o se halle en situación de remisión condicional de la pena o de suspensión de la pena.

b) Que el extranjero haya incumplido sus obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social.

6. Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del extranjero acreditado mediante el informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia.

Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización.

El informe tendrá como contenido mínimo la certificación, en su caso, de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia. En este sentido, la certificación hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.

El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por entidades privadas debidamente acreditadas o por entidades públicas.

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>6. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la renovación de la autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la actividad. La autoridad competente pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la situación de descubierto de cotización, a los efectos de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan.</p> <p>7. Cuando proceda, la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se hará por un período de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia permanente, y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio nacional. Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.</p> <p>8. Notificada la resolución favorable, el extranjero deberá solicitar en el plazo de un mes la tarjeta de identidad de extranjero.</p> <p>9. Será causa de denegación de las solicitudes de renovación, además del incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en este artículo, la concurrencia de alguno de los supuestos de denegación previstos en esta sección, excepto el recogido en el apartado 1.b) del artículo anterior. Se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de residencia y trabajo a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena.</p> <p>10. Transcurrido el plazo para resolver sobre una solicitud de renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, ésta se entenderá estimada. La autoridad competente para conceder la autorización vendrá obligada, previa solicitud por parte del interesado, a expedir el certificado que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo de un mes desde su notificación del mismo, su titular deberá solicitar la renovación de la tarjeta de identidad de extranjero.</p>	<p>7. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la renovación de la autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la actividad. El órgano competente pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la situación de descubierto de cotización, a los efectos de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan.</p> <p>8. Será causa de denegación de las solicitudes de renovación, además del incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en este artículo, la concurrencia de alguno de los supuestos de denegación previstos <b>en el artículo 69 de este Reglamento</b>, excepto el <b>relativo a que la situación nacional de empleo permita la contratación</b>.</p> <p>9. Transcurrido el plazo <b>de tres meses</b> para resolver sobre una solicitud de renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, ésta se entenderá estimada. El órgano competente para conceder la autorización vendrá obligada, previa solicitud por parte del interesado, a expedir el certificado que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo de un mes desde la notificación del mismo, su titular deberá solicitar la</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<b>expedición</b> de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
	<p><b>Artículo 72. Efectos de la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.</b></p> <p><b>1.</b> La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se hará por un periodo de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración, y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio nacional. Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.</p> <p><b>2.</b> Notificada la resolución favorable, el extranjero deberá solicitar en el plazo de un mes la Tarjeta de Identidad de Extranjero.</p>





REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
TÍTULO IV. Residencia	TÍTULO IV. RESIDENCIA TEMPORAL
CAPÍTULO I. Residencia temporal	Capítulo VII. Residencia temporal y trabajo por cuenta propia
SECCIÓN 3ª. Residencia temporal y trabajo por cuenta propia	
	<p><b>Artículo 103. Definición, duración y ámbito.</b></p> <p>Se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta propia el extranjero mayor de 18 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad lucrativa por cuenta propia.</p>

<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</p>
	<p><b>Artículo 104. Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.</b></p> <p>La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia tendrá una duración de un año y <b>se limitará</b> a un ámbito geográfico autonómico y a un sector de actividad.</p> <p>Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización dentro de su territorio.</p>

<p><b>Artículo 58. Requisitos.</b></p> <p>1. Para la concesión de una autorización de residencia temporal y de trabajo por cuenta propia será necesario acreditar, en cada caso, los requisitos que se establecen en este artículo relativos al ámbito de la residencia y laboral, respectivamente.</p> <p>2. Será necesario acreditar las siguientes condiciones, relativas al ámbito de la residencia, referidas a los extranjeros que pretenden trabajar por cuenta propia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Que no se encuentran irregularmente en territorio español.</li> <li>b) Que carecen de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.</li> </ul>	<p><b>Artículo 105. Requisitos.</b></p> <p>1. Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y de trabajo por cuenta propia será necesario acreditar, en cada caso, los requisitos que se establecen en este artículo relativos al ámbito de la residencia y laboral, respectivamente.</p> <p>2. Será necesario <b>cumplir</b> las siguientes condiciones, <b>en materia de</b> residencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Que el <b>trabajador</b> no se encuentre irregularmente en territorio español.</li> <li>b) Que el <b>trabajador carezca</b> de antecedentes penales, <b>tanto</b> en España <b>como</b> en sus países anteriores de residencia <b>durante los últimos cinco años</b>, por delitos <b>previstos</b> en el ordenamiento español.</li> <li>c) Que el trabajador no figure como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.</li> <li>d) Que haya transcurrido el plazo de compromiso de no regreso a España del extranjero, asumido por éste en el marco de su retorno voluntario al país de origen.</li> <li>e) Que se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia temporal.</li> </ul>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>3. Por otra parte será necesario acreditar las siguientes condiciones relativas al ámbito laboral:</p> <p>a) Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.</p> <p>b) Poseer la cualificación profesional exigible o experiencia acreditada suficiente en el ejercicio de la actividad profesional, así como la titulación necesaria para las profesiones cuyo ejercicio exija homologación específica y, en su caso la colegiación cuando así se requiera.</p> <p>c) Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto sea suficiente y la incidencia, en su caso, en la creación de empleo.</p> <p>d) La certificación que demuestre la colegiación, en el caso del ejercicio de actividades profesionales independientes que la exijan.</p> <p>e) La previsión de que el ejercicio de la actividad producirá desde el primer año recursos económicos suficientes al menos para la manutención y alojamiento del interesado, una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.</p>	<p>3. Por otra parte será necesario <b>cumplir</b> las siguientes condiciones <b>en materia de trabajo</b>:</p> <p>a) Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.</p> <p>b) Poseer la cualificación profesional legalmente exigida o experiencia acreditada suficiente en el ejercicio de la actividad profesional, así como en su caso la colegiación cuando así se requiera.</p> <p>c) Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto sea suficiente y la incidencia, en su caso, en la creación de empleo.</p> <p><b>d) Que el extranjero cuente con recursos económicos suficientes para su manutención y alojamiento. En caso de que los recursos acreditados deriven del ejercicio de la actividad por cuenta propia, su valoración se realizará una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.</b></p> <p><b>Las cuantías a acreditar serán aquéllas previstas en relación con solicitudes de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar, en función de las personas que el interesado tenga a su cargo.</b></p> <p><b>e) Haber abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta propia.</b></p>

<p><b>Artículo 59. Procedimiento.</b></p> <p>1. El trabajador extranjero no residente que pretenda trabajar por cuenta propia en España deberá presentar, personalmente, en modelo oficial, la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia ante la oficina consular española correspondiente a su lugar de residencia, salvo que, excepcionalmente, le fuese de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la</p>	<p><b>Artículo 106. Procedimiento.</b></p> <p>1. El trabajador extranjero no residente que pretenda trabajar por cuenta propia en España deberá presentar, personalmente, en modelo oficial, la solicitud de autorización de residencia <b>temporal</b> y trabajo por cuenta propia ante la oficina consular española correspondiente a su lugar de residencia.</p>
<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b></p>

<p>anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado.</p> <p>2. La solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia deberá acompañarse de la siguiente documentación:</p> <p>a) Copia del pasaporte, o documento de viaje, en vigor, del solicitante.</p> <p>b) Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años en el que no deben constar condenas por conductas tipificadas en la legislación penal española.</p> <p>c) Certificado sanitario con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades susceptibles de cuarentena previstas en el Reglamento sanitario internacional.</p> <p>d) La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el ejercicio de la profesión, cuando proceda, debidamente homologada.</p> <p>e) Acreditación de que se cuenta con la inversión económica necesaria a la que se hace referencia en el artículo anterior, o bien compromiso suficiente de apoyo por parte de instituciones financieras u otras.</p> <p>f) Proyecto de establecimiento o actividad a realizar, con indicación de la inversión prevista, su rentabilidad esperada y, en su caso, puestos de trabajo cuya creación se prevea.</p> <p>g) Relación de las autorizaciones o licencias que se exijan para la instalación, apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio profesional, que indique la situación en la que se encuentren los trámites para su consecución, incluyendo, en su caso, las certificaciones de solicitud ante los organismos correspondientes.</p>	<p>2. La solicitud de autorización de residencia <b>temporal</b> y trabajo por cuenta propia deberá acompañarse de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo anterior, y en particular de:</p> <p>a) Copia del pasaporte <b>completo</b>, o documento de viaje, en vigor, del solicitante.</p> <p>b) Relación de las autorizaciones o licencias que se exijan para la instalación, apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio profesional, que indique la situación en la que se encuentren los trámites para su consecución, incluyendo, en su caso, las certificaciones de solicitud ante los organismos correspondientes.</p> <p>c) La acreditativa de la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.</p> <p>d) Proyecto de establecimiento o actividad a realizar, con indicación de la inversión prevista, su rentabilidad esperada y, en su caso, puestos de trabajo cuya creación se prevea; <b>así como documentación acreditativa de que</b> cuenta con la inversión económica necesaria para la <b>implantación del proyecto</b>, o bien <b>con</b> compromiso de apoyo <b>suficiente</b> por parte de instituciones financieras u otras.</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>3. La Misión diplomática u Oficina consular registrará la solicitud y entregará al interesado la comunicación de inicio de procedimiento o, en su caso, resolverá la inadmisión a trámite.</p> <p>En el supuesto de que no se presenten los documentos recogidos en el apartado 2 de este artículo, la misión diplomática u oficina consular requerirá al interesado y le advertirá expresamente que, de no aportarlos en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido de la petición y se procederá al archivo del expediente.</p> <p>4. Presentada en forma o subsanada la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, la Misión diplomática u Oficina consular o, cuando ésta no disponga de los medios técnicos necesarios, los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, introducirán la solicitud en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción en la aplicación informática correspondiente de manera que las autoridades de la Administración o Administraciones competentes tengan conocimiento de la misma en tiempo real y puedan impulsar su tramitación.</p> <p>En el caso de que caso de que el traslado de la solicitud y de la documentación correspondiente no se pudiera realizar por medios telemáticos, la misión diplomática u oficina consular también dará traslado físico de la misma, a través de la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares, al órgano competente de la Administración General del Estado o al de la comunidad autónoma en cuyo territorio solicite la residencia el extranjero, si ésta hubiera asumido competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia.</p> <p>5. El órgano competente de la Administración General del Estado verificará que los solicitantes carecen de antecedentes penales y no se encuentran irregularmente en España, y recabará de oficio el informe policial, y del Registro Central de Penados y Rebeldes, así como informes de otros organismos sobre los respectivos ámbitos de</p>	<p>3. La Misión diplomática u Oficina consular registrará la solicitud y entregará al interesado la comunicación de inicio de <b>procedimiento previa verificación del abono de las tasas por tramitación del procedimiento</b>, o en su caso resolverá la inadmisión a trámite.</p> <p>En el supuesto de que no se presenten los documentos recogidos en el apartado 2 de este artículo, la misión diplomática u oficina consular requerirá al interesado y le advertirá expresamente que, de no aportarlos en el plazo de diez días <b>o no proceder al pago de las tasas por tramitación del procedimiento</b>, se le tendrá por desistido de la petición y se procederá al archivo del expediente.</p> <p>4. Presentada en forma o subsanada la solicitud de autorización de residencia <b>temporal</b> y trabajo por cuenta propia, la Misión diplomática u Oficina consular o, cuando ésta no disponga de los medios técnicos necesarios, los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación <b>grabarán</b> la solicitud en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción en la aplicación informática correspondiente, de manera que los órganos de la Administración o Administraciones competentes tengan conocimiento de la misma en tiempo real y puedan impulsar su tramitación.</p> <p>En el caso de que el traslado de la solicitud y de la documentación correspondiente no se pudiera realizar por medios electrónicos, la misión diplomática u oficina consular dará traslado físico de la misma, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares <b>y Migratorios</b>, al órgano competente de la Administración General del Estado o al de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio solicite la residencia el extranjero, si a ésta se le hubieran <b>traspasado</b> competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia.</p> <p>5. El órgano competente de la Administración General del Estado <b>resolverá la concesión o denegación de la autorización. A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía</b></p>
--	--



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>su competencia. Estos informes serán emitidos en el plazo de diez días.</p> <p>Cuando la Comunidad autónoma en que solicite la residencia y la autorización inicial de trabajo el extranjero hubiera asumido competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia corresponderá al órgano autonómico competente verificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes al ámbito laboral y, simultáneamente, al competente de la Administración General del Estado los relativos al ámbito de la residencia.</p> <p>6. La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada y de los informes obtenidos, resolverá lo que proceda sobre la solicitud.</p> <p>Cuando la Comunidad Autónoma correspondiente tuviera atribuidas competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia, los órganos competentes de la misma y de la Administración General del Estado, a la vista de la documentación presentada y de los informes obtenidos, dictarán de manera coordinada y concordante resolución conjunta denegando o concediendo la correspondiente autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia que será firmada por los titulares de los indicados órganos competentes.</p> <p>En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si concurre alguna causa de denegación referida bien a los aspectos laborales o bien a los de residencia, debiendo recogerse en la misma las causas específicas de denegación, así como el órgano que, en su caso, deba conocer de un eventual recurso administrativo contra la resolución.</p> <p>La resolución conjunta podrá ser impugnada ante cualquiera de los órganos que la firmen si bien se resolverá de forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos competentes de ambas Administraciones y se notificará a los interesados por la misión diplomática u oficina consular.</p>	<p>y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro Central de Penados. Estos informes serán emitidos en el plazo de <b>siete</b> días.</p> <p>La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia será denegada cuando no se cumplan los requisitos establecidos para su concesión en los apartados 2 y 3 del artículo 105, salvo el previsto en el artículo 105.2.b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales fuera de España, que será valorado por la Oficina consular en relación con el visado de residencia y trabajo.</p> <p>La autorización será igualmente denegada en caso de concurrencia de algún supuesto de los previstos en el artículo 69.1, párrafos d), e), o f).</p> <p>6. Al resolver sobre la autorización inicial de residencia <b>temporal</b> y trabajo por cuenta propia el órgano competente, que será el autonómico cuando tenga competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia, deberá <b>grabar</b> de inmediato la resolución favorable en la aplicación informática correspondiente, de manera que los órganos de la Administración o Administraciones afectadas tengan conocimiento en tiempo real de la misma, y condicionará su vigencia a la solicitud y, en su caso, a la expedición del visado, y <b>posterior alta del trabajador, durante los tres meses posteriores a su entrada legal en España, en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.</b></p>
---	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>7. En caso de concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia, la autoridad competente, que será la autonómica cuando tenga competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia, deberá introducir de inmediato la resolución favorable en la aplicación informática correspondiente de manera que las autoridades de la Administración o Administraciones afectadas tengan conocimiento en tiempo real de la misma, y condicionará su vigencia a la solicitud y, en su caso, a la expedición del visado y efectiva entrada del trabajador en territorio español.</p> <p>Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, le darán traslado de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción.</p> <p>La Misión diplomática u Oficina consular notificará al interesado la resolución sobre la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, con indicación, en su caso, del hecho imponible de la tasa para su abono previo a la solicitud de visado.</p> <p>8. El interesado presentará, personalmente, salvo que, excepcionalmente, le fuese de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la solicitud de visado en modelo oficial, en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la concesión de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, a la que acompañará copia de ésta, ante la misión diplomática u oficina consular española correspondiente a su lugar de residencia.</p> <p>9. La Misión diplomática u Oficina consular, en atención al cumplimiento del resto de los requisitos exigidos, resolverá sobre la solicitud y expedirá, en su caso, el visado de residencia y trabajo, en el plazo máximo de un mes.</p>	<p>Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación le darán traslado <b>electrónico</b> de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción.</p> <p>La Misión diplomática u Oficina consular notificará al interesado la resolución sobre la solicitud de autorización de residencia <b>temporal</b> y trabajo por cuenta propia.</p>
---	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>10. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde la notificación. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del expediente.</p> <p>11. A partir de la entrada legal en España del trabajador por cuenta propia, podrá comenzar su actividad y producirse su afiliación, alta y posterior cotización en los términos establecidos por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación. Recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español durante su plazo de vigencia, que en ningún caso será superior a tres meses.</p> <p>12. En el plazo de un mes desde la entrada, el extranjero deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero. Si en el momento de la solicitud de la tarjeta de identidad de extranjero, o transcurrido un mes desde su entrada en España, no existiera constancia de que el trabajador autorizado inicialmente a residir y trabajar se ha afiliado y/o dado de alta en la Seguridad Social, la autoridad competente podrá resolver la extinción de la autorización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75.</p>	

	<p><b>Artículo 107. Procedimiento en el caso de traspaso de competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia a Comunidades Autónomas.</b></p> <p>Todo procedimiento relativo a una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia supondrá la presentación de una única solicitud y finalizará con una única resolución administrativa.</p> <p>Cuando a la Comunidad Autónoma respecto a la que se solicite la autorización inicial de residencia temporal y trabajo <b>se le hubieran traspasado</b> competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia, corresponderá al órgano autonómico competente verificar el cumplimiento de los requisitos en</p>
<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b></p>
	<p>materia de trabajo y, simultáneamente, al competente de la Administración General del Estado los requisitos en materia de residencia.</p> <p>Los órganos competentes de la misma y de la Administración General del Estado, a la vista de la documentación presentada y de los informes obtenidos, dictarán de manera coordinada y concordante resolución conjunta denegando o concediendo la correspondiente autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, que será firmada por los titulares de los indicados órganos competentes.</p> <p>En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si concurre alguna causa de denegación en materia de trabajo o bien en materia de residencia, debiendo recogerse en la misma las causas específicas de denegación, así como el órgano que, en su caso, deba conocer de un eventual recurso administrativo contra la resolución.</p> <p><b>La resolución conjunta podrá ser impugnada ante cualquiera de los órganos que la firmen si bien se resolverá de forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos competentes de ambas Administraciones y se notificará a los interesados por la misión diplomática u oficina consular.</b></p>

	<p><b>Artículo 108. Visado de residencia y trabajo y entrada en España.</b></p> <p>1. El interesado presentará, personalmente, la solicitud de visado en modelo oficial, en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia ante la misión diplomática u oficina consular española correspondiente a su lugar de residencia.</p> <p>Junto a la solicitud de visado, el extranjero habrá de presentar la siguiente documentación:</p> <p>a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.</p> <p>b) Certificado de antecedentes penales, que debe</p>
<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></p>

	<p>ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, en el que no debe constar condenas por delitos previstos en el ordenamiento español.</p> <p>c) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.</p> <p>De oficio, la misión diplomática u oficina consular comprobará que han sido abonadas las tasas por tramitación del procedimiento y verificará, en la aplicación informática correspondiente, que se ha concedido la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia condicionada.</p> <p>2. La Misión diplomática u Oficina consular, en atención al cumplimiento de los requisitos <b>acreditados o verificados de acuerdo con el apartado anterior</b>, resolverá sobre la solicitud y expedirá, en su caso, el visado de residencia y trabajo, en el plazo máximo de un mes.</p> <p>3. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde la notificación. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del expediente.</p> <p>4. Una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo establecido en el título I, durante la vigencia de éste, que será de tres meses. El visado le habilitará para la entrada y la permanencia en situación de estancia en España.</p> <p>5. En el plazo de los tres meses posteriores a la entrada legal del trabajador en España deberá producirse su afiliación, alta y posterior cotización, en los términos establecidos por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación. El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en el mencionado plazo dotará de eficacia a la autorización inicial de residencia temporal y</p>
--	---



<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b></p>
	<p>trabajo por cuenta propia.</p> <p>6. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, éste deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización y será retirada por el extranjero.</p> <p>7. Si finalizado el plazo de tres meses de estancia no existiera constancia de que el trabajador se ha dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, éste quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo en caso contrario en infracción grave por encontrarse irregularmente en España.</p>
<p><b>Artículo 60. Efectos del visado de residencia y trabajo por cuenta propia.</b></p> <p>1. El visado de residencia y trabajo por cuenta propia que se expida en los supuestos a los que se refiere esta sección incorporará la autorización inicial de residencia y trabajo, y la vigencia de ésta comenzará desde la fecha en que se efectúe la entrada, la cual se hará constar obligatoriamente en el pasaporte o título de viaje.</p> <p>2. La autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia tendrá una duración de un año y podrá limitarse a un ámbito geográfico y sector de actividad determinado en los términos establecidos en la normativa estatal aplicable.</p> <p>Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización inicial dentro de su territorio.</p>	

<p><b>Artículo 61. Denegación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia.</b></p> <p>La autoridad o autoridades competentes denegarán la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia cuando no se cumplan los requisitos establecidos en esta sección para su</p>	
<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b></p>
<p>concesión, o se dé la concurrencia de alguna circunstancia prevista en el artículo 53.1, párrafos a), f), g), h), i) o j).</p>	

<p><b>Artículo 62. Renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia.</b></p> <p>1. La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia podrá ser renovada:</p> <p>a) A su expiración cuando se acredite tanto la continuidad en la actividad que dio lugar a la autorización que se renueva como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.</p> <p>b) Cuando el cónyuge cumpliera con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador.</p> <p>c) Cuando por el órgano gestor competente, conforme a la normativa sobre la materia, se hubiera reconocido al extranjero trabajador autónomo la protección por cese de actividad, y durante el periodo de percibo de la prestación.</p> <p>2. El extranjero que desee renovar su autorización de residencia y trabajo por cuenta propia deberá solicitarlo ante el órgano competente para su tramitación, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento.</p>	<p><b>Artículo 109. Renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia.</b></p> <p>1. La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia podrá ser renovada, <b>a su expiración:</b></p> <p>a) Cuando se acredite la continuidad en la actividad que dio lugar a la autorización que se renueva, <b>previa comprobación de oficio del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.</b></p> <p><b>Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la renovación de la autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la actividad. El órgano competente pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la situación de descubierto de cotización, a los efectos de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan.</b></p> <p>b) Cuando el cónyuge cumpliera con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador. <b>Se procederá igualmente a la renovación cuando el requisito sea cumplido por la persona con la que el extranjero mantenga una relación de análoga afectividad a la conyugal en los términos previstos en materia de reagrupación familiar.</b></p> <p>c) Cuando por el órgano gestor competente, conforme a la normativa sobre la materia, se hubiera reconocido al extranjero trabajador autónomo la protección por cese de actividad.</p> <p>2. El extranjero que desee renovar su autorización de residencia y trabajo por cuenta propia deberá <b>dirigir su solicitud al</b> órgano competente para su tramitación, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del</p>
<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b></p>

<p>También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto de que la solicitud se presentase dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p> <p>3. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que acredite que sigue cumpliendo los requisitos que se exigen para la concesión inicial y de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social.</p> <p>4. La oficina competente para la tramitación del procedimiento recabará de oficio el certificado de antecedentes penales y resolverá.</p>	<p>procedimiento en el supuesto de que la solicitud se presentase dentro de los <b>noventa días naturales</b> posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p> <p>3. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que acredite que sigue cumpliendo los requisitos que se exigen para la concesión inicial <b>o, en su caso, de que concurre alguno de los supuestos previstos en los puntos b) y c) del apartado 1 de este artículo. En todo caso, la solicitud irá acompañada de informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que acredite la escolarización de los menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria.</b></p> <p><b>4. En caso de que a partir de la documentación presentada junto a la solicitud no quede acreditada la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que estén a cargo del solicitante, la Oficina de Extranjería pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autoridades educativas competentes, y advertirá expresamente y por escrito al extranjero solicitante de que en caso de no producirse la escolarización y presentarse el correspondiente informe en el plazo de treinta días, la autorización no será renovada.</b></p> <p>5. La oficina competente para la tramitación del procedimiento <b>comprobará de oficio la información sobre que el interesado está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como recabará el certificado de antecedentes penales y resolverá.</b></p> <p>Se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de residencia y trabajo a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena.</p> <p><b>6. Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del extranjero acreditado mediante el</b></p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>5. La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia renovada tendrá una vigencia de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia permanente.</p> <p>6. Se entenderá que la resolución es favorable, en el supuesto de que la Administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud. La autoridad competente para conceder la autorización vendrá obligada a expedir el certificado que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo de un mes desde su notificación del mismo, su titular deberá solicitar la renovación de la tarjeta de identidad de extranjero.</p>	<p>informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia.</p> <p>Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización.</p> <p>El informe tendrá como contenido mínimo la certificación, en su caso, de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia. En este sentido, la certificación hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.</p> <p>El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por entidades privadas debidamente acreditadas o por entidades públicas.</p> <p>7. La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia renovada tendrá una vigencia de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración. Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior</p> <p>8. Se entenderá que la resolución es favorable en el supuesto de que la Administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud. El órgano competente para conceder la autorización vendrá obligado a expedir el certificado que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo de un mes desde su notificación, su titular deberá solicitar la renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.</p>
---	---



<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	<b>TÍTULO X. Trabajadores transfronterizos</b>
	<p><b>Artículo 182. Definición.</b></p> <p>Se halla en situación de trabajo transfronterizo el trabajador que haya sido autorizado para desarrollar actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas del territorio español, residiendo en la zona fronteriza de un Estado limítrofe al que regrese diariamente.</p>
<p><b>Artículo 84. Autorización de trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores transfronterizos.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se concederá este tipo de autorización a los trabajadores que residan en la zona fronteriza de un Estado limítrofe al que regresan diariamente, desarrollan actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas del territorio español. Su validez estará limitada a este ámbito territorial, tendrá una vigencia máxima de cinco años y será renovable.</li> <li>2. En su concesión inicial y sucesivas renovaciones se estará a lo dispuesto en los artículos que establecen las condiciones para la concesión de la autorización de trabajo que proceda y su renovación. Asimismo, cuando la competencia ejecutiva en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia y ajena corresponda a la Administración</li> </ol>	<p><b>Artículo 183. Ámbito de aplicación, requisitos y procedimiento.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la concesión inicial de una autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos se estará a lo dispuesto en los artículos que establecen las condiciones para la concesión de la autorización de trabajo que proceda, sin perjuicio de que el cumplimiento de los requisitos comúnmente exigibles para la obtención de un visado de residencia y trabajo será valorado por el órgano competente, en el marco de la tramitación y resolución del procedimiento relativo a la autorización de trabajo.</li> <li>2. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, para la obtención de una autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos deberán cumplirse los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Autorización de trabajo por cuenta ajena:</li> </ul> </li> </ol>



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>autonómica, ésta será competente para la admisión, tramitación, resolución de solicitudes y, eventualmente, de los recursos administrativos, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento para cada tipo de autorización.</p> <p>3. El hecho de haber sido titular de una autorización de trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores transfronterizos no generará derecho para la obtención de una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena, sin perjuicio de que sea tenida en cuenta para la valoración de las solicitudes que pudieran presentarse por el titular.</p> <p>4. El extranjero deberá solicitar y obtener la correspondiente tarjeta de trabajador transfronterizo a la que se refiere el título X. Esta tarjeta acreditará la condición de trabajador transfronterizo y permitirá la entrada y salida de territorio nacional para la realización de la actividad a la que se refiera.</p> <p>5. Esta autorización de trabajo se renovará a su expiración en tanto el titular continúe en activo y subsistan las circunstancias que motivaron su concesión.</p> <p>6. Se denegarán las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores transfronterizos, además de por la concurrencia de alguna de las causas generales de denegación establecidas en este Reglamento para las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena, por la pérdida de la condición de trabajador transfronterizo.</p> <p>7. Las autorizaciones se extinguirán cuando concurren las causas previstas para el resto de autorizaciones reguladas en este reglamento, cuando sean aplicables.</p>	<p>1º. Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.</p> <p>2º. No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.</p> <p>3º. Residir en la zona fronteriza con territorio español de que se trate.</p> <p>4º. Que la situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero.</p> <p>5º. Que el empleador presente un contrato de trabajo, con fecha de comienzo condicionada a la de la eficacia de la autorización, que garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización.</p> <p>6º. Que el empleador haya formalizado su inscripción en el correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.</p> <p>7º. Que las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas por la normativa vigente y el convenio colectivo aplicable para la misma actividad, categoría profesional y localidad.</p> <p>8º. Que el empleador cuente con medios económicos, materiales o personales, suficientes para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones asumidas en el contrato frente al trabajador.</p> <p>9º. Que se tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.</p> <p>b) Autorización de trabajo por cuenta propia:</p> <p>1º. Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>ordenamiento español.</p> <p>2º. No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.</p> <p>3º. Residir en la zona fronteriza con territorio español de que se trate.</p> <p>4º. Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.</p> <p>5º. Tener la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión, así como la colegiación cuando así se requiera.</p> <p>6º. Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto sea suficiente y la incidencia, en su caso, en la creación de empleo.</p> <p>7º. La previsión de que el ejercicio de la actividad producirá desde el primer año recursos económicos suficientes al menos para la manutención del interesado, una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.</p> <p>3. Cuando la competencia ejecutiva en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia y ajena corresponda a la Administración autonómica, ésta será competente para la admisión, tramitación, resolución de solicitudes y, eventualmente, de los recursos administrativos, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento para cada tipo de autorización.</p> <p>4. En el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se conceda, en su caso, la autorización, el trabajador habrá de darse o ser dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.</p> <p>En el mismo plazo, el extranjero deberá solicitar y obtener la correspondiente <b>Tarjeta de Identidad de Extranjero</b>. Esta tarjeta acreditará la condición de trabajador transfronterizo y permitirá la entrada y salida de territorio nacional para la realización de la actividad a la que se refiera.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>En base a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 4/2000, la Tarjeta de Identidad de Extranjero será solicitada y obtenida sin perjuicio de que la autorización concedida sea de duración menor a seis meses.</p> <p>5. Se denegarán las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores transfronterizos, además de por la concurrencia de alguna de las causas generales de denegación establecidas en este Reglamento para las autorizaciones de residencia y trabajo, por la pérdida de la condición de trabajador transfronterizo.</p>
	<p><b>Artículo 184. Efectos de la autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos.</b></p> <p>1. La duración de la autorización inicial coincidirá con la del contrato de trabajo en relación con la cual se conceda, con el límite mínimo de tres meses y máximo de un año. Los mismos criterios serán de aplicación en relación con la actividad proyectada, en el caso de trabajo por cuenta propia.</p> <p>2. La validez de la autorización de trabajo estará limitada al ámbito territorial de la Comunidad o Ciudad Autónoma en cuya zona limítrofe resida el trabajador, así como a una ocupación en el caso de trabajo por cuenta ajena o a un sector de actividad en el de trabajo por cuenta propia.</p> <p>3. La autorización de trabajo se prorrogará a su expiración, en tanto continúe la misma relación laboral o actividad por cuenta propia y subsistan las circunstancias que motivaron su concesión.</p> <p>La vigencia de las sucesivas prórrogas coincidirá con la del contrato de trabajo o de la actividad por cuenta propia, con el límite máximo de un año.</p> <p>4. Las autorizaciones se extinguirán cuando concurran las causas previstas para el resto de autorizaciones reguladas en este Reglamento, cuando sean aplicables, así como por la pérdida de la condición de trabajador transfronterizo.</p>

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p><b>5.</b> El hecho de haber sido titular de una autorización de trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores transfronterizos no generará derecho para la obtención de una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena, sin perjuicio de que sea tenida en cuenta para la valoración de las solicitudes que pudieran presentarse por el titular.</p>

#### **CAPITULO IV: RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.**

Debemos reseñar los supuestos en los que la Administración otorga permisos excepcionales de residencia por diversas razones.

Es necesario destacar, que si bien anteriormente este era una vía flexible a la hora de la regularización de los extranjeros que se encontraban en situación irregular o habían devenido en ella (ej. Exenciones de visados) , con las últimas modificaciones, los requisitos se han ido cada vez endureciendo más, de forma que realmente a día de hoy el otorgamiento por esta vía es muy excepcional. Siendo además necesario, eso sí, denunciar el abuso que en numerosas ocasiones se hace de esta figura de forma absolutamente injustificada.

Así las cosas, pasamos a analizar los distintos supuestos.

#### **AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR RAZONES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL**

Cuatro son los supuestos en los que cabe la concesión de este tipo de autorización:

1. A los extranjeros a los que se les haya inadmitido a trámite o denegado su solicitud de protección internacional cuando concurran **razones humanitarias acreditadas en el expediente de asilo** (art. 37.b la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria).
2. Por **razones humanitarias distintas** de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria **a personas vulnerables** tales como menores, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de

trata de seres humanos (art. 46.3 de la Ley 12/2009, del derecho de asilo y de la protección subsidiaria)

El Ministro del Interior (a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio) otorgará inicialmente una autorización de permanencia que revestirá la forma de autorización de estancia durante el plazo de un mes, momento durante el cual, salvo retrasos por causa justificada, el interesado deberá solicitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

3. A los **extranjeros desplazados** que por resolución del Ministro del Interior se les haya concedido el régimen de protección temporal.

En este sentido, se consideran desplazados a los nacionales de un tercer Estado (no miembro de la Unión Europea) o apátridas que se hayan visto obligados a abandonar su país o región de origen, o que hayan sido evacuados, especialmente a las personas que hayan huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente y a las que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos (art. 2 R.D. 1325/2003)

Es preciso además que se encuentren amparados por una declaración general de protección temporal adoptada, bien por el Consejo de la Unión Europea a propuesta de la Comisión Europea, bien por el Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores en los supuestos de evacuación, o del Ministro del Interior en los de emergencia. Una vez adoptada la declaración general de protección temporal, el Ministro del Interior, previa solicitud de los interesados que será tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio, resolverá motivada e individualmente sobre la concesión de los beneficios del régimen de protección temporal.

Será entonces cuando a los beneficiarios de la protección temporal se les concederá una autorización de residencia debiendo los interesados solicitarlo mediante comparecencia personal ante las oficinas de extranjeros o, en su defecto, la comisaría de policía de la localidad donde pretenda fijar o tenga fijado su domicilio.

4. Otros supuestos que prevea el Reglamento de Asilo.



La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria fue publicada en el BOE el 31 de octubre de 2009 entrando en vigor el día 20 de noviembre de ese año en aplicación de lo dispuesto en su Disposición Final Cuarta. A pesar de que en su Disposición Final Tercera se autoriza al Gobierno para dictar disposiciones de carácter reglamentario, a fecha de hoy el desarrollo de la Ley aún no se ha llevado a cabo, causa por la que no es posible concretar los diferentes supuestos que se puedan producir.

Si conviene tener en cuenta que un caso peculiar es el del **cónyuge o pareja estable** de un asilado o protegido subsidiario en España cuando ostenta distinta nacionalidad, puesto que no podrá solicitar la extensión del asilo o la protección subsidiaria para ellos, sino el trato más favorable con arreglo a la normativa vigente de extranjería (art. 40.1 de la Ley 12/2009).

Debemos remarcar que la autorización de residencia concedida en cualquiera de los casos mencionados habilita para trabajar directamente pues lleva aparejada una autorización de trabajo en España durante la vigencia de aquélla, excepto cuando sus titulares sean menores de edad laboral.

Dado el carácter de excepcional que tienen este tipo de autorizaciones el extranjero no precisará de visado ni se exigirán requisitos de carácter laboral, pero su vigencia estará limitada a un año aunque podrá prorrogarse anualmente en los términos que más adelante se indicarán.

## **AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR RAZONES HUMANITARIAS**

Variados son los casos que se contemplan para alegar estas razones aunque en aras del principio de seguridad jurídica están claramente tasados, y con el tiempo se han visto mermados. Son los siguientes:

- A) a los extranjeros **víctimas de delitos contra los derechos de los trabajadores** tipificados en los artículos 311 a 315 del Código Penal, concretamente a los trabajadores que hayan sido perjudicados, o se hayan visto suprimidos o restringidos sus derechos laborales o los que hayan sido objeto del tráfico ilegal de mano de obra.
- B) a los extranjeros **víctimas de delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas** garantizados por la constitución (art. 511.1 y 512 del Código Penal)
- C) A los extranjeros **víctimas de delitos** en los que haya concurrido la circunstancia agravante de **racismo, antisemitismo o cualquier otro tipo de discriminación** referente a su ideología, religión o creencias, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.
- D) A los extranjero/as **víctimas de violencia doméstica.**

Debe diferenciarse esta desgraciada situación de la lacra generada por la violencia de género que puede sufrir exclusivamente la mujer, pareja o ex-pareja basada en su pertenencia al sexo femenino. Las víctimas de violencia familiar pueden ser tanto hombres como mujeres y tener una relación de parentesco por tratarse de hijos o padres.

En todos estos casos de víctimas de delitos podrá solicitarse la autorización cuando se haya adoptado resolución judicial firme.

No obstante lo anterior, no es menos cierto que de un tiempo a esta parte, el uso de esta figura se ha resentido por el abuso que se esta llevando a cabo de la misma.

E) A los extranjeros que padezcan una **enfermedad sobrevenida** a su entrada en España y sea de carácter grave requiriendo de asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país de origen, y que, de ser interrumpida o de no recibirla, se corriera un grave riesgo para la salud o la vida.

Es importante incidir en la circunstancia de que se haya contraído la dolencia una vez se halle la persona en territorio español pues se pretende evitar un inadecuado uso del sistema público de salud, puesto que, el art. 12 de la L.O.4/2000 se ha visto modificado en su articulado con intención de limitar en la medida de lo posible el acceso al sistema sanitario a los extranjeros irregulares, lo que sin duda es un grave retroceso en un derecho que creíamos consolidado, y que nos encontramos ahora seriamente mermado.

En todo caso se precisa de un informe clínico expedido por autoridad sanitaria española.

Una excepción a esta regla la representa el menor extranjero desplazado mediante un programa específico para tratamiento médico, siempre que se hayan agotado las posibles prórrogas de estancia y sea imprescindible su permanencia.

F) A los extranjeros que puedan demostrar que solicitar el visado previo de entrada a España en el país del que son originarios o proceden, implica un **peligro para su seguridad o la de su familia** y cumplan los requisitos para obtener autorización de residencia o residencia y trabajo

Esta situación en la práctica se da con escasa frecuencia debido a que la mayor parte de los extranjeros que alegan sufrir estas condiciones suelen acogerse a la Protección Subsidiaria regulada por la Ley 12/2009, antes mencionada.

Estas modalidades de autorización por razones humanitarias no conllevan habilitación para trabajar pero el extranjero podrá solicitar personalmente autorización de trabajo (por cuenta ajena o propia) ya sea de manera simultánea con la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales o durante su período de vigencia que, como todas las autorizaciones iniciales de estas características es de 1 año. Para ello, deberá contar con un contrato de trabajo o realizar una actividad profesional o mercantil y cumplir con los requisitos básicos establecidos para la concesión de dichas autorizaciones lucrativas.

La particularidad de las autorizaciones descritas en este apartado consiste en que no son renovables, sino modificables por autorizaciones de residencia no lucrativas o residencia y trabajo

## **AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, FISCALES O JUDICIALES**

El art. 127 del ya mencionado Reglamento de extranjería dispone que se podrá otorgar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales “a las personas que colaboren con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales, en cuestiones ajenas a la lucha contra redes organizadas, o cuando concurren razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España”

De lo primero que debemos percatarnos es de que estamos ante la colaboración de un ciudadano extranjero en asuntos distintos de la lucha contra las redes o la trata de seres humanos, pues estos últimos tienen un régimen especial.

Además, hay que distinguir entre colaboración con autoridades administrativas en general y colaboración con autoridades policiales, fiscales o judiciales especialmente porque la competencia para su tramitación y resolución corresponde a órganos distintos y en consecuencia el procedimiento es también diferente.

La autorización de residencia por colaboración con autoridades administrativas, sin excluir a otras autoridades, está principalmente desarrollada para aquellos extranjeros que, en su condición de víctimas o testigos, **colaboren con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social** denunciando o aportando testimonios o datos esenciales que den lugar a la apertura de un procedimiento administrativo sancionador en el Orden Social.

La competencia la tiene otorgada la Secretaría General de Inmigración y Emigración si bien está delegado el ejercicio de su competencia en los Delegados o Subdelegados del Gobierno de la provincia en la que tuvieran lugar los hechos constitutivos de la presunta infracción.

Las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales cuando concurren razones de **interés público** también son competencia de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (que no está delegada) y se resuelve previa petición del interesado alegando las circunstancias que considere convenientes o a instancia del organismo o entidad que considere pueda existir este interés.

Otra cuestión es la colaboración con autoridades policiales, fiscales o judiciales porque se instruyen, bien a instancia de estos organismos con la formalización de la solicitud por el extranjero, bien a petición de éste con informe favorable de las autoridades expresadas, cuando se considere que la asistencia proporcionada por el extranjero tiene una entidad suficiente para ser merecedora de una autorización de residencia en España. En la mayoría de los casos se trata de testigos protegidos, denunciadores de delitos o confidentes.

Al igual que por motivos de **seguridad nacional**, la competencia está atribuida a la Secretaría de Estado de Seguridad y la instrucción del procedimiento con propuesta de resolución la realiza la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Con carácter general, serán las autoridades con las que se está produciendo la colaboración quienes podrán instar a los órganos competentes la concesión de la autorización de residencia en favor de la persona que se encuentre en alguno de estos supuestos, pero también es posible que la solicitud sea realizada por el propio extranjero con los informes precisos de las autoridades expresadas.

La concesión de este tipo de autorizaciones, permitirá la solicitud de la correspondiente autorización para trabajar de manera simultánea con la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales o bien durante el periodo de vigencia de aquella. Esta autorización de trabajo podrá solicitarse tanto en su modalidad de cuenta ajena como por cuenta propia, siempre que se cumplan los requisitos exigibles con carácter ordinario para el otorgamiento de dichas autorizaciones.

Su duración será de 1 año y no son renovables; se podrán modificar previa solicitud de su titular en las condiciones que a continuación se explicarán. Solamente tienen el carácter de prorrogables las otorgadas por el Secretario de Estado de Seguridad mientras persistan las razones de su concesión, después son modificables según el resto de autorizaciones.

## **PROROGA Y CESE DE LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES**

Iniciamos este epígrafe haciendo notar que no todas las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales se prorrogan; es más, la mayoría de ellas se modifican por otros tipos de autorizaciones que tienen el carácter de ordinarias, toda vez que con el tiempo se dan en muchas ocasiones los requisitos para poder acceder a la regularización definitiva a través del correspondiente arraigo, como veremos en el capítulo correspondiente.

La diferencia entre prórroga, renovación y modificación es sutil pero muy importante. También, obviamente, podrán denegarse puesto que toda solicitud de autorización está sometida a la valoración y comprobación del cumplimiento de requisitos exigibles.

La prórroga consiste en que se concederá una nueva autorización de residencia por circunstancias excepcionales otra vez, por 1 año de duración, si se mantienen las circunstancias por las que se concedió la autorización inicial. Solamente en el caso de que las autoridades concluyesen que han cesado dichas razones, podrán solicitar otro tipo de autorización de residencia no lucrativa o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por el Reglamento para su obtención, con excepción del visado y la aplicación de la situación nacional de empleo.

Coloquialmente podría decirse que se irán prorrogando sucesivamente por años las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales mientras se mantengan esas condiciones únicas que dieron origen la autorización inicial, pero una vez finalizadas las mismas se da la opción al extranjero de que obtenga una autorización de residencia o residencia y trabajo ordinarias como cualquier otro extranjero o inmigrante residente en España o volver a su país puesto que ha cesado su condición de residente excepcional.

Es el caso de las autorizaciones concedidas por el Secretario de Estado de Seguridad que, como podrá recordarse, son las dadas a los colaboradores con las autoridades policiales, fiscales y judiciales y por seguridad nacional. Consecuentemente podrá prorrogarse también la autorización de trabajo si fue solicitada y obtenida durante su vigencia.

También lo son las autorizaciones concedidas por los motivos de protección internacional que se regirán para su prórroga por la normativa de asilo y protección temporal aplicable, es decir, que si a la finalización de la autorización concedida mantuvieran su vigencia los motivos que la justificaron, el interesado podrá instar la prórroga de la autorización de residencia temporal. La autoridad competente para ello solicitará informe a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio sobre dicha vigencia.

Una vez finalizada su situación especial, y siempre que cumpla los requisitos laborales o profesionales al efecto, el interesado podrá obtener una autorización de residencia y trabajo, de la duración que corresponda en función del tiempo que haya residido y, en su caso, trabajado legalmente en España.

La modificación de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a una autorización de residencia de otro carácter o de residencia y trabajo ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia procede en el resto de supuestos no mencionados en los párrafos anteriores; esto es, las concedidas por la vía del arraigo

(laboral, social o familiar), por razones humanitarias (víctimas de determinados delitos, enfermedad sobrevenida y peligro para la propia seguridad o la de la familia) y las otorgadas por la Secretaría General de Inmigración y Emigración (colaboradores con autoridades administrativas e interés público).

Esto se deriva de lo dispuesto en los artículos 130 y 202 del Reglamento de extranjería por los cuales, los titulares de dichas autorizaciones que se encuentren en España durante, al menos, un año podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las licencias o permisos administrativos imprescindibles para el puesto que se pretende ocupar.

Si el extranjero residente ya estuviera habilitado para trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, presentará por sí mismo la solicitud de autorización de residencia y trabajo, que será concedida si cumple los requisitos previstos para la renovación de autorizaciones laborales.

Si no lo estuviera porque no hubiera solicitado y/u obtenido previamente una autorización administrativa para trabajar, el empleador será el sujeto legitimado para presentar la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena exigiéndose los requisitos laborales previstos para las autorizaciones iniciales, excepto la consideración de la situación nacional de empleo y el certificado de antecedentes penales de su país. Si se pretendiera ejercer una actividad profesional o mercantil, se requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos para las autorizaciones de trabajo por cuenta propia excepto el certificado de antecedentes penales de su país.

La duración de la nueva autorización estará en función del tiempo que se haya residido previamente en España comenzando su período de vigencia una vez se haya procedido a la afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación.

También expresado en un lenguaje coloquial podría decirse que se les da una oportunidad (pues no se tiene en cuenta que estén en situación irregular) para que durante un año consigan estabilizar su situación en



España; por ello al año podrán modificar su autorización excepcional por otra ordinaria (solo de residencia si acreditan medios económicos o de residencia y trabajo si demuestran que han ejercido actividad laboral y de ella proceden sus ingresos).

El plazo para solicitar tanto la prórroga, cuando se haya previsto, como la modificación, está establecido durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de la autorización (plazo ordinario) o dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización (plazo extraordinario y por ello con riesgo de incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción leve en la que se hubiese incurrido sancionada con multa de hasta 500 €). En ambos casos la presentación de la solicitud prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. Si transcurridos tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente no hubiera recaído resolución expresa, se entenderá concedida la prórroga o la modificación por silencio positivo.

## **RESIDENCIA TEMPORAL CON EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO**

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, excluye del ámbito de su aplicación a los miembros de las misiones diplomáticas, consulares y sus familiares, en virtud de las normas de derecho internacional, así como a los miembros de las Misiones permanentes u Organismos intergubernamentales con sede en España y los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales.

La misma norma establece en su artículo 36 que los extranjeros mayores de 16 años precisan de la autorización para trabajar para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional.

Sin embargo, desde la primera Ley de Extranjería aprobada en 1985, entre las figuras de la exclusión del ámbito de aplicación y la autorización preceptiva para trabajar, se han contemplado siempre un colectivo de trabajadores extranjeros, que por su naturaleza, especial formación, o contratación específica por parte de las Administraciones públicas, quedaban exceptuados de la obligación de obtener autorización de trabajo.

Desde esta norma de 1985, se han contemplado estos supuestos específicos de trabajadores extranjeros desde la singularidad que les caracteriza, si bien nuestra pertenencia a la Unión Europea y nuestra integración en la normativa comunitaria, ha hecho que la tramitación de las excepciones de autorización de trabajo y residencia, fuera más exigente, según se iba reformando la normativa de extranjería.

Por otra parte, si bien la mayoría de supuestos especiales, se han mantenido a través del tiempo, también la reforma de la normativa ha contribuido a añadir o suprimir colectivos, en función de las necesidades del momento.

Así, por ejemplo, algunas normas de extranjería han incluido en las excepciones a la autorización de trabajo, al colectivo de médicos internos residentes, mientras que en la actualidad sólo tienen que ser titulares de la tarjeta de estudiante. Como ejemplo contrario y dada la masiva llegada a España de menores no acompañados, en los últimos años, ha supuesto que se incluyan los menores extranjeros en edad laboral tutelados por entidades de protección de menores.

El art. 41.1 de la Ley 4/2000 Art. 117 del Real Decreto 557/2011), establece que “no será necesaria la obtención de autorización de trabajo” y el desarrollo reglamentario en el Real Decreto 557/2011 define:

***“Están exceptuados de la obligación de obtener autorización de trabajo para el ejercicio de actividades lucrativas o laborales, los extranjeros que estén incluidos en el artículo 41 de la L.O. y cumplan las siguientes condiciones:***

**A. Técnicos, investigadores y científicos** extranjeros, invitados o contratados por la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Universidades, Ayuntamientos u organismos dedicados a la investigación participados mayoritariamente por los citados. Se trata de profesionales extranjeros que por su especialización, son invitados o contratados por las Administraciones para el desarrollo de un programa técnico ó científico.

**B. Profesores, técnicos, investigadores y científicos extranjeros** invitados o contratados por una Universidad española para tareas lectivas o académicas.

**\*\*      *Los dos primeros supuestos se acreditan mediante presentación de la invitación o contrato firmados por el representante legal de la entidad.***

**C. Personal directivo o profesorado extranjero** de instituciones culturales o docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países de origen, cuando concurran los siguientes requisitos:

*\*\* Que sean puestos de dirección, de docencia o de investigación.*

*\*\* Cuando se trate de instituciones culturales o docentes dependientes de otros Estados y que los estudios cursados en España y sus títulos o diplomas tengan validez en los países de los que dependen.*

*\*\* Se considerará acreditado el prestigio cuando la entidad y las actividades realizadas hayan sido oficialmente reconocidas y autorizadas por las autoridades competentes, y los títulos o diplomas que expidan sean reconocidos por los países de los que dependen.*

**D. Los funcionarios civiles o militares** de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española.

**E. Corresponsales de medios de comunicación** extranjeros, debidamente acreditados por las autoridades españolas, (Ministerio de la Presidencia), ya sea como corresponsales o como enviados especiales.

**F. Miembros de misiones científicas internacionales** que realicen trabajos e investigaciones en España autorizados por el Ministerio correspondiente (Educación, Ciencia, Industria).

**G. Los artistas** que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada.

Supuesto para aquellos profesionales que de forma individual o colectiva, se desplacen a España para realizar una actividad artística, en espectáculos públicos, o para la grabación. La excepción a la obligación de obtener autorización de trabajo se concede siempre que no superen **cinco días continuados de actuación o veinte días de actuación en un período inferior a seis meses.**

*\*\* Los artistas cuyas actuaciones superen los límites establecidos se acogerán a las autorizaciones de trabajo de temporada.*

**H. Ministros religiosos** y miembros de la jerarquía de las diferentes **iglesias, confesiones y comunidades religiosas**, así como **religiosos profesos** de órdenes religiosas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

*\*\* Que pertenezcan a una iglesia, confesión, comunidad religiosa u orden religiosa que figure inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.*

*\*\* Que tengan actualmente la condición de ministro de culto, miembro de la jerarquía o de religioso profeso, de acuerdo a sus normas estatutarias.*

La normativa excluye literalmente a los seminaristas y personas en preparación para el ministerio religioso, aunque realicen actividades de carácter pastoral, así como los religiosos que no han profesado.

*\*\* Que las actividades que vayan a desarrollar en España sean estrictamente religiosas o, en el caso de religiosos profesos, sean meramente contemplativas o respondan a los fines estatutarios propios de la orden; quedan expresamente excluidas las actividades retribuidas que no se realicen en este ámbito.*

*\*\* Que la entidad de la que dependan se comprometa a hacerse cargo de los gastos ocasionados por su manutención, así como a cumplir los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa sobre Seguridad Social.*

Esta referencia al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se contempla -- por primera vez -- en el nuevo Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011 de 20 de Abril

**I.** Los extranjeros que formen parte de órganos de representación y gobierno y administración de los sindicatos y organizaciones empresariales, reconocidos internacionalmente.

**J.** Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que favorezcan su integración social.

Este supuesto se probará documentalmente acreditando que la entidad ejerce la tutela del menor, con propuesta de una actividad que favorezca su integración social.

*\*\* Como ejemplo significativo, tenemos un número importante de tramitación de excepciones para menores tutelados por el Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, incluidos los menores ingresados en Centros de Reforma de la Agencia del menor infractor de la Comunidad de Madrid.*

## **RENOVACIÓN DE EXCEPCIONES A LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO**

En el artículo 118.3 del Reglamento de la Ley de Extranjería se establece que se prorrogará la autorización de residencia con excepción a la autorización de trabajo si subsisten las circunstancias que motivaron la excepción, siendo de dos años la primera prórroga y de otros dos años en la siguiente.

Esta modalidad especial de residencia con excepción a la autorización de trabajo, exige para su renovación, que subsistan las mismas circunstancias que motivaron la excepción, es decir que la causa de concesión inicial (contratación, programa científico a desarrollar, etc.) se mantenga en el momento de la solicitud, ya que el hecho de haber sido titulares de una excepción no genera derechos para la obtención de autorizaciones de trabajo y residencia.

Además de los documentos que acrediten documentalmente la subsistencia de las mismas circunstancias, respecto al contrato, el programa científico, etc. los trabajadores exceptuados de la autorización de trabajo están obligados a presentar, en el momento de la renovación, la acreditación documental de haber sido dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

La Ley General de Seguridad Social, establece que *“estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, cualquiera que sea su profesión,*

***los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional”***

Al no tratarse de permisos de trabajo “estricto sensu”, en 1998 se publicó la Circular conjunta de las Direcciones Generales de Ordenación de las Migraciones y de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre afiliación, altas, bajas, variaciones de datos y cotización de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social. (BOE 4-3-1998), que en su ámbito de aplicación incluyen a los titulares de excepción:

***\*\* “Estas instrucciones serán de aplicación a aquellos trabajadores extranjeros, que, en aplicación de la vigente normativa sobre permanencia y trabajo de los extranjeros en España, deban estar en posesión de un permiso de trabajo, autorización para trabajar o excepción a la obligación de obtener permiso de trabajo, para realizar en España la actividad de que se trate.”***

La mayoría de trabajadores exceptuados están encuadrados en el Régimen general de la Seguridad Social y otros de ellos pueden acogerse a Convenios bilaterales de Seguridad Social firmados por España y otros Estados, que les permite su traslado temporal a nuestro país, y seguir afiliados y en alta en sus países de origen, como ocurre con los corresponsales de prensa extranjera. En caso de no existir Convenio internacional, la obligación de afiliación y alta en España sigue siendo preceptiva.

Sin embargo hay un colectivo de todos los mencionados, los Ministros de culto y religiosos de las diferentes iglesias y confesiones, cuyo encuadramiento en un régimen es resultado de acuerdos con el Estado español.

Así, por ejemplo:

Los **Religiosos de la Iglesia Católica** están incluidos en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos desde 1981 (Real Decreto 3325/81).

Ministros de culto pertenecientes a la **Federación de Entidades Religiosas Evangélicas**: Régimen general desde 1999.

**Clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa**: Régimen General desde 2005.

**Imames y religiosos** integrados en la Comisión Islámica de España: Régimen General desde 2006.

Estos últimos religiosos que se han ido incorporando al Sistema, están asimilados como trabajadores por cuenta ajena y sus respectivas comunidades asumen los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el régimen general de la Seguridad Social.

## **EL REGIMEN DE VISADOS PARA LAS EXCEPTUACIONES DE AUTORIZACION DE TRABAJO**

El extranjero que desee residir y trabajar en España y se encuentre en uno de los supuestos previstos en el artículo 117 del Reglamento de Extranjería, debe solicitar el correspondiente visado personalmente en la **Misión Diplomática u Oficina Consular española de su demarcación de residencia**, siempre que resida en el extranjero.

De todas formas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, puede determinar la Misión Diplomática u Oficina Consular en la que corresponda presentar la solicitud de visado. Además, excepcionalmente, la Misión Diplomática u Oficina Consular puede aceptar la presentación de la solicitud mediante representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad.

La procedimiento que se sigue es el mismo que en los visados de residencia sin finalidad lucrativa, con algunas particularidades que ahora veremos.

El extranjero debe presentar su solicitud en **modelo oficial** (impreso de solicitud de visado nacional) junto con los siguientes **documentos**:

- a. Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de un año.

- b. Certificado de antecedentes penales, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años y en el que no deben constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español.
- c. Certificado médico, para acreditar que no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
- d. Documentación que proceda para cada uno de los supuestos de excepción a la autorización de trabajo previstos en el artículo 117 del Reglamento de Extranjería.

En el momento de presentar la solicitud, deben abonarse asimismo las **tasas por la tramitación de la solicitud**. Estas tasas responden a los gastos administrativos de tramitación de la solicitud, con independencia de si después se expide o no el visado solicitado (el hecho imponible es, por tanto, la tramitación). Por un lado hay que abonar la tasa por la tramitación de la autorización inicial de residencia temporal, que asciende a 10,20 euros y que se encuentra prevista en la Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería. Por otro lado hay que abonar la tasa por la tramitación del visado. La tasa, de conformidad con lo dispuesto en la Orden AEC/4004/2006, de 22 de diciembre, por la que se establecen las cuantías de las tasas por la tramitación de visados, es de **60 euros**. Ahora bien, esta cantidad puede dejar de aplicarse en los casos que, de acuerdo con los usos y costumbres admitidos en derecho internacional, tengan un origen inmediato y directo en razones de política exterior o de carácter humanitario.

### **La tramitación y la decisión de las solicitudes de visado de residencia temporal y trabajo en régimen de exención de la obligación de obtener autorización de trabajo**

Las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, una vez ha sido presentada la solicitud de visado, deben estampar en el pasaporte del solicitante un **sello que deje constancia de que el visado ha sido solicitado**. Si finalmente se concede el visado, la etiqueta debe adherirse, en la medida de lo posible, sobre el sello de identificación de la solicitud. Si el visado es denegado, el sello permanece estampado en el pasaporte.



Durante la fase de tramitación de la solicitud del visado, intervienen **dos niveles de la Administración**: la Misión Diplomática u Oficina Consular competente y la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia en la que tiene previsto desarrollar su actividad el solicitante. En ambos casos se efectúan los controles necesarios para evitar cualquier riesgo para la seguridad del Estado y para evitar cualquier intento de inmigración irregular.

En primer lugar tiene lugar el estudio del expediente por parte de la **Misión Diplomática u Oficina Consular competente**.

La Misión Diplomática u Oficina Consular competente debe comprobar la identidad del solicitante, consultando en el **Sistema de Información Schengen** (SIS) si el solicitante se encuentra en el listado de personas no admisibles (véase el tema de visados de corta duración para una explicación detallada de su funcionamiento). Si el solicitante se encuentra en el SIS, se debe denegar su solicitud. En ese caso sería aplicable el punto 8 de la Disposición adicional décima del Reglamento de Extranjería, que establece que: “Sin perjuicio de la eficacia de la resolución denegatoria, y con independencia de que el interesado haya o no presentado recurso contra ella, el extranjero conocedor de una prohibición de entrada por su inclusión en la lista de personas no admisibles podrá encauzar a través de la oficina consular una solicitud escrita dirigida al Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior si quisiera ejercer su derecho de acceso a sus datos o a solicitar su rectificación o supresión de los mismos en el sistema de información de Schengen”.

En caso necesario, la Misión Diplomática u Oficina Consular competente puede requerir al solicitante que subsane la documentación aportada o incluso que comparezca personalmente para mantener una **entrevista personal** con objeto de comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el plazo de quince días, produce el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento. Cuando se celebra una entrevista, en ella deben estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y debe quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se debe entregar copia al interesado.

Si la Misión Diplomática u Oficina Consular considera que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, debe denegar el visado. Si, por el contrario, el solicitante cumple con los requisitos necesarios, la Misión Diplomática u Oficina Consular competente debe dar traslado de la solicitud, por medios

telemáticos y de manera simultánea cuando sea posible, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a la Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuya demarcación solicite la residencia el extranjero para que resuelva lo que proceda sobre la autorización de residencia. En la práctica, la documentación se envía al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y éste la remite a su vez a la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente.

La **Delegación o Subdelegación del Gobierno competente** es el segundo órgano de la Administración que interviene en el procedimiento. En el plazo máximo de siete días desde la recepción de la solicitud, debe resolver si reconoce o no la **excepción** de forma motivada, previo informe de los servicios policiales relativo a la existencia de razones que pudieran impedirla.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno debe comunicar su resolución al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para que la traslade a la Misión Diplomática u Oficina Consular correspondiente a través de la aplicación informática.

La resolución de la Delegación o Subdelegación del Gobierno puede ser favorable, en cuyo caso la eficacia de la autorización queda supeditada a la expedición, en su caso, del visado y a la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional; o puede ser desfavorable (el silencio administrativo es en este caso positivo, a diferencia de lo que sucede en la tramitación de las autorizaciones de residencia sin finalidad lucrativa). El plazo de resolución de los visados de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo es de 15 días.

\* \* \*

Si se decide **conceder el visado**, la Misión Diplomática u Oficina Consular debe notificar la resolución al solicitante, que debe recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde la notificación. En caso de no hacerlo así, se entiende que ha renunciado al visado concedido y se archiva el procedimiento. Una vez recogido el visado, el solicitante debe entrar en el territorio español, en el plazo de vigencia del visado.

El visado de residencia expedido incorpora la autorización inicial de residencia con la excepción a la autorización de trabajo, y la vigencia de la misma comienza desde la fecha en que se efectúe la entrada en España, lo que debe hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte.

Hay que tener en cuenta que la etiqueta que se expide es una **etiqueta uniforme**, cuyo modelo se recoge en el **Anexo 19 del Manual para la tramitación de las solicitudes de visado y la modificación de los visados expedidos**.

Si se decide **denegar el visado** (por decisión de la Misión Diplomática u Oficina Consular o de la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente), **la normativa no recoge la obligación de motivar la denegación, pero sí la de notificarla**. La Disposición adicional décima del Reglamento de Extranjería establece que “La resolución denegatoria de un visado se notificará al solicitante de forma que le garantice la información sobre su contenido las normas que en derecho la fundamenten, el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo”. Los recursos que cabe interponer contra una resolución denegatoria son un recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación y/o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación.

A continuación, y una vez analizada la cuestión de residencia por circunstancias especiales así como las excepciones de permiso de trabajo, por medio de este anexo adjuntamos un cuadro comparativo del tratamiento que la misma tiene en el actual reglamento de extranjería en comparación a su inmediatamente anterior, resaltando en color rojo las diferencias para una mejor y más rápida

comprensión, pudiendo ver claramente que los requisitos solicitados para el tema aquí tratado se han incrementado y a su vez endurecido.

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
	TÍTULO IV. RESIDENCIA TEMPORAL
	Capítulo IX. Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo

<p><b>Artículo 68. Excepciones a la autorización de trabajo.</b></p> <p>Están exceptuados de la obligación de obtener autorización de trabajo para el ejercicio de una actividad lucrativa, laboral o profesional los extranjeros que estén incluidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y cumplan las siguientes condiciones:</p> <p>a) Técnicos, investigadores y científicos extranjeros, invitados o contratados por la Administración General del Estado, las</p>	<p><b>Artículo 117. Excepciones a la autorización de trabajo.</b></p> <p>Están exceptuados de la obligación de obtener autorización de trabajo para el ejercicio de una actividad lucrativa, laboral o profesional los extranjeros que estén incluidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y cumplan las siguientes condiciones:</p> <p>a) Técnicos, investigadores y científicos invitados o contratados por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las</p>
--	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>Comunidades Autónomas, las universidades, los entes locales o los organismos que tengan por objeto la promoción y el desarrollo de la investigación promovidos o participados mayoritariamente por las anteriores.</p> <p>Tendrán esta consideración los profesionales extranjeros que por sus conocimientos, especialización, experiencia o prácticas científicas sean invitados o contratados por cualesquiera de las Administraciones citadas para el desarrollo de una actividad o programa técnico, científico o de interés general.</p> <p>Esta circunstancia quedará acreditada con la presentación de la invitación o contrato de trabajo suscritos por quien tenga atribuida la representación legal del órgano correspondiente, donde conste la descripción del proyecto y el perfil profesional que se requiere para su desarrollo.</p> <p>b) Profesores, técnicos, investigadores y científicos extranjeros invitados o contratados por una universidad española. Se considera como tales a los docentes extranjeros que sean invitados o contratados por una universidad española para desarrollar tareas lectivas u otras tareas académicas.</p> <p>Esta circunstancia quedará acreditada con la presentación de la invitación o contrato de trabajo para el ejercicio de actividades lectivas u otras actividades académicas, suscritos por quien tenga atribuida la representación legal de la universidad española correspondiente.</p> <p>c) Personal directivo o profesorado extranjero de instituciones culturales o docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas. Podrán beneficiarse de la excepción los extranjeros en quienes concurren las circunstancias siguientes:</p> <p>1ª Ocupar puestos de dirección, de docencia o de investigación y limitar su ocupación al ejercicio de</p>	<p>universidades, los entes locales o los organismos que tengan por objeto la promoción y el desarrollo de la investigación promovidos o participados mayoritariamente por las anteriores.</p> <p>Tendrán esta consideración los profesionales que por sus conocimientos, especialización, experiencia o prácticas científicas sean invitados o contratados por <b>una</b> de las Administraciones citadas para el desarrollo de una actividad o programa técnico, científico o de interés general.</p> <p>Esta circunstancia quedará acreditada con la presentación de la invitación o contrato de trabajo, suscritos por quien tenga atribuida la representación legal del órgano correspondiente, donde conste la descripción del proyecto y el perfil profesional que se requiere para su desarrollo.</p> <p>b) Profesores, técnicos, investigadores y científicos invitados o contratados por una universidad española. Se considera como tales a los docentes que sean invitados o contratados por una universidad española para desarrollar tareas <b>docentes, de investigación o académicas</b>.</p> <p>Esta circunstancia quedará acreditada con la presentación de la invitación o contrato de trabajo para el ejercicio de <b>dichas</b> actividades, suscritos por quien tenga atribuida la representación legal de la universidad española correspondiente.</p> <p>c) Personal directivo o profesorado de instituciones culturales o docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas. Podrán beneficiarse de la excepción los extranjeros en quienes concurren las circunstancias siguientes:</p> <p>1ª Ocupar puestos de dirección, de docencia o de investigación y limitar su ocupación al ejercicio de</p>
--	---



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>la indicada actividad en instituciones culturales o docentes extranjeras radicadas en España.</p> <p>2ª Cuando se trate de instituciones culturales o docentes dependientes de otros Estados, deberán desarrollar en España su actividad de forma que los estudios cursados, programas desarrollados y los títulos o diplomas expedidos tengan validez y sean reconocidos por los países de los que dependan.</p> <p>3ª Si se trata de instituciones privadas extranjeras, se considerará acreditado el prestigio cuando la entidad y las actividades realizadas hayan sido oficialmente reconocidas y autorizadas por las autoridades competentes, y los títulos o diplomas que expidan tengan validez y reconocimiento por los países de los que dependan.</p> <p>Estas circunstancias quedarán acreditadas con la presentación de la documentación que justifique la validez en el país de origen a los títulos o diplomas expedidos en España, del contrato de trabajo o designación para el ejercicio de actividades de dirección o docencia y, en el caso de las entidades privadas, también de la documentación que justifique su reconocimiento oficial en España.</p> <p>d) Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española.</p> <p>Esta situación quedará acreditada con la presentación del certificado emitido por la Administración estatal extranjera competente y la justificación de tales aspectos.</p> <p>e) Corresponsales de medios de comunicación extranjeros. Tendrán esta consideración los profesionales de la información al servicio de medios de comunicación extranjeros que desarrollen su actividad informativa en España, debidamente acreditados por las autoridades españolas, ya sea como corresponsales ya sea como enviados especiales.</p>	<p>la indicada actividad en instituciones culturales o docentes extranjeras radicadas en España.</p> <p>2ª Cuando se trate de instituciones culturales o docentes dependientes de otros Estados, deberán desarrollar en España su actividad de forma que los estudios cursados, programas desarrollados y los títulos o diplomas expedidos tengan validez y sean reconocidos por los países de los que dependan.</p> <p>3ª Si se trata de instituciones privadas extranjeras, se considerará acreditado el prestigio cuando la entidad y las actividades realizadas hayan sido oficialmente reconocidas y autorizadas por las autoridades competentes, y los títulos o diplomas que expidan tengan validez y reconocimiento por los países de los que dependan.</p> <p>Estas circunstancias quedarán acreditadas con la presentación de la documentación que justifique la validez en el país de origen de los títulos o diplomas expedidos en España, del contrato de trabajo, o designación para el ejercicio de actividades de dirección o docencia. Y, en el caso de las entidades privadas, también de la documentación que justifique su reconocimiento oficial en España.</p> <p>d) Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con una Administración española.</p> <p>Esta situación quedará acreditada con la presentación del certificado emitido por la Administración estatal extranjera competente y la justificación de tales aspectos.</p> <p>e) Corresponsales de medios de comunicación extranjeros. Tendrán esta consideración los profesionales de la información al servicio de medios de comunicación extranjeros que desarrollen su actividad informativa en España, debidamente acreditados por las autoridades españolas como corresponsales o como enviados especiales.</p>
---	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>Esta situación quedará acreditada con la presentación de la acreditación emitida por el Ministerio de la Presidencia a este respecto.</p> <p>f) Miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencia o por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tendrán esta consideración los extranjeros que formen parte de una misión científica internacional que se desplace a España para realizar actividades de estudio o investigación programadas por un organismo o agencia internacional, y autorizadas por las autoridades competentes.</p> <p>Esta situación quedará acreditada con la presentación de la autorización del Ministerio de Educación y Ciencia o del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de formar parte de misión científica internacional.</p> <p>g) Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada. Estarán incluidas en este supuesto las personas que, de forma individual o colectiva, se desplacen a España para realizar una actividad artística, directamente ante el público o destinada a la grabación de cualquier tipo para su difusión, en cualquier medio o local destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos o actuaciones de tipo artístico. Las actividades que se realicen no podrán superar cinco días continuados de actuación o veinte días de actuación en un período inferior a seis meses.</p> <p>Esta situación quedará acreditada con la presentación del documento nacional de identidad y del contrato de trabajo para el desarrollo de las actividades artísticas.</p> <p>h) Ministros religiosos y miembros de la jerarquía</p>	<p>f) Miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados <b>por la Administración, estatal o autonómica, competente.</b></p> <p>Tendrán esta consideración los extranjeros que formen parte de una misión científica internacional que se desplace a España para realizar actividades de estudio o investigación programadas por un organismo o agencia internacional, y autorizadas por las autoridades competentes.</p> <p>g) Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada. Estarán incluidas en este supuesto las personas que, de forma individual o colectiva, se desplacen a España para realizar una actividad artística, directamente ante el público o destinada a la grabación de cualquier tipo para su difusión, en cualquier medio o local destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos o actuaciones de tipo artístico. Las actividades que se realicen no podrán superar cinco días continuados de actuación o veinte días de actuación en un periodo inferior a seis meses.</p> <p>Esta situación quedará acreditada con la presentación del contrato para el desarrollo de las actividades artísticas <b>y de una relación de las autorizaciones o licencias que se exijan para el desarrollo de las mismas que indique la situación en la que se encuentran los trámites para su consecución, incluyendo, en su caso, las certificaciones de solicitud ante los organismos correspondientes.</b></p> <p>h) Ministros religiosos y miembros de la jerarquía</p>
---	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>de las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como religiosos profesos de órdenes religiosas. Tendrán esta consideración las personas en quienes concurran los siguientes requisitos:</p> <p>1º Que pertenezcan a una iglesia, confesión, comunidad religiosa u orden religiosa que figure inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.</p> <p>2º Que tengan, efectiva y actualmente, la condición de ministro de culto, miembro de la jerarquía o de religioso profeso, por cumplir los requisitos establecidos en sus normas estatutarias.</p> <p>3º Que las actividades que vayan a desarrollar en España sean estrictamente religiosas o, en el caso de religiosos profesos, sean meramente contemplativas o respondan a los fines estatutarios propios de la orden; quedan expresamente excluidas las actividades retribuidas que no se realicen en este ámbito.</p> <p>4º Que la entidad de la que dependan se comprometa a hacerse cargo de los gastos ocasionados por su manutención.</p> <p>El extremo indicado en el párrafo 1º se acreditará mediante certificación del Ministerio de Justicia; los expresados en los párrafos 2º a 4º, se acreditarán mediante certificación expedida por la entidad, con la conformidad del Ministerio de Justicia.</p> <p>Quedan expresamente excluidos de este artículo los seminaristas y personas en preparación para el ministerio religioso, aunque temporalmente realicen actividades de carácter pastoral, así como las personas vinculadas con una orden religiosa en la que aún no hayan profesado, aunque realicen una actividad temporal en cumplimiento de sus estatutos religiosos.</p> <p>i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos y organizaciones empresariales reconocidos internacionalmente, siempre que su</p>	<p>de las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como religiosos profesos de órdenes religiosas. Tendrán esta consideración las personas en quienes concurran los siguientes requisitos:</p> <p>1º Que pertenezcan a una iglesia, confesión, comunidad religiosa u orden religiosa que figure inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.</p> <p>2º Que tengan, efectiva y actualmente, la condición de ministro de culto, miembro de la jerarquía o religioso profeso por cumplir los requisitos establecidos en sus normas estatutarias.</p> <p>3º Que las actividades que vayan a desarrollar en España sean estrictamente religiosas o, en el caso de religiosos profesos, sean meramente contemplativas o respondan a los fines estatutarios propios de la orden; quedan expresamente excluidas las actividades <b>laborales</b> que no se realicen en este ámbito.</p> <p>4º Que la entidad de la que dependan se comprometa a hacerse cargo de los gastos ocasionados por su manutención <b>y alojamiento, así como a cumplir los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa sobre Seguridad Social.</b></p> <p>El extremo indicado en el párrafo 1º se acreditará mediante certificación del Ministerio de Justicia; los expresados en los párrafos 2º a 4º, se acreditarán mediante certificación expedida por la entidad, con la conformidad del Ministerio de Justicia <b>y la presentación de copia de los Estatutos de la orden.</b></p> <p>Quedan expresamente excluidos de este artículo los seminaristas y personas en preparación para el ministerio religioso, aunque temporalmente realicen actividades de carácter pastoral, así como las personas vinculadas con una orden religiosa en la que aún no hayan profesado, aunque realicen una actividad temporal en cumplimiento de sus estatutos religiosos.</p> <p>i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos y organizaciones empresariales</p>
---	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>actividad se limite estrictamente al desempeño de las funciones inherentes a dicha condición.</p> <p>j) Los españoles de origen que hubieran perdido la nacionalidad española. Esta situación se acreditará mediante certificación literal de nacimiento o, en su defecto, mediante el medio de prueba adecuado admitido en derecho.</p> <p>k) Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social.</p> <p>Esta situación quedará probada con la acreditación de que la entidad citada ejerce la tutela del menor y la presentación por parte de ésta de la propuesta de actividad que favorezca la integración social del menor.</p>	<p>reconocidos internacionalmente, siempre que su actividad se limite estrictamente al desempeño de las funciones inherentes a dicha condición.</p> <p>j) Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por un servicio de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social.</p> <p>Esta situación quedará probada con la acreditación de que el servicio citado ejerce la tutela del menor y la presentación por parte de ésta de la propuesta de actividad que favorezca la integración social del menor.</p>

<p><b>Artículo 69. Procedimiento.</b></p> <p>1. En el caso de que no sea residente en España, el extranjero deberá solicitar el correspondiente visado de residencia ante la oficina consular española correspondiente a su lugar de residencia, acompañando a la solicitud la documentación que proceda para cada uno de los supuestos de excepción a la autorización de trabajo previstos en el artículo 68. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado. La oficina consular verificará la excepción y tramitará el visado de residencia conforme a lo dispuesto en el artículo 35, si bien se reducirá el plazo previsto en el apartado 5 de dicho artículo a siete días, y se deberá considerar la ausencia de respuesta, prevista en el apartado 6 de dicho artículo, como resolución favorable.</p>	<p><b>Artículo 118. Procedimiento.</b></p> <p>1. En el caso de que no sea residente en España <b>y siempre que la duración prevista de la actividad sea superior a noventa días</b>, el extranjero deberá solicitar el correspondiente visado de residencia ante la oficina consular española correspondiente a su lugar de residencia, acompañando a la solicitud la documentación que proceda para cada uno de los supuestos de excepción a la autorización de trabajo previstos en el artículo <b>117</b>.</p> <p>La oficina consular verificará la excepción y tramitará el visado de residencia conforme a lo dispuesto en el <b>artículo 48</b>, si bien se reducirá el plazo previsto en el <b>apartado 4</b> de dicho artículo a siete días. La ausencia de respuesta deberá considerarse como resolución favorable.</p> <p><b>Cuando el extranjero no sea residente en España y la duración prevista de la actividad no sea superior a noventa días, deberá solicitar, cualquiera que sea su nacionalidad, el correspondiente visado de estancia ante la Misión diplomática u Oficina consular española en cuya demarcación resida. En estos casos, el</b></p>
---	---



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>2. En el caso de que sea residente en España, el extranjero deberá solicitar el reconocimiento de la excepción, y alegar que reúne estas condiciones ante la Subdelegación del Gobierno o Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, correspondiente a la provincia donde se encuentre el centro de trabajo, aportando la documentación que lo justifique. Esta situación se entenderá denegada si en el plazo de tres meses la Subdelegación o Delegación del Gobierno no se pronuncia sobre ella. La Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno correspondiente podrá solicitar la presentación de la documentación adicional que se estime pertinente para acreditar que el extranjero se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 68, así como los informes que sean precisos a otros órganos administrativos.</p> <p>3. La vigencia del reconocimiento de la excepción se adaptará a la duración de la actividad o programa que se desarrolle, con el límite de un año en el reconocimiento inicial, de dos en la primera renovación y de otros dos años en la siguiente renovación, si subsisten las circunstancias que motivaron la excepción.</p> <p>4. El hecho de haber sido titular de una excepción de autorización de trabajo no generará derechos para la obtención de una autorización de trabajo</p>	<p>procedimiento aplicable a la solicitud de visado será el previsto para la tramitación de visados de estancia de corta duración, debiendo acreditar el extranjero que reúne las condiciones para su inclusión en uno de los supuestos descritos en el artículo anterior.</p> <p>La expedición del visado de estancia previsto en el párrafo anterior será comunicada, a través de la aplicación informática correspondiente, a la Oficina de Extranjería de la provincia donde se vaya a desarrollar la actividad. Las solicitudes de prórroga de estancia se regirán por lo previsto en el artículo 34 de este Reglamento. La duración total de la estancia y sus posibles prórrogas no podrá ser en ningún caso superior a noventa días.</p> <p>2. En el caso de que sea residente en España, el extranjero deberá solicitar el reconocimiento de la excepción, y alegar que reúne estas condiciones, ante la <b>Oficina de Extranjería</b> correspondiente a la provincia donde <b>se inicie la actividad</b>, aportando la documentación que lo justifique.</p> <p>Esta <b>solicitud</b> se entenderá denegada si en el plazo de tres meses la Subdelegación o Delegación del Gobierno no se pronuncia sobre la misma. <b>La Oficina de Extranjería</b> podrá solicitar la presentación de la documentación adicional que se estime pertinente para acreditar que el extranjero se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el <b>artículo 117</b>, así como los informes que sean precisos a otros órganos administrativos.</p> <p>3. La vigencia del reconocimiento de la excepción se adaptará a la duración de la actividad o programa que se desarrolle, con el límite <b>máximo</b> de un año en el reconocimiento inicial, de dos en la primera <b>prórroga</b> y de otros dos años en la siguiente <b>prórroga</b>, si subsisten las circunstancias que motivaron la excepción.</p> <p>4. El hecho de haber sido titular de una excepción de autorización de trabajo no generará derechos para la obtención de una autorización de trabajo por cuenta propia o ajena.</p>
---	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
por cuenta propia o ajena de carácter inicial.	

<p><b>Artículo 70. Efectos del visado.</b></p> <p>1. El visado de residencia que se expida en los supuestos a los que se refiere esta sección incorporará la autorización inicial de residencia con la excepción a la autorización de trabajo y su vigencia comenzará desde la fecha en que se efectúe la entrada, y así se haga constar en el visado, pasaporte o título de viaje. El trabajador deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes, ante la oficina correspondiente la tarjeta de identidad de extranjero.</p> <p>2. Asimismo, una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo establecido en el título I, durante la vigencia del visado, no superior a tres meses.</p>	<p><b>Artículo 119. Efectos del visado.</b></p> <p>1. Una vez recogido, <b>en su caso</b>, el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo establecido en el título I, durante la vigencia de éste, no superior a tres meses.</p> <p>2. El visado incorporará la autorización inicial de residencia con la excepción a la autorización de trabajo, <b>cuya</b> vigencia comenzará desde la fecha en que se efectúe la entrada, y así se haga constar en el visado, pasaporte o título de viaje.</p> <p><b>En caso que el extranjero ya tuviera la condición de residente en España, la vigencia de la exceptuación de autorización de trabajo comenzará en la fecha de la resolución por la que haya sido concedida.</b></p> <p>3. <b>En caso de concesión de autorizaciones de vigencia superior a seis meses</b>, el trabajador deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes <b>desde su entrada legal en territorio español</b> ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. <b>En caso que el extranjero ya tuviera la condición de residente en España, dicho plazo será computado desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la exceptuación de la autorización de trabajo.</b></p>
---	---



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
TÍTULO IV. Residencia	TÍTULO V. RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
CAPÍTULO I. Residencia temporal	CAPÍTULO I. Residencia temporal por circunstancias excepcionales por, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público
SECCIÓN 3ª. Residencia temporal en supuestos excepcionales	

<p><b>Artículo 45. Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos determinados en este artículo siempre que no haya mala fe del solicitante.</li> <li>2. Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo, en los siguientes supuestos: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año.</li> <li>b) A los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, cuenten con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año y bien acrediten vínculos familiares con otros extranjeros residentes, bien presenten un informe que acredite su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Artículo 123. Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o razones de seguridad nacional o interés público, previstos en los artículos siguientes.</li> <li>2. El contenido de este capítulo debe ser interpretado sin perjuicio de la posible concesión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales en base a lo previsto en los artículos 31bis, 59 y 59bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Igualmente, podrán concederse otras autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales en los términos establecidos en la Disposición adicional primera.4 de este Reglamento.</li> </ol>
---	--

<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b></p>
--	--

<p>tenga su domicilio habitual.</p> <p>A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán referidos exclusivamente a los cónyuges, ascendientes y descendientes en línea directa.</p> <p>c) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.</p> <p>3. Se podrá conceder una autorización por razones de protección internacional a las personas a las que el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en los términos previstos en el artículo 31.3 de su reglamento de aplicación, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado por el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre. Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos a los que se refieren los artículos 31.4 y 34.1 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.</p> <p>4. Se podrá conceder una autorización por razones humanitarias, en los siguientes supuestos:</p> <p>a) A los extranjeros víctimas de los delitos tipificados en los artículos 311 a 314 del Código Penal, de delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación, tipificada en el artículo 22. 4.ª, del Código Penal, o de delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, en los términos previstos por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, siempre que haya recaído sentencia por tales delitos.</p>	
--	--



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>b) A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país de origen, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la salud o la vida. A los efectos de acreditar la necesidad, será preciso un informe clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.</p> <p>c) A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios o proceden, a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad o la de su familia, y que reúnen los demás requisitos para obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y trabajo.</p> <p>5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, se podrá conceder una autorización a las personas que colaboren con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales, o cuando concurren razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. A estos efectos, dichas autoridades podrán instar a los organismos competentes la concesión de la autorización de residencia o de residencia y trabajo a la persona que se encuentre en alguno de estos supuestos.</p> <p>6. En virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en este artículo, así como sus renovaciones, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 y en la normativa de asilo.</p> <p>7. La concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales concedida por los supuestos de arraigo, con excepción de la que se conceda a los menores de edad, llevará aparejada una autorización de trabajo en España durante la vigencia de aquella. En la misma situación se hallarán las personas previstas en el artículo 31.3 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y</p>	
---	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>de la condición de refugiado.</p> <p>En los demás supuestos, el extranjero podrá solicitar, personalmente, la correspondiente autorización para trabajar en los registros de los órganos competentes para su tramitación. Dicha solicitud podrá presentarse de manera simultánea con la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales o bien durante el período de vigencia de aquella, y en su concesión será preciso acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b), c), d), e) del artículo 50. No obstante, los requisitos a que se refiere la párrafo c) del artículo 50 se acreditarán en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 51 de este reglamento.</p>	
---	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
	<p><b>Artículo 125. Autorización de residencia temporal por razones de protección internacional.</b></p> <p>Se podrá conceder una autorización por razones de protección internacional a las personas a las que el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección internacional, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado en la normativa sobre protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.</p> <p>Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos que prevea la norma de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.</p>

	<p><b>Artículo 126. Autorización de residencia temporal por razones humanitarias.</b></p> <p>Se podrá conceder una autorización por razones humanitarias en los siguientes supuestos:</p> <p><b>1.</b> A los extranjeros víctimas de los delitos tipificados en los artículos 311 a <b>315, 511.1 y 512</b> del Código Penal, de delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación tipificada en el artículo 22.4ª del Código Penal, o de delitos por conductas violentas</p>
--	---

<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b></p>
--	---

	<p>ejercidas en el entorno familiar, siempre que haya recaído resolución judicial finalizadora del procedimiento judicial en la que se establezca la condición de víctima de tales delitos.</p> <p>2. A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada, no accesible en su país de origen, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la salud o la vida. A los efectos de acreditar la necesidad, será preciso un informe clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.</p> <p>Excepcionalmente, no se requerirá que la enfermedad sea sobrevenida en el caso de necesidad de prolongar la permanencia de un menor extranjero que se haya desplazado temporalmente a España a efectos de tratamiento médico en base a lo previsto en el artículo 187 de este Reglamento, una vez agotada la posibilidad de prorrogar la situación de estancia y siempre que dicha permanencia sea imprescindible para la continuación del tratamiento. La renovación de este tipo de autorizaciones se vinculará al tiempo mínimo necesario para completar el tratamiento.</p> <p>3. A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios o proceden, a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad o la de su familia, y que reúnen los demás requisitos para obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y trabajo.</p>
	<p><b>Artículo 127. Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades públicas, razones de seguridad nacional o interés público.</b></p> <p>Se podrá conceder una autorización a las personas que colaboren con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales en cuestiones ajenas a la lucha contra redes organizadas, o cuando concurren razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.</p>

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <b>REAL DECRETO 557/2011</b></b>
	A estos efectos, dichas autoridades podrán instar a los <b>órganos</b> competentes la concesión de la autorización de residencia a la persona que se encuentre en alguno de estos supuestos.



<p><b>Artículo 46. Procedimiento.</b></p> <p>1. La autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que no requerirá visado, deberá ser solicitada personalmente por el extranjero ante el órgano competente para su tramitación, salvo en el caso de menores o incapaces, en el que podrá presentar la solicitud su representante legal, acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses. En los términos fijados en la resolución del Ministro del Interior por la que se autorice la permanencia del interesado en España en los casos del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, se podrá eximir de este requisito.</p> <p>b) En los casos en que se exija, contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario con una duración mínima de un año, cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada.</p> <p>c) Documentación acreditativa de encontrarse en alguna de las situaciones a las que se refiere el artículo anterior.</p> <p>2. En particular, para acreditar que se reúnen las condiciones establecidas para los supuestos de arraigo, la documentación aportada deberá ajustarse a las siguientes exigencias:</p> <p>a) En caso de que el interesado fuera mayor de edad penal, deberá aportar certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país o países en que haya residido durante los cinco años anteriores a su entrada en España, en el que no deberán constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español.</p>	<p><b>Artículo 128. Procedimiento.</b></p> <p>1. La autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que no requerirá visado, deberá ser solicitada personalmente por el extranjero ante el órgano competente para su tramitación, salvo en el caso de menores o incapaces, en el que podrá presentar la solicitud su representante legal, acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>a) <b>Copia del</b> pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses, <b>previa exhibición del documento original</b>. En los términos fijados en la resolución del Ministro del Interior por la que se autorice la permanencia del interesado en España en los casos <b>previstos en los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre</b>, se podrá eximir de este requisito.</p> <p>b) En los casos en que se exija, contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario, cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización solicitada.</p> <p>c) Documentación acreditativa de encontrarse en alguna de las situaciones a las que se refieren los artículos anteriores.</p> <p>2. En particular, para acreditar que se reúnen las condiciones establecidas para los supuestos de arraigo, la documentación aportada deberá ajustarse a las siguientes exigencias:</p> <p>a) En caso de que el interesado fuera mayor de edad penal, deberá aportar certificado de antecedentes penales <b>o documento equivalente</b> expedido por las autoridades del país o países en que haya residido durante los cinco años anteriores a su entrada en España, en el que no deberán constar condenas por delitos existentes</p>
---	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por **REAL DECRETO 2393/2004**

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por **REAL DECRETO 557/2011**

<p>b) En el supuesto de arraigo laboral, a los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite.</p> <p>c) En los supuestos de arraigo acreditado mediante informe emitido por un ayuntamiento, en éste deberá constar el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio, los medios de vida con los que cuente, su grado de conocimiento de las lenguas que se utilicen, la inserción en las redes sociales de su entorno, los programas de inserción sociolaboral de instituciones públicas o privadas en los que haya participado y cuantos otros extremos puedan servir para determinar su grado de arraigo.</p> <p>El ayuntamiento correspondiente podrá recomendar que se exima al extranjero de la necesidad de contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con medios de vida suficientes.</p> <p>3. En los supuestos de solicitudes presentadas por las víctimas de los delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, los interesados podrán presentar la solicitud cuando se haya dictado a favor de la víctima una orden judicial de protección, y podrá concederse la autorización de residencia una vez que haya recaído sentencia por los delitos de que se trate.</p> <p>4. El órgano competente podrá requerir del solicitante que aporte los documentos señalados en los artículos anteriores u otros documentos que sean necesarios para justificar los motivos de la solicitud, y le manifestará que, de no hacerlo en el plazo que se señale en la notificación, que no podrá ser superior a un mes, se le tendrá por desistido de la solicitud y se producirá el archivo del procedimiento.</p> <p>5. Asimismo, el órgano competente podrá requerir la comparecencia del solicitante y mantener con él</p>	<p>en el ordenamiento español.</p> <p>b) En los supuestos de arraigo social, se deberá presentar documentación acreditativa del grado de parentesco alegado o, en su caso, el correspondiente informe de arraigo. Igualmente, en caso de solicitarse la exención de la necesidad de contar con un contrato de trabajo, se deberá presentar documentación acreditativa de contar con medios económicos suficientes o, en su caso, del cumplimiento de los requisitos previstos en relación con la actividad por cuenta propia.</p> <p>3. El órgano competente para resolver comprobará si con la solicitud se acompaña la documentación exigida y, si estuviera incompleta, formulará al solicitante el oportuno requerimiento a fin de que se subsanen los defectos observados en el plazo que se señale en la notificación, que no podrá ser superior a un mes, advirtiéndole que de no subsanarse los mismos en el indicado plazo se le tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de su expediente, dictándose al efecto la oportuna resolución.</p> <p>4. Asimismo, el órgano competente podrá requerir la comparecencia del solicitante y mantener con él</p>
---	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>una entrevista personal. Cuando se determine la celebración de la entrevista, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración, además del intérprete, en caso necesario, y quedará constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado. Si los representantes de la Administración llegan al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la veracidad de otras circunstancias en que se ha basado la solicitud, se recomendará la denegación de la autorización y se remitirá copia del acta al organismo competente para resolver. En caso de que surgieran dudas sobre el criterio a seguir, el órgano competente deberá elevar la consulta correspondiente a la Dirección General de Inmigración.</p> <p>6. En los supuestos a los que se refiere el apartado 5 del artículo anterior, la competencia para su resolución corresponderá:</p> <p>a) A la Secretaría de Estado de Seguridad cuando la autorización esté basada en la colaboración con las autoridades policiales, fiscales y judiciales y en los casos de seguridad nacional. A la solicitud basada en estos supuestos se acompañará el informe desde la jefatura correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean del Estado, ya sean de la Comunidad Autónoma, así como, en su caso, el de la autoridad fiscal o judicial, para acreditar las razones que la sustentan.</p> <p>b) A la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en los casos de colaboración con las demás autoridades administrativas y por razones de interés público.</p> <p>c) En los supuestos de los párrafos a) y b), las autoridades mencionadas podrán delegar las facultades conferidas en los Subdelegados del Gobierno o en los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. Igualmente, en el caso del párrafo a) esta facultad</p>	<p>una entrevista personal. Cuando se determine la celebración de la entrevista, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración, además del intérprete, en caso necesario, y quedará constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.</p> <p>Si los representantes de la Administración llegan al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la veracidad de otras circunstancias en que se ha basado la solicitud, se recomendará la denegación de la autorización y se remitirá copia del acta al órgano competente para resolver. En caso de que surgieran dudas sobre el criterio a seguir, el órgano competente deberá elevar la consulta correspondiente a la Dirección General de Inmigración.</p> <p>5. En los supuestos a los que se refiere el <b>artículo 127</b>, la competencia para su resolución corresponderá:</p> <p>a) <b>Al titular de</b> la Secretaría de Estado de Seguridad cuando la autorización esté basada en la colaboración con las autoridades policiales, fiscales y judiciales y en los casos de seguridad nacional. A la solicitud basada en estos supuestos se acompañará el informe desde la jefatura correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean del Estado, ya sean de la Comunidad Autónoma, así como, en su caso, el de la autoridad fiscal o judicial, para acreditar las razones que la sustentan.</p> <p>b) Al <b>titular de</b> Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en los casos de colaboración con las demás autoridades administrativas y por razones de interés público.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>podrá delegarse en el Director General de la Policía o en el Comisario General de Extranjería y Documentación.</p> <p>7. La eficacia de la autorización concedida en el supuesto de arraigo del artículo 45.2.b) de este Reglamento estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación realizada al solicitante. Cumplida la condición, la autorización comenzará su período de vigencia.</p> <p>8. En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales o, en su caso, desde su entrada en vigor, el extranjero deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero.</p>	<p>6. La eficacia de la autorización concedida en el supuesto de arraigo del artículo <b>124.2</b> de este Reglamento estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación realizada al solicitante, <b>salvo en el caso de que se haya eximido al interesado de la presentación de contrato de trabajo y siempre que los medios económicos no deriven de la realización de una actividad por cuenta propia</b>. Cumplida la condición, la autorización comenzará su periodo de vigencia.</p> <p>7. En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales o, en su caso, desde su entrada en vigor, el extranjero deberá solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero <b>ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes</b>.</p>

	<p><b>Artículo 129. Autorización de trabajo del titular de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.</b></p> <p>1. La concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales <b>por razones</b> de arraigo llevará aparejada una autorización de trabajo en España durante la vigencia de aquélla, <b>con excepción de la que se conceda a los menores de edad laboral, o en casos de exención del requisito de contar con contrato por contar con medios económicos que no deriven de la realización de una actividad por cuenta propia.</b></p> <p>En la misma situación se hallarán las personas <b>a las que se refiere el artículo 125 de este Reglamento.</b></p> <p>2. En los demás supuestos, el extranjero podrá solicitar, personalmente, la correspondiente autorización <b>de trabajo ante el órgano competente</b> para su tramitación. Dicha solicitud podrá presentarse de manera simultánea con la solicitud de autorización de residencia por circunstancias</p>
<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b></p>
	<p>excepcionales o bien durante el periodo de vigencia de aquélla, y <b>para</b> su concesión será preciso <b>cumplir:</b></p> <p>a) De solicitarse una autorización de trabajo por cuenta ajena, los requisitos establecidos en los párrafos b), c), d), e) <b>y f)</b> del artículo <b>64.3.</b></p> <p><b>b) De solicitarse una autorización de trabajo por cuenta propia, los requisitos previstos en el artículo 105.3.</b></p>

<p><b>Artículo 47. Renovación y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales.</b></p> <p>1. Los titulares de una autorización concedida por el Secretario de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán renovar la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que permanecen las razones que motivaron su concesión. Solamente en el caso de que las autoridades concluyesen que han cesado las razones que motivaron su concesión, podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por este Reglamento para su obtención, con excepción del visado.</p> <p>2. Los supuestos de autorizaciones por circunstancias excepcionales concedidas por los motivos recogidos en el apartado 3 del artículo 45 se regirán para su renovación por la normativa de asilo y protección temporal aplicable.</p> <p>3. En las autorizaciones concedidas por los demás supuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98, los titulares de la autorización podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las licencias</p>	<p><b>Artículo 130. Prórroga y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales.</b></p> <p>1. En virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base <b>en los artículos precedentes</b>, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y en la normativa <b>sobre protección internacional</b>.</p> <p>2. Los titulares de una autorización concedida por el <b>titular de la Secretaría</b> de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán <b>prorrogar</b> la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que persisten las razones que motivaron su concesión. Solamente en el caso de que las autoridades concluyesen que han cesado las razones que motivaron su concesión, podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo <b>de acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de este Reglamento</b>.</p> <p>3. Los supuestos de autorizaciones por circunstancias excepcionales concedidas por los motivos recogidos en el <b>artículo 125</b> se regirán para su renovación por la normativa <b>sobre protección internacional</b> aplicable.</p> <p>4. En las autorizaciones concedidas por los demás supuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo <b>202</b>, los titulares de la autorización podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las licencias</p>
<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b></p>



<p>o permisos administrativos imprescindibles para el puesto que se pretende ocupar.</p> <p>4. Los extranjeros podrán solicitar la autorización de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo o, cuando se haya previsto, la renovación de la autorización por circunstancias excepcionales, durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p>	<p>o permisos administrativos imprescindibles para el puesto que se pretende ocupar.</p> <p>5. Los extranjeros podrán solicitar la autorización de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo o, cuando se haya previsto, la <b>prórroga</b> de la autorización por circunstancias excepcionales, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los <b>noventa días naturales</b> posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p>
--	---





REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
	TÍTULO V. RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
	CAPÍTULO II. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

	<p><b>Artículo 131. Denuncia a favor de una mujer extranjera víctima de violencia de género.</b></p> <p>Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracción del artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, será inmediatamente suspendido por el instructor hasta la finalización del proceso penal. En caso de que el expediente sancionador no hubiera sido iniciado en el momento de presentación de la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal.</p> <p>La autoridad ante la que se hubiera presentado la denuncia informará inmediatamente a la mujer extranjera de las posibilidades que le asisten en el marco de este artículo, así como de los derechos que le asisten al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Víctima de Violencia de Género.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p><b>Artículo 132. Inicio del procedimiento relativo a la residencia temporal y trabajo de la mujer extranjera víctima de violencia de género.</b></p> <p>1. La mujer extranjera que se encuentre en la situación descrita en el artículo anterior podrá solicitar, ante la Oficina de Extranjería correspondiente, una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, por sí misma o a través de representante, desde el momento en que se haya dictado una orden de protección a su favor o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género.</p> <p>2. En el momento de presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal, la mujer extranjera, por sí misma o a través de representante, podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad, o de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en caso de mayores de dieciséis años, que se encuentren en España en el momento de la denuncia.</p> <p>3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, de la mujer extranjera y/o, en su caso, de sus hijos menores de edad. En su caso, este documento será sustituido por cédula de inscripción, en vigor.</p> <p>b) En su caso, documento por el que se otorgue la representación legal en favor de la persona física que formule la solicitud.</p> <p>c) Copia de la orden de protección o del informe del Ministerio Fiscal.</p> <p>La tramitación de las solicitudes presentadas al amparo de este artículo tendrá carácter preferente.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p><b>Artículo 133. Autorización provisional de residencia temporal y trabajo de la mujer extranjera víctima de violencia de género.</b></p> <p>1. Presentada la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo de la mujer víctima de violencia de género, el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente concederá de oficio una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades, siempre que exista una orden de protección a favor de la mujer extranjera o un informe del Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de violencia de género.</p> <p>2. Concedida la autorización provisional a favor de la mujer extranjera, ésta implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial. La autorización provisional a favor de hijos mayores de dieciséis años tendrá el mismo alcance.</p> <p>3. La autorización provisional tendrá eficacia desde el momento de su concesión. Su vigencia estará condicionada a la concesión o denegación de la autorización definitiva.</p> <p>4. En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta, que tendrá vigencia anual, hará constar que su titular está autorizada a residir y trabajar en España, pero no su carácter provisional ni su condición de víctima de violencia de género.</p> <p>Las disposiciones previstas en este apartado serán de aplicación, en su caso, a las autorizaciones concedidas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	5. La Delegación o Subdelegación del Gobierno que haya concedido las autorizaciones provisionales informará de esta circunstancia a la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal.

	<p><b>Artículo 134. Finalización del procedimiento relativo a la residencia temporal y trabajo de la mujer extranjera víctima de violencia de género.</b></p> <p>Concluido el proceso penal, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la Oficina de Extranjería y a la Comisaría de Policía correspondientes, a los siguientes efectos:</p> <p>1. De haber concluido con sentencia condenatoria o resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, a los efectos de:</p> <p>a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, la concesión de ésta por el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente y su notificación, en el plazo máximo de veinte días desde que a la Oficina de Extranjería le conste la sentencia.</p> <p>La duración de la autorización será de cinco años. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el tiempo durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional concedida en base al artículo anterior.</p> <p>En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizada a residir y trabajar en España, pero no su condición de víctima de violencia de género.</p> <p>Las disposiciones previstas en este apartado serán de aplicación, en su caso, a las autorizaciones</p>
<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></p>



	<p>solicitadas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.</p> <p>b) Si no se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, el Ministerio Fiscal informará a la mujer extranjera sobre la posibilidad que le asiste en base al presente artículo de solicitar una autorización de residencia temporal y trabajo a su favor, así como autorizaciones de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.</p> <p>Igualmente, le informarán de que dispone de un plazo de seis meses desde la fecha en la que le haya sido notificada la sentencia, para la presentación de la solicitud o solicitudes.</p> <p>El procedimiento relativo a la solicitud de autorización será tramitado en los términos previstos en el artículo 132. La autorización que, en su caso, se conceda, tendrá los efectos y vigencia previstos en la letra anterior. Ello también será de aplicación a solicitudes presentadas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.</p> <p>c) La concesión de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de acuerdo con lo previsto en este apartado supondrá el archivo del procedimiento sancionador que pudiera existir con la mujer extranjera víctima de violencia de género.</p> <p>2. De haber concluido con sentencia no condenatoria o resolución judicial de la que no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, a los efectos de:</p> <p>a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo en base a lo dispuesto en el artículo 132, la denegación de la autorización. En su caso, la denegación de las solicitudes presentadas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>objetivamente capaces de proveer sus necesidades.</p> <p>b) La automática pérdida de eficacia de la autorización provisional que se hubiera podido conceder, cuya titularidad no podrá ser alegada de cara a la obtención de la condición de residente de larga duración. Esta previsión será de aplicación, en su caso, a las autorizaciones provisionales de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.</p> <p>c) El inicio o la continuación del procedimiento sancionador en materia de extranjería inicialmente no incoado o suspendido, y su tramitación y resolución de acuerdo con lo previsto en el título III de la Ley Orgánica 4/2000.</p>



<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	<b>TÍTULO V. RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES</b>
	<b>CAPÍTULO III. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales por colaboración contra redes organizadas</b>
<p><b>Artículo <u>117</u>. Colaboración contra redes organizadas</b></p> <p>1. <i>Cuando se encuentre en curso un expediente sancionador y el expedientado fuera extranjero, el instructor, antes de efectuar la propuesta definitiva al órgano competente, si tiene conocimiento de la posible concurrencia de circunstancias de colaboración con la Justicia, especialmente las previstas en el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, podrá proponer la exención de responsabilidad y la no expulsión de las personas a las que se alude en el aquel, en consideración a su colaboración o cooperación con las autoridades o sus agentes, proporcionando datos esenciales o declarando en los procesos correspondientes, como víctima, perjudicado o testigo, o denunciando a las autoridades competentes a los autores y cooperadores de los tráfico ilícitos de seres humanos a los que el indicado artículo 59 se refiere.</i></p>	<p><b>Artículo 135. Exención de responsabilidad.</b></p> <p>1. De conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la autoridad con la que esté colaborando un extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, remitirá informe sobre dicha colaboración al órgano administrativo competente para la instrucción del expediente sancionador, a los efectos de que pueda proponer al Delegado o Subdelegado competente la exención de responsabilidad de éste en relación con la infracción del artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>2. Será competente para determinar la exención de responsabilidad del extranjero el Delegado o Subdelegado del Gobierno en la provincia en la que se hubiera incoado el procedimiento</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p><i>Si se dictase resolución por la que se declare al expedientado exento de responsabilidad administrativa, la autoridad gubernativa competente podrá conceder, a elección del extranjero, y para facilitarle su integración social, autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, así como autorización para trabajar, o facilitarle el retorno a su país de procedencia. La concesión de dicha documentación podrá ser revocada si el titular, durante el tiempo que dure el procedimiento en el que es víctima, perjudicado o testigo, cesa en su cooperación o colaboración con las autoridades policiales o judiciales.</i></p> <p><i>2. Durante el periodo de cooperación o colaboración, la Administración competente que corresponda proporcionará al extranjero la atención social y jurídica necesaria, sin perjuicio de las medidas de protección que pueda acordar el juez instructor según lo establecido en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.</i></p> <p><i>Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo, y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad gubernativa a los efectos de que valore la inejecución de su expulsión durante el tiempo necesario. En caso de que ya hubiera sido expulsado, se procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, todo ello sin perjuicio de que se adopte alguna de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.</i></p>	<p>administrativo sancionador en materia de extranjería.</p> <p>3. En el marco de la decisión sobre la exención de responsabilidad del extranjero, el Delegado o Subdelegado del Gobierno decidirá igualmente sobre la suspensión temporal del procedimiento sancionador incoado o de la ejecución de la medida de expulsión o devolución que ya hubiera sido acordada.</p> <p>4. De no determinarse la exención de responsabilidad, se decidirá la continuación del procedimiento sancionador o la ejecución de la medida de expulsión o devolución suspendida.</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p><b>Artículo 136. Autorización de residencia y trabajo por colaboración con autoridades administrativas no policiales.</b></p> <p>1. Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, la autoridad que hubiera dictado la resolución en tal sentido informará al extranjero de la posibilidad que le asiste de presentar una solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, si la colaboración contra redes organizadas se produce con autoridades administrativas no policiales.</p> <p>2. La solicitud de autorización, que será presentada ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno que hubiera determinado la exención de responsabilidad, podrá ser presentada por el extranjero personalmente o a través de representante.</p> <p>La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del extranjero. En su caso, este documento será sustituido por cédula de inscripción, en vigor.</p> <p>b) En su caso, documento público por el que se otorgue la representación legal en favor de la persona física que formule la solicitud.</p> <p>3. La Delegación o Subdelegación del Gobierno dará traslado inmediato de la solicitud a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para su resolución, adjuntado informe sobre el sentido de la resolución y el informe emitido por la autoridad con la que hubiese colaborado.</p> <p>4. La remisión de la solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, en caso de incluir informe favorable a la concesión de ésta, supondrá la concesión de autorización provisional de residencia y trabajo por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, para la cual no será necesario que el interesado presente</p>
--	---



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>una nueva solicitud.</p> <p>5. El Delegado o Subdelegado del Gobierno notificará al interesado que la propuesta de inicio de oficio del procedimiento ha sido realizada y la concesión o no de la autorización provisional de residencia y trabajo.</p> <p>6. Concedida, en su caso, la autorización provisional, ésta implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial.</p> <p>La autorización provisional tendrá eficacia desde el momento de la notificación de su concesión y hasta que se dicte resolución sobre la solicitud de autorización definitiva.</p> <p>En el plazo de un mes desde su concesión, el titular de la autorización provisional habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizado a residir y trabajar en España, pero no su carácter provisional ni su condición de colaborador en actuaciones contra redes organizadas.</p> <p>La Tarjeta de Identidad de Extranjero será renovable con carácter anual.</p> <p>7. Resuelto favorablemente, en su caso, el procedimiento sobre la autorización definitiva, por el titular de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la autorización de residencia y trabajo tendrá vigencia de cinco años e implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial.</p> <p>Ello, sin perjuicio de la posibilidad de su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el tiempo durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional concedida en base a este artículo.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>En el plazo de un mes desde su concesión, su titular habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizado a residir y trabajar en España, pero no su condición de colaborador contra redes organizadas.</p> <p>8. La denegación de la autorización de residencia y trabajo, que será notificada al interesado a través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno que hubiera declarado la exención de responsabilidad, supondrá la pérdida de vigencia de la autorización provisional que se hubiera podido conceder, sin necesidad de pronunciamiento administrativo expreso. En este caso, la titularidad de la autorización provisional no podrá ser alegada de cara a la obtención de la condición de residente de larga duración.</p> <p>9. El apartado anterior será entendido sin perjuicio de la posibilidad de que el extranjero inicie un procedimiento de solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, alegando la concurrencia de un supuesto distinto al previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000.</p>
	<p><b>Artículo 137. Autorización de residencia y trabajo por colaboración con autoridades administrativas policiales, fiscales o judiciales.</b></p> <p>1. Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, la autoridad que hubiera dictado la resolución en tal sentido informará al extranjero de la posibilidad que le asiste de presentar una solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, si la colaboración contra redes organizadas se produce con autoridades policiales, fiscales o judiciales.</p> <p>2. La solicitud de autorización se presentará por el extranjero ante la correspondiente unidad policial de extranjería, personalmente o a través de representante.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del extranjero. En su caso, este documento será sustituido por cédula de inscripción, en vigor.</p> <p>b) En su caso, documento público por el que se otorgue la representación legal en favor de la persona física que formule la solicitud.</p> <p>3. La unidad policial de extranjería dará traslado inmediato de la solicitud, junto con el informe emitido por la autoridad con la que hubiese colaborado y el informe de la propia unidad policial sobre el sentido de la resolución, a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que formulará propuesta a la Secretaría de Estado de Seguridad para su resolución.</p> <p>La unidad policial notificará al interesado que la propuesta de inicio de oficio del procedimiento ha sido realizada.</p> <p>4. En caso de que el informe de la unidad policial de extranjería fuese favorable a la concesión de la autorización, la remisión de la solicitud a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, supondrá la concesión de autorización provisional de residencia y trabajo.</p> <p>5. La unidad policial de extranjería notificará al interesado la concesión o no de la autorización provisional de residencia y trabajo.</p> <p>6. Concedida, en su caso, la autorización provisional, ésta implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial.</p> <p>La autorización provisional tendrá eficacia desde el momento de la notificación de su concesión y hasta que se dicte resolución sobre la solicitud de autorización definitiva. En el plazo de un mes desde su concesión, el titular de la autorización</p>
--	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>provisional habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizado a residir y trabajar en España, pero no su carácter provisional ni su condición de colaborador en actuaciones contra redes organizadas. La Tarjeta de Identidad de Extranjero será renovable con carácter anual.</p> <p>7. Resuelto favorablemente, en su caso, el procedimiento sobre la autorización definitiva, por el titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, la autorización de residencia y trabajo tendrá vigencia de cinco años e implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial.</p> <p>Ello, sin perjuicio de la posibilidad de su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el tiempo durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional concedida en base a este artículo.</p> <p>En el plazo de un mes desde su concesión, su titular habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía competentes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizado a residir y trabajar en España, pero no su condición de colaborador contra redes organizadas.</p> <p>8. La denegación de la autorización de residencia y trabajo, que será notificada al interesado y comunicada a la Delegación o Subdelegación del Gobierno que hubiera declarado la exención de responsabilidad, supondrá la pérdida de vigencia de la autorización provisional que se hubiera podido conceder, sin necesidad de pronunciamiento administrativo expreso. En este caso, la titularidad de la autorización provisional no podrá ser alegada de cara a la obtención de la condición de residente de larga duración.</p> <p>9. El apartado anterior será entendido sin perjuicio</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>de la posibilidad de que el extranjero inicie un procedimiento de solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, alegando la concurrencia de un supuesto distinto al previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000.</p>
	<p><b>Artículo 138. Retorno asistido al país de procedencia del extranjero.</b></p> <p>1. Sin perjuicio de lo que las autoridades competentes en el marco de la investigación contra redes organizadas pudieran determinar sobre su necesaria permanencia en territorio español, de acuerdo con la normativa aplicable a su colaboración en dicha investigación o procedimiento, el extranjero, una vez declarada su exención de responsabilidad, podrá solicitar el retorno asistido a su país de procedencia.</p> <p>2. El extranjero podrá presentar dicha solicitud, dirigida a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno que hubiera determinado la exención de su responsabilidad.</p> <p>La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración facilitará la gestión y asistencia del retorno voluntario. En todo caso, el retorno asistido comprenderá la evaluación, previa a la partida, de los riesgos y la seguridad, el transporte, así como la asistencia en el punto de partida, tránsito y destino.</p> <p>3. En caso de que se hubiera determinado la necesaria permanencia del extranjero en España en relación con su colaboración en la investigación contra redes organizadas, se dará trámite a la solicitud de retorno asistido tan pronto como desaparezcan las causas que determinan su obligada permanencia en territorio español.</p>



	<p><b>Artículo 139. Extranjeros menores de edad.</b></p> <p>En la aplicación de las previsiones de este capítulo a extranjeros menores de edad las actuaciones realizadas estarán en todo momento sometidas a la consecución del interés superior del menor, estableciéndose medidas de protección específicas</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	<b>TÍTULO V. RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES</b>
	<b>CAPÍTULO IV. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de extranjeros víctimas de trata de seres humanos</b>
	<p><b>Artículo 140. Coordinación de las actuaciones.</b></p> <p>Las Secretarías de Estado de Inmigración y Emigración, de Justicia, de Seguridad y de Igualdad impulsarán la adopción de un protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos en el que se establezcan las bases de coordinación y actuación de las instituciones y administraciones con competencias relacionadas con este capítulo.</p> <p>En el citado protocolo se recogerá el ámbito y forma de participación de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras asociaciones de carácter no lucrativo que, por su objeto, estén especializadas en la acogida y/o protección de las víctimas de trata de seres humanos y que participen en los programas desarrollados por las administraciones públicas para la asistencia y protección de las mismas.</p>

	<p><b>Artículo 141. Identificación de las potenciales víctimas no comunitarias de trata de seres humanos.</b></p> <p>1. Cualquiera que tenga noticia de la existencia de una posible víctima de trata de seres humanos informará inmediatamente de esta circunstancia a la autoridad policial competente para la investigación del delito o a la Delegación o Subdelegación de Gobierno de la provincia donde la potencial víctima se encuentre, que activarán sin dilación alguna las previsiones del presente artículo.</p> <p>De oficio, a instancia de parte, o por orden del Delegado o Subdelegado del Gobierno, las autoridades policiales, tan pronto tengan indicios razonables de la existencia de una potencial víctima de trata de seres humanos extranjera en</p>
--	--

<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</p>
---	--

	<p>situación irregular, le informarán fehacientemente y por escrito, en un idioma que le resulte comprensible, de las previsiones establecidas en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en este Reglamento. Igualmente, garantizarán que la misma conozca la posibilidad que le asiste de ser derivada a las autoridades autonómicas o municipales competentes en materia de asistencia social y sanitaria.</p> <p>2. La identificación de la víctima se realizará por las autoridades policiales con formación específica en la investigación de la trata de seres humanos y en la identificación de sus víctimas.</p> <p>Cuando la identificación exija la toma de declaración de la víctima potencial de trata, se hará mediante entrevista personal realizada en condiciones adecuadas a las circunstancias personales de la víctima, asegurando la ausencia de personas del entorno de los explotadores, y, en la medida en que sea posible, la prestación del debido apoyo jurídico, psicológico y asistencial.</p> <p>Se recabará toda la información disponible que pueda servir para la identificación de la posible víctima y las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las personas víctimas de trata podrán aportar cuanta información consideren relevante a estos efectos. En aras de la protección de la integridad de la misma tal información tendrá carácter reservado</p> <p>Durante toda esta fase de identificación, el expediente sancionador o, en su caso, la expulsión o devolución acordada quedarán inmediatamente suspendidos y la autoridad policial competente, si fuera necesario, velará por la seguridad y protección de la potencial víctima.</p>
	<p><b>Artículo 142. Periodo de restablecimiento y reflexión.</b></p> <p>1. Cuando la identificación haya sido efectuada por las unidades de extranjería, éstas elevarán, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas y previa conformidad de la víctima, la correspondiente propuesta sobre la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión a la Delegación o</p>

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>Subdelegación del Gobierno de la provincia donde se hubiere realizado la identificación. La propuesta será favorable cuando estime que existen motivos razonables para creer que el extranjero es víctima potencial de trata de seres humanos y, en tal caso, incluirá la duración del periodo de reflexión, que será de al menos treinta días y, en todo caso, suficiente para que el extranjero pueda restablecerse y decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal.</p> <p>La propuesta irá acompañada del expediente completo, informe de la autoridad policial sobre la situación administrativa y personal de la misma, así como de otros que pudieran obrar en el procedimiento y, especialmente, los procedentes de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las personas víctimas de trata que se hubieran aportado en éste.</p> <p>2. Cuando la víctima haya sido identificada por otras autoridades policiales, éstas remitirán, con la mayor brevedad, a la unidad de extranjería del lugar donde se hubiera realizado la identificación, un informe motivado sobre la existencia de indicios razonables de que la persona podría ser víctima de trata de seres humanos, junto con la solicitud de establecimiento del periodo de reflexión y toda la información y documentación de interés para resolver sobre su concesión.</p> <p>La unidad de extranjería competente procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 de este artículo.</p> <p>3. El Delegado Subdelegado competente resolverá sobre la propuesta de concesión del periodo de restablecimiento y reflexión y sobre su duración en el plazo máximo de cinco días, transcurrido el cual el periodo se entenderá concedido por la duración reseñada en la propuesta. No obstante, si en el momento de elevarse a la Delegación o Subdelegación de Gobierno la propuesta favorable la víctima se encontrara ingresada en un Centro de Internamiento de Extranjeros, la resolución deberá realizarse en el plazo de veinticuatro horas.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>Los plazos establecidos en este apartado serán computados desde la fecha de recepción de la propuesta en la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente.</p> <p>4. La resolución sobre el periodo de restablecimiento y reflexión será notificada a la persona interesada, de manera inmediata y por el medio más rápido, por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, directamente o a través de la autoridad policial que hubiera realizado la propuesta de concesión, a la que en cualquier caso se dará conocimiento de la resolución. Si dicha autoridad policial no fuera la misma que inició la investigación, la resolución será igualmente comunicada a esta última, así como a la que tenga a la víctima bajo su custodia.</p> <p>5. La resolución, de ser favorable, hará mención expresa, entre otros extremos, a la decisión de suspender temporalmente el procedimiento sancionador que hubiera sido incoado o la ejecución de la medida de expulsión o devolución que hubiera sido acordada en relación con la infracción prevista en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Igualmente, supondrá la propuesta a la autoridad judicial competente de la puesta en libertad del extranjero en caso de que se hubiera acordado la medida cautelar de su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros.</p> <p>En caso de que el procedimiento sancionador o la medida de expulsión o devolución suspendida fuera competencia de otro Delegado o Subdelegado del Gobierno, se le dará comunicación de la resolución de concesión del periodo de restablecimiento y reflexión, a los efectos que procedan en virtud de lo establecido en el párrafo anterior.</p> <p>6. La resolución por la que, en su caso, se conceda el periodo de restablecimiento y reflexión autorizará la estancia del extranjero en territorio español por la duración que se haya determinado para éste.</p> <p>7. Durante el periodo de restablecimiento y</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	reflexión, la autoridad policial competente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Protocolo previsto en el artículo 140, velará por la seguridad y protección de la persona. Igualmente, garantizará que la misma conozca la posibilidad que le asiste de ser derivada a las autoridades autonómicas o municipales competentes en materia de asistencia social.



	<p><b>Artículo 143. Exención de responsabilidad.</b></p> <p>1. La autoridad con la que la víctima de trata de seres humanos estuviera colaborando en el marco de la investigación del delito o del procedimiento penal, podrá proponer al Delegado o Subdelegado competente la exención de responsabilidad de la misma en relación con la infracción del artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a la situación personal de la víctima, el Delegado o Subdelegado del Gobierno podrá determinar de oficio la exención de responsabilidad.</p> <p>2. De determinarse la no exención de responsabilidad, se levantará la suspensión del procedimiento sancionador o de la ejecución de la medida de expulsión o devolución.</p> <p>En caso de que el procedimiento sancionador o la medida expulsión o devolución suspendida fuera competencia de otro Delegado o Subdelegado del Gobierno, se le dará comunicación de lo decidido sobre la exención de responsabilidad del extranjero a los efectos de archivar el procedimiento, de continuarlo o de revocar la medida de expulsión o devolución decretada.</p> <p>3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la continuación del procedimiento sancionador estará igualmente condicionada, en caso de que el extranjero inicie un procedimiento de solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, alegando la concurrencia de un supuesto distinto al previsto en el artículo 59bis de la Ley Orgánica 4/2000, a la resolución del mismo.</p>
<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b></p>

	<p><b>Artículo 144. Autorización de residencia y trabajo.</b></p> <p>1. Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, el órgano que hubiera dictado la resolución en tal sentido informará al extranjero de la posibilidad que le asiste de presentar una solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular de la Secretaría de Estado de Seguridad o de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, en función de que la motivación resida, respectivamente, en la colaboración de la víctima en la investigación del delito o en su situación personal.</p> <p>De haberse determinado la exención de responsabilidad en base a una doble concurrencia de las circunstancias citadas, se le informará de la posibilidad que le asiste de iniciar sendos procedimientos de solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.</p> <p>2. La solicitud de autorización, que será presentada ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno que hubiera determinado la exención de responsabilidad, podrá ser presentada por el extranjero personalmente o a través de representante.</p> <p>Salvo concurrencia de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 59bis.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>a) Copia del pasaporte completo, o título de viaje, en vigor, del extranjero. En su caso, este documento será sustituido por cédula de inscripción, en vigor.</p> <p>b) En su caso, documento público por el que se otorgue la representación legal en favor de la persona física que formule la solicitud.</p> <p>3. La Delegación o Subdelegación del Gobierno dará traslado inmediato de la solicitud a la Secretaría de Estado competente para su</p>
--	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>resolución, adjuntado informe sobre la situación administrativa y personal del extranjero y sobre el sentido de la resolución.</p> <p>En caso de que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de este artículo, el extranjero hubiera presentado dos solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de acuerdo con lo previsto en este capítulo, la Delegación o Subdelegación del Gobierno, en los correspondientes traslados a las Secretarías de Estado competentes, harán constar la existencia de los dos procedimientos.</p> <p>4. La remisión de la solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, en caso de incluir informe favorable a la concesión de ésta, supondrá la concesión de autorización provisional de residencia y trabajo por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, para la cual no será necesario que el interesado presente una nueva solicitud.</p> <p>La Delegación o Subdelegación del Gobierno comunicará al interesado el traslado de la solicitud a la Secretaría de Estado competente para su resolución y le notificará la concesión o no de la autorización provisional de residencia y trabajo.</p> <p>La autorización provisional implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial, y tendrá eficacia desde el momento de la notificación de su concesión y hasta que se dicte resolución sobre la solicitud de autorización realizada.</p> <p>En el plazo de un mes desde su concesión, el titular de la autorización provisional habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizado a residir y trabajar en España, pero no su carácter provisional ni su condición de víctima de trata de seres humanos.</p> <p>La Tarjeta de Identidad de Extranjero será renovable con carácter anual.</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>5. Resuelto favorablemente el procedimiento sobre la autorización definitiva por el titular de la Secretaría de Estado competente, la autorización de residencia y trabajo tendrá vigencia de cinco años e implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el tiempo durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional concedida en base a este artículo.</p> <p>En el plazo de un mes desde su concesión, su titular habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta hará constar que su titular está autorizado a residir y trabajar en España, pero no su condición de víctima de trata de seres humanos.</p> <p>6. La denegación de la autorización de residencia y trabajo supondrá la pérdida de vigencia de la autorización provisional que se hubiera podido conceder, sin necesidad de pronunciamiento administrativo expreso. En este caso, la titularidad de la autorización provisional no podrá ser alegada de cara a la obtención de la condición de residente de larga duración.</p> <p>7. El apartado anterior será entendido sin perjuicio de la posibilidad de que el extranjero inicie un procedimiento de solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, alegando la concurrencia de un supuesto distinto al previsto en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000.</p> <p>8. El contenido de este precepto no afectará al derecho que asiste al extranjero de solicitar y disfrutar de protección internacional.</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u>
	<p><b>Artículo 145. Retorno asistido al país de procedencia.</b></p> <p>1. El extranjero podrá solicitar el retorno asistido a su país de procedencia en cualquier momento desde que sean apreciados motivos razonables sobre su posible condición de víctima de trata de seres humanos, sin perjuicio de lo que las autoridades competentes en el marco de la investigación del delito o del procedimiento penal pudieran determinar sobre su necesaria permanencia en territorio español de acuerdo con la normativa aplicable a su participación en dicha investigación o procedimiento,</p> <p>2. Dicha solicitud, dirigida a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, podrá ser presentada ante cualquiera de las autoridades competentes en el marco de los procedimientos regulados en este capítulo.</p> <p>La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración facilitará la gestión y asistencia del retorno voluntario atendiendo a lo establecido en el artículo 16 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. En todo caso, el retorno asistido comprenderá la evaluación, previa a la partida, de los riesgos y la seguridad, el transporte, así como la asistencia en los puntos de partida, tránsito y destino.</p> <p>3. En caso de que se hubiera determinado la necesidad de que el extranjero permanezca en España en virtud de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, la solicitud de retorno asistido será tramitada tan pronto desaparezcan las causas que determinan su obligada permanencia en territorio español.</p>

	<p><b>Artículo 146. Extranjeros menores de edad víctimas de trata de seres humanos.</b></p> <p>1. En caso de que fuera determinada la minoría de edad de la víctima de trata de seres humanos, las actuaciones que deban realizarse en virtud de lo dispuesto en este capítulo velarán en todo momento por la preservación del interés superior del menor.</p>
<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004</b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b></p>



	<p>2. La institución pública responsable de la tutela legal de la víctima menor de edad o el Ministerio Fiscal podrán proponer la derivación del menor hacia recursos específicos para víctimas de trata de seres humanos, por razones de protección o de asistencia especializada.</p> <p>3. En cualquier caso, los recursos específicos para víctimas de trata de seres humanos deberán garantizar la separación entre menores y mayores de edad.</p>
--	---

## **CAPITULO V: RESIDENCIA EN VIRTUD DE REAGRUPACION FAMILIAR**

El Título I de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social reconoce entre otros, el derecho de los **extranjeros residentes** a la vida en familia y a la intimidad familiar; por tanto, pueden reagrupar con ellos a sus familiares.

Obsérvese que todos los extranjeros no tienen la condición de residentes en España pues solo lo son los titulares de una autorización de residencia en vigor.

Sin embargo, para ejercer el derecho de reagrupación familiar no basta con tener una autorización de residencia pues se exige que el reagrupante haya residido legalmente en España **durante un año y haya obtenido la renovación de dicha autorización**. Con carácter habitual estaremos hablando de extranjeros que son titulares de autorizaciones de residencia renovadas (no prorrogadas) aunque no se exige una residencia concreta; luego podrá reagrupar cualquier residente, ya tenga autorización lucrativa o no, ordinaria o excepcional, temporal o de larga duración.

Existen dos excepciones a lo anterior. Por una parte se reconoce el derecho a la reagrupación familiar sin obligación de haber residido con carácter previo en España durante un año, a los titulares de alguna de las siguientes autorizaciones:

- residencia de larga duración-UE obtenida en otro Estado miembro
- residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (Tarjeta azul-UE)
- residencia y trabajo de investigadores

Ahora bien, para poder reagrupar a los ascendientes, no basta con estar en posesión de una autorización de residencia temporal renovada, se ha de ser titular de una autorización de residencia de larga duración o de larga duración-UE concedida en España.

Una singularidad importante la constituyen los extranjeros que hubieran adquirido la residencia temporal en virtud de una previa reagrupación familiar pues solo podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación respecto de sus propios familiares, cuando cuenten con una autorización de residencia y trabajo obtenida independientemente de la autorización del reagrupante además, lógicamente de reunir el resto de los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho en cuestión. En el supuesto de los ascendientes, éstos sólo podrán ejercitar, a su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de residente de larga duración. Solo excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un hijo menor de edad o con una discapacidad que no le permita proveer a sus propias necesidades, podrá ejercer el derecho de reagrupación antes de ser residente de larga duración.

### **Familiares reagrupables**

Como ya se ha dicho es el extranjero residente en España el que ostenta el derecho de reagrupar a su familia, pero ésta no es ilimitada; tienen la condición de familiares reagrupables las siguientes personas:

- **Su cónyuge**, siempre que no exista separación de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial, dado que en España no se consiente la poligamia en ninguna de sus modalidades, ni la **poliginia** (un hombre con múltiples mujeres) ni la **poliandria** (una mujer con múltiples hombres).

Si el extranjero residente se encontrara casado en posteriores nupcias, sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la disolución de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico a través del cual hayan quedado fijadas las condiciones respecto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los hijos menores o mayores dependientes.

- **La pareja**, persona con la que se mantiene una relación de afectividad análoga a la conyugal.

Se requiere que esta unión esté inscrita en un registro público del país de origen o procedencia (el inicio del procedimiento exige la presencia del futuro reagrupado allí); en caso contrario, esto es, a falta de

inscripción o de registro público, sólo será válida si fue constituida con carácter previo al inicio de la residencia del reagrupante en España.

Son incompatibles las situaciones de matrimonio y de análoga relación de afectividad. De ninguna manera podrá reagruparse a un cónyuge y una pareja al mismo tiempo, ni se permitirá hacerlo con posterioridad si se mantiene uno u otra.

Por lo demás, resulta de aplicación a este supuesto lo previsto, en relación con lo que se ha mencionado en el punto anterior sobre el cónyuge.

- **Sus hijos y los de su cónyuge o pareja**, menores de dieciocho años en el momento de la solicitud o discapacitados que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud.

La primera cuestión en la que hay que incidir es que no son reagrupables los descendientes en general, sino solo los hijos reconocidos como tales, bien sean propios o solo del cónyuge o pareja. Si los hijos lo fueran de uno solo de los esposos (o pareja), se requerirá, además, que éste “ ejerza en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo”. Esta exigencia deriva del hecho de que la patria potestad es un derecho irrenunciable puesto que conlleva una serie de deberes respecto de los hijos por parte de ambos progenitores.

Si los hijos fueran adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los requisitos necesarios para producir efectos legales en España.

Aunque estas matizaciones que hace la Ley podrían parecer a priori innecesarias, en la práctica cotidiana no lo son en absoluto dada la variedad de situaciones que se producen.

Los hijos deben ser además, menores de 18 años (con independencia de que su ley personal pudiera reconocerles la mayoría de edad antes o después de dicha edad) en el momento en que el reagrupante presente la solicitud en España; así pues, no podrán denegarse posteriormente ni la solicitud de autorización de residencia ni la de visado por haber superado en el transcurso del procedimiento dicha edad.

Desaparece de la norma vigente el requisito de no encontrarse casados habiendo constituido ya una unidad familiar independiente.

En cuanto a la discapacidad, obviamente está dirigida a los hijos mayores de 18 años, que no puedan cubrir sus propias necesidades debido a su deteriorado estado de salud.

- **Los menores de dieciocho años o discapacitados** que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, cuando el residente extranjero sea su representante legal.

En aplicación de la legislación civil la representación legal de los menores la ejerce cualquiera de sus progenitores y en su defecto, el que ostente tal condición otorgada por Autoridad competente. Este supuesto está expresamente contemplado precisamente para aquellas situaciones en las que la representación legal la ostenta una tercera persona distinta de los progenitores.

El representante legal del mayor de edad con discapacidad será aquel que haya sido designado en la declaración judicial de incapacitación por concurrir causas físicas o psíquicas relevantes.

Cuestión de gran importancia es la especificación de que el acto jurídico del que surgen las facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español. Se recuerda que no puede tener validez en España la Institución por la que el padre o la madre cede o delega la patria potestad en otra persona debido a que, el contenido de tal institución lo conforma un conjunto de derechos y facultades configurados como normas de carácter necesario que están sustraídos de la autonomía de la voluntad de las partes, pues son normas que afectan al estado civil de las personas.

Importante a este respecto es la Instrucción DGI/SGRJ/01/2008 sobre la reagrupación familiar de menores o incapaces sobre los que el reagrupante ostenta la representación legal, en la que claramente se especifica que será causa de denegación de la solicitud el hecho de que el menor se encuentre legalmente bajo la patria potestad de sus progenitores biológicos o adoptivos, viviendo uno o ambos y no existiendo una declaración judicial de desamparo.

- **Sus padres o los de su cónyuge o pareja**, cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España excepto que concurran razones humanitarias

Sobre este particular si hay que incidir en algunas cuestiones importantes:

En primer lugar, el reagrupante no puede ser residente sin más, ha de tener la condición de residente de larga duración, siendo este un punto importante que ha sufrido una modificación, pues hasta el nuevo reglamento, el que se encuentra en vigor hoy en día, no era necesario cumplir con ese requisito de tener la condición de residente de larga duración.

En segundo lugar, se entiende que los ascendientes están a cargo cuando se acredite que, al menos durante el último año de su residencia en España, el reagrupante ha transferido fondos o gastos de su ascendiente de al menos el 51% del producto interior bruto per cápita, en cómputo anual, del país de residencia de éste. De gran utilidad para realizar los cálculos correspondientes será la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística sobre el producto interior bruto de cada país.

En tercer lugar, se consideran razones humanitarias cuando el ascendiente hubiera convivido con el reagrupante en el país de origen, cuando sea incapaz y esté tutelado por el reagrupante, cónyuge o pareja, o cuando no sea capaz de proveer a sus propias necesidades. También pueden concurrir razones humanitarias si al presentarse conjuntamente las solicitudes de ambos ascendientes cónyuges, al menos uno de ellos es mayor de sesenta y cinco años.

No termina de quedar claro si podrán reagruparse todos los ascendientes conjuntamente (tanto los del residente como los de su cónyuge o pareja) pues no parece que quepa la posibilidad de que lo sean todos ellos bien simultáneamente o por separado.

## **Requisitos para la reagrupación familiar**

Si bien parte de los requisitos que se exigen para ejercer este derecho se infieren de lo expuesto anteriormente (ser extranjero residente con autorización determinada y tener parentesco con familiar

reagrupable) se precisan otros no menos importantes que se derivan tanto de lo expresamente establecido por la Ley como lo señalado en el procedimiento formal a seguir. Son los siguientes:

- **Disponer de un alojamiento adecuado.**

Este requisito deberá justificarse mediante informe de la Comunidad Autónoma del lugar de residencia del reagrupante que ha de expedir y notificar en el plazo máximo 30 días, remitiendo una copia a la Oficina de Extranjería que vaya a tramitar la solicitud de reagrupación familiar. En el supuesto de que así lo hubiera dispuesto la propia Administración Autonómica, habiéndolo comunicado a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, el informe lo ha de emitir el Ayuntamiento del lugar de residencia del reagrupante en el plazo con idénticos plazos y condiciones que los expuestos.

Solo subsidiariamente y en defecto de lo anterior, lo que deberá acreditarse con la copia de la solicitud realizada, podrá justificarse este requisito por cualquier medio de prueba admitido en Derecho (acta notarial mixta de presencia y manifestaciones, escrituras públicas, certificaciones registrales, etc.)

Tanto el informe como los documentos probatorios deberán obligatoriamente hacer referencia:

- al título que habilita para la ocupación de la vivienda que puede estar referido tanto al extranjero reagrupante como a otro familiar en primer grado que forme parte de la unidad familiar
- al número de habitaciones de que consta
- al uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda
- al número de personas que la habitan y
- a las condiciones de habitabilidad y equipamiento.

- **Disponer de los medios de subsistencia suficientes para atender las necesidades de su familia una vez reagrupada.**

A este respecto el Reglamento dispone que se “deberán acreditar empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social”.

La cuantía mínima que ha de acreditarse dependerá del número de miembros que compongan la unidad familiar. Así, si se trata de dos miembros será al menos el 150% del IPREM mensuales incrementándose en el 50% del IPREM mensual por cada miembro adicional. El importe podrá verse minorado por circunstancias excepcionales.

Deberá demostrarse, no obstante, la perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud, teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de aquella.

Es importante destacar que no computan los ingresos provenientes del sistema de asistencia social, pero sí los aportados por el cónyuge o pareja u otro familiar en línea directa en primer grado, residente en España y que conviva con el reagrupante.

La forma de refrendar dichos medios económicos se hará a través de los siguientes documentos:

- ☐ Contrato de trabajo o declaración IRPF cuando la actividad realizada sea por cuenta ajena.
- ☐ Documentación de la actividad mercantil o profesional o declaración IRPF si los medios proceden de un trabajo por cuenta propia.
- ☐ Cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito con certificación bancaria si estamos ante reagrupantes inactivos.

### **Vigencia de la autorización de residencia por reagrupación familiar**

Presentada la solicitud en forma el órgano competente (Delegado o Subdelegado del Gobierno en la provincia en la que tenga fijado su domicilio el reagrupante) la tramitará y resolverá, previo informe policial. Si la resolución fuera denegatoria, se le notificará al interesado y se motivará la causa de la denegación; por el contrario, si se resolviera la concesión de la autorización, se comunicará al reagrupante, al Ministerio de Asuntos y de Cooperación y a la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida el extranjero a reagrupar. En la comunicación al interesado se hará mención expresa a que “la autorización no



desplegará sus efectos hasta que no se produzca la obtención del visado y la posterior entrada en España de su titular”. Esto es así porque en el plazo de dos meses desde la notificación al reagrupante, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá solicitar personalmente el visado.

El Reglamento dispone la posibilidad de que los representantes de la Administración en las embajadas y consulados revisen de nuevo el cumplimiento de los requisitos exigidos de tal modo que si éstos “llegaran al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos, o de la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión de forma motivada y, en caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá copia del acta al organismo que hubiera concedido inicialmente la autorización”. Incluso, explícitamente se menciona que “constituirá causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en su caso, de denegación, el hecho de que el extranjero se hallase en España en situación irregular”. Si la misión diplomática u oficina consular concediera el visado, en el plazo máximo de dos meses deberá ser recogido personalmente por el solicitante quien deberá entrar en el territorio español durante el plazo de vigencia del mismo y solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero.

Cuando el reagrupante sea titular de una autorización de residencia temporal, la vigencia de la autorización de residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta la fecha de finalización de la del reagrupante; mientras que cuando el reagrupante tenga autorización de residencia de larga duración, la vigencia de la primera autorización de residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta la fecha de validez de la tarjeta de identidad de extranjero del reagrupante, pero la posterior autorización de residencia del reagrupado tendrá ya el de carácter de larga duración.

Parece que no se ha considerado conveniente que el familiar que depende del reagrupante obtenga recién entrado en España una residencia de larga duración porque, es conveniente aclarar, que la autorización de residencia por reagrupación familiar solo puede ser temporal debido a que la autorización de residencia permanente es, como dispone el art. 32.1 de la Ley “la situación que autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles”.

## **Alcance de la autorización de residencia por reagrupación familiar**

Como su propio nombre indica, esta residencia es solo eso, residencia. Ahora bien, al cónyuge/pareja y a los hijos en edad laboral previamente reagrupados, se les habilita para trabajar sin perder su autorización de residencia y sin necesidad de realizar ningún otro trámite administrativo. Véase pues que, aunque existe una dependencia del familiar reagrupado, que en algunos casos ha tenido que demostrar el estar a cargo, y la disponibilidad de medios por parte del reagrupante para mantenerlos, pueden ejercer cualquier actividad lucrativa sin tener que solicitar autorización de trabajo y todo lo que ello conlleva (contrato de trabajo previo, licencias...). De esta manera se accede a una continuada y larga pretensión que no deja de ser justa y eminentemente aconsejable para la mejor convivencia de sus miembros.

## **RENOVACIÓN DE LA RESIDENCIA POR REAGRUPACION FAMILIAR**

La renovación de las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar deberá solicitarse en modelo oficial en el plazo de 60 días antes de su expiración o dentro de los 90 días naturales posteriores y siempre conjuntamente con la del reagrupante, salvo causa que lo justifique. La presentación de la solicitud en tiempo y forma prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución de procedimiento.

En todos los supuestos deberá acreditarse que se sigue disponiendo de empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, así como la cobertura de la asistencia sanitaria de no estar cubierta por la Seguridad Social.

En lo que se refiere a la vivienda, en caso de nuevo domicilio, se exige la presentación de nuevo informe en las condiciones expresadas para la solicitud inicial.

En el supuesto de tener hijos a cargo en España, en edad de escolarización obligatoria, acreditación del cumplimiento de esta obligación.

Podrán presentarse informes emitidos por las Comunidades Autónomas sobre el esfuerzo de integración, que se valorarán para la renovación de las autorizaciones de las que sean titulares:

- ☐ los extranjeros que hayan sido condenados, siempre que se haya cumplido la condena, hayan sido indultados o se hallen en situación de remisión o suspensión de la condena.
- ☐ los extranjeros que no acrediten el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos con carácter general

Si la renovación de la autorización del reagrupante resultara denegada por algún motivo será causa suficiente para denegar a su vez la de las personas que de él dependen. Existe no obstante, la posibilidad de renovar con el cónyuge o pareja, que asumirán la condición de reagrupante siempre que sea residente en España, forme parte de la misma unidad familiar, y el reagrupante original no reúna los requisitos exigibles para la renovación. La naturaleza y duración de la autorización renovada se vinculará a la del nuevo reagrupante

Cuando la resolución fuera favorable se notificará al interesado y se expedirá la nueva tarjeta de identidad de extranjero. Se entenderá que la resolución es favorable también en el supuesto de que la Administración no hubiera resuelto expresamente en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud o desde su entrada en el registro del órgano competente para resolver si se hubiera utilizado otro registro público (dado que el silencio administrativo en las renovaciones tiene el carácter de positivo), por lo que el interesado podrá exigir a la autoridad competente para conceder la autorización el certificado que acredite la renovación por este motivo la cual vendrá obligada a expedirlo.

Por último hay que reseñar los supuestos en los que los familiares reagrupados podrán mantener su residencia, pero esta vez de forma independiente. Son:

1. El cónyuge/pareja, cuando obtenga autorización de residencia o residencia y trabajo por medios propios. Asimismo:
  - o cuando se rompa el vínculo conyugal por separación de derecho o divorcio, se cancele la inscripción o finalice la vida en pareja, siempre y cuando acredite la convivencia previa en España durante al menos dos años.

- Cuando fuera víctima de violencia de género o de un delito por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar,, una vez dictada a su favor una orden judicial de protección o existan indicios declarados a través de informe del Ministerio Fiscal.
- Por causa de muerte del reagrupante.

En todos estos casos, si se hubiera reagrupado a otros familiares, éstos conservarán la autorización de residencia concedida y dependerán, a efectos de la renovación, del miembro de la familia con el que convivan.

2. Los hijos y menores sobre los que el reagrupante ostente la representación legal, obtendrán una autorización de residencia temporal independiente cuando alcancen la mayoría de edad y obtengan una autorización para trabajar, o bien cuando hayan alcanzado la mayoría de edad y residido en España durante cinco años.

3. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de residencia temporal independiente del reagrupante cuando hayan obtenido una autorización para trabajar.

## **LOS VISADOS PARA LA REAGRUPACION FAMILIAR**

Una vez el reagrupante ha obtenido la autorización de residencia temporal por reagrupación, debe facilitarle una copia de la misma a su familiar reagrupable para que pueda solicitar el preceptivo visado.

El familiar que va a ser reagrupado tiene dos meses desde la notificación de la concesión de la autorización al reagrupante para solicitar en persona el visado en la **Misión Diplomática u Oficina Consular en cuya demarcación resida**. En el caso de tratarse de un menor, puede solicitar el visado un representante debidamente acreditado.

Al igual que sucede en el caso de los visados de residencia temporal no lucrativa, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, puede determinar la Misión Diplomática u Oficina Consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado. Excepcionalmente, la Misión Diplomática u Oficina Consular puede aceptar la presentación por representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante,

como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad.

El Reglamento de Extranjería, con objeto de evitar la posibilidad de regularizar situaciones irregulares, prevé expresamente que “Constituirá causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en su caso, de denegación, el hecho de que el extranjero se hallase en España en situación irregular, evidenciado por el poder de representación o por datos que consten en la Administración”.

Una vez determinada la instancia en la que hay que presentar la solicitud de visado, es necesario determinar la documentación que debe presentar el solicitante. El extranjero debe presentar su solicitud en **modelo oficial** (impreso de solicitud de visado nacional), a la que debe acompañar los siguientes **documentos**:

- a. Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.
- b. Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, con las particularidades señaladas para los visados de residencia.
- c. Documentación original que acredite los vínculos familiares y, en su caso, la edad y la dependencia legal o económica.
- d. Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

En el momento de presentar la solicitud, deben abonarse asimismo las **tasas por la tramitación de la solicitud**. La tasa figura en la Orden AEC/4004/2006, de 22 de diciembre, por la que se establecen las cuantías de las tasas por la tramitación de visados y es de **60 euros**. Ahora bien, esta cantidad puede dejar de aplicarse en los casos que, de acuerdo con los usos y costumbres admitidos en derecho internacional, tengan un origen inmediato y directo en razones de política exterior o de carácter humanitario.

Las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, una vez ha sido presentada la solicitud de visado, deben estampar en el pasaporte del solicitante un **sello que deje constancia de que el visado ha sido solicitado**. Si finalmente se concede el visado, la etiqueta debe adherirse, en la medida de lo posible, sobre el sello de identificación de la solicitud. Si el visado es denegado, el sello permanece estampado en el pasaporte.

En esta segunda fase, la **Misión Diplomática u Oficina Consular competente** debe estudiar el expediente de visado.

En primer lugar, la Misión Diplomática u Oficina Consular competente debe comprobar la identidad del solicitante, consultando en el **SIS** si se encuentra en el listado de personas no admisibles. Si el solicitante se encuentra en el SIS, en este caso no se deniega su solicitud, sino que se comunica al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que pide los informes oportunos a las autoridades correspondientes. Si el país tercero que ha introducido al extranjero en el SIS o, de ser España, el Ministerio del Interior, decide levantar la prohibición, se puede seguir con la tramitación. En caso de denegación sería aplicable de nuevo el punto 8 de la Disposición adicional décima del Reglamento de extranjería, como en el caso anterior.

Por otro lado, las aplicaciones informáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de la Presidencia (anterior Ministerio de Administraciones Públicas) están conectadas, de modo que cuando se graba la solicitud de visado en la **aplicación informática de la Misión Diplomática u Oficina Consular**, en un plazo máximo de 48-72 horas se verifica si la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar consta en la base de datos del Ministerio de la Presidencia. De no poder hacerse esa verificación (porque, por ej. no se ha hecho bien la grabación), el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se pone en contacto con la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente.

Durante la sustanciación del trámite, la Misión Diplomática u Oficina Consular puede requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una **entrevista personal** para comprobar su identidad, el vínculo familiar alegado, en su caso, la dependencia legal o económica y la validez de la documentación aportada. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el plazo fijado, que no puede exceder de 15 días, produce el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.

Cuando se determine la celebración de la entrevista, en ella deben estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española y el representante del interesado, en caso de que éste este sea

menor, además del intérprete, en caso necesario. El contenido de la entrevista debe recogerse en un acta firmada por los presentes, de la que se debe entregar copia al interesado.

Si la Misión Diplomática u Oficina Consular decide **conceder el visado**, porque considera que se cumplen todos los requisitos exigidos, debe notificar la concesión del visado. El interesado debe recogerlo personalmente en el plazo de dos meses desde la notificación, salvo en el caso de menores, en que podrá ser recogido por su representante. En caso de no hacerlo así, se entiende que ha renunciado al visado concedido y se archiva el procedimiento. Una vez recogido el visado, el solicitante debe entrar en el territorio español, en el plazo de vigencia del visado. De todas formas, una vez más hay que recordar que la posesión de un visado no confiere, por sí misma, un derecho irrevocable de entrada en el territorio nacional.

El visado de residencia expedido incorpora la autorización inicial de residencia, y la vigencia de ésta comienza desde la fecha en que se efectúe la entrada en España, lo que debe hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte.

Si la Misión Diplomática u Oficina Consular llega al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, debe **denegar el visado de forma motivada**. En caso de haberse celebrado una entrevista, se debe remitir copia del acta al organismo que hubiera concedido inicialmente la autorización. El párrafo 7 de la Disposición adicional décima del Reglamento de Extranjería establece que la resolución “deberá ser motivada, e informará al interesado de los hechos y circunstancias constatadas y, en su caso, de los testimonios recibidos y de los documentos e informes, preceptivos o no, incorporados, que, conforme a las normas aplicables, hayan conducido a la resolución denegatoria.” Además, hay que detallar los recursos que proceden contra la decisión, el órgano ante el que se deben presentar y el plazo para su interposición. Como en el caso de los visados de residencia temporal no lucrativa, los recursos que cabe interponer contra una resolución denegatoria son un recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación y/o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación.

A continuación, y una vez analizada la cuestión de reagrupación familiar, por medio de este anexo adjuntamos un cuadro comparativo del tratamiento que la misma tiene en el actual reglamento de extranjería en comparación a su inmediatamente anterior, resaltando en color rojo las diferencias para una mejor y más rápida comprensión, quedando reflejado que a día de hoy esta vía se ha visto limitada en cuanto a sus supuestos, y endurecida en cuanto a los supuestos de reagrupación familiar de los ascendientes.



REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
TÍTULO IV. Residencia	TÍTULO IV. RESIDENCIA TEMPORAL
CAPÍTULO I. Residencia temporal	CAPÍTULO II. Residencia temporal por reagrupación familiar
SECCIÓN 2ª. Residencia temporal en virtud de reagrupación familiar	

<p><b>Artículo 38. Definición.</b></p> <p>Se halla en situación de residencia temporal, por razón de reagrupación familiar, el extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del derecho a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente que haya residido legalmente en España durante un año y haya obtenido autorización para residir por, al menos, otro año.</p>	<p><b>Artículo 52. Definición.</b></p> <p>Se halla en situación de residencia temporal por razón de reagrupación familiar el extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del derecho a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente.</p>
<p><b>Artículo 39. Familiares reagrupables.</b></p> <p>El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:</p>	<p><b>Artículo 53. Familiares reagrupables.</b></p> <p>El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los menores dependientes.</p> <p>b) Sus hijos o los de su cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados, de</p>	<p>a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.</p> <p>En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial.</p> <p>El extranjero residente que se encuentre <b>casado</b> en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la <b>disolución</b> de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los <b>hijos</b> menores o <b>mayores dependientes</b>.</p> <p>b) La persona que mantenga con el reagrupante una relación de afectividad análoga a la conyugal. A los efectos previstos en este capítulo, se considerará que existe relación de análoga afectividad a la conyugal cuando:</p> <p>1º. Dicha relación se encuentre inscrita en un registro público establecido a esos efectos, y no se haya cancelado dicha inscripción; o</p> <p>2º. Se acredite la vigencia de una relación no registrada, constituida con carácter previo al inicio de la residencia del reagrupante en España. A dichos efectos, sin perjuicio de la posible utilización de cualquier medio de prueba admitido en Derecho, tendrán prevalencia los documentos emitidos por una autoridad pública.</p> <p>Resultará de aplicación a este supuesto lo previsto, en relación con el cónyuge, en los párrafos segundo y tercero de la letra a) del apartado anterior. Serán incompatibles a efectos de lo previsto en este capítulo las situaciones de matrimonio y de análoga relación de afectividad.</p> <p>c) Sus hijos o los de su cónyuge <b>o pareja</b>, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años <b>en el momento de la solicitud de la autorización de residencia a su favor o tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de</b></p>
---	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>conformidad con la ley española o su ley personal, y no se encuentren casados. Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges, se requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España.</p> <p>c) Los menores de dieciocho años o incapaces cuando el residente extranjero sea su representante legal.</p> <p>d) Sus ascendientes o los de su cónyuge, cuando estén a su cargo y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.</p>	<p>proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.</p> <p>Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges o miembros de la pareja se requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo.</p> <p>En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efectos en España.</p> <p>d) Los representados legalmente por el reagrupante, cuando sean menores de dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización de residencia a su favor o tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, cuando el acto jurídico del que surgen las facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.</p> <p>e) Sus ascendientes en primer grado, o los de su cónyuge o pareja, cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.</p> <p>Excepcionalmente, cuando concurren razones de carácter humanitario, se podrá reagrupar a los ascendientes menores de sesenta y cinco años que reúnan los restantes requisitos establecidos en el párrafo anterior.</p> <p>Se considerará que concurren razones humanitarias, entre otros casos, cuando el ascendiente conviviera con el reagrupante en el país de origen en el momento en que este último obtuvo su autorización; cuando el ascendiente sea incapaz y su tutela esté otorgada por la autoridad competente en el país de origen al extranjero residente o a su cónyuge o pareja reagrupada; o cuando el ascendiente no sea objetivamente capaz de proveer a sus propias necesidades.</p> <p>Igualmente, se considerará que concurren razones</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>e) Se entenderá que los familiares están a cargo del reagrupante cuando acredite que, al menos durante el último año de su residencia en España, ha transferido fondos o soportado gastos de su familiar en una proporción que permita inferir una dependencia económica efectiva. Mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, se determinará la cuantía o el porcentaje de ingresos considerados suficientes a estos efectos, así como el modo de acreditarlos.</p>	<p>humanitarias cuando el ascendiente del reagrupante, o de su cónyuge o pareja, sea cónyuge o pareja del otro ascendiente, siendo este último mayor de sesenta y cinco años. En este caso, las solicitudes de autorización de residencia por reagrupación familiar podrán ser presentadas de forma conjunta, si bien la aplicación de la excepción del requisito de la edad respecto al ascendiente menor de sesenta y cinco años estará condicionada a que la autorización del otro ascendiente sea concedida.</p> <p>Cuando el órgano competente para resolver el procedimiento tuviera dudas sobre la concurrencia de otra razón de excepción del requisito elevará consulta previa a la Dirección General de Inmigración.</p> <p>Se entenderá que los familiares están a cargo del reagrupante cuando acredite que, al menos durante el último año de su residencia en España, ha transferido fondos o soportado gastos de su familiar, que <b>representen al menos el 51% del producto interior bruto per capita, en cómputo anual, del país de residencia de éste, según lo establecido, en materia de Indicadores sobre renta y actividad económica por país y tipo de indicador, por el Instituto Nacional de Estadística.</b></p>

	<p><b>Artículo 54. Medios económicos a acreditar por un extranjero para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación a favor de sus familiares.</b></p> <p>1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus familiares deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha autorización la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social en la cuantía que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización, se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera,</p>
--	---

<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b></p>
--	--



	<p>según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:</p> <p>a) En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que represente mensualmente el 150% del IPREM.</p> <p>b) En caso de unidades familiares que incluyan, al llegar a España la persona reagrupada, a más de dos personas: una cantidad que represente mensualmente el 50% del IPREM por cada miembro adicional.</p> <p>2. Las autorizaciones no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud.</p> <p>En caso de que la solicitud de autorización de residencia por reagrupación familiar se presente de forma simultánea a la de renovación de la autorización de la que sea titular el reagrupante, la comprobación de la evolución de los medios de éste en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud será realizada de oficio por la Oficina de Extranjería.</p> <p>3. La exigencia de dicha cuantía podrá ser minorada cuando el familiar reagrupable sea menor de edad, cuando concurren circunstancias excepcionales acreditadas que aconsejen dicha minoración en base al principio del interés superior del menor, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y se reúnan los restantes requisitos legales y reglamentarios para la concesión de la autorización de residencia por reagrupación familiar.</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>Igualmente, la cuantía podrá ser minorada en relación con la reagrupación de otros familiares por razones humanitarias apreciadas en relación con supuestos individualizados y previo informe favorable de la Dirección General de Inmigración.</p> <p>4. No serán computables a estos efectos los ingresos provenientes del sistema de asistencia social, pero sí los aportados por el cónyuge o pareja del extranjero reagrupante, así como por otro familiar en línea directa en primer grado, con condición de residente en España y que conviva con éste.</p> <p>5. Sin perjuicio de la presentación de cualquier documento o medio de prueba que, a juicio del solicitante, justifique la disposición de los medios, podrá aportar la siguiente documentación:</p> <p>a) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena:</p> <p>1º. Copia del contrato de trabajo.</p> <p>2º. Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la correspondiente a la última anualidad.</p> <p>b) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia:</p> <p>1º. Acreditación de la actividad que desarrolla.</p> <p>2º. Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año anterior. Dicha declaración será la correspondiente al penúltimo año en el caso de que no haya expirado el plazo para presentar la correspondiente a la última anualidad.</p> <p>c) En caso de no realizarse ninguna actividad lucrativa en España: cheques certificados, cheques de viaje o cartas de pago o tarjetas de crédito, acompañadas de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	<p>la citada tarjeta o certificación bancaria.</p> <p>6. De alegarse la realización de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, la Oficina de Extranjería competente comprobará de oficio la información relativa a la afiliación y alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social del solicitante, y, en su caso, las bases de datos de cotización.</p>

	<p><b>Artículo 55. Requisito sobre vivienda adecuada a acreditar por un extranjero para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación a favor de sus familiares.</b></p> <p>1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus familiares, deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud informe expedido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del lugar de residencia del reagrupante a los efectos de acreditar que cuenta con una vivienda adecuada para atender sus necesidades y las de su familia.</p> <p>2. La Comunidad Autónoma deberá emitir el informe y notificarlo al interesado en el plazo máximo de treinta días desde que le sea solicitado. Simultáneamente y por medios electrónicos, deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería competente.</p> <p>A dichos efectos podrá realizar consulta al Ayuntamiento donde el extranjero reagrupante tenga su domicilio habitual sobre la información que pueda constar al mismo en relación con la adecuación de la vivienda.</p> <p>3. El informe anterior podrá ser emitido por la Corporación local en la que el extranjero tenga su lugar de residencia cuando así haya sido establecido por la Comunidad Autónoma competente, siempre que ello haya sido previamente puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.</p> <p>En su caso, el informe de la Corporación local habrá de ser emitido y notificado al interesado en el plazo de treinta días desde la fecha de la solicitud. Simultáneamente y por medios</p>
--	--

<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></p>
---	---

	<p>electrónicos, deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería competente.</p> <p>4. En caso de que el informe no haya sido emitido en plazo, circunstancia que habrá de ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.</p> <p>5. En todo caso, el informe o la documentación que se presente en su sustitución debe hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos: título que habilite para la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda, número de personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y equipamiento.</p> <p>El título que habilite para la ocupación de la vivienda se entenderá referido al extranjero reagrupante o a cualquier otra persona que forme parte de la unidad familiar en base a un parentesco de los enunciados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p>
<p><b>Artículo 42. Procedimiento para la reagrupación familiar.</b></p>	<p><b>Artículo 56. Procedimiento para la autorización de residencia por reagrupación familiar.</b></p> <p>1. La solicitud de reagrupación familiar se podrá presentar cuando el extranjero reagrupante tenga autorización para residir en España durante un año como mínimo y solicitado la autorización para residir por, al menos, otro año, con las siguientes excepciones:</p> <p>a) El reagrupante tendrá que ser titular de una autorización de residencia de larga duración o de larga duración-UE concedida en España para la reagrupación de sus ascendientes o de los ascendientes de su cónyuge o pareja de hecho.</p> <p>La solicitud podrá presentarse cuando se haya solicitado la autorización de residencia de larga duración o de residencia de larga duración-UE.</p> <p>b) Los extranjeros residentes en España en base a su previa condición de residentes de larga duración-UE en otro Estado miembro de la</p>

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>1. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá solicitar, personalmente ante el órgano competente para su tramitación, una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar. La solicitud de reagrupación familiar se podrá presentar por parte del extranjero que tenga autorización para residir en España durante un año y solicitado la autorización para residir por, al menos, otro año. En todo caso, no podrá concederse la autorización de residencia al familiar reagrupable hasta que no se haya producido la efectiva renovación de la autorización del reagrupante, o hasta que su solicitud de renovación haya sido estimada por silencio positivo, sin perjuicio de la ulterior obligación de dictar resolución expresa, en los términos previstos en el artículo 43.4.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p> <p>2. La solicitud, que deberá cumplimentarse en modelo oficial, deberá acompañarse de la siguiente documentación:</p> <p>a) Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares y, en su caso, de la edad, y la dependencia legal y económica.</p>	<p>Unión Europea, titulares de una Tarjeta azul-UE o beneficiarios del régimen especial de investigadores podrán presentar la solicitud de autorización a favor de sus familiares sin estar sometidos al requisito de haber residido legalmente en España, con carácter previo, durante un año.</p> <p>En todo caso, no podrá concederse la autorización de residencia al familiar reagrupable hasta que, en función de la situación que deba ostentar el reagrupante para el ejercicio del derecho, no se haya producido la efectiva renovación de la autorización del reagrupante, concedido su autorización de residencia de larga duración o de residencia de larga duración-UE o concedido su autorización inicial de residencia en España.</p> <p>2. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá solicitar, personalmente ante <b>la Oficina de Extranjería</b> competente para su tramitación, una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar.</p> <p><b>La reagrupación de los familiares de extranjeros residentes larga duración-UE en otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá ser presentada por los propios familiares, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del residente de larga duración-UE en el primer Estado miembro.</b></p> <p>3. La solicitud, que deberá cumplimentarse en modelo oficial, deberá acompañarse de la siguiente documentación:</p> <p><b>a) Relativos al reagrupante:</b></p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011



<p>b) Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante en vigor.</p> <p>c) Copia de la correspondiente autorización de residencia o residencia y trabajo, ya renovada, o, conjuntamente, de la primera autorización y del resguardo de solicitud de renovación.</p> <p>d) Acreditación de empleo y/o de recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social. Mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, se determinará la cuantía de los medios de vida exigibles a estos efectos, así como el modo de acreditar su posesión, teniendo en cuenta el número de personas que pasarían a depender del solicitante a partir de la reagrupación.</p> <p>e) Justificación documental que acredite la disponibilidad, por parte del reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades del reagrupante y la familia.</p> <p>Este requisito deberá justificarse mediante informe expedido por la Corporación Local del lugar de residencia del reagrupante. En el plazo máximo de quince días desde la solicitud, la Corporación deberá emitir el informe y notificarlo al interesado y, simultáneamente y por medios telemáticos cuando fuera posible, a la autoridad competente para resolver la autorización de reagrupación.</p> <p>Subsidiariamente, podrá justificarse este requisito presentando acta notarial mixta de presencia y manifestaciones en caso de que la Corporación local no hubiera procedido a emitir el informe de disponibilidad de vivienda en el plazo indicado, lo que será acreditado con la copia de la solicitud realizada.</p> <p>En todo caso, el informe o acta notarial debe hacer referencia a los siguientes extremos: título que habilite para la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda, número de</p>	<p>1º. Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante en vigor, <b>previa exhibición del documento original.</b></p> <p>2º. <b>Copia compulsada de documentación que acredite que cuenta con</b> empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social, <b>de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de este Reglamento.</b></p> <p>3º. <b>Documentación original</b> que acredite la disponibilidad, por parte del reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades del reagrupante y la familia, y que habrá de ser su vivienda habitual, <b>de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de este Reglamento.</b></p>
---	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>personas que la habitan y condiciones de habitabilidad y equipamiento.</p> <p>f) En los casos de reagrupación de cónyuge, declaración jurada del reagrupante de que no reside con él en España otro cónyuge.</p> <p>3. Presentada la solicitud en forma o subsanados los defectos, el órgano competente la tramitará y resolverá lo que proceda, previo informe policial sobre la existencia de razones que, en su caso, lo impidan.</p> <p>4. En el caso de resolución denegatoria, se le notificará al interesado y se motivará la causa de la denegación.</p> <p>5. En el supuesto de que el extranjero cumpla con los requisitos establecidos para la reagrupación familiar, el órgano competente resolverá la concesión de la autorización de residencia temporal por reagrupación, y se suspenderá la eficacia de la autorización hasta la expedición, en su caso, del visado, y hasta la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional.</p>	<p>4º. En los casos de reagrupación de cónyuge o pareja, declaración jurada del reagrupante de que no reside con él en España otro cónyuge o pareja.</p> <p>b) Relativos al familiar a reagrupar:</p> <p>1º. Copia completa del pasaporte o título de viaje, en vigor.</p> <p>2º. Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares o de parentesco o de la existencia de la unión de hecho y, en su caso, de la dependencia legal y económica.</p> <p>4. Presentada la solicitud en forma o subsanados los defectos, el órgano competente la tramitará y resolverá lo que proceda. A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro Central de Penados.</p> <p>5. En el supuesto de que se cumpla con los requisitos establecidos para la reagrupación familiar, el órgano competente resolverá la concesión de la autorización de residencia por reagrupación, y se suspenderá la eficacia de la autorización hasta:</p> <p>a) Con carácter general, la expedición del visado, y la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional durante el tiempo de vigencia de éste. En este caso, la resolución de concesión hará mención expresa a que la autorización no desplegará sus efectos hasta que no se produzca la obtención del visado y la posterior entrada en España de su titular.</p> <p>b) En el supuesto de familiares de residentes de larga duración-UE, titulares de una Tarjeta azul-UE o beneficiarios del régimen especial de investigadores en otro Estado miembro de la Unión Europea en el que la familia ya esté constituida, la</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>6. Dicha resolución se comunicará al reagrupante y, por medios telemáticos y de manera simultánea cuando sea posible, al Ministerio de Asuntos y de Cooperación y a la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida el extranjero. En la comunicación al interesado se hará mención expresa a que la autorización no desplegará sus efectos hasta que no se produzca la obtención del visado y la posterior entrada en España de su titular, salvo en los supuestos en que pueda quedar exento de esta obligación por ser aplicable una circunstancia excepcional prevista legal o reglamentariamente.</p> <p>7. Cuando el reagrupante tenga autorización de residencia temporal, la vigencia de la autorización de residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta la misma fecha que la del reagrupante. Cuando el reagrupante tenga autorización de residencia permanente, la vigencia de la primera autorización de residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta la fecha de validez de la tarjeta de identidad de extranjero del reagrupante. La posterior autorización de residencia del reagrupado será de carácter permanente.</p>	<p>eficacia de la autorización estará condicionada a la efectiva entrada del familiar en territorio nacional, si dicha entrada se produjera tras la concesión de la autorización. En este caso, la entrada deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización, lo que habrá de constar en la resolución.</p> <p>6. La resolución se <b>grabará en la aplicación correspondiente, de forma que tenga acceso a ella</b> la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida el extranjero.</p> <p>7. Los procedimientos regulados en este artículo, así como los relativos al correspondiente visado y a la renovación de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar serán objeto de tramitación preferente.</p> <p>8. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración remitirá información estadística sobre las solicitudes y concesiones de autorizaciones iniciales de residencia por reagrupación familiar a los órganos competentes en la correspondiente Comunidad Autónoma, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos de su traslado a los Ayuntamientos correspondientes. La información será remitida con periodicidad trimestral y desglosada por nacionalidad, sexo y edad del reagrupado, y municipio en el que el reagrupante haya declarado tener su vivienda habitual.</p>

<p><b>Artículo 43. Tramitación del visado en el procedimiento de reagrupación familiar.</b></p> <p>1. En el plazo de dos meses desde la notificación al reagrupante de la concesión de la autorización, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá solicitar personalmente el visado en la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado.</p> <p>Excepcionalmente, en aplicación de lo dispuesto</p>	<p><b>Artículo 57. Tramitación del visado en el procedimiento de reagrupación familiar.</b></p> <p>1. En el plazo de dos meses desde la notificación al reagrupante de la concesión de la autorización, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá, <b>en su caso</b>, solicitar personalmente el visado en la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado.</p> <p>Excepcionalmente, en aplicación de lo dispuesto</p>
---	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>en el primer párrafo del apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la misión diplomática u oficina consular aceptará la presentación por representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad. En el caso de tratarse de un menor, podrá solicitarlo un representante debidamente acreditado. Constituirá causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en su caso, de denegación, el hecho de que el extranjero se hallase en España en situación irregular, evidenciado por el poder de representación o por datos que consten en la Administración.</p> <p>2. La solicitud de visado deberá ir acompañada de:</p> <p>a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.</p> <p>b) Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años y en el que no deben constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español.</p> <p>c) Copia de la autorización de residencia notificada al reagrupante.</p> <p>d) Documentación original que acredite los vínculos familiares y, en su caso, la edad y la dependencia legal o económica.</p> <p>e) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades susceptibles de cuarentena previstas en el Reglamento sanitario internacional.</p> <p>3. Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando</p>	<p>en el primer párrafo del apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la misión diplomática u oficina consular aceptará la presentación por representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad. En el caso de tratarse de un menor podrá solicitarlo un representante debidamente acreditado. Constituirá causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en su caso, de denegación, el hecho de que el extranjero se hallase en España en situación irregular, evidenciado por el poder de representación o por datos que consten en la Administración.</p> <p>2. Sin perjuicio de que el interesado añada otros documentos que considere oportunos, la solicitud de visado deberá ir acompañada de:</p> <p>a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.</p> <p>b) Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años y en el que no deben constar condenas por delitos <b>previstos</b> en el ordenamiento español.</p> <p>c) Documentación original que acredite los vínculos familiares o de parentesco o de la existencia de la unión de hecho y, en su caso, la edad y la dependencia legal.</p> <p>d) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades <b>que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.</b></p> <p>3. La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos:</p>
---	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011



<p>se estime necesario, mantener una entrevista personal, para comprobar su identidad, el vínculo familiar alegado, en su caso, la dependencia legal o económica y la validez de la documentación aportada. La incomparecencia, salvo fuerza mayor, en el plazo fijado, que no podrá exceder de 15 días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.</p> <p>Cuando se determine la celebración de la entrevista, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española y el representante del interesado, en caso de que éste este sea menor, además del intérprete, en caso necesario. Quedará constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.</p> <p>4. Si los representantes de la Administración llegan al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos, o de la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión de forma motivada y, en caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá copia del acta al organismo que hubiera concedido inicialmente la autorización.</p> <p>5. La misión diplomática u oficina consular, en atención al cumplimiento de los requisitos exigidos, notificará la concesión del visado, en su caso, en el plazo máximo de dos meses, y deberá ser recogido por el solicitante, personalmente, salvo en el caso de menores, en que podrá ser recogido por su representante. De no efectuarse en el plazo mencionado la recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del procedimiento.</p> <p>6. Recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español durante el plazo de vigencia de aquél, que en ningún caso será superior a tres meses, de conformidad con lo establecido en el capítulo I de este Reglamento. En el plazo de un mes desde la entrada, el extranjero deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, salvo en el caso de menores, en que podrá ser solicitado por su representante.</p>	<p>a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos para su obtención, tras la valoración de la documentación acreditativa de éstos, prevista en el apartado anterior.</p> <p>b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.</p> <p>c) Cuando concorra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.</p> <p>4. La misión diplomática u oficina consular, en atención al cumplimiento de los requisitos exigidos, notificará la concesión del visado, en su caso, en el plazo máximo de dos meses. Éste deberá ser recogido por el solicitante, personalmente, salvo en el caso de menores, en que podrá ser recogido por su representante. De no efectuarse en el plazo mencionado la recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del procedimiento.</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p><b>Artículo 58. Entrada en territorio español.</b></p> <p>1. Recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español durante el plazo de vigencia de aquél, que en ningún caso será superior a tres meses, de conformidad con lo establecido en el <b>título I</b> de este Reglamento.</p> <p>2. En el plazo de un mes desde la entrada en España o, en su caso, desde la notificación de la concesión de la autorización, el extranjero deberá solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, salvo en el caso de menores, en que será solicitada por su representante.</p> <p>3. Cuando el reagrupante sea titular de una autorización de residencia temporal, la vigencia de la autorización de residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta la misma fecha que la autorización de que sea titular el reagrupante en el momento de la entrada del familiar en España.</p> <p>Cuando el reagrupante tenga la condición de residente de larga duración o de residencia de larga duración-UE en España, la vigencia de la primera autorización de residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta la fecha de validez de la Tarjeta de Identidad de Extranjero de que sea titular el reagrupante en el momento de la entrada del familiar en España. La posterior autorización de residencia del reagrupado será de larga duración.</p> <p>4. La autorización de residencia por reagrupación familiar del cónyuge, la pareja de hecho o el hijo reagrupado habilitará a su titular a trabajar, siempre que sea mayor de edad laboral, sin necesidad de realizar ningún trámite administrativo. Dicha autorización les habilita para trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español, ocupación o sector de actividad.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

**Artículo 41. Residencia independiente de los familiares reagrupados.**

1. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia temporal, independiente de la del reagrupante, cuando obtenga la correspondiente autorización para trabajar. En todo caso, el cónyuge reagrupado que no se encuentre separado, podrá solicitar una autorización de residencia independiente cuando haya residido en España durante cinco años.

2. Asimismo, el cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia temporal independiente cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se rompa el vínculo conyugal que dio origen a la situación de residencia, por separación de derecho o divorcio, siempre y cuando acredite la convivencia en España con el cónyuge reagrupante durante al menos dos años.

**Artículo 59. Residencia de los familiares reagrupados, independiente de la del reagrupante.**

1. El cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de residencia y trabajo independiente, cuando reúna alguno de los siguientes requisitos y no tenga deudas con la Administración tributaria o de Seguridad Social:

a) Contar con medios económicos suficientes para la concesión de una autorización de residencia temporal de carácter no lucrativo.

b) Contar con uno o varios contratos de trabajo, de duración mínima, desde el momento de la solicitud, de un año, y de los que se derive una retribución no inferior al Salario Mínimo Interprofesional mensual, a tiempo completo, por catorce pagas.

c) Cumplir los requisitos exigibles de cara a la concesión de una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.

En los supuestos de los apartados b) y c) anteriores, la eficacia de la autorización de residencia y trabajo independiente estará condicionada a que se produzca, en caso de que no se hubiera producido con anterioridad, el alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se concede aquélla. Cumplida la condición, la vigencia de la autorización se retrotraerá al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.

2. Asimismo, el cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de residencia y trabajo independiente, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se rompa el vínculo conyugal que dio origen a la situación de residencia, por separación de derecho, divorcio o por cancelación de la inscripción, o finalización de la vida en pareja, siempre y cuando acredite la convivencia en

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>b) Cuando fuera víctima de violencia de género, una vez dictada a su favor una orden judicial de protección.</p> <p>c) Por causa de muerte del reagrupante.</p> <p>3. En los casos previstos en el apartado anterior, cuando, además del cónyuge, se haya reagrupado a otros familiares, éstos conservarán la autorización de residencia concedida y dependerán, a efectos de la renovación regulada en el artículo 44, del miembro de la familia con el que convivan.</p> <p>4. Los hijos y menores sobre los que el reagrupante ostente la representación legal, obtendrán una autorización de residencia temporal independiente cuando alcancen la mayoría de edad y obtengan una autorización para trabajar, o bien cuando hayan alcanzado la mayoría de edad y residido en España durante cinco años.</p> <p>5. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de residencia temporal independiente del reagrupante cuando hayan obtenido una autorización para trabajar, sin</p>	<p>España con el cónyuge o pareja reagrupante durante al menos dos años.</p> <p>b) Cuando fuera víctima de violencia de género, una vez dictada a su favor una orden judicial de protección o, en su defecto, exista un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Este supuesto será igualmente de aplicación cuando fuera víctima de un delito por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, una vez que exista una orden judicial de protección a favor de la víctima o, en su defecto, un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de conducta violenta ejercida en el entorno familiar.</p> <p>La tramitación de las solicitudes presentadas al amparo de este apartado tendrá carácter preferente y la duración de la autorización de residencia y trabajo independiente será de cinco años.</p> <p>c) Por causa de muerte del reagrupante.</p> <p>3. En los casos previstos en el apartado anterior, cuando, además del cónyuge o pareja, se haya reagrupado a otros familiares, éstos conservarán la autorización de residencia concedida y dependerán, a efectos de la renovación de la autorización de residencia por reagrupación familiar, del miembro de la familia con el que convivan.</p> <p>4. Los hijos y menores sobre los que el reagrupante ostente la representación legal obtendrán una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad y acrediten encontrarse en alguna de las situaciones descritas en el apartado 1 de este artículo, o bien cuando hayan alcanzado la mayoría de edad y residido en España durante cinco años.</p> <p>5. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente del reagrupante cuando hayan obtenido una autorización para trabajar, sin perjuicio de que los efectos de dicha autorización de residencia independiente, para el ejercicio de la reagrupación</p>
---	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>perjuicio de que los efectos de dicha autorización de residencia temporal independiente, para el ejercicio de la reagrupación familiar, queden supeditados a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>6. El cónyuge no separado de hecho o de derecho de residente legal, y los hijos en edad laboral, previamente reagrupados, podrán obtener una autorización para trabajar sin que ello comporte la obtención de una autorización de residencia independiente, cuando las condiciones fijadas en el contrato de trabajo que haya dado lugar a la autorización, por ser éste a tiempo parcial o por la duración de la prestación de servicios, den lugar a una retribución inferior al salario mínimo interprofesional a tiempo completo en cómputo anual.</p>	<p>familiar, queden supeditados a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>6. La autorización independiente tendrá la duración que corresponda, en función del tiempo previo de vigencia de la situación de residencia por reagrupación familiar. En todo caso, la autorización independiente tendrá una vigencia mínima de un año.</p>
<p><b>Artículo 40. Reagrupación familiar por residentes reagrupados.</b></p> <p>1. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia temporal en virtud de una previa reagrupación familiar podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación respecto de sus propios familiares, siempre que cuenten con una autorización de residencia y trabajo obtenidos independientemente de la autorización del reagrupante y reúnan los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar.</p> <p>2. En el supuesto de los ascendientes, éstos sólo podrán ejercitar, a su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de residente permanente de manera independiente respecto del reagrupante y acrediten solvencia económica para atender las necesidades de los miembros de su familia que pretendan reagrupar.</p> <p>3. Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un hijo menor de edad o incapacitado, podrá ejercer el derecho de reagrupación en los términos dispuestos en el apartado 1.</p>	<p><b>Artículo 60. Reagrupación familiar por residentes reagrupados.</b></p> <p>1. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia temporal en virtud de una previa reagrupación familiar podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación respecto de sus propios familiares, siempre que cuenten con una autorización de residencia y trabajo obtenidos independientemente de la autorización del reagrupante y reúnan los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar.</p> <p>2. En el supuesto de los ascendientes, éstos sólo podrán ejercitar, a su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de residente <b>de larga duración</b> y acrediten solvencia económica para atender las necesidades de los miembros de su familia que pretendan reagrupar.</p> <p>3. Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo <b>uno o más hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud</b>, podrá ejercer el derecho de reagrupación en los términos dispuestos en el apartado 1 <b>de este artículo</b>.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011



**Artículo 44. Renovación de las autorizaciones de residencia en virtud de reagrupación familiar.**

1. La renovación de las autorizaciones de residencia por reagrupación deberán solicitarse en modelo oficial en el plazo de 60 días antes de su expiración.

**Artículo 61. Renovación de las autorizaciones de residencia en virtud de reagrupación familiar.**

1. La renovación de las autorizaciones de residencia por reagrupación deberá solicitarse en modelo oficial en el plazo de **sesenta días naturales** antes de su expiración. **La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.**

**2. La renovación de la autorización de residencia por reagrupación familiar de descendientes, menores tutelados o ascendientes podrá ser solicitada por el cónyuge o pareja del reagrupante, siempre que dicho cónyuge o pareja sea residente en España, forme parte de la misma unidad familiar, y el reagrupante original no reúna los requisitos exigibles para la renovación de la autorización por reagrupación familiar.**

**Ello será igualmente de aplicación, en el caso de descendientes o menores tutelados, respecto a su otro progenitor o tutor, siempre que éste tenga la condición de residente en España y sin perjuicio de que forme parte o no de la unidad familiar.**

**En este caso, la naturaleza y duración de la autorización renovada se vinculará a la del cónyuge o pareja, que asumirán la condición de reagrupante.**

**3. Para la renovación de una autorización de residencia por reagrupación familiar se deberán cumplir los siguientes requisitos:**

**a) Relativos al reagrupado:**

**1º. Que sea titular de una autorización de residencia por reagrupación familiar en vigor o se**

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p>halle dentro del plazo de los noventa días naturales posteriores a la caducidad de ésta.</p> <p>2º. Que se mantenga el vínculo familiar o de parentesco o la existencia de la unión de hecho en que se fundamentó la concesión de la autorización a renovar.</p> <p>3º. Tener escolarizados a los menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria durante la permanencia de éstos en España.</p> <p>4º. Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.</p> <p>b) Relativos al reagrupante:</p> <p>1º. Que sea titular de una autorización de residencia en vigor o se halle dentro del plazo de los noventa días naturales posteriores a la caducidad de ésta.</p> <p>2º. Que cuente con empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria de no estar cubierta por la Seguridad Social, en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM.</p> <p>A dichos efectos serán computables los ingresos provenientes del sistema de asistencia social y resultará de aplicación lo previsto en el artículo 54.3 de este Reglamento.</p> <p>3º. Que disponga de una vivienda adecuada para atender sus necesidades y las de su familia, y que habrá de ser su vivienda habitual.</p> <p>Dicha circunstancia será acreditada: de no existir cambio de domicilio en relación con el acreditado para la obtención de la autorización inicial de residencia temporal por reagrupación familiar, con la presentación de documento que acredite la vigencia del título de ocupación; en caso de existir cambio de domicilio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de este Reglamento.</p> <p>En ambos casos, el título que habilite para la ocupación de la vivienda se entenderá referido al</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>2. A la solicitud de renovación deberán acompañarse los documentos que acrediten la disposición de empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, así como la cobertura de la asistencia sanitaria.</p>	<p>extranjero reagrupante o a cualquier otra persona que forme parte de la unidad familiar en base a un parentesco de los enunciados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>4. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que acredite que se reúnen los requisitos señalados en el apartado anterior, entre otros:</p> <p>a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, del reagrupado y del reagrupante.</p> <p>b) En su caso, documentación acreditativa de la vigencia del matrimonio o de la relación de análoga afectividad a la conyugal.</p> <p>c) Los documentos que acrediten que el reagrupante cumple los requisitos establecidos en los puntos 2º y 3º del anterior apartado 3.b).</p> <p>d) En su caso, informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que acredite la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que estén a su cargo.</p> <p>5. En caso de que a partir de la documentación presentada junto a la solicitud no quede acreditada la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que estén a cargo del solicitante, la Oficina de Extranjería pondrá esta circunstancia en conocimiento de las autoridades educativas competentes, y advertirá expresamente y por escrito al extranjero solicitante de que en caso de no producirse la escolarización y presentarse el correspondiente informe en el plazo de treinta días, la autorización no será renovada.</p> <p>6. Para la renovación de la autorización, se valorará, en su caso, previa solicitud de oficio de los correspondientes informes:</p> <p>a) La posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que hubieran sido indultados o se hallasen en situación de remisión condicional de la pena o de suspensión de la pena</p>
--	--

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>3. Las solicitudes de renovación de los familiares reagrupados se presentarán y se tramitarán conjuntamente con la del reagrupante, salvo causa que lo justifique.</p> <p>4. De conformidad con previsto en el artículo 28.3.c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando la resolución sea desfavorable, deberá producirse la salida obligatoria del solicitante.</p> <p>5. Se entenderá que la resolución es favorable en el supuesto de que la Administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la</p>	<p>b) El incumplimiento de las obligaciones del solicitante en materia tributaria y de Seguridad Social.</p> <p>7. Igualmente se valorará el esfuerzo de integración del extranjero acreditado mediante el informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia.</p> <p>Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización.</p> <p>El informe tendrá como contenido mínimo la certificación, en su caso, de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia. En este sentido, la certificación hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.</p> <p>El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por entidades privadas debidamente acreditadas o por entidades públicas.</p> <p>8. Las solicitudes de renovación de los familiares reagrupados se presentarán y se tramitarán conjuntamente con la del reagrupante, salvo causa que lo justifique.</p> <p>9. Se entenderá que la resolución es favorable en el supuesto de que la Administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la</p>
---	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>presentación de la solicitud. En cualquier caso, la presentación de la solicitud prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución de procedimiento. Previa solicitud del interesado, la autoridad competente para conceder la autorización vendrá obligada a expedir el certificado que acredite la renovación por este motivo.</p> <p>6. La resolución favorable se notificará al interesado con indicación de las cantidades que corresponda abonar en concepto de tasas por la concesión de la renovación solicitada, así como por la expedición de la nueva tarjeta de identidad de extranjero.</p>	<p>presentación de la solicitud.</p> <p>10. La resolución favorable se notificará al interesado.</p> <p>11. La autorización de residencia por reagrupación familiar renovada se extenderá hasta la misma fecha que la autorización de que sea titular el reagrupante en el momento de la renovación.</p>



## **CAPITULO VI: EL ARRAIGO**

### **AUTORIZACIONES POR RAZONES DE ARRAIGO**

Las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razones de arraigo se regulan, en primer lugar, en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social (redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre).

A tenor de este precepto “*la Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo*, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente”.

**El desarrollo reglamentario** al que alude el Art. 31.3 de la L.O 4/2000 de 11 de Enero, se llevó a cabo por los artículos 45 y 46 del Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 2393/2004 de 30 de Diciembre, en vigor desde el 7 de Febrero de 2005, salvo en lo referente al arraigo laboral que entró en vigor el 7 de Agosto de 2005, 6 meses después de la entrada en vigor del Reglamento, por estar vigente el Proceso de Normalización establecido en la Disposición Transitoria Tercera del mismo.

En la actualidad y de acuerdo con lo establecido en la Disposición final tercera de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero (redactada de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre), el Gobierno dictó el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril por el que se aprueba el nuevo Reglamento, derogando el aprobado por Real Decreto 2393/2004 de 30 de Diciembre, pasando a ser regulada la Residencia por Circunstancias Excepcionales en el Título V, Capítulo I, artículos 123 al 130 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

El sistema de acceso a este tipo de residencia temporal, tiene como *particularidad* que va dirigida a ciudadanos extranjeros que han acreditado su arraigo en España a través de su **permanencia** ( 2 o 3 años ) en el caso del arraigo laboral y social, o a **través de familiares** ( padres de menores de nacionalidad española o hijos de españoles de origen) en el caso del arraigo familiar y que en el momento de la solicitud se encuentran en España en una situación de irregularidad o estancia.

Y como *limitaciones* de acuerdo con el artículo 31.5 de la precitada Ley:

1.-**Carecer de antecedentes penales en España** o en sus países de anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento jurídico español.

2.-**No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable** en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido (Schengen).

El desarrollo Reglamentario recoge desde el origen tres tipos de autorización de residencia por arraigo como son: **El Arraigo Laboral, Arraigo Social y Arraigo Familiar (Hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles)**, introduciendo el nuevo Reglamento un nuevo supuesto en el arraigo familiar: **Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española.**

#### **REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS SUPUESTOS DE ARRAIGO:**

1.- **No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea**, del Espacio Económico Europeo o de Suiza o familiar de ciudadanos de estos países a los que le sea de aplicación del régimen comunitario.

2.- **Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 31.5** de la Ley anteriormente citada

3.- No encontrarse, en su caso, **dentro del plazo de compromiso de no retorno a España** que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen

4.- **Certificado de antecedentes penales** del país de origen o de residencia, debidamente legalizado

5.- **Pasaporte en vigor** o título de viaje (vigencia mínima de 4 meses).

6.- Certificado o volante de **empadronamiento**.

7.- **Presentación de la solicitud personalmente** por el interesado ante el órgano competente para su tramitación, excepto menores o incapaces, supuesto en el que podrá presentar la solicitud su representante legal.

#### **ARRAIGO LABORAL**

*“Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes*

*penales en España y en su país de origen y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.”* (Art. 124.1.del Real Decreto 557/2011).Cabe reseñar la modificación que introduce este nuevo Reglamento al rebajar la existencia de relación laboral de un año a **6 meses**.

## **REQUISITOS PROPIOS DEL ARRAIGO LABORAL:**

- Documentos que acrediten de forma objetiva la secuencia de una permanencia continuada en España durante un período de **dos años**. (La permanencia se entiende continuada siempre que las ausencias no hayan superado 90 días en los dos últimos años)

Se dará preferencia a los documentos que reúnan los siguientes requisitos:

- Haber sido emitidos por alguna Administración Pública Española.
  - Ser documentos originales o copias compulsadas.
  - Contener los datos identificativos del interesado.
- 
- Documentos que prueben la existencia de relaciones laborales de 6 meses. A efectos de acreditar esta relación laboral, el interesado lo podrá hacer mediante dos documentos: (Art. 124.1 del Real Decreto 557/2011)

➤ ***Resolución judicial que reconozca dicha relación laboral (Sentencia).***

➤ ***Resolución administrativa que confirme el acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.***

Mediante las Instrucciones de 17-4-2007, la Dirección General de Inmigración, autorizó que la relación laboral se pudiera acreditar también, por medio de otros dos documentos:

➤ ***Auto Judicial de conciliación que reconozca un la relación laboral.***

➤ ***Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que contenga información sobre el acta de infracción y la duración de la relación laboral.***

A “sensu contrario” no se aceptan como documentos análogos el **Acta de conciliación entre trabajador y empresa** ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de las Comunidades Autónomas, así como tampoco **Informes de vida laboral** expedidos por la Seguridad Social, ni los informes de Inspección de Trabajo sin Acta de Infracción.

Las autorizaciones de residencia concedidas por razones de Arraigo Laboral tienen una **duración de un año, ámbito nacional** y llevan aparejada una autorización de trabajo durante su vigencia (salvo en el caso de menores de edad). A su término podrá solicitar autorización de residencia o de residencia y trabajo.

## **ARRAIGO SOCIAL**

“Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo, *a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, cuenten con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año y bien, salvo en lo siguientes casos:*

1. En el caso del sector agrario cabrá la presentación de dos contratos, con distintos empleadores y concatenados, cada uno de ellos de duración mínima de 6 meses.

2. En el caso de desarrollo de actividades de una misma ocupación, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un empleador, se admitirá la presentación de varios contratos, todos ellos de duración mínima de un año, y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a 30 horas en el cómputo global.

*Que acrediten vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presenten un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual ” ( Informe que en el anterior Reglamento se denominaba de inserción social y era emitido por los Ayuntamientos) (Art. 124.2. del Real Decreto 557/2011).*

### **REQUISITOS PROPIOS DEL ARRAIGO SOCIAL:**

- Documentos que acrediten de forma objetiva la secuencia de una permanencia continuada en España durante un período de **tres años** (La permanencia se entiende continuada siempre que las ausencias no hayan superado 120 días).
- Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o en su defecto, presentar informe de arraigo que acredite su integración social, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.

A los efectos de vínculos familiares se entenderán referidos exclusivamente a los cónyuges o parejas de hecho registradas (introducido con el nuevo Reglamento), ascendientes y descendientes en primer grado y línea directa (mediante certificados de nacimiento o matrimonio, debidamente legalizados y copia de la tarjeta de residencia del familiar)

***\*\* Por analogía se acepta el vínculo familiar del solicitante con hijos nacidos en España que han adquirido la nacionalidad española.***

***\*\* Este informe que no tiene CARÁCTER VINCULANTE, deberá emitirse en un plazo de 30 días desde su solicitud y en él deberá constar el tiempo de permanencia en su domicilio habitual, en el que deberá estar empadronado, los medios económicos con los que cuente, los vínculos con familiares residentes en España y los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de integración sociolaborales y culturales.***

*Simultáneamente y por medios electrónicos, la Comunidad Autónoma deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería competente.*

*En caso de que el informe no se haya emitido en plazo, circunstancia que debe ser acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.*

*Hay que reseñar que en el anterior Reglamento el Informe era emitido por los Ayuntamientos y ahora la competencia es de las Comunidades Autónomas, no obstante y a tenor de lo establecido en el artículo 124.2. apartado c) del Real Decreto 557/2011, dicho Informe puede ser emitido por la Corporación local en la que el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido establecido por la Comunidad Autónoma competente, siempre que ello haya sido previamente puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración*

- Contrato/ contratos de trabajo, firmado por el trabajador y empresario/s, cuya duración no sea inferior a un año o en su caso contratos de trabajo.

#### **Documentación para adjuntar al contrato de trabajo**

- D.N.I. o C.I.F. del empleador o del representante legal de la empresa, que firma el contrato
- Si se trata de empresa, documento público que otorgue la representación legal de la misma a favor del firmante del contrato de trabajo.
- Inscripción de la empresa en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
- Titulación o capacitación para el ejercicio de la profesión.
- En caso de Servicio Doméstico, documentos que acrediten los medios económicos o capacidad para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. (Declaración del IRPF del último ejercicio u otros documentos que prueben los medios económicos.

Las autorizaciones de residencia concedidas por razones de Arraigo Social tienen una duración de un año y llevan aparejada una autorización para trabajar. La eficacia de la autorización estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y en el caso de realizar una actividad por cuenta ajena o de empleado de Hogar, a nombre del empleador o empresa para la que se concede, en el plazo de un mes desde la notificación.

El órgano que emite el informe podrá recomendar que se **EXIMA** al extranjero de contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con medios económicos suficientes. Si cumpliera con los requisitos de cuenta propia (art. 105.3 del Real Decreto 557/2011) podrá alegar que los medios económicos derivan del desarrollo de una actividad por cuenta propia.

*\*\* A modo de ejemplo, el órgano competente recomienda que se exima del contrato cuando verifica otros medios de vida suficientes para la unidad familiar como en el caso de cónyuges o hijos y también en el supuesto de ascendientes que incluso superan la edad de 65 años. La concesión de estas autorizaciones no lleva aparejada la autorización para trabajar.*

Aunque el Arraigo social, desde su propia definición en el Reglamento de la Ley, establece como requisito fundamental contar con un contrato de trabajo, cada vez es más numeroso el número de solicitudes planteadas justificando como medios de vida los derivados de una actividad laboral por cuenta propia. De ahí que se recoja expresamente en el nuevo Reglamento.

Es importante señalar que algunos solicitantes de arraigo social han sido titulares de permisos de trabajo y residencia, y han devenido a la situación irregular, por haber sido denegada su renovación, siendo la autorización de residencia por arraigo, el modo de regularizar su situación.

*\*\* Entre los que solicitan la autorización con medios de vida por cuenta propia, la gran mayoría provienen de permisos de trabajo por cuenta propia del régimen general que han visto desestimadas sus renovaciones, por incumplimientos en materia tributaria y de Seguridad Social.*

Los documentos a presentar en estos casos de actividad por cuenta propia en arraigo, es similar a la prevista en la normativa para las autorizaciones de trabajo por cuenta propia del régimen general, variando sólo, en función de si la actividad profesional está en marcha o se trata de un proyecto a realizar.

En todo caso, en líneas generales, los documentos van a consistir en asegurar las obligaciones tributarias y de Seguridad Social adjuntando la siguiente documentación:

- (1) Proyecto de la actividad a realizar, con la inversión prevista, rentabilidad esperada y puestos de trabajo cuya creación se prevé.
- (2) Acreditar la previsión de que el ejercicio de la actividad producirá desde el primer año recursos económicos suficientes para la manutención y alojamiento del interesado, además de los necesarios para el mantenimiento de la actividad.
- (3) Declaración censal, IRPF Anual, Declaración trimestral IVA, Alta en el Impuesto de actividades económicas y certificaciones de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
- (4) Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad del local, y Licencias apertura o funcionamiento de la actividad.
- (5) Acreditar la cualificación profesional, y si procede título homologado y colegiación, cuando el ejercicio de la profesión así lo exija.

*\*\* Los requisitos del Proyecto, la cualificación o experiencia y la previsión de que la actividad producirá recursos económicos suficientes, pueden acreditarse mediante informe de valoración que incluya estos requisitos, emitidos por las siguientes organizaciones ( UPTA, ASNEPA, CIAE y OPA)*



## **ARRAIGO FAMILIAR**

Esta modalidad de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, difiere en gran medida, con las figuras de arraigo laboral y social, sobre todo en dos aspectos:

- **No se exige ningún período previo de permanencia**
- **No se necesita acreditar disponer de medios económicos**

**En los dos supuestos que contempla el Reglamento tienen en común que el sujeto que sirve de vínculo familiar tiene que tener nacionalidad española ( es decir un vínculo jurídico con el Estado Español ) y en un caso además ha de ser de origen .**

## **ARRAIGO FAMILIAR DE PADRE O MADRE DE UN MENOR DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA**

*Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo, cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, (Art. 124.3 apartado a) del Real Decreto 557/2011).*

Siempre que se cumpla estos requisitos:

“que el progenitor solicitante tenga a cargo el menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo “.

## **REQUISITOS PROPIOS DEL ARRAIGO DE PADRE O MADRE DE UN MENOR DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA:**

A) Acreditar documentalmente ser padre o madre de un menor de nacionalidad española (que se justificará a través del certificado de nacimiento del menor).

Con el fin de acreditar este requisito se estará a lo dispuesto en el Código Civil, Ley de Registro Civil recientemente modificada por la Ley 20/11, de 21 de julio, que entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado ( 22-07-2011), salvo las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, en entrarán al día siguiente de su publicación en el BOE (23-07-2011) , así como el Reglamento de desarrollo.

Entre las formas de adquisición de la nacionalidad están:

1. Nacionalidad de **origen**
2. Nacionalidad por **adopción**
3. Nacionalidad por **Residencia**
4. Nacionalidad por **carta de naturaleza**
5. Nacionalidad por **opción**
6. Nacionalidad por **valor de simple presunción** ( art. 17 c) del Código Civil

La Ley 36/2002, de 8 de octubre de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, introdujo en el Código Civil de 1889 y sus sucesivas reformas una nueva reforma a fin de dar cumplimiento a los mandatos de la Constitución Española de 1978, en este sentido se ha introducido en el art. 20 la posibilidad de que las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España puedan optar por la nacionalidad española sin límite de edad.

B) Documentos que acrediten que el padre o madre tiene a su cargo el menor (patria potestad o guarda y custodia) y que convive con él (volante de empadronamiento familiar) ó que está al corriente de las

obligaciones paternofiliales respecto al mismo (en caso de separación o divorcio convenio regulador o sentencia en que se establezcan las obligaciones).

## **ARRAIGO FAMILIAR DE HIJOS DE ESPAÑOL DE ORIGEN**

*“Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo, cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles”.* (Art. 124.3 apartado b) del Real Decreto 557/2011).

De la experiencia de tramitación, podríamos concluir que los solicitantes son hijos de emigrantes que salieron de España, como consecuencia de la guerra civil, tanto a países de Hispanoamérica, como Venezuela, Argentina o Uruguay, así como también a Rusia (los llamados “niños de la guerra”) y en menor medida hijos de mujeres españolas que contrajeron matrimonio con extranjeros, perdiendo su nacionalidad.

## **REQUISITOS PROPIOS DEL ARRAIGO DE HIJOS DE ESPAÑOL DE ORIGEN:**

- C) Acreditar documentalmente ser hijo de padre o madre que hayan sido españoles de origen.
- D) Certificado de nacimiento del solicitante, debidamente legalizado.
- E) Documentos que acrediten que el padre o madre han sido españoles de origen (partida de nacimiento expedida por el Registro Civil español correspondiente).

Con el fin de acreditar la circunstancia de ser hijo de padre o madre que hubieran sido españoles de origen, se atenderá a lo establecido en el Código Civil, en la Ley sobre el Registro Civil y en el Reglamento de la misma (R.D. 14-11-1958).

Para determinar si una persona es española de origen, en primer lugar, habrá que comprobar su inscripción en el Registro Civil español, los datos de nacionalidad de sus progenitores obrantes en dicha inscripción, así como la información que de su nacionalidad, esté contenida en las anotaciones marginales que consten en la inscripción de su nacimiento.

Existe una multiplicidad de factores que hay que conjugar para determinar la nacionalidad española de origen, como por ejemplo:

- A) El Código Civil, con sus reformas, respecto a la nacionalidad y el art. 17 del mismo.
- B) La Constitución Española de 1978, ya que antes de su vigencia la madre casada con extranjero no transmitía la nacionalidad española a los hijos.
- C) Ley de 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica por la que establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Ley que en su disposición adicional séptima permite la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español.

Del análisis de todas las normas mencionadas, habría que concluir, al menos, lo siguiente:

- A) La posesión de un pasaporte español no es prueba suficiente de la condición de español de origen.
- B) La nacionalidad del abuelo no determina por sí misma, la nacionalidad de origen del nieto. (principio “ius sanguinis” de los progenitores).
- C) La nacionalidad del inscrito vendrá determinada por el contenido del asiento, inscripción en el Registro Civil ó en el Consulado español correspondiente.

La concesión de esta autorización, lleva aparejada una autorización para trabajar de ámbito nacional y para todas las actividades económicas.

A continuación, y una vez analizada la cuestión del arraigo, por medio de este anexo adjuntamos un cuadro comparativo del tratamiento que la misma tiene en el actual reglamento de extranjería en comparación a su inmediatamente anterior, resaltando en color rojo las diferencias para una mejor y más rápida comprensión, en el caso del arraigo si bien el mismo se ha mantenido, pese a presiones para que fuese retirado, y no sabemos si en otro momento se retirará, lo cierto es que las condiciones para acceder al mismo se han endurecido.

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
TÍTULO IV. Residencia	TÍTULO V. RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

<b>CAPÍTULO I. Residencia temporal</b>	<b>CAPÍTULO I. Residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo.</b>
<b>SECCIÓN 3ª. Residencia temporal en supuestos excepcionales</b>	
<p><b>Artículo 45. Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales.</b></p> <p>1. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos determinados en este artículo siempre que no haya mala fe del solicitante.</p> <p>2. Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo, en los siguientes supuestos:</p> <p>a) Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año.</p>	<p><b>Artículo 124. Autorización de residencia temporal por razones de arraigo.</b></p> <p>Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de <b>arraigo laboral, social o familiar cuando se cumplan los siguientes requisitos:</b></p> <p>1. Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen <b>o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años</b>, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a <b>seis meses</b>.</p> <p><b>A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite.</b></p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011



<p>b) A los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, cuenten con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año y bien acrediten vínculos familiares con otros extranjeros residentes, bien presenten un informe que acredite su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.</p> <p>A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán referidos exclusivamente a los cónyuges, ascendientes y descendientes en línea directa.</p> <p>c) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.</p> <p>3. Se podrá conceder una autorización por razones de protección internacional a las personas a las que el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en los términos previstos en el artículo 31.3 de su reglamento de aplicación, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado por el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre. Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos a los que se refieren los artículos 31.4 y 34.1 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.</p>	<p>a) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen <b>o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años.</b></p> <p>b) <b>Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año. Dicha contratación habrá de estar basada en la existencia de un solo contrato, salvo en los siguientes supuestos:</b></p> <p><b>1º. En el caso del sector agrario, cabrá la presentación de dos contratos, con distintos empleadores y concatenados, cada uno de ellos de duración mínima de seis meses.</b></p> <p><b>2º. En el caso de desarrollo de actividades en una misma ocupación, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un empleador, se admitirá la presentación de varios contratos, todos ellos de duración mínima de un año, y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a treinta horas en el cómputo global.</b></p> <p>c) <b>Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe de arraigo que acredite su integración social, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.</b></p> <p>A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán referidos exclusivamente a los cónyuges o <b>parejas de hecho registradas</b>, ascendientes y descendientes en <b>primer grado</b> y línea directa.</p> <p><b>En los supuestos de arraigo social acreditado mediante informe, que deberá ser emitido y notificado al interesado en el plazo máximo de treinta días desde su solicitud, en éste deberá constar, entre otros factores de arraigo que puedan acreditarse por las diferentes Administraciones competentes, el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio habitual, en el que deberá estar empadronado, los medios económicos con los que cuente, los vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento</b></p>
--	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>4. Se podrá conceder una autorización por razones humanitarias, en los siguientes supuestos:</p> <p>a) A los extranjeros víctimas de los delitos tipificados en los artículos 311 a 314 del Código Penal, de delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación, tipificada en el artículo 22. 4.ª, del Código Penal, o de delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, en los términos previstos por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, siempre que haya recaído sentencia por tales delitos.</p> <p>b) A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país de origen, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la salud o la vida. A los efectos de acreditar la necesidad, será preciso un informe clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.</p> <p>c) A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios o proceden, a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad o la de su familia, y que reúnen los demás requisitos para obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y trabajo.</p>	<p>de programas de inserción sociolaborales y culturales. Simultáneamente y por medios electrónicos, la Comunidad Autónoma deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería competente.</p> <p>A dichos efectos, el órgano autonómico competente podrá realizar consulta al Ayuntamiento donde el extranjero tenga su domicilio habitual sobre la información que pueda constar al mismo.</p> <p>El informe de arraigo referido anteriormente podrá ser emitido por la Corporación local en la que el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido establecido por la Comunidad Autónoma competente, siempre que ello haya sido previamente puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.</p> <p>El informe de la Corporación local habrá de ser emitido y notificado al interesado en el plazo de treinta días desde la fecha de la solicitud. Simultáneamente y por medios electrónicos, la Corporación local deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería competente.</p> <p>El órgano que emita el informe podrá recomendar que se exima al extranjero de la necesidad de contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con medios económicos suficientes. En caso de cumplirse los requisitos previstos en el artículo 105.3 de este Reglamento, se podrá alegar que los medios económicos derivan de una actividad a desarrollar por cuenta propia.</p> <p>En caso de que el informe no haya sido emitido en plazo, circunstancia que habrá de ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.</p> <p>3. Por arraigo familiar:</p> <p>a) Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las</p>
---	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004</b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
<p>5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, se podrá conceder una autorización a las personas que colaboren con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales, o cuando concurren razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. A estos efectos, dichas autoridades podrán instar a los organismos competentes la concesión de la autorización de residencia o de residencia y trabajo a la persona que se encuentre en alguno de estos supuestos</p> <p>6. En virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en este artículo, así como sus renovaciones, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 y en la normativa de asilo.</p> <p>7. La concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales concedida por los supuestos de arraigo, con excepción de la que se conceda a los menores de edad, llevará aparejada una autorización de trabajo en España durante la vigencia de aquella. En la misma situación se hallarán las personas previstas en el artículo 31.3 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.</p> <p>En los demás supuestos, el extranjero podrá solicitar, personalmente, la correspondiente autorización para trabajar en los registros de los órganos competentes para su tramitación. Dicha solicitud podrá presentarse de manera simultánea con la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales o bien durante el período de vigencia de aquella, y en su concesión será preciso acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b), c), d), e) del artículo 50. No obstante, los requisitos a que se refiere la párrafo c) del artículo 50 se acreditarán en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 51 de este reglamento.</p>	<p>obligaciones paternofiliales respecto al mismo.</p> <p>b) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.</p> <p>4. Por Orden del titular del Ministerio de la Presidencia a propuesta de los titulares de los Ministerios del Interior y de Trabajo e Inmigración y previo informe de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, se podrá determinar la aplicación de la situación nacional de empleo a las solicitudes de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p><b>Artículo 46. Procedimiento.</b></p> <p>1. La autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que no requerirá visado, deberá ser solicitada personalmente por el extranjero ante el órgano competente para su tramitación, salvo en el caso de menores o incapaces, en el que podrá presentar la solicitud su representante legal, acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses. En los términos fijados en la resolución del Ministro del Interior por la que se autorice la permanencia del interesado en España en los casos del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, se podrá eximir de este requisito.</p> <p>b) En los casos en que se exija, contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario con una duración mínima de un año, cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada.</p> <p>c) Documentación acreditativa de encontrarse en alguna de las situaciones a las que se refiere el artículo anterior.</p> <p>2. En particular, para acreditar que se reúnen las condiciones establecidas para los supuestos de arraigo, la documentación aportada deberá ajustarse a las siguientes exigencias:</p> <p>a) En caso de que el interesado fuera mayor de edad penal, deberá aportar certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país o países en que haya residido durante los cinco años anteriores a su entrada en España, en el que no deberán constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español</p>	<p><b>Artículo 128. Procedimiento.</b></p> <p>1. La autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que no requerirá visado, deberá ser solicitada personalmente por el extranjero ante el órgano competente para su tramitación, salvo en el caso de menores o incapaces, en el que podrá presentar la solicitud su representante legal, acompañada de la siguiente documentación:</p> <p>a) <b>Copia del</b> pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses, <b>previa exhibición del documento original</b>. En los términos fijados en la resolución del Ministro del Interior por la que se autorice la permanencia del interesado en España en los casos <b>previstos en los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre</b>, se podrá eximir de este requisito.</p> <p>b) En los casos en que se exija, contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario, cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización solicitada.</p> <p>c) Documentación acreditativa de encontrarse en alguna de las situaciones a las que se refieren los artículos anteriores.</p> <p>2. En particular, para acreditar que se reúnen las condiciones establecidas para los supuestos de arraigo, la documentación aportada deberá ajustarse a las siguientes exigencias:</p> <p>a) En caso de que el interesado fuera mayor de edad penal, deberá aportar certificado de antecedentes penales <b>o documento equivalente</b> expedido por las autoridades del país o países en que haya residido durante los cinco años anteriores a su entrada en España, en el que no deberán constar condenas por delitos existentes</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>b) En el supuesto de arraigo laboral, a los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite.</p> <p>c) En los supuestos de arraigo acreditado mediante informe emitido por un ayuntamiento, en éste deberá constar el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio, los medios de vida con los que cuente, su grado de conocimiento de las lenguas que se utilicen, la inserción en las redes sociales de su entorno, los programas de inserción sociolaboral de instituciones públicas o privadas en los que haya participado y cuantos otros extremos puedan servir para determinar su grado de arraigo.</p> <p>El ayuntamiento correspondiente podrá recomendar que se exima al extranjero de la necesidad de contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con medios de vida suficientes.</p> <p>3. En los supuestos de solicitudes presentadas por las víctimas de los delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, los interesados podrán presentar la solicitud cuando se haya dictado a favor de la víctima una orden judicial de protección, y podrá concederse la autorización de residencia una vez que haya recaído sentencia por los delitos de que se trate.</p> <p>4. El órgano competente podrá requerir del solicitante que aporte los documentos señalados en los artículos anteriores u otros documentos que sean necesarios para justificar los motivos de la solicitud, y le manifestará que, de no hacerlo en el plazo que se señale en la notificación, que no podrá ser superior a un mes, se le tendrá por desistido de la solicitud y se producirá el archivo del procedimiento.</p> <p>5. Asimismo, el órgano competente podrá requerir la comparecencia del solicitante y mantener con él</p>	<p>en el ordenamiento español.</p> <p>b) En los supuestos de arraigo social, se deberá presentar documentación acreditativa del grado de parentesco alegado o, en su caso, el correspondiente informe de arraigo. Igualmente, en caso de solicitarse la exención de la necesidad de contar con un contrato de trabajo, se deberá presentar documentación acreditativa de contar con medios económicos suficientes o, en su caso, del cumplimiento de los requisitos previstos en relación con la actividad por cuenta propia</p> <p>3. El órgano competente para resolver comprobará si con la solicitud se acompaña la documentación exigida y, si estuviera incompleta, formulará al solicitante el oportuno requerimiento a fin de que se subsanen los defectos observados en el plazo que se señale en la notificación, que no podrá ser superior a un mes, advirtiéndole que de no subsanarse los mismos en el indicado plazo se le tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de su expediente, dictándose al efecto la oportuna resolución.</p> <p>4. Asimismo, el órgano competente podrá requerir la comparecencia del solicitante y mantener con él</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011



<p>una entrevista personal. Cuando se determine la celebración de la entrevista, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración, además del intérprete, en caso necesario, y quedará constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado. Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la veracidad de otras circunstancias en que se ha basado la solicitud, se recomendará la denegación de la autorización y se remitirá copia del acta al organismo competente para resolver. En caso de que surgieran dudas sobre el criterio a seguir, el órgano competente deberá elevar la consulta correspondiente a la Dirección General de Inmigración.</p> <p>6. En los supuestos a los que se refiere el apartado 5 del artículo anterior, la competencia para su resolución corresponderá:</p> <p>a) A la Secretaría de Estado de Seguridad cuando la autorización esté basada en la colaboración con las autoridades policiales, fiscales y judiciales y en los casos de seguridad nacional. A la solicitud basada en estos supuestos se acompañará el informe desde la jefatura correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean del Estado, ya sean de la Comunidad Autónoma, así como, en su caso, el de la autoridad fiscal o judicial, para acreditar las razones que la sustentan.</p> <p>b) A la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en los casos de colaboración con las demás autoridades administrativas y por razones de interés público.</p>	<p>una entrevista personal. Cuando se determine la celebración de la entrevista, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración, además del intérprete, en caso necesario, y quedará constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.</p> <p>Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos o de la veracidad de otras circunstancias en que se ha basado la solicitud, se recomendará la denegación de la autorización y se remitirá copia del acta al órgano competente para resolver. En caso de que surgieran dudas sobre el criterio a seguir, el órgano competente deberá elevar la consulta correspondiente a la Dirección General de Inmigración.</p> <p>5. En los supuestos a los que se refiere el <b>artículo 127</b>, la competencia para su resolución corresponderá:</p> <p>a) Al <b>titular de</b> la Secretaría de Estado de Seguridad cuando la autorización esté basada en la colaboración con las autoridades policiales, fiscales y judiciales y en los casos de seguridad nacional. A la solicitud basada en estos supuestos se acompañará el informe desde la jefatura correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean del Estado, ya sean de la Comunidad Autónoma, así como, en su caso, el de la autoridad fiscal o judicial, para acreditar las razones que la sustentan.</p> <p>b) Al <b>titular de</b> Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en los casos de colaboración con las demás autoridades administrativas y por razones de interés público.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>c) En los supuestos de los párrafos a) y b), las autoridades mencionadas podrán delegar las facultades conferidas en los Subdelegados del Gobierno o en los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. Igualmente, en el caso del párrafo a) esta facultad podrá delegarse en el Director General de la Policía o en el Comisario General de Extranjería y Documentación.</p> <p>7. La eficacia de la autorización concedida en el supuesto de arraigo del artículo 45.2.b) de este Reglamento estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación realizada al solicitante. Cumplida la condición, la autorización comenzará su período de vigencia.</p> <p>8. En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales o, en su caso, desde su entrada en vigor, el extranjero deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero.</p>	<p>6. La eficacia de la autorización concedida en el supuesto de arraigo del artículo <b>124.2</b> de este Reglamento estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación realizada al solicitante, <b>salvo en el caso de que se haya eximido al interesado de la presentación de contrato de trabajo y siempre que los medios económicos no deriven de la realización de una actividad por cuenta propia</b>. Cumplida la condición, la autorización comenzará su periodo de vigencia.</p> <p>7. En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales o, en su caso, desde su entrada en vigor, el extranjero deberá solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero <b>ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes</b>.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p><b>Artículo 47. Renovación y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales.</b></p> <p>1. Los titulares de una autorización concedida por el Secretario de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán renovar la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que permanecen las razones que motivaron su concesión. Solamente en el caso de que las autoridades concluyesen que han cesado las razones que motivaron su concesión, podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por este Reglamento para su obtención, con excepción del visado.</p> <p>2. Los supuestos de autorizaciones por circunstancias excepcionales concedidas por los motivos recogidos en el apartado 3 del artículo 45 se registrarán para su renovación por la normativa de asilo y protección temporal aplicable.</p> <p>3. En las autorizaciones concedidas por los demás supuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98, los titulares de la autorización podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las licencias o permisos administrativos imprescindibles para el puesto que se pretende ocupar.</p>	<p><b>Artículo 130. Prórroga y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales.</b></p> <p>1. En virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base <b>en los artículos precedentes</b>, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y en la normativa <b>sobre protección internacional</b>.</p> <p>2. Los titulares de una autorización concedida por el <b>titular de la Secretaría</b> de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán <b>prorrogar</b> la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que persisten las razones que motivaron su concesión. Solamente en el caso de que las autoridades concluyesen que han cesado las razones que motivaron su concesión, podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo <b>de acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de este Reglamento</b>.</p> <p>3. Los supuestos de autorizaciones por circunstancias excepcionales concedidas por los motivos recogidos en el <b>artículo 125</b> se registrarán para su renovación por la normativa <b>sobre protección internacional</b> aplicable.</p> <p>4. En las autorizaciones concedidas por los demás supuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo <b>202</b>, los titulares de la autorización podrán solicitar una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para su obtención, incluida la titularidad de las licencias o permisos administrativos imprescindibles para el puesto que se pretende ocupar.</p>
---	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>4. Los extranjeros podrán solicitar la autorización de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo o, cuando se haya previsto, la renovación de la autorización por circunstancias excepcionales, durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p>	<p>5. Los extranjeros podrán solicitar la autorización de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo o, cuando se haya previsto, la <b>prórroga</b> de la autorización por circunstancias excepcionales, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de su autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los <b>noventa días naturales</b> posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p>



## **CAPITULO VII: LA NACIONALIDAD**

### **PREVIO**

La conversión de España –país de emigración– en país de inmigración, como venimos diciendo, exige una reflexión sobre la eventual modificación de los principios reguladores de toda la política normativa en materia del código civil, ya que no podemos obviar que los inmigrantes y sus hijos tienen arbitrados unos procedimientos para acceder a la nacionalidad española.

Un gran número de extranjeros quieren sustituir su estatuto de extranjería por el de ciudadano comunitario, mediante el acceso a la nacionalidad española, en primer lugar por la flexibilidad y facilidad que conlleva el régimen comunitario, y en segundo lugar para “huir” de los cada vez mas duros requisitos que establece el régimen del estatuto de extranjero.

La vía de la naturalización por residencia es la más utilizada por los inmigrantes. Esta modalidad necesita ser revisada, no sólo en cuanto a los plazos de residencia exigidos sino también en relación a las condiciones que se deben cumplir para ser español.

En cuanto a los requisitos impuestos, que aparecen formulados mediante conceptos jurídicos indeterminados: «buena conducta» o «suficiente integración», deberían estar establecidos con mayor claridad y exactitud. Las conductas reprochables si están tasadas el solicitante sabría de antemano si cumple o no; y, con respecto a la razonable o suficiente integración también hay que aunar los criterios. En los últimos tiempos, algunos encargados de los registros civiles no solo comprueban si se habla, lee y escribe con corrección en nuestra lengua sino que están haciendo, sin amparo legal, verdaderos exámenes de historia y cultura española.

Estas pruebas existen en muchos ordenamientos, incluso en países de nuestro entorno; sin embargo, España no las tiene estipuladas, por lo que la realización de un test de esas características, para poder llevarse acabo, debería ser incorporado, con carácter previo, en el ámbito legal. En su caso, se debería regular nítidamente qué vamos a exigir a los inmigrantes para poder adquirir la nacionalidad española. De otra forma la inseguridad jurídica y el uso arbitrario se dan con demasiada frecuencia.

Si a todo ello unimos el atasco en el que se encuentra actualmente la administración a efecto de dar respuesta a todas las solicitudes de nacionalidad, así como el endurecimiento de los requisitos, como por ejemplo todo lo referente a los antecedentes policiales, que no penales, hacen prácticamente de la obtención de nacionalidad una opción dificultosa y complicada.

## **CONCEPTO**

Como la mayoría de las instituciones jurídicas vigentes, el concepto jurídico de nacionalidad tiene su origen en el **Derecho romano**, que sólo otorgaba protección a los miembros de las *civitas* romana y **únicamente los ciudadanos romanos gozaban de la plenitud de los derechos públicos y privados**, en oposición al *peregrinus*, que carecía de derechos, que le fueron concedidos, parcialmente, en época tardía. Hasta que en el año 212 d. de C. la *Constitutio Antoniniana* del emperador CARACALLA otorgó la ciudadanía romana a todos los ciudadanos libres del Imperio. En la Edad Media, por influjo del feudalismo, la nacionalidad es sustituida por una relación de fidelidad personal entre el vasallo y el señor natural o, en último término, el soberano. En la Edad Moderna desaparece esta idea de sumisión y se concibe la nacionalidad, al tiempo del nacimiento del Estado moderno, o bien como el vínculo que une a un individuo con la organización política (Estado) a la que pertenece, o bien como una verdadera comunidad natural y orgánica, en la que los derechos y obligaciones son manifestaciones de la condición y cualidad de la persona.



Definida la nacionalidad como **el vínculo que une a cada persona con un Estado** determinado tiene un sentido más de Derecho público que de Derecho privado

## **FORMAS DE ADQUISICION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA**

### **ORIGINARIA**

La adquisición originaria es **la que se produce en el momento mismo del nacimiento**; más que adquisición es una *atribución de la nacionalidad por el hecho del nacimiento*, que se produce automáticamente, sin declaraciones de voluntad ni especiales requisitos. Se contrapone a **la derivativa**, que **implica un cambio de nacionalidad en momento posterior al nacimiento** y es una adquisición de la nacionalidad, por un hecho o unas circunstancias posteriores al nacimiento.

El artículo 11.2 de la Constitución dispone que *ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad*. El artículo 17.1 del Código civil contempla los supuestos de nacionalidad española de origen, *iure sanguinis* y *iure soli*, pero hay **otros que son de origen por ficción legal** (arts. 17.2 y 19) y son casos de **adquisición por adopción y por opción**.

#### **A) POR FILIACION**

**«IURE SANGUINIS»: ADQUISICIÓN ORIGINARIA POR FILIACIÓN.** Se les atribuye la nacionalidad española y son españoles de origen, en el momento del nacimiento, *a los nacidos de padre o madre españoles*, dispone el artículo 17.1.a).

Están en plan de igualdad el padre y la madre (en aras del principio de igualdad del art. 14 de la Constitución). La filiación de tales «nacidos» es por naturaleza (no la adoptiva, a que se refiere el art. 19), **siendo indiferente que sea matrimonial o extramatrimonial** (art. 14 de la Constitución y 108 del Código civil). **No importa el lugar de nacimiento**, sea territorio español o no. La atribución de la nacionalidad española se produce automáticamente desde el momento mismo del nacimiento.

Esta atribución de la nacionalidad se produce, como se ha dicho, automáticamente y al tiempo del nacimiento, siempre que se determine legalmente la filiación al *nacido menor de 18 años*; si tal determinación se produce después — dispone el art. 17.2— sólo podrá, si quiere, adquirir la nacionalidad española por opción, aunque con la ficción de que es español de origen.

## **B) POR NACIMIENTO**

**«IURE SOLI»: ADQUISICIÓN ORIGINARIA POR NACIMIENTO EN ESPAÑA.** Se atribuye la nacionalidad española, automáticamente, desde el nacimiento y son españoles de origen *los nacidos en España* en los tres casos que enumera el artículo 17.1, apartados *b)*, *c)* y *d)*

Primero [art. 17.1.b)]. *Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España.* Se trata de la segunda generación de extranjeros nacidos en España, a la que ya se le atribuye la nacionalidad española desde su nacimiento en España, para evitar la perpetuación indefinida de estirpes de extranjeros en nuestro país; es suficiente que uno sólo de los progenitores hubiera nacido en España y no se requiere la domiciliación de éste en España al tiempo del nacimiento del hijo

Sin embargo, por razones obvias, **no es aplicable esta norma al personal diplomático extranjero**. Así, el segundo inciso del mismo artículo 17.2.b) dispone que *se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España*.

Segundo [art. 17.1.c)]. ***Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad***. Es el caso de los apátridas, a cuyos hijos nacidos en España se les atribuye la nacionalidad española por *vis atractiva*, evitando así que se perpetúen situaciones de apatridia. Se aplica también en caso de que la legislación extranjera no atribuya su nacionalidad al hijo de extranjero nacido en España, con lo que se evita que se produzca la situación de apatridia, se lleva a cabo por medio del expediente de **Presunción**.

Por el momento, de acuerdo con la doctrina sentada por la DGRN, son españoles *iure soli* los nacidos en España de progenitores que posean alguna de las siguientes nacionalidades:



- argentina
- bielorusa
- brasileña
- caboverdiana
- colombiana
- costarricense
- cubana
- guineana (Guinea- Bissau)
- pakistaní nacido en el extranjero
- paraguaya
- peruana
- portuguesa no inscritos en registros portugueses
- nacionales de Santo Tomé
- uruguaya

Tercero [art. 17.1.d)]. *Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada.* Es también expresión de la *vis atractiva* del *ius soli*, territorio español, cuando no se puede determinar la nacionalidad por ningún otro criterio. Y también evita que se produzcan casos de apatridia en tantos casos de niños abandonados o hijos de padres desconocidos. El mismo precepto añade una presunción, para no caer en la práctica en complicados problemas de prueba: *se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.*

Al igual que en el caso de la atribución de la nacionalidad *iure sanguinis*, en los tres casos mencionados de atribución *iure soli* se produce automáticamente y al tiempo del nacimiento, siempre que se determine el nacimiento de un *menor de dieciocho años*; si se determina después —dispone el art. 17.2— sólo podrá, si quiere, adquirir la nacionalidad española por opción, con la ficción de que es español de origen.

## DERIVATIVA

Es la *adquisición de la nacionalidad en un momento posterior al nacimiento.*

Por tanto, se produce un cambio en la nacionalidad anterior.

En el Código se regulan los supuestos de la adquisición derivativa por **adopción** (art. 19); por **opción** (art. 20) en cuatro casos que contempla; por **naturalización**, que puede ser por **carta de naturaleza** (art. 21) y por **residencia** (art. 22); por **consolidación** (art. 18).

### C) POR ADOPCIÓN DE UN MENOR.

Dispone el artículo 19.1: *el extranjero menor de dieciocho años, adoptado por un español, adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen.*

Se adquiere la nacionalidad española por la *adopción* por parte de un *adoptante español*, sea el padre, sea la madre o sean ambos, a un adoptando *extranjero menor de dieciocho años* (si fuera mayor, se daría la opción que prevé el mismo art. 19.2).

La adquisición se produce *automáticamente, desde el momento de la adopción*, por lo que tiene importancia la fecha de la misma, que será la de la resolución judicial que la constituye. Y da lugar a la *nacionalidad española de origen*, lo que —como se ha dicho— es una **ficción legal**, pues lo cierto es que se adquiere en momento posterior al nacimiento y provoca un cambio de nacionalidad, lo que define la adquisición derivativa; pero tal ficción legal tiene la importante consecuencia de que no puede perderse como sanción (art. 11.2 de la Constitución).

**Si se extingue la adopción** —tanto en este caso de adopción de menor como de adopción de un mayor de dieciocho años que puede dar lugar a adquisición por opción, que se verá en seguida—, **no produce la pérdida de la nacionalidad española** que se hubiera adquirido en virtud de aquélla, por disposición expresa del artículo 180.3: *la extinción de la adopción no es causa de pérdida de la nacionalidad ni de la vecindad civil adquiridas.*

### D) POR OPCION

La opción es una *facultad que tiene el extranjero que reúna ciertos requisitos para adquirir la nacionalidad española mediante una declaración de voluntad* .

Su *naturaleza jurídica* es de *privilegio* o beneficio excepcional otorgado por la ley al extranjero; éste no tiene un derecho subjetivo, sino que es **una facultad que le otorga la ley, en ciertos casos, para adquirir la nacionalidad española mediante su declaración de voluntad**; es, pues, una declaración de voluntad que deberá reunir los requisitos de validez que le son propios, hecha como medio para ingresar en la comunidad española; expresa su voluntad de querer gozar de la cualidad de español.

Son *casos* en que se puede adquirir la nacionalidad española, por opción (art. 20):

Primero.—***Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.***

Segundo.—***Las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.*** Se da la posibilidad de ser español a los hijos de emigrantes que habían perdido la nacionalidad española al adquirir la del país de acogida. Esta opción no está sujeta a límite alguno de edad.

Tercero.—***La persona cuya filiación*** (como hijo de padre o madre español) ***o cuyo nacimiento*** (en España) ***se haya determinado después de los dieciocho años de edad.*** Tiene un plazo de **dos años** desde tal determinación.

Cuarto.—***El adoptado extranjero, que lo fue después de los dieciocho años.*** Tiene un plazo de **dos años** desde la adopción.

En los dos últimos casos se da lugar a una nacionalidad española *de origen*, por ficción legal.

La *declaración de opción* la formula (art. 20.2.) el propio interesado si está *emancipado* o es *mayor de edad*, o si, habiendo estado incapacitado, ha *recuperado la capacidad*; pero la opción le caduca a los veinte años de edad, con una excepción en el caso de la emancipación y de la mayoría de edad: si con arreglo a su ley personal no estuvieran emancipados o no fuera mayor de edad a los dieciocho años, la caducidad se produce a los dos años a contar de la emancipación o de la mayoría de edad.

Si el interesado es menor de edad, pero *mayor de catorce años* o *incapacitado parcial*, cuya sentencia lo permite, formulará él mismo la opción, pero con el complemento de capacidad (*asistido*, dice el texto legal) de su representante legal.

Si es *menor de catorce años* o *incapacitado* la formulará su representante legal, con autorización del encargado del Registro civil del domicilio de éste, previo dictamen del ministerio Fiscal; la autorización se concederá en interés del menor o incapacitado.

Los *requisitos* para la validez de la opción los enumera el artículo 23: si es mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí, debe jurar o prometer *fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes* y debe renunciar a su anterior nacionalidad (salvo, esto último, si es nacional de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal) e inscribir la adquisición de la nacionalidad española en el *Registro civil español*.

## **E) POR CARTA DE NATURALEZA**

Es la *concesión discrecional de la nacionalidad española a un extranjero en quien concurren circunstancias excepcionales*, previa solicitud de éste. La recoge el artículo 21.1.º: *la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales*.



Su origen se halla en una facultad arbitraria del Monarca, que así otorgaba beneficios o cargos reservados para nacionales a un extranjero, al que hacía español; las Cortes fueron limitando tales poderes arbitrarios y las Constituciones los llevaron a las Cortes; hasta que, desaparecido su inicial interés político, pasaron al poder ejecutivo.

En cuanto a su *naturaleza jurídica*, es un acto unilateral de soberanía, respecto al que la solicitud del extranjero es simple *conditio iuris*. **Es la Administración la que decide la excepcionalidad de las circunstancias del extranjero**, con poder discrecional, sin que éste tenga ningún derecho a la concesión.

Se tramita el expediente, iniciado por solicitud del interesado, por el Ministerio de Justicia (art. 63 de la Ley de Registro civil), regulando los requisitos (arts. 220 y ss.) y la forma (arts. 365 y ss.) el Reglamento de Registro civil; se resuelve (como dice el art. 21 del Código civil) por Real Decreto, que determinará la vecindad civil (art. 15.2).

## **F) POR RESIDENCIA**

Es la *concesión de la nacionalidad española al extranjero por su residencia en España durante el plazo fijado*. La recoge el artículo 21.2.º: *la nacionalidad española también se confiere por residencia en España...*

Respecto a su *naturaleza jurídica*, en el antiguo Derecho era una imposición al extranjero residente de la condición de vasallo o súbdito; en la época moderna, a partir de las Constituciones, se elimina aquella sumisión y se le concede la facultad de adquirir la nacionalidad. Así, la residencia no produce, por sí misma, la adquisición de la nacionalidad, sino que concede la facultad de obtenerla, siempre que se cumplan los plazos previstos y los demás requisitos.

**Los plazos los señala el artículo 22, y son los siguientes:**

Primero. ***Diez años***, sin más requisitos.

Segundo. ***Cinco años***, para los que hayan obtenido la condición de **refugiado**.

Tercero. ***Dos años***, cuando se trate de nacionales de origen de países **iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o de sefardíes**.

Cuarto. ***Un año***, en los casos siguientes:

- a) si ha nacido en territorio español***
- b) si no ha ejercitado oportunamente la facultad de optar***
- c) si ha estado sujeto a tutela, guarda o acogimiento de español durante dos años***
- d) el casado con español o española, al menos desde hace un año, no separado legalmente o de hecho (en cuyo caso se entiende que tiene residencia en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero, dispone el art. 22.3)***
- e) el viudo o viuda de española o español si no estuviera separado legalmente o de hecho a su muerte***
- f) el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.***

La *residencia*, añade el artículo 22.3, *habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición*. Es lógica la necesidad de que el plazo de residencia sea continuado o inmediatamente anterior. También la residencia debe ser legal (lo que no significa «domicilio legal» en el sentido del art. 40 del Código civil o de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que significa que no sirve la residencia o permanencia de hecho en España, por ejemplo, la de aquellos indocumentados, etc...., ya que se precisa que el extranjero sea residente, siendo titular de la correspondiente autorización de residencia o sea un refugiado documentado como tal.

Para que se otorgue la misma, se han de acreditar una serie de requisitos, entre los que figuran como mas importantes, **carecer de antecedentes penales en España y en el pais de origen** (buena conducta), y suficiente **grado de integración** en la sociedad española. Se otorga por el Ministerio de Justicia, y su denegación, ha de ser motivada. Sin embargo, y como señalábamos en el previo, y mas tarde analizaremos en las conclusiones, es necesaria la clarificación de estos requisitos, pues queda muy abiertos y a total discreción de la administración.

### G) POR POSESION DE ESTADO

Viene de una situación de hecho de posesión de *status* de nacional español, en base a un título que se declara nulo (y siempre con buena fe). Es decir, no se consolida una nacionalidad, sino que se adquiere ésta, como reconocimiento —consolidación—de la situación de hecho anterior. Dispone el artículo 18 que *la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que lo originó*.

Es un caso de adquisición de la nacionalidad derivativa, pues no se trata de la consolidación de la misma, sino la de una situación de hecho, que era posesión de nacionalidad, en base a título nulo, pero no nacionalidad legítima. Precisamente por ello su fundamento es que no parece justo que la eficacia retroactiva de la nulidad se lleve a sus últimas consecuencias en materia de retroactividad; se aplica, pues, al que, siendo español *iure sanguinis* o *iure soli*, no es en realidad español al ser nulo el título de atribución o de adquisición que le dio la nacionalidad.

El interesado tiene que mantener *la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años*, lo que implica una actitud activa del mismo respecto de la nacionalidad española poseída: comportarse como español, ejerciendo derechos y deberes derivados de su cualidad de español. Lo cual puede inferirse del uso del D.N.I. o pasaporte español, de la participación en procesos electorales, del desempeño de cargos públicos o de otros actos exclusivamente reservados a los españoles.

El interesado tiene que tener también *buena fe*, que es la creencia de ser verdaderamente español (punto de vista positivo) o la ignorancia de basarse en un título nulo (punto de vista negativo), la cual se presume, salvo prueba en contrario (presunción de buena fe, que puede considerarse como principio general del Derecho). El título en que se basaba la supuesta nacionalidad que después es declarado nulo ha de estar inscrito en el Registro civil; y no es preciso que se trate de una inscripción específica de la nacionalidad española, sino de cualquier título que haya dado lugar a la misma (por ejemplo, la inscripción de nacimiento de hijo de español y, tras el ejercicio de una acción de filiación se declara que es hijo de extranjeros). También puede ser el título inscrito por adquisición derivativa (opción, naturalización) declara nulo por falsedad, ocultación o fraude (art. 25.2).

Para tal consolidación se tramitará expediente por el encargado del Registro civil del domicilio del interesado en los artículo 96.2.º de la L.R.C. y artículos 335, 338 y 340 del R.R.C.

## **PÉRDIDA**

### **VOLUNTARIA**

El artículo 24 contempla **cuatro supuestos** de pérdida de nacionalidad producida **voluntariamente** por el interesado.

Primero. **Adquisición voluntaria de otra nacionalidad**

Segundo. **Utilización exclusiva de la nacionalidad extranjera que tuviera atribuida antes de la emancipación.**

En los dos casos anteriores se produce la pérdida una vez que transcurran **tres años desde aquella adquisición o desde esta emancipación. No se produce la pérdida si se adquiere la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.**

Asimismo, en estos dos supuestos cabe la conservación, como se ha visto

Tercero. *Atribución de la nacionalidad extranjera a segunda generación de españoles nacidos en el extranjero*, es decir, a los españoles que han nacido y residen en el extranjero y son hijos de padre o madre españoles también nacidos en el extranjero, o sea, los nietos del emigrante. Aunque en este supuesto cabe la conservación de la nacionalidad española, como se ha visto.

Cuarto. *Renuncia expresa a la nacionalidad española*; siempre que tenga otra nacionalidad (para evitar la apatridia).

En los casos de pérdida voluntaria se exigen ciertos presupuestos.

Presupuesto subjetivo: que esté *emancipado o sea mayor de edad*; objetivo: **que resida habitualmente en el extranjero**; negativo: **que España no se halle en guerra**.

## FORZOSA, COMO SANCIÓN

Se pierde la nacionalidad española, en el sentido de que se le priva como sanción, **al español que la adquirió en forma derivada, no originaria**, pues ordena el artículo 11.2 de la Constitución que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad y lo reitera el inicio del artículo 25 del Código civil: *los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad...* en los casos siguientes, ambos como sanción o pena:

Primero. *Cuando utilicen exclusivamente durante tres años la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española*, en los casos en los que se exige esta renuncia, que son en la adquisición por opción y por naturalización (ésta comprende la carta de naturaleza y la residencia).

Segundo. *Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo publico en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno*. Causa que exige: 1.º) prohibición expresa del Gobierno, tanto para el servicio de armas como para el cargo; 2.º) servicio de armas voluntario o ejercicio de cargo público (significa cargo político o de alta administración del Estado) extranjero, tanto si se inicia uno u otro contra la prohibición expresa, como si se continúa tras la prohibición, en cuyo momento de inicio o de continuación se produce *ipso iure* la privación de la nacionalidad española.

Tercero. *Cuando por sentencia firme se declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.* Se trata de adquisición derivada. Da lugar a la pérdida de la nacionalidad, por cuanto se produce la nulidad de la adquisición. No se derivan efectos perjudiciales para terceros de buena fe; por lo cual puede darse el caso —como se ha apuntado anteriormente— de la adquisición por consolidación, si concurre buena fe, prevista en el artículo 18, que sustituya a esta pérdida. La legitimación activa para el ejercicio de esta acción de nulidad le corresponde exclusivamente al Ministerio Fiscal, que podrá ejercerla de oficio o en virtud de denuncia; por tanto, un particular no puede ejercitar la acción, sino simplemente denunciar el caso al Ministerio Fiscal y éste, si lo estima procedente, interpondrá la acción. El plazo para ejercerla es de quince años, plazo de caducidad. El proceso adecuado, por aplicación extensiva del artículo 22.5, parece que será el contencioso-administrativo

## **RECUPERACIÓN**

La recuperación significa la **facultad que tiene el español que perdió su nacionalidad de recobrar la nacionalidad española**. Se basa en dos elementos: el hecho de **haber sido español** y la **voluntad de cambiar de estado**, haciéndose español.

La recuperación se explicaba por la fuerza latente que siempre conserva la nacionalidad de origen respecto a la que las causas de pérdida funcionan como obstáculo a su natural eficacia; removida la causa, renace con igual calidad la nacionalidad originaria. Actualmente no se mantiene la misma concepción y el Código civil prevé la recuperación tanto para el español de origen como para quien adquirió derivativamente la nacionalidad española.

**Si se había perdido de forma voluntaria** se requieren tres requisitos:

Primero. *Ser residente legal en España.* Este requisito puede ser dispensado por el Ministerio de Justicia cuando concurren circunstancias excepcionales. Sin embargo, no se exige a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes.

Segundo. *Declarar ante el encargado del Registro civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española.*

Tercero. *Inscribir la recuperación en el Registro civil.*

**Si se había perdido la nacionalidad en forma *forzosa*, es preciso, además, otro requisito, que es la *habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno.***

Tanto la dispensa al requisito de residencia en España como esta habilitación compete al Gobierno y se formalizará a propuesta del Ministerio de Justicia, por acuerdo del Consejo de Ministros (art. 223, primer párrafo, del R.R.C). La instrucción del expediente corresponde a la Dirección General de los Registros, que podrá comisionar al Encargado del Registro civil del domicilio del interesado (art. 305, último párrafo, del R.R.C.)

## **LA DOBLE NACIONALIDAD**

Se da una doble nacionalidad *de hecho* en tantos casos en que distintas legislaciones atribuyen su propia nacionalidad a una misma persona, prescindiendo — cada una— de que tenga otra o, a veces, ignorándolo. Con nuestro Derecho ocurre, por ejemplo, en el caso de hijo de padres españoles nacido en un país extranjero que por *ius Soli* le atribuye su nacionalidad. Es una doble nacionalidad por error, es un caso de patología de la nacionalidad.

**Hay doble nacionalidad *de derecho* cuando el Ordenamiento jurídico la reconoce y admite; es la deliberada admisión de coexistencia de dos nacionalidades.**



El artículo 11.3 de la Constitución contempla la doble nacionalidad: *el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.*

**España ha celebrado Tratados de doble nacionalidad con Chile, Perú, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Argentina y Colombia.**

Y de acuerdo con el segundo inciso de la citada norma constitucional, se ha expuesto anteriormente que **no pierde la nacionalidad española el que adquiera voluntariamente la de un país iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal** (art. 24.1).

Con lo cual se puede distinguir una doble nacionalidad **convencional**, **proveniente de los Tratados**, y una **automática**, prevista en las citadas normas del Código civil.

La doble nacionalidad no significa que a la persona que goza de la misma se le apliquen simultáneamente dos legislaciones o pueda elegir una u otra, sino que puede hablarse de la existencia de **una nacionalidad en estado latente y otra efectiva**.

Así, la doble nacionalidad no significa que se ostenten al mismo tiempo y en el mismo grado ambas nacionalidades en juego; por el contrario, la nacionalidad española queda en suspenso (latente) y a ese español que adquirió una extranjera se le aplica la legislación de este país mientras *resida en él* (efectiva), sin perjuicio de que la nacionalidad española en estado latente reviva, sin necesidad de recuperación, cuando el español vuelva a fijar su *domicilio en España*. Ello en principio, pues los específicos tratados concretarán las cuestiones.

## **CAPITULO VIII: REGIMEN COMUNITARIO**

### **PREVIO**

Es necesario un análisis previo del régimen de los ciudadanos comunitarios en España, para conocer como se encuentra gravado en nuestro ordenamiento, pues se encuentra fuera del régimen general de extranjería.

Si bien es cierto que era un régimen de especial flexibilidad, no ha quedado fuera de la merma en los derechos que venimos estudiando, de forma y manera que a día de hoy, y con las diversas modificaciones, como analizaremos en este capítulo, dado que nos encontramos que incluso para obtener el estatus de ciudadano comunitarios se exige que el mismo tenga medios de vida, cosa que hasta el momento no se solicitaba.

Se intenta de este modo también limitar el acceso a la sanidad pública española de todos aquellos comunitarios que hasta el día de ayer venían a España a operarse dado que en su país era mas costoso. Sin embargo ello lleva de nuevo a una limitación importante en derechos que creíamos consolidados.

### **NORMATIVA:**

España se adhiere a las Comunidades Europeas como Estado miembro de pleno derecho el 01-01-1986. Desde entonces los distintos actos legislativos en el seno del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea han ido incorporando su contenido al Ordenamiento jurídico español:

- Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo, sobre entrada, permanencia y trabajo en España de ciudadanos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, en el que se regulaban las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en España por parte de los ciudadanos de sus Estados miembros para la realización de actividades por cuenta ajena o por cuenta propia o para prestar o recibir servicios al amparo de lo establecido en el [Tratado de la Comunidad Económica Europea](#).

- Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas.
- Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, y el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 766/1992.
- Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que deroga los Reales Decretos 766/1992, 737/1995 y 1710/1997.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea valorando la necesidad de codificar y revisar los instrumentos comunitarios existentes, al objeto de simplificar y reforzar el derecho de libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión Europea, y con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho, unifican los distintos actos legislativos a través de la Directiva la Directiva 2004/38/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. Dicha Directiva regula el derecho de entrada y salida del territorio de un Estado miembro, el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, y los trámites administrativos que deben realizar ante las Autoridades de los Estados miembros. Asimismo regula el derecho de residencia permanente, y finalmente establece limitaciones a los derechos de entrada y de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

La aprobación de la citada Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, ha hecho necesario proceder a incorporar su contenido al Ordenamiento jurídico español, a través del **Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo**, derogando el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero.

## **NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS**

Supletoriamente y en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y el derecho derivado de los mismos:

- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
- Real Decreto 1161/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
- Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
- Disposición final quinta del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
- Instrucciones DGI/SGRJ/03/2007 relativas al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
- Instrucciones SGIE/1/2012, sobre régimen de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Rumania y sus familiares, aplicables hasta el día 31 de diciembre de 2012.

## **ESTADOS QUE LES ES DE APLICACIÓN EL REAL DECRETO 240/2007:**

### **1. Estados de la Unión Europea:**

Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo, España, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Malta, Polonia, Estonia, Lituania, Eslovenia, Grecia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Portugal, Irlanda, Chipre, Hungría, Letonia, Eslovaquia, República Checa, Rumania y Bulgaria.

### **2. Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo:**

Noruega, Islandia, Liechtenstein.

### **3. Otros Estados:**

Confederación Suiza.

## **EXTRANJEROS BENEFICIARIOS DEL REAL DECRETO 240/2007.**

### **a) Nacionales de Estados de la Unión Europea.**

- Ciudadanos de la Unión Europea.
- Ciudadanos de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
- Ciudadanos de la Confederación Suiza.

**b) Familiares de ciudadanos de la Unión que sean nacionales de terceros Estados.**

Siguen siendo beneficiarios de este régimen, al igual que en el anterior Reglamento, su **cónyuge**, sus **descendientes** directos y los de su cónyuge, los menores de 21 años, los mayores de dicha edad que vivan a su cargo o incapaces, y los **ascendientes** directos y los de su cónyuge, que vivan a su cargo.

En cuanto a cónyuge, se ha de entender, sin diferenciación alguna entre personas de diferente o del mismo sexo. Además de España, las legislaciones que también regulan el matrimonio en personas del mismo sexo son las de Bélgica y de los Países Bajos.

Asimismo, en el supuesto de cónyuge de español, según la normativa vigente, el hecho del matrimonio queda acreditado cuando se haya inscrito en el correspondiente Registro civil español, por lo que, mientras no se produzca la inscripción dicho cónyuge no podrá acogerse a este Real Decreto.

La novedad más sustancial, es que también se puede acoger a esta norma, la **pareja** con la que mantenga una unión análoga a la de cónyuge siempre que dicha unión se halle inscrita en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Esta relación se acreditará mediante certificación expedida por el órgano encargado del registro, debidamente traducida.

Hasta la fecha los Estados miembros que tienen registro de parejas son: Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Luxemburgo, Chequia y Eslovenia.

## **- CERTIFICADO DE REGISTRO DE RESIDENTE COMUNITARIO.**

La principal novedad desde el punto de vista de documentación, consiste en la desaparición de la tarjeta de residente comunitario, para todos los ciudadanos pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como la Confederación Suiza, cuando pretendan residir en territorio español por un tiempo superior a tres meses, siendo sustituida por la obligación de solicitar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. La inscripción supondrá la expedición de forma inmediata de un certificado de registro.

**El Registro Central de Extranjeros** se encuentra regulado en el artículo 213 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Corresponde su titularidad y gestión a la Dirección General de la Policía. La información contenida en el Registro Central de Extranjeros está puesta a disposición de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior.

Sobre esta Inscripción en el Registro Central de Extranjeros y expedición del certificado de registro, conviene indicar las siguientes precisiones:

a) La inscripción deberá de solicitarse personalmente por el interesado, en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en España, en la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretenda permanecer o fijar su residencia, o en su defecto ante la Comisaría de Policía correspondiente.

**b)** Junto con la solicitud de inscripción el interesado deberá presentar el pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor, o copia de éste y de la solicitud de renovación, en el supuesto de que dicho documento estuviese caducado.

**c)** Igualmente, presentará resguardo, (hasta la fecha el modelo 790, Código 012, sin perjuicio de que el mismo pueda ser sustituido en fechas posteriores), acreditativo del previo abono de la tasa correspondiente. Tasa, que según el artículo 14, apartado 1 del referido Real Decreto, será en cuantía equivalente a la que se exige a los españoles para la obtención y renovación del documento nacional de identidad.

**d)** Expedición inmediata del certificado de registro.

Sobre dicho certificado ha de indicarse lo siguiente:

El certificado se expide en papel de seguridad, en el que constará los datos de identidad, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, número de identidad de extranjero y fecha de registro.

Sólo servirá para acreditar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros si se presenta en unión del pasaporte o del documento nacional de identidad en vigor, justificando así el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 7 de dicho Real Decreto y acreditando, en su caso, el derecho a residir con carácter permanente referido en el artículo 10 del citado Real Decreto.

La solicitud y tramitación del certificado de registro no supondrá obstáculo alguno a la permanencia provisional de los interesado en España, ni al desarrollo de sus actividades, de forma que podrá el comunitario comenzar a realizar sus actividades sin necesidad de tener el certificado, no obstante aquí nos encontramos de nuevo con un problema burocrático, pues la Seguridad Social si exige del mismo para poder realizar actividades laborales, lo cual es injustificado, pues no es así exigido por la normativa.



Las Autoridades competentes podrán, excepcionalmente, recabar información sobre posibles antecedentes penales del interesado a las autoridades del Estado de origen o a las de otros Estados.

Del mismo modo, y cuando así lo aconsejen razones de salud pública podrá exigirse al interesado la presentación de certificado médico acreditativo de su estado de salud. Podrá ser denegada la tarjeta de residencia cuando se trate de enfermedades o dolencias con potencial epidémico, definidas en los instrumentos correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, así como otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas, de conformidad con la legislación española vigente.

El certificado de registro puede ser:

**I.** De registro de residencia que será aquel que se expida a los ciudadanos de la Unión que no hayan residido en España durante un periodo continuado superior a 5 años.

**II.** Del derecho a residir con carácter permanente, que se expedirá a los ciudadanos de la Unión que hayan residido en nuestro país por un período continuado superior a los 5 años.

## **- MODIFICACIÓN O BAJA EN EL REGISTRO CENTRAL DE EXTRANJEROS:**

Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de la Confederación Suiza y sus familiares que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, están obligados a poner en conocimiento de la Oficina de Extranjeros o comisaría de policía correspondiente al lugar donde residan los cambios de nacionalidad, de domicilio habitual y de estado civil. La comunicación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde que se produjese el cambio o modificación y deberá ir acompañada de los documentos que acrediten dichos cambios.

La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, será sancionada como infracción leve con multa de hasta 500 euros.

La ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio, será sancionada como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros o la expulsión del territorio español.

Junto con la solicitud, el interesado deberá de presentar:

- Pasaporte o documento de identidad válido y en vigor. Si está caducado, copia de éste y de la solicitud de renovación.
- Certificado de registro que se desea modificar o dar de baja.
- Documento acreditativo del abono de la tasa por expedición del certificado.

- **TARJETA DE RESIDENCIA DE FAMILIAR DE CIUDADANO DE LA UNIÓN**

Los miembros de la familia, cuyos vínculos se especifican, de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de la Confederación de Suiza que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con el, podrán residir en España por un período superior a tres meses, estando sujetos a la obligación de solicitar y obtener una “tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión”:

- El cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.
- La pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.
- Sus descendientes directos, y los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.

- Sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya recaído el acuerdo o declaración de nulidad del vínculo matrimonial divorcio o se haya cancelado la inscripción registral de pareja.

#### **Requisitos:**

- La solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en España.
- Su lugar de presentación será en la Oficina de Extranjeros de la provincia donde el interesado pretenda permanecer o fijar su residencia, o en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente.
- A su presentación se le entregará de forma inmediata un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud de la tarjeta. Dicho resguardo será suficiente para acreditar su situación de estancia legal hasta la entrega de la tarjeta. El resguardo no podrá constituir condición previa para el ejercicio de otros derechos o la realización de trámites administrativos, siempre que el beneficiario de los derechos pueda acreditar su situación por cualquier otro medio de prueba.
- Junto con el impreso de solicitud (actualmente modelo oficial EX19) deberá presentarse la siguiente documentación:
  - Copia del pasaporte completo válido y en vigor. En el supuesto de que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación. Deberá exhibirse el documento original en el momento de presentar la solicitud aportar copia de éste y de la solicitud de renovación.
  - Documentación acreditativa de la existencia de vínculo familiar:

- Si solicita el cónyuge o pareja con relación análoga a la conyugal:
  - Certificado de matrimonio actualizado, o certificación expedida por el encargado del registro de parejas correspondiente. Se deberá acreditar también el estado civil de los miembros de la pareja de hecho.
- Si solicita el descendiente del ciudadano de la Unión:
  - Certificado de nacimiento
  - Si el descendiente es mayor de 21 años, documentación acreditativa de vivir a cargo o estar incapacitado.
  - Certificado de matrimonio o certificado del registro de parejas del ciudadano de la Unión.
  - En caso de que el descendiente sea menor de edad, documentación acreditativa de que el cónyuge o la pareja del ciudadano de la Unión, ejerce en solitario la patria potestad, o que se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo.
- Si solicita el ascendiente del ciudadano de la Unión o su cónyuge:
  - Certificado de nacimiento del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja.
  - Documentación acreditativa de vivir a cargo.
  - Si es ascendiente del cónyuge o pareja del ciudadano de la Unión, certificado de matrimonio o certificado del registro de parejas del ciudadano de la Unión.

- Copia del certificado de registro del ciudadano de la Unión al que acompañan o van a reunirse o D.N.I. del ciudadano español.
- Tres fotografías reciente en color, en fondo blanco, tamaño carné.

Cuando se aporten documentos de otros países deberán estar traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud.

Por otro lado, todo documento público extranjero no comunitario deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento y por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961.

Las solicitudes que no reúnan los requisitos para ser tramitadas, serán devueltas al interesado, informándole de los requisitos que debe reunir la solicitud para que la misma sea tenida como tal y, en consecuencia, pueda iniciarse el correspondiente procedimiento administrativo en materia de régimen comunitario de extranjería.

La resolución favorable tendrá efectos retroactivos, entendiéndose acreditada la situación de residencia desde la fecha acreditada de entrada en España siendo familiar de ciudadano de la Unión, lo cual también es importante a efectos de nacionalidad.

En el plazo de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, será expedida, previo abono de la tasa correspondiente la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. La tarjeta tendrá una validez de cinco años a partir de la fecha de su expedición, o por el período previsto de residencia del ciudadano de la Unión o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Confederación Suiza, si dicho período fuera inferior a cinco años.

La solicitud y tramitación de la tarjeta de residencia no supondrá obstáculo alguno a la permanencia provisional de los interesados en España, ni al desarrollo de sus actividades, encontrándonos aquí de nuevo con la burocracia, pues como en referencia a los ciudadanos de la Unión hemos indicado, con respecto a los familiares ocurre exactamente lo mismo, y si bien la normativa permite que el familiar pueda comenzar sus actividades desde el momento en que llega a España, por ejemplo en el Seguridad Social no le tramitarán su alta sin la correspondiente tarjeta.

Las Autoridades competentes podrán, excepcionalmente, recabar información sobre posibles antecedentes penales del interesado a las autoridades del Estado de origen o a las de otros Estados, si bien esto es lo que dice la normativa, por regla general se comprueban todos los antecedentes de los familiares, de forma absolutamente injustificada.

Dichos familiares tienen derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio español, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el Real Decreto 240/2007 y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el mismo.

Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 39.4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

**La vigencia de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión caducará por las ausencias superiores a seis meses en un año.** Dicha vigencia no se verá afectada por las ausencias de mayor duración del territorio español cuando se acredite sean debidas al cumplimiento de obligaciones militares o, que no se prolonguen más de doce meses consecutivos y sean debidas a motivos de gestación, parto, posparto, o traslados por razones de carácter profesional a otro Estado miembro o a un tercer país.

Con respecto al término **cónyuge** será interpretado, referido a un único cónyuge, y sin diferenciar entre matrimonios entre personas de diferente o del mismo sexo, y recordando que los matrimonios entre personas del mismo sexo se exceptúan de la regla de la aplicación de la ley personal cuando el Estado de origen de uno o ambos contrayentes no ha regulado aún este derecho, aplicándose la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE de 8 de agosto de 2005). Con independencia de que otros Estados miembros puedan hacerlo en el futuro, las legislaciones de Bélgica, España y Países Bajos regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el caso de cónyuges se exigirá la aportación del documento acreditativo de la validez del vínculo matrimonial; documento que posibilita que el vínculo conyugal alegado produzca plenos efectos civiles de conformidad con la legislación española. Deberá haber sido expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de presentación de la solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión

Para que **la pareja no casada** de un ciudadano comunitario entre en el ámbito de aplicación de esta norma, deberá acreditarse, mediante certificación expedida por el órgano encargado del registro de parejas correspondiente, la inscripción en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán en todo caso, incompatibles entre sí.



La certificación registral deberá haber sido expedida con una antelación máxima de tres meses a la fecha de presentación de la solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

En lo que se refiere a los descendientes y ascendientes, y sobre el **concepto “a su cargo”**, referido, respectivamente, a los descendientes mayores de 21 años y a los ascendientes del ciudadano comunitario o de su cónyuge o pareja registrada, es oportuno hacer las siguientes clarificaciones:

Para que estos familiares del ciudadano comunitario puedan beneficiarse del régimen comunitario de extranjería deben acompañarle o reunirse con él, y vivir a su cargo.

La acreditación del cumplimiento del citado requisito de “vivir a cargo” se realizará:

Cuando el familiar aún se encuentra en su país de origen o procedencia, fuera de España: a lo largo de la tramitación del oportuno visado “familiar UE/EEE” (tipo C, código ESC) cuando el mismo resulte exigible en función de la nacionalidad del familiar de ciudadano comunitario, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (modificado por los Reglamentos (CE) 2414/2001, del Consejo, de 7 de diciembre de 2001, (CE) 453/2003, de 6 de marzo de 2003, y (CE) 1932/2006, de 21 de diciembre de 2006).

Cuando el familiar se encuentra ya en territorio español: al tramitar la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, según lo previsto en el artículo 8.3.d) del Real Decreto 240/2007.

Una equiparación de los citados familiares de ciudadanos comunitarios a los familiares reagrupables por el nacional de un tercer país en situación de residencia legal en España, en cuanto a los requisitos exigibles y a los medios de prueba válidos para acreditar que los mismos viven a cargo de uno o de otro, no se adecua al ordenamiento comunitario, no resultando por tanto aplicable al supuesto de los familiares de ciudadano comunitario el contenido del artículo 39.e) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre:

Así, debe recordarse que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 18 de junio de 1987 sobre el asunto 316/85 (asunto Lebon), dictaminó que la calidad de miembro de la familia a cargo resulta de una situación de hecho, tratándose de una miembro de la familia cuyo mantenimiento viene asegurado por el ciudadano comunitario, sin que sea necesario determinar las razones del recurso a ese mantenimiento ni preguntarse si el familiar está en condiciones de asumir o no por sí mismo su sostenimiento.

Dicha sentencia viene fundamentada en la expresión “a cargo”, contenida en el artículo 10 del Reglamento (CEE) 1612/1968 del Consejo, de 15 de octubre, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, manteniéndose dicha expresión en idénticos términos en la redacción dada a los supuestos planteados por el artículo 2 de la Directiva 2004/38/CE.

La carga de la prueba de vivir a expensas del ciudadano comunitario ha de recaer sobre el solicitante de visado C código ESC o de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión (descendiente mayor de 21 años o ascendiente, de ciudadano comunitario o de su cónyuge o pareja registrada).

Dicha prueba debe tener carácter abierto, admitiéndose la acreditación de la concurrencia de la circunstancia citada mediante la utilización de cualquier tipo de prueba admitida en Derecho que presente el solicitante, de que sus medios de vida proceden, de forma exclusiva o con carácter principal y no prescindible, de su ascendiente o descendiente que a su vez es ciudadano comunitario o cónyuge o pareja registrada de ciudadano comunitario.

Los medios de prueba utilizados deben arrojar resultados de carácter objetivable, dándose preferencia a los medios de prueba documentales y, si es posible, emitidos por Autoridades públicas (certificados de dependencia, etc.), pudiendo elaborarse listas de medios de prueba, si bien éstas deben ser a título de ejemplo y no tasadas.

Si el medio de prueba utilizado es una declaración firmada del familiar que ostenta el derecho, manifestando que el beneficiario estará a su cargo, dicha declaración deberá ser acompañada, bien de un documento público de reconocimiento de firma (acta notarial), bien de un documento de identidad del declarante en donde aparezca su firma para que el funcionario que actúa pueda comprobar que ambas firmas son la misma.

- En relación con la materia de **visados**, debe en todo caso recordarse que, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de 14 de abril de 2005, en la propia Directiva 2004/38/CE y en el artículo 8.3 del Real Decreto 240/2007, nunca será exigible, para la solicitud o concesión de una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, la titularidad de un visado de residencia ni la solicitud de exención de éste.

Sí es exigible, a los citados familiares, exclusivamente a los efectos de su entrada en España, el correspondiente visado de estancia, en caso de que sean nacionales de alguno de los Estados incluidos en el Anexo I, del antes citado Reglamento (CE) 539/2001, del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación.

La entrada, permanencia y trabajo en España de los familiares de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, se regirán por la [Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social](#), en aquellos casos en que no quede acreditada la concurrencia de los requisitos previstos en el presente Real Decreto.

Las normas de carácter general contenidas en la citada [Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social](#), así como las normas reglamentarias vigentes sobre la materia, serán aplicables a los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, con carácter supletorio y en la medida en que pudieran ser más favorables y no se opongan a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, así como en el Derecho derivado de los mismos.

## **FAMILIARES DE CIUDADANO ESPAÑOL**

El artículo 8.3 del Real Decreto 240/2007 relaciona los requisitos exigidos en el marco del procedimiento de solicitud de tarjetas de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Entre dichos requisitos se encuentra, en el caso de cónyuges, la documentación acreditativa de la existencia del matrimonio.

En el caso de cónyuges se exigirá la aportación del documento acreditativo de la validez del vínculo matrimonial, documento que posibilita que el vínculo conyugal alegado produzca plenos efectos civiles de conformidad con la legislación española, efectos que se producen, en todo caso, **en el caso de matrimonio en el que uno de los cónyuges es español**, cuando el matrimonio se encuentra inscrito en el Registro Civil Español. Mientras dicha inscripción no se produzca, no es posible para el cónyuge de ciudadano español acogerse al contenido del Real Decreto 240/2007, con independencia de la posibilidad de concesión o renovación de una autorización de residencia en el marco del régimen general de extranjería.

En España, y de conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, “...se inscribirán los matrimonios (...) siempre que no haya dudas de la realidad del hecho y de la legalidad conforme a la Ley española”.

Si el matrimonio de español no ha sido aún reconocido por las Autoridades españolas competentes, y, en consecuencia, no se ha procedido a su oportuna inscripción en el Registro Civil, no podrá atribuirse a dicho vínculo efectos, como tal matrimonio de español, en el ámbito civil español, no pudiendo el cónyuge extranjero, por tanto, acogerse al Real Decreto 240/2007, con independencia, como se ha dicho antes, de la concesión o renovación de una autorización de residencia en el marco del régimen general de extranjería. Lo cual genera de nuevo una grave discriminación para con los familiares de ciudadano español en referencia a los que lo son de familiares de la Unión, dándose la paradoja de que el cónyuge de un español tarde infinitamente mas para obtener su documentación que el cónyuge de un francés, por ejemplo, toda vez que el registro civil esta colapsado y para aquellos matrimonios contraídos fuera de nuestro territorio entre español y extranjero, tarda de uno a dos años.

La debida inscripción del matrimonio de español en el Registro Civil de nuestro país es requisito exigible y necesario por acreditar la existencia de un acto de calificación del matrimonio, realizado por las Autoridades españolas competentes de conformidad con la normativa vigente, y al que se atribuirán así plenos efectos civiles.

### **RENOVACIÓN TARJETA DE RESIDENCIA DE FAMILIAR DE CIUDADANO DE LA UNIÓN.**

La tarjeta de residencia podrá ser renovada cuando fuera necesario antes de la adquisición del derecho a residir con carácter permanente.

Junto con el impreso de solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

- Pasaporte válido y en vigor. Si estuviera caducado deberá aportar copia de éste y de la solicitud de renovación.
- Documentación acreditativa, en su caso debidamente traducida y apostillada o legalizada, de la existencia del vínculo familiar, matrimonio o unión registrada que otorga derecho a la tarjeta. En el caso de ascendientes y descendientes no se exigirá la aportación de la documentación acreditativa de la existencia del vínculo familiar que le da derecho a la expedición de la tarjeta.
- Certificado de registro del familiar ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de la Confederación Suiza.

- En el caso de descendientes mayores de veintiún años y ascendientes, documentación acreditativa de que el solicitante de la tarjeta vive a cargo del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de la Confederación Suiza.
- Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
- Documento acreditativo del abono de la tasa por expedición de la tarjeta, conforme con la legislación vigente de tasas y precios públicos, cuya cuantía será la equivalente a la que se exige a los españoles para la obtención y renovación del documento nacional de identidad.

## **CERTIFICADO DE REGISTRO DE RESIDENTE COMUNITARIO PERMANENTE**

Son titulares del derecho a residir con carácter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de la Confederación Suiza, que hayan residido legalmente en España durante un **período continuado de cinco años**. El reconocimiento de este derecho debe de ser invocado por el interesado ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde éste tenga su residencia o, en su defecto, la Comisaría de Policía correspondiente, quien expedirá, con la mayor brevedad posible y tras verificar la duración de la residencia, un **certificado del derecho a residir con carácter permanente**.

Independientemente de la obtención del derecho a residir con carácter permanente por residencia continuada en España durante cinco años, tendrán derecho a la residencia permanente, antes de que finalice el período de cinco años referido con anterioridad, las personas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- El trabajador por cuenta propia o ajena que, en el momento en que cese su actividad, haya alcanzado la edad prevista en la legislación española para acceder a la jubilación con derecho a pensión, o el trabajador por cuenta ajena que deje de ocupar la actividad remunerada con motivo de una jubilación anticipada, cuando hayan ejercido su actividad en España durante, al menos, los últimos doce meses y hayan residido en España de forma continuada durante más de tres años.

La condición de duración de residencia no se exigirá si el cónyuge o pareja registrada del trabajador es ciudadano español o ha perdido su nacionalidad española tras su matrimonio o inscripción como pareja registrada con el trabajador.



El trabajador por cuenta propia o ajena que haya cesado en el desempeño de su actividad como consecuencia de incapacidad permanente, habiendo residido en España durante más de dos años sin interrupción. No será necesario acreditar tiempo alguno de residencia si la incapacidad resultara de accidente de trabajo o de enfermedad profesional que dé derecho a una pensión de la que sea responsable, total o parcialmente, un organismo del Estado español.

La condición de duración de residencia no se exigirá si el cónyuge o pareja registrada del trabajador es ciudadano español o ha perdido su nacionalidad española tras su matrimonio o inscripción como pareja con el trabajador.

El trabajador por cuenta propia o ajena que, después de tres años consecutivos de actividad y de residencia continuadas en territorio español desempeñe su actividad, por cuenta propia o ajena, en otro Estado miembro y mantenga su residencia en España, regresando al territorio español diariamente o, al menos, una vez por semana. A los exclusivos efectos del derecho de residencia, los períodos de actividad ejercidos en otro Estado miembro de la Unión Europea se considerarán cumplidos en España.

Los miembros de la familia del trabajador por cuenta propia o ajena que residan con él en España tendrán, con independencia de su nacionalidad, derecho de residencia permanente cuando el propio trabajador haya adquirido para sí el derecho de residencia permanente por hallarse incluido en alguno de los supuestos del apartado 2 anterior, expidiéndoseles o renovándose, cuando fuera necesario, una tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión.

A los efectos contemplados anteriormente, los períodos de desempleo involuntario, debidamente justificados por el servicio público de empleo competente, los períodos de suspensión de la actividad por razones ajenas a la voluntad del interesado, y las ausencias del puesto de trabajo o las bajas por enfermedad o accidente se considerarán como períodos de empleo.

Si el titular del derecho a residir en territorio español hubiera fallecido en el curso de su vida activa, con anterioridad a la adquisición del derecho de residencia permanente en España, los miembros de su familia que hubieran residido con él en el territorio nacional tendrán derecho a la residencia permanente siempre y cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el titular del derecho a residir en territorio español hubiera residido, de forma continuada en España, en la fecha del fallecimiento durante, al menos, dos años.
- Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional.
- Que el cónyuge supérstite fuera ciudadano español y hubiera perdido la nacionalidad española como consecuencia del matrimonio con el fallecido.

**Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio español durante más de dos años consecutivos.**

Para la obtención del certificado de derecho a residir con carácter permanente como ciudadano de la Unión, en función del supuesto concreto, el solicitante ha de reunir una serie de requisitos y aportar junto a su solicitud los siguientes documentos:

1. Pasaporte o documento de identidad válido y en vigor. Si está caducado, copia de éste y de la solicitud de renovación.
2. Documento acreditativo del abono de la tasa por expedición del certificado.
3. En función del supuesto concreto, deberá presentar, además:
  - Certificado del registro como ciudadano de la Unión en el que conste un periodo mínimo de 5 años de residencia continuada en España.

- El trabajador que haya cesado en su actividad, por cuenta propia o ajena, habiendo alcanzado la edad prevista por la normativa española para la jubilación con derecho a pensión, así como habiendo residido en España de forma continuada durante más de 3 años y ejercido su actividad durante los últimos 12 meses en España:

**a.** Documentación acreditativa del acceso a la jubilación.

**b.** Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social en el que conste que los últimos 12 meses ha desempeñado su actividad en España (salvo que el cónyuge o pareja registrada del ciudadano comunitario sea ciudadano español o haya perdido dicha nacionalidad tras su matrimonio/inscripción como pareja con el ciudadano comunitario).

**c.** Certificado de registro como ciudadano de la Unión en el que conste un periodo mínimo de 3 años de residencia continuada en España (salvo que el cónyuge o pareja registrada del ciudadano comunitario sea ciudadano español o haya perdido dicha nacionalidad tras su matrimonio/inscripción como pareja con el ciudadano comunitario).

- El trabajador que haya cesado en su actividad por cuenta ajena en base a una jubilación anticipada:

**a.** Documentación acreditativa del acceso a la jubilación anticipada.

**b.** Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social en el que conste que los últimos 12 meses ha desempeñado su actividad en España (salvo que el cónyuge o pareja registrada del ciudadano comunitario sea ciudadano español o haya perdido dicha nacionalidad tras su matrimonio/inscripción como pareja con el ciudadano comunitario).

**c.** Certificado de registro como ciudadano de la Unión en el que conste un periodo mínimo de 3 años de residencia continuada en España (salvo que el cónyuge o pareja registrada del ciudadano comunitario sea ciudadano español o haya perdido dicha nacionalidad tras su matrimonio/inscripción como pareja con el ciudadano comunitario. En este caso habrá de presentar documentación acreditativa de dicha circunstancia).

- El trabajador que haya cesado en su actividad, por cuenta propia o ajena, como consecuencia de una incapacidad permanente:

**a.** Documentación acreditativa de la incapacidad permanente.

**b.** Certificado de registro como ciudadano de la Unión en el que conste un periodo mínimo de 2 años de residencia continuada en España (salvo que la incapacidad permanente derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé derecho a pensión de la que sea responsable, en todo o en parte, un organismo del Estado español, o que el cónyuge o pareja registrada del ciudadano comunitario sea ciudadano español o haya perdido dicha nacionalidad tras su matrimonio/inscripción como pareja con el ciudadano comunitario. En este caso, habrá de presentar documentación acreditativa de la circunstancia que exime del cumplimiento del requisito de 2 años de residencia previa continuada).

- El trabajador que después de 3 años consecutivos de actividad y residencia en España, desempeñe su actividad en otro Estado miembro y mantenga su residencia en España, regresando la menos una vez por semana:

**a.** Certificado de registro como ciudadano de la Unión en el que conste un periodo mínimo de 3 años de residencia continuada en España.

**b.** Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social en el que conste que los últimos 3 años ha desempeñado su actividad en España.

**c.** Documentación acreditativa de que desempeña una actividad laboral en un Estado miembro.

**d.** Acreditación de que regresa al menos una vez por semana a territorio español.

## **TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE PARA LOS FAMILIARES DE CIUDADANOS DE LA UNION.**

Son titulares del derecho a residir con carácter permanente aquéllos miembros de la familia que hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años.

La solicitud deberá presentarse en el modelo oficial establecido al efecto, durante el mes anterior a la caducidad de la tarjeta de residencia, pudiendo también presentarse dentro de los tres meses posteriores a dicha fecha de caducidad sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda. Dicha tarjeta será renovable automáticamente cada diez años.

Junto con la solicitud de la citada tarjeta de residencia permanente, deberá presentarse la documentación siguiente:

- Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que dicho documento esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.
- Documentación acreditativa del supuesto que da derecho a la tarjeta.
- Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
- Documento acreditativo del abono de la tasa por expedición de tarjeta.

Las interrupciones de residencia no superiores a dos años consecutivos, no afectarán a la vigencia de la tarjeta de residencia permanente

## **REGIMEN DE VISADOS**

Las autoridades competentes facilitarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el presente Reglamento, la obtención del visado de residencia o, en su caso, de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, a quien sin estar incluido en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acompañe a un ciudadano de la Unión o se reúna con él, y se halle en una de las siguientes circunstancias:

a) Sea otro familiar, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o cuando por motivos graves de salud o discapacidad, sea estrictamente necesario que dicho ciudadano se haga cargo de su cuidado personal.

b) Sea la pareja, ciudadano de un Estado no miembro de la Unión Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable debidamente probada. Las autoridades exigirán la presentación de acreditación, por parte de la autoridad competente del país de origen o procedencia, que certifique que está a cargo del ciudadano de la Unión o que vivía con él en ese país, o la prueba de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad que requieran estrictamente que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia. Igualmente se exigirá prueba suficiente de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión.

Las autoridades competentes estudiarán detenidamente las circunstancias personales en las solicitudes de entrada, visado o autorizaciones de residencia presentadas y justificarán toda denegación de las mismas.

La reagrupación familiar en régimen comunitario se materializa mediante un procedimiento administrativo simplificado.

En el régimen comunitario **no es necesaria la obtención de una autorización de residencia por reagrupación familiar previa** por parte de la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente. Ello se explica porque de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, “las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto tienen derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio español, previo el cumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el mismo”.

En concreto, el mismo Real Decreto, en su artículo 4 establece que la entrada en territorio español del ciudadano de la Unión se efectuará con el pasaporte o documento de identidad válido y en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular, aunque en el caso de los familiares que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la UE o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el EEE o de Suiza es necesario que cuenten con **visado de entrada** cuando así lo disponga el Reglamento (CE) N° 539/2001, de 15 de marzo, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida y en vigor, expedida por un Estado parte en el Acuerdo sobre el EEE exime a esos familiares de la obligación de obtener el visado de entrada.

El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero establece que “La expedición de dichos visados será gratuita y su tramitación tendrá carácter preferente cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él”.

El interesado tiene que solicitar en persona el visado en la **Misión Diplomática u Oficina Consular en cuya demarcación resida**. En el caso de menores, puede solicitar el visado un representante debidamente acreditado.

Al igual que sucede en el caso de los visados de residencia temporal no lucrativa y de reagrupación familiar en régimen general, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, puede determinar la Misión Diplomática u Oficina Consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de visado. Excepcionalmente, la Misión Diplomática u Oficina Consular puede aceptar la presentación por representante legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad.

Una vez determinada la instancia en la que hay que presentar la solicitud de visado, es necesario determinar la documentación que debe presentar el solicitante. El extranjero debe presentar su solicitud en **modelo oficial** (impreso armonizado de solicitud de visado Schengen), que debe acompañarse de los **documentos** que prueben su relación de parentesco con el ciudadano comunitario o del EEE o de Suiza y, en los casos que sea necesario, la relación de dependencia económica.

Como ya hemos indicado, **no es necesario abonar las tasas por la tramitación de la solicitud**.

Las **Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares**, una vez ha sido presentada la solicitud de visado, deben **estudiar el expediente de visado**, otorgándole carácter preferente. En primer lugar, la Misión Diplomática u Oficina Consular competente debe comprobar la identidad del solicitante, consultando en el SIS si se encuentra en el listado de personas no admisibles. Si el solicitante se encuentra en el SIS, en este caso no se deniega su solicitud, sino que se expide un visado de corta duración (tipo C) válido únicamente para España, a menos que la prohibición de entrada se deba a motivos de orden público, seguridad o salud públicas.



Durante la sustanciación del trámite, la Misión Diplomática u Oficina Consular puede requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una entrevista personal con el mismo.

Si la Misión Diplomática u Oficina Consular decide **conceder el visado**, porque considera que se cumplen todos los requisitos exigidos, debe notificar la concesión del visado. El interesado debe recogerlo personalmente en el plazo de un mes desde la notificación, salvo en el caso de menores, en que podrá ser recogido por su representante. En caso de no hacerlo así, se entiende que ha renunciado al visado concedido y se archiva el procedimiento. Una vez recogido el visado, el solicitante puede entrar en España, en el plazo de vigencia del visado.

La Misión Diplomática u Oficina Consular sólo puede **denegar el visado** en supuestos tasados en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero. Cualquier resolución denegatoria debe ser **motivada** y debe indicar las razones en que se base, bien por no acreditar debidamente los requisitos exigidos por el Real Decreto, bien por motivos de orden público, seguridad o salud públicas. Las razones deben ser puestas en conocimiento del interesado salvo que ello sea contrario a la seguridad del Estado.

## **CAPITULO IX: MENORES**

### **MARCO NORMATIVO**

La vigente legislación en materia de protección de menores extranjeros está integrada en los siguientes cuerpos normativos:

- Convención sobre la Protección de los Derechos del niño del 20.11.1984
- Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor
- Código Civil artículos 172, 174.2 y 232 y siguientes
- Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, modificada por L.O. 2/2009, de 11 de diciembre.
- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la L.O.4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009

La L.O.4/2000 recoge los derechos y libertades de los extranjeros en España, recogidos en el Título I de la Constitución Española, entendiendo con criterio general que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esa ley en condiciones de igualdad con los españoles.

Con respecto a los menores recoge, por ejemplo, el derecho a la educación de todos los extranjeros menores de 18 años, en las mismas condiciones que los españoles, comprendiendo el acceso a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria; a la obtención de titulación y acceso al sistema público de becas (Art.9)

El establecimiento de los derechos de asistencia sanitaria de los extranjeros menores de 18 años, en las mismas condiciones que los españoles(10).

La legislación sobre los menores extranjeros no acompañados (en adelante, MENAS) articula, a través de las disposiciones mencionadas, la protección de los menores que se encuentran en situación de riesgo y/o desamparo y regula el procedimiento administrativo para garantizar los derechos que las leyes les reconocen, entre ellos el derecho a disfrutar de una familia.

## **LA TUTELA**

La tutela se constituye como un deber, se ejerce en beneficio del tutelado bajo la autoridad judicial y tiene por objeto la guarda y protección bien de la persona y los bienes del incapacitado o de cualquiera de ellos individualmente.

Supone una auténtica representación legal. El tutor es responsable ante el Juez de la persona que está a su cargo y de su patrimonio (Ley 13/1983 de Reforma del Código Civil).

Cuando el tutor es nombrado por el Juez, adquiere el rango de tutor dativo o judicial

La reforma del Código Civil de 1987 introdujo el mecanismo de la tutela *ex lege* que permitió agilizar la actuación de las Entidades públicas y por tanto proteger a un gran número de menores.

El efecto de la tutela *ex lege* establece que, como consecuencia de su asunción, se suspende la patria potestad o la tutela ordinaria y recoge el deber de información clara y adecuada a los padres o responsables del menor tanto del hecho de la intervención administrativa como de sus causas a fin de que también ellos puedan hacer valer sus intereses.

La Ley aclara que las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por Ministerio de ley serán recurribles ante la jurisdicción civil sin necesidad de reclamación administrativa.

## **LA PROTECCION DE LOS MENORES**

La Ley 1/1996 recoge en su artículo 12 las actuaciones de protección: *“La protección del menor por los poderes públicos se realizará mediante la prevención y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y en los casos de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de ley”*.

En cualquier situación de riesgo que perjudique el desarrollo social o personal del menor, que no requiera la asunción de la tutela por ministerio de la ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar siempre los derechos del menor y reducir los factores de riesgo y la dificultad social que influyan en la situación personal en la que se encuentra.

Se considera menor en protección a aquél que, a pesar de que sus progenitores o quien corresponda sigan ejerciendo la tutela, no tiene cubiertas unas necesidades básicas y necesarias para el adecuado desarrollo de su vida cotidiana

Así se entenderá en el caso de aquellos menores con o sin familia que son entregados a las instituciones públicas para que se encarguen de su protección y acogida (*guarda*) hasta la mayoría de edad o hasta el momento en que puedan volver al seno familiar.

Durante su protección, las Instituciones públicas atenderán todas las necesidades que haya que cubrir en el ámbito de la educación, desarrollo, medidas preventivas de salud, alojamiento y manutención, teniendo derecho los menores a visitas y salidas programadas con sus padres y tutores.

Se considera menor en tutela a aquél que se encuentra falto de personas responsables que le amparen en sus derechos básicos, entre los cuales se encuentran la protección integral y la subsistencia. Esta situación será de considerar como desamparo.

Cuando el menor se encuentre en desamparo bien porque no sea posible la permanencia del menor con su familia o se halle privado de ella y se entienda que no está protegido el ejercicio de derechos fundamentales como el de integridad física y moral, la tutela pasará automáticamente a las Comunidades Autónomas a través del procedimiento establecido.

La adopción de medidas de protección necesarias para la guarda del menor por parte de la Entidad publica será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal y notificado a los padres o representantes legales, en el plazo de 48 horas.

## **LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS**

Las actuales corrientes migratorias han provocado múltiples desplazamientos hacia España de contingentes extranjeros, especialmente del continente africano, entre los que se encuentran menores de edad. Entre sus esperanzas está la meta de conseguir una vida más fácil, que les proporcione formación y trabajo, como medio de subsistencia para ellos y sus familias.

Se encuentra en la clasificación de “Menor extranjero No Acompañado” el menor que accede al territorio nacional sin referente de adulto, progenitor o responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, del que este amparado en el país.

En todos ellos, por encontrarse en esta situación, se aprecia riesgo de desprotección

Estos menores llegan a España solos e indocumentados sin ninguna medida de protección, considerados como inmigración ilegal a los que hay que proteger con los medios establecidos en las leyes nacionales hasta lograr su identificación, su domicilio en el lugar de origen y lograr su retorno al seno familiar o a las instituciones de protección en su país, y si eso no fuera posible, su legalización, teniendo la Administración como principios rectores

- la supremacía del interés del menor
- el mantenimiento del menor en el medio familiar, salvo que no sea conveniente para él.
- la integración social y familiar
- la prevención de situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal

## **a. TRATAMIENTO JURIDICO DE MENORES NO ACOMPAÑADOS**

Se entiende por MENA todo aquél menor de 18 años de edad que se encuentre solo en territorio español sin la protección de mayores responsables y en situación de desamparo.

La Ley Orgánica 4/2000, modificada por L.O. 2/2009 y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 557/2011 han dispuesto unas medidas de actuación con respecto a la situación del menor que abarcan desde su localización en el territorio nacional hasta su retorno al seno familiar o a la concesión de la documentación preceptiva en caso de no ser esto posible.

Igualmente, por parte del Observatorio de la Infancia. y los órganos de la Administración involucrados en su protección, se elaboró un “protocolo de actuación” que comprende las acciones a realizar en los casos de localización de supuestos menores extranjeros no acompañados por parte de las instituciones y organismo responsables de ellos.

Estas actuaciones implican a:

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
- Ministerio Fiscal
- Comunidades Autónomas
- Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
- Consulados de los países extranjeros en España
- Comisaría General de Extranjería y Fronteras y Brigadas Provinciales

En base a garantizar el interés superior del menor se ha elaborado un protocolo de actuación (dentro del Protocolo Marco de Menores no Acompañados) que la Secretaria de Estado de Inmigración e Inmigración desarrollara, en el que con un trabajo conjunto de todas las administraciones y órganos estatales afectados se coordinaran las intervenciones correspondientes a estos menores

La referida L.O. 2/2009 añade dos nuevos apartados al artículo 35 de la L.O. 4/2000, en los que se establece que *“el Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados. Las Comunidades Autónomas serán informadas de tales Acuerdos”*

El apartado 2 de dicho precepto dispone que *“las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen... que deben asegurar debidamente la protección del interés de los menores...”*

El artículo 190 del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, en desarrollo de lo establecido en el apartado 3 del señalado artículo 35 de la L.O., preceptúa que *“Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen a un extranjero cuya minoría de edad sea indubitada por razón de su documentación o de su apariencia física, éste será puesto a disposición de los servicios de protección de menores competentes, poniéndose tal hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal.*

De forma inmediata se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que de forma prioritaria y urgente realizarán las pruebas necesarias. Igualmente se comunicará la localización del menor o posible menor al Delegado o Subdelegado del Gobierno competente por razón del territorio donde éste se encuentre.

La determinación de la edad se realiza por medio de pruebas oseométricas, ortopantomográficas y con certificaciones registrales del país de origen, tomando generalmente como válida la edad menor dentro de la oscilación que estas pruebas demuestren.

Una vez determinada la edad, si se tratara de un menor, en el decreto del el Ministerio Fiscal que fije la edad, se decidirá su puesta a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle, dándose conocimiento de ello al Delegado del Gobierno.



El decreto del Ministerio Fiscal en el que se fije la edad, quedara inscrita en el Registro de Menores no Acompañados según lo establecido en el Art. 215 del vigente Reglamento

El servicio de protección de menores informará al menor en un idioma comprensible para él del contenido del derecho de protección internacional y del procedimiento previsto, así como de la normativa vigente en materia de protección de menores, quedando constancia escrita de dicha actuación.

## **b. REPATRIACIÓN**

Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán los Centros directivos competentes para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado, previstos en el Art. 35 de la L.O.4/2000 de 11 de enero y en los Acuerdos bilaterales suscritos por España.

Se considerará Delegación o Subdelegación competente aquella en cuyo territorio se halle el domicilio del menor

Igualmente le corresponderá la práctica de las informaciones previas, la incoación, tramitación y resolución del procedimiento de repatriación.

Por el Centro directivo competente se solicitaran informes del menor sobre las circunstancias familiares de éste a la representación diplomática de su país, y requerirá a la entidad que tenga atribuida la tutela, custodia, o guarda cualquier información sobre la situación del menor (Art.191 del R.D.557/2011)

De cada solicitud y de las posteriores actuaciones se dará cuenta a los Organismos actuantes en materia de menores extranjeros no acompañados

La Delegación o Subdelegación competente acordará la incoación del procedimiento de repatriación del menor cuando recibidas las informaciones solicitadas, se considere que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen. En el acuerdo se hará constar expresamente la identidad del menor y la existencia de los informes.

Dicho acuerdo se notificará tanto al menor como al Ministerio Fiscal y a la entidad que tenga atribuida su tutela, custodia o guarda.

La información al menor se hará por escrito, en lengua comprensible dándole cuenta de los antecedentes que han determinado la incoación del procedimiento y de cuantos derechos le asisten, entre los que está la asistencia de intérprete en caso de necesidad.

Una vez efectuado el acuerdo de incoación se iniciará un periodo de 10 días hábiles en el que el menor extranjero, la entidad tutelar y en su caso el Ministerio Fiscal podrán formular cuantas alegaciones de hecho o derecho consideren oportunas, así como proponer pruebas.

En el caso de que el menor haya alcanzado la edad de 16 años podrá intervenir por sí mismo o a través del representante que designe, y por la entidad que ostente su tutela o guarda si es de edad inferior.

Cuando el menor de 16 años tuviera suficiente juicio y voluntad contraria a la de quien tiene su tutela o representación legal, se suspenderá el procedimiento hasta que le sea nombrado un defensor judicial que será instado de la autoridad judicial.

Una vez que los informes solicitados mencionados en el Art.191 del Reglamento vigente se hayan incorporado al expediente, así como el resultado de las pruebas practicadas si las hubiera, el Delegado/Subdelegado del Gobierno dará inicio al trámite de audiencia, al que serán convocados el Ministerio Fiscal, el tutor y en su caso el defensor judicial o representante designado por el menor. La audiencia se documentará en acta, suscrita por los presentes.

Finalizado el trámite de audiencia, El Delegado/Subdelegado del Gobierno resolverá, de acuerdo con el interés superior del menor, sobre la repatriación al país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España, estableciendo si la repatriación se realizara en base a la reagrupación familiar o por la puesta a disposición de los servicios de protección del menor del país de origen.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa y será grabada para su constancia en el Registro de Menores No Acompañados.

La notificación al menor, a su tutor y al Ministerio Fiscal se hará en el plazo de 10 días. Siendo el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento de seis meses desde la fecha de acuerdo de inicio del procedimiento

El art. 195 del R.D.557/2011 de 20 de abril establece en relación con la ejecución de la repatriación:

*“ Sin perjuicio de las funciones del Cuerpo Nacional de Policía en la ejercicio de la resolución, el menor será acompañado por personal adscrito a los servicios de protección del menor bajo cuya tutela legal o guarda se encuentre hasta el momento de su puesta a disposición de las autoridades competentes de su país de origen”*

*“En el caso de que el menor se encontrase incurso en un proceso judicial, la repatriación quedará condicionada a la autorización judicial. En todo caso, deberá constar en el expediente la comunicación al Ministerio Fiscal”*

Si el menor hubiera sido solicitante de asilo a su llegada a España, se estará a lo dispuesto en el Art. 15.4 del Reglamento de Ejecución de la Ley 5/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y refugio, aprobado por Real Decreto 203/1995 de 10 de febrero que dice *“los solicitantes menores de dieciocho años en situación de desamparo serán remitidos a los servicio competentes en materia de protección de menores, poniéndolo en conocimiento, asimismo, del Ministerio Fiscal. El tutor que legalmente se asigne al menor, le representará durante la tramitación del expediente. Las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a los criterios contenidos en los convenios y recomendaciones internacionales aplicables al menor solicitante de asilo”*

En el ámbito de la cooperación y la prevención de la emigración de menores de edad no acompañados, se han establecido los siguientes acuerdos bilaterales:

- Acuerdo entre la República de Senegal y el Reino de España sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración de menores de edad senegaleses no acompañados, su

protección, repatriación y reinserción hecho en Dakar el 5 de diciembre de 2006. El presente acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 2008.

- Memorando de entendimiento entre el Reino de Marruecos y el Reino de España sobre repatriación asistida de menores no acompañados de 23 de diciembre de 2003
- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007
- Acuerdo entre el Reino de España Y Rumania sobre cooperación en el ámbito de la protección de los menores de edad rumanos no acompañados en España, su repatriación y lucha contra la explotación de los mismos, hecho en Madrid, 15 de diciembre de 2005.

## **DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS POR VACACIONES, ENFERMEDAD O ESCOLARIZACIÓN.**

La entrada en España de menores extranjeros en estancias temporales está regulada en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero y desarrollada en el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, en sus artículos 187 y 188.

Se halla en situación de estancia el extranjero que no sea titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado para permanecer en España por un periodo ininterrumpido cuya duración no exceda de noventa días. La situación de estancia será autorizada a través del correspondiente visado de estancia.

Estas estancias temporales serán concedidas a través de un visado de corta duración para permanecer en España hasta un máximo de tres meses.

El espíritu de la Ley contempla dentro de este Art.187 del Reglamento el desplazamiento de menores extranjeros a España, en programas promovidos y financiados por las Administraciones Públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones u otras entidades o personas ajenas a quienes ejerzan su patria potestad o tutela.

Los fines asignados en estas estancias temporales son:

–**Escolarización**

–**Tratamiento Médico**

–**Disfrute de vacaciones**

### **a. ESTANCIA TEMPORAL POR VACACIONES**

El mayor número de peticiones de estancias temporales por vacaciones, provienen de Asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones que trasladan con periodicidad a menores de distintas nacionalidades para el disfrute de vacaciones.

Los menores así desplazados llegan en grupos procedentes del mismo territorio, y son acogidos por nacionales, bien en familias o personas individuales residentes en la Comunidad donde se ha presentado la solicitud.

Procedimiento:

En el caso de Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro la documentación a presentar contará con:

- Exposición de motivos de la venida de los menores a España
- Estatutos de la Fundación o Asociación
- Numero de menores desplazados con especificación de la filiación y territorio de procedencia
- Número de monitores/as procedentes del país del menor.
- Relación de familias o personas individuales que acogerán a los menores durante su estancia así como la identificación de los nombres y domicilios
- Todos vendrán comprendidos en una póliza de asistencia sanitaria privada española, que habrá gestionado la Fundación o Asociación promotora del plan de vacaciones

En el caso de personas individuales:

- Razones que motivan la venida del menor.

- Compromiso escrito mediante notario del conocimiento de que la acogida no tiene por objeto la adopción, así como facilitar el regreso del menor a su país sin que dicho regreso implique coste para el erario público
- Póliza de Asistencia privada expedido durante el periodo de estancia
- Acreditación de medios económicos
- Informe de la Comunidad Autónoma correspondiente, en materia de protección de menores
- Duración de la estancia

A efectos de concesión del visado, por parte de la Oficina Consular española, los requisitos se entenderán cumplidos a través del Informe del Delegado/Subdelegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma donde vayan a residir durante su estancia.

Los menores que entren en España a través de la concesión de estos desplazamientos temporales, deberán efectuar su salida en la misma fecha, y por el mismo puesto fronterizo, acompañados hasta su lugar de destino por los monitores/as que fueron designados en su origen.

Atendiendo al hecho de que estas estancias Temporales se efectúan en base a “Programas” promovidos y financiados por los organizadores, no está contemplada la permanencia en el país de ninguno de los componentes de dichos programas, una vez finalizado su periodo de vacaciones.

A estos efectos, la Delegación o Subdelegación del Gobierno tendrá constancia escrita de la salida del grupo que comprendía el Programa.

En caso de enfermedad sobrevenida de alguno de los menores, durante sus vacaciones, sería motivo de estudio la conveniencia de la concesión de una Autorización de Residencia Temporal por circunstancias excepcionales

La Oficina Consular en el país de origen del menor deberá comprobar la autorización expresa de quien ejerza la patria potestad o tutela, así como los requisitos relativos a los pasaportes individuales o colectivos u otra documentación de viaje de los menores.

## **b. ESTANCIA TEMPORAL POR TRATAMIENTO MÉDICO**

Las estancias temporales por tratamiento médico están previstas para aquellos casos en los que menores extranjeros, residentes en su país de origen sufren una enfermedad de carácter grave que requieren de asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país, ya sea por causas económicas, de conflictividad bélica, o de especial tratamiento de enfermedades que no pueden ser tratadas por las entidades sanitarias existentes, y precisan de su desplazamiento por causa de urgencia.

El artículo 187 del Reglamento 557/2011 dispone que, en todos los casos, si los menores van a ser acogidos por familias o personas individuales, éstas deberán expresar por escrito su conocimiento de que la acogida del menor no tiene por objeto la adopción y su compromiso de favorecer el regreso a su país de origen o procedencia

### **Procedimiento:**

El expediente se iniciará a solicitud de las asociaciones, fundaciones o personas ajenas que están comprometidas con la acogida del menor durante su estancia ya sea por diagnóstico, intervención quirúrgica o tratamiento.

### **Presentarán:**

- Una exposición de las razones de la venida a España del menor, junto con el informe médico que le trata, donde conste la enfermedad, estado de gravedad y la necesidad de su desplazamiento a España. Igualmente constará la aceptación por parte de Entidad médica pública española de hacerse cargo del tratamiento o intervenciones necesaria, así como los costes que conlleve.



- Compromiso notarial de la aceptación de la acogida del menor con carácter temporal y nunca de adopción y la facilitación del regreso del mismo a su país de origen, sin que implique coste para el erario público, salvo que éste haya sido admitido expresamente.
- Póliza de Asistencia sanitaria privada, durante el periodo de estancia del menor.
- Acreditación de medios económicos suficientes por parte de la persona que acoja al menor, en donde quede demostrada su capacidad para sustentar las necesidades de éste durante los meses de acogida.

A efectos de la concesión de visado de entrada en España del menor, los requisitos y exigencias de este artículo se entenderán cumplidos a través del Informe favorable del Delegado/Subdelegado del Gobierno en la comunidad autónoma en cuyo territorio vaya a permanecer.

Dicho informe se referirá al cumplimiento de los requisitos y autorizaciones exigibles en España, proporcionados para el fin de la estancia y su duración, tanto en materia sanitaria como de protección jurídica del menor.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno podrá solicitar informe del órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de protección de menores, emitido a iniciativa de la entidad promotora del programa

La Oficina consular española en el país de origen del menor, deberá comprobar la autorización expresa de quien ejerza la patria potestad o tutela, para el desplazamiento, al igual que todo lo relativo a pasaportes, salvoconductos u otra documentación de viaje de los menores.

En aquellos casos que el tratamiento se prolongara por tiempo superior a la validez del visado concedido, éste puede ser prorrogado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del citado Real Decreto 5572011 de 20 de abril.

### **c. DESPLAZAMIENTO TEMPORAL POR ESCOLARIZACION**

Se regula en el Art. 188 del Real Decreto 577/2011 de 20 de abril.

La estancia por desplazamiento temporal de menores con fines de escolarización tendrá naturaleza jurídica de *estancia por estudios*.

Les será de aplicación a los interesados el procedimiento establecido párale artículo anterior, teniendo como requisito adicional la acreditación de la admisión en un centro de enseñanza reconocido oficialmente.

La estancia finalizará al término del curso escolar, debiendo regresar a su país, y quedar incluido en un nuevo programa en el caso de querer continuar los estudios en España.

### **RESIDENCIA DE HIJO DE RESIDENTE LEGAL**

Los artículos 185 y 186 del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril regulan la Residencia del hijo de residente comprendiendo a

- a) Hijo nacido en España de residente.
- b) Hijo no nacido en España de residente.

El Art. 185 establece las condiciones y requisitos para la residencia del hijo nacido en España de residente.

El Art. 186 establece las condiciones y requisitos para la residencia del hijo no nacido en España de residente así como los menores sujetos legalmente a tutela de ciudadano o institución española o de un extranjero residente legal en España.

#### **a. HIJO DE EXTRANJERO LEGAL NACIDO EN ESPAÑA**

**Artículo 185 del Real Decreto.557/2011 de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000.**

“Los hijos nacidos en España de extranjero que se encuentre residiendo legalmente en España, adquirirán automáticamente la misma residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores.”

#### **Procedimiento:**

El padre o la madre del menor deberán solicitar personalmente la autorización de residencia para el hijo, desde que tuviera lugar el nacimiento, o desde que alguno de sus progenitores acceda a la situación de residencia

**Documentación necesaria:**

- \* Deberán acreditar mediante partida de nacimiento original, que debe ser expedida por el Registro Civil, tanto los datos de filiación del menor, como la de los progenitores.
- \* Igualmente presentarán la Autorización de Residencia en vigor del padre o de la madre del menor.
- \* Pasaporte del menor en vigor o cedula de inscripción en vigor

**a.1) Residencia de hijo nacido en España de padres refugiados:**

Si el hijo nacido en España es de padre o madre reconocidos como Refugiados, podrán optar entre solicitar para el menor la extensión familiar del derecho de asilo o una autorización de residencia, en función del interés superior del menor.

Las renovaciones de las autorizaciones de residencia establecidas en este artículo seguirán los trámites y el procedimiento establecido para las autorizaciones de residencia de los familiares reagrupados (art. 52 del Reglamento)

Las autorizaciones de residencia concedidas en base a lo previsto en este artículo, cuando sus titulares alcancen la mayoría de edad, habilitarán para trabajar sin necesidad de ningún otro requisito.

**b. HIJO NO NACIDO EN ESPAÑA DE RESIDENTE**

El Art. 186 del Real Decreto. 557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Extranjeros dispone

*“Los menores no nacidos en España hijos de extranjeros residentes en España, así como los menores sujetos a la tutela de un ciudadano español o de un extranjero residente en España podrán obtener autorización de residencia cuando se acredite su permanencia continuada en España durante un mínimo de dos años y sus padres o tutores cumplan los requisitos de medios de vida y alojamiento exigidos para ejercer el derecho a la reagrupación familiar”.*

**Procedimiento:**

La solicitud será presentada personalmente por el padre, madre, o tutor de quien dependa.

**Documentación necesaria:**

- Datos identificativos del menor (pasaporte completo y partida de nacimiento legalizada y traducida)
- Acreditación de la situación de residencia legal del padre, madre o tutor
- Empadronamiento de la unidad familiar
- Documento de constitución de tutela del menor
- Documentos acreditativos de los medios de vida y recursos económicos del padre, madre o tutor para atender las necesidades de la familia
- Documentos acreditativos de disponibilidad de vivienda suficiente para la familia
- Cuando los menores se encuentren en edad de escolarización obligatoria se deberá presentar certificado que acredite su escolarización durante su permanencia en España

Las autorizaciones de residencia concedidas por este motivo estarán vinculadas a la de la autorización de residencia del padre, madre o tutor del interesado. En el caso que derive de su tutela por ciudadano comunitario, su duración será de cinco años.

Las renovaciones de las autorizaciones de residencia reguladas en este artículo seguirán los trámites y el procedimiento establecido para las autorizaciones de residencia de los familiares reagrupados.

Las residencias concedidas en base al Art. 186, cuando sus titulares alcancen la mayoría de edad laboral, habilitarán para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.

## **RESIDENCIA DE MENORES TUTELADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**

La Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero en su artículo 35 y el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, en su desarrollo, recogen la normativa sobre las residencias de los menores tutelados por la Administración Pública.

Se entiende por menor extranjero tutelado No MENA todo aquel menor que se encuentre en España a cargo del servicio de protección de menores, y que no goza de la tutela de sus progenitores debido a los estados de abandono, ausencia física de los mismos, retirada de tutela por malos tratos, o estados de indigencia prolongada.

La tutela de estos menores, se aboca por la Comunidad al residir estos ya en el país y darse las circunstancias descritas durante su residencia en España.

El Artículo 35.7 de la L.O.4/2000 dispone: “Se considera regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad.

Con la nueva legislación aportada por el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 7 de enero se da una nueva redacción a las residencias del menor extranjero no acompañado.

A lo largo de los artículos 196, 197 y 198 se determinan las condiciones y requisitos para las residencias de los menores durante su periodo de tutela por entidad publica y posteriormente, cuando alcanzada la mayoría de edad , acceden a esta habiendo sido titulares de residencia o por el contrario sin haber obtenido esta documentación.

Así el Art. 197 trata del acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que es titular de una autorización de residencia.

El Art. 198 trata del acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que no es titular de una autorización de residencia

#### **a. RESIDENCIA DE MENAS**

Por su parte el Real Decreto 557/2011 en su artículo 196 referente a “Menores Extranjeros No Acompañados” establece que: Una vez quede acreditada la imposibilidad de la repatriación del menor, y en todo caso transcurridos nueve meses desde que el menor ha sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, se procederá a otorgarle la autorización de residencia establecida en el art. 3 de la L.O. 4/2000.

Elemento fundamental para este trámite de Residencia será el de la constancia de la constitución de la tutela.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno, a través de la Oficina de Extranjería, iniciara de oficio, por orden superior o a instancia de parte el procedimiento relativo a la autorización de residencia.

## **Procedimiento**

Tanto si el inicio es de oficio o a instancia de parte presentará:

- Pasaporte en vigor o Cédula de Inscripción en el caso de apátridas.
- Certificación de hallarse cubierto en sus necesidades de manutención, estancia y formación por parte de la Institución de la Comunidad.
- Acta de Tutela del menor de la Comunidad Autónoma correspondiente y confirmación de su permanencia actual en el Centro de Acogida de la Comunidad Autónoma.

Se resolverá y notificara en el plazo de un mes, siendo comunicada al Ministerio Fiscal en el plazo de 10 días desde que se dicte.

La autorización de residencia tendrá una vigencia de un año, retrotrayéndose su eficacia a la fecha de resolución del Ministerio Fiscal por la que determino su puesta a disposición de los servicios de protección.

### **Renovación:**

El procedimiento será iniciado de oficio por la Oficina de Extranjería competente durante los sesenta días naturales previos a la expiración de su vigencia y prorrogara la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento.

Esta renovación procederá cuando subsistan las circunstancias que motivaron su concesión inicial.



La vigencia de la autorización renovada será de un año, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración.

#### Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que es titular de autorización de residencia

Aquel menor sobre el que un servicio de protección tenga la tutela, custodia o protección provisional y alcance la mayoría de edad siendo titular de una residencia concedida por el Art.195 del R.D.557/2011 de 20 de abril, podrá solicitar la renovación de la misma oficialmente, durante los sesenta días naturales anteriores a la expiración de la vigencia o noventa días naturales posteriores a la finalización de ésta.

Estas solicitudes se renovarán como una Autorización de Residencia temporal no lucrativa, teniendo como requisitos la certificación del grado de inserción en la sociedad española, la acreditación de medios económicos, informes del centro de protección competente durante su tutela, y continuidad de estudios, en su caso.

Se tendrá en especial consideración para el procedimiento de renovación el grado desconocimiento de las lenguas oficiales del Estado, la existencia de lazos familiares en territorio español con ciudadanos españoles o extranjeros residentes y tiempo de acogimiento, guarda o tutela por Institución española, entre otros requisitos.

La vigencia de estas renovaciones será de dos años, que tras su acceso a la mayoría de edad posibilitara solicitar la modificación a una autorización de residencia y trabajo si reúne las condiciones del Art.200 del R.D. 557/2011 de 20 de abril.

## **b. RESIDENCIA DE MENORES TUTELADOS**

Se encuadran en este apartado aquellos menores que residen en España y que por diversas razones se hallan bajo la tutela de Institución Pública, pero que no han accedido al país sin referente adulto. No están considerados como MENAS, pero sí como menores en protección.

Les será de aplicación lo dispuesto en el art. 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero y el art. 186 del R.D. 557/2011 de 20 de abril.

Se entenderán como requisitos necesarios para la tramitación de la residencia:

- Que el menor esta documentado con pasaporte en vigor de su país de origen o en su defecto, cedula de inscripción de apátrida
- Que dicho menor tiene cubiertas las necesidades básicas de alojamiento y de orden económico
- La certificación que se halla tutelado en el momento de la presentación de la solicitud
- Acreditación de encontrarse escolarizados al hallarse matriculados en un centro de enseñanza oficial y que asisten con regularidad a clase, salvo ausencias justificada

## **RENOVACIÓN DE RESIDENCIA DE MENORES TUTELADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**

Las renovaciones de residencia temporal están reguladas en el Artículo 186 del, Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, en los casos de menores tutelados considerados NO MENAS

Para las renovaciones de las autorizaciones de residencia de este artículo se seguirán los trámites y procedimientos establecidos para las autorizaciones de residencia de familiares reagrupados.

Dada la condición de tutelados por entidad pública, los medios económicos, la vivienda y la titularidad del representante legal se entienden justificadas con los requisitos expuesto

La renovación de las autorizaciones de residencia deberán ser solicitadas personalmente ante el órgano competente para su tramitación durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización o los noventa posteriores.

Dicha solicitud de renovación, será presentada en modelo oficial e ira acompañada de la documentación acreditativa de que se reúnen las circunstancias que permiten dicha renovación.

El menor tutelado deberá renovar su autorización inicial a instancias del órgano que ejerce la tutela y se le otorgara una autorización de residencia con la validez correspondiente ya sea primera, segunda renovación o residencia de larga duración.

Las renovaciones de la residencia de los menores extranjeros no acompañados como se ha mencionado se iniciarán de oficio por la Oficina de Extranjería de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, sesenta días antes de la caducidad de la vigencia de la que tengan concedida.

Deberán mantenerse las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la inicial, y hallarse documentado con pasaporte en vigor de su país.

## **RESIDENCIA DE MENORES TUTELADOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE ALCANZAN LA MAYORIA DE EDAD SIN HABER OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA**

Este apartado contemplado por la Ley ampara aquellos casos en los que, por sus especiales circunstancias, los menores o bien no han podido ser documentados por sus representaciones diplomáticas o los trámites de repatriación se han alargado en su resolución o no se han cumplido los nueve meses establecidos en el Reglamento desde la fecha de Tutela.

### **Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que no es titular de una autorización de residencia**

En el caso de menores sobre los que un servicio de protección competente ostente la tutela legal, protección provisional o guarda que alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia prevista y hayan participado adecuadamente en las acciones formativas programadas por la entidad para favorecer su integración social, dicha entidad podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales.

La solicitud deberá ser presentada personalmente por el interesado, junto con la recomendación de la entidad tutelar de haber participado en las acciones formativas y programadas por dicha entidad para favorecer su integración social, en los sesenta días naturales previos o en los noventa días naturales posteriores a la fecha en que cumpla los dieciocho años.

Deberá acreditar que cuenta con medios económicos suficientes para su sostenimiento, presentar contrato o contratos de trabajo de vigencia sucesiva de los que reúnan los requisitos exigidos en vigente legislación.

Se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española.

La autorización de esta autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, conllevará una autorización de trabajo y su vigencia estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución.

Como venimos haciendo, vamos a exponer el cuadro diferencial de los dos reglamentos.

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u>	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
TÍTULO VIII. Menores extranjeros	Título <b>XI</b> . Menores extranjeros
	Capítulo I. Residencia del hijo de residente

<p><b>Artículo 94. Residencia del hijo de residente legal.</b></p> <p>1. Los hijos nacidos en España de extranjero que se encuentre residiendo legalmente en España adquirirán automáticamente la misma autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores. A estos efectos, el padre o la madre deberán solicitar personalmente la autorización de residencia para el hijo desde que tuviera lugar el nacimiento o desde que alguno de sus progenitores acceda a la situación de residencia legal, acompañando original y copia de la partida de nacimiento, así como copia de la autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores. Si el hijo nacido en España es de padre o madre reconocidos como refugiados, estos podrán optar entre solicitar para él la extensión familiar del derecho de asilo o una autorización de residencia, en función del interés superior del menor.</p> <p>2. Los extranjeros menores de edad o incapacitados no nacidos en España que o bien sean hijos de españoles o de extranjeros residentes legales en España, o bien estén sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano o institución españoles o de un extranjero residente legal en España podrán obtener</p>	<p><b>Artículo 185. Residencia del hijo nacido en España de residente.</b></p> <p>1. Los hijos nacidos en España de extranjero que se encuentre residiendo en España adquirirán automáticamente la misma autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores.</p> <p>A estos efectos, el padre o la madre deberán solicitar personalmente la autorización de residencia para el hijo desde que tuviera lugar el nacimiento o desde que alguno de sus progenitores acceda a la situación de residencia, acompañando original y copia del certificado de nacimiento.</p> <p>2. Si el hijo nacido en España es de padre o madre reconocidos como refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria, éstos podrán optar entre solicitar para él la extensión familiar del derecho de protección internacional o una autorización de residencia, en función del interés superior del menor.</p> <p>3. En el caso de hijo nacido en España de un extranjero titular de una autorización de residencia por reagrupación familiar en condición de descendiente de otro residente, aquél adquirirá una autorización de residencia por reagrupación familiar dependiente de su progenitor.</p>
---	---

<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <b>REAL DECRETO 2393/2004</b></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <b>REAL DECRETO 557/2011</b></p>
---	---

<p>autorización de residencia cuando se acredite su permanencia continuada en España durante un mínimo de dos años y sus padres o tutores cumplan los requisitos de medios de vida y alojamiento exigidos en este reglamento para ejercer el derecho a la reagrupación familiar. Cuando los menores se encuentren en edad de escolarización obligatoria, se deberá acreditar adicionalmente que han estado matriculados en un centro de enseñanza y asistido regularmente a clase, salvo ausencias justificadas, durante su permanencia en España. La vigencia de las autorizaciones concedidas por este motivo estará vinculada, en su caso, a la de la autorización de residencia del padre, la madre o el tutor del interesado.</p> <p>3. Para las renovaciones de las autorizaciones de residencia reguladas en este artículo se seguirán los trámites y el procedimiento establecido para las autorizaciones de residencia de los familiares reagrupados.</p>	<p>En la renovación de la citada autorización de residencia serán valorados, en cuanto a la acreditación de la disposición de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir las necesidades de la familia, junto a los del progenitor del menor, los del primer reagrupante, siempre que el progenitor del menor siga siendo titular de una autorización de residencia por reagrupación familiar.</p> <p>4. Para las renovaciones de las autorizaciones de residencia reguladas en este artículo se seguirán los trámites y el procedimiento establecido para las autorizaciones de residencia de los familiares reagrupados.</p> <p>5. Las autorizaciones de residencia concedidas en base a lo previsto en los apartados anteriores, cuando sus titulares alcancen la edad laboral, habilitarán para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.</p>
	<p><b>Artículo 186. Residencia del hijo no nacido en España de residente.</b></p> <p>1. Los menores no nacidos en España, hijos de extranjeros con residencia en España, así como los menores sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano o institución españoles o de un extranjero residente legal en España, podrán obtener autorización de residencia cuando se acredite su permanencia continuada en España durante un mínimo de dos años y sus padres o tutores cumplan los requisitos de medios económicos y alojamiento exigidos en este Reglamento para ejercer el derecho a la reagrupación familiar.</p> <p>2. Cuando los menores se encuentren en edad de escolarización obligatoria, se deberá presentar certificado que acredite su escolarización durante su permanencia en España.</p> <p>3. La vigencia de las autorizaciones concedidas por este motivo estará vinculada, en su caso, a la de la autorización de residencia del padre, la madre o el tutor del interesado. En caso de que la</p>



<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	<p>autorización derive de su tutela por un ciudadano comunitario, su duración será de cinco años.</p> <p>4. Para las renovaciones de las autorizaciones de residencia reguladas en este artículo se seguirán los trámites y el procedimiento establecido para las autorizaciones de residencia de los familiares reagrupados.</p> <p>5. Las autorizaciones de residencia concedidas en base a lo previsto en los apartados anteriores, cuando sus titulares alcancen la edad laboral, habilitarán para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.</p>
	<b>Título XI. Menores extranjeros</b>
	<b>Capítulo II. Desplazamiento temporal de menores extranjeros</b>

<p><b>Artículo 93. Desplazamiento temporal de menores extranjeros.</b></p> <p>1. El desplazamiento de menores extranjeros a España, en programas promovidos y financiados por las Administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras entidades o personas ajenas a quienes ejercen su patria potestad o tutela, para estancias temporales con fines de escolarización, tratamiento médico o disfrute de vacaciones, necesitará la autorización expresa de quien ejerza la patria potestad o tutela, así como el informe previo favorable del Subdelegado del Gobierno o Delegado del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, en cuyo territorio vayan a permanecer. A estos efectos el Delegado o Subdelegado del Gobierno podrá solicitar el informe del órgano de la comunidad o comunidades autónomas competente en materia de protección de menores, emitido a iniciativa de la entidad promotora del programa.</p> <p>2. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Trabajo y Asuntos Sociales y del Interior coordinarán el desplazamiento y estancia de estos menores, y por este último departamento se controlará su regreso al país de origen o de procedencia.</p>	<p><b>Artículo 187. Desplazamiento temporal de menores extranjeros.</b></p> <p>1. El desplazamiento de menores extranjeros a España para periodos no superiores a noventa días, en programas de carácter humanitario promovidos y financiados por las administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras entidades ajenas a quienes ejercen su patria potestad o tutela, para estancias temporales con fines de tratamiento médico o disfrute de vacaciones, necesitará la autorización expresa de quien ejerza la patria potestad o tutela, así como el informe previo favorable del Subdelegado del Gobierno o Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en cuyo territorio vayan a permanecer.</p> <p>Con carácter previo a la emisión del informe de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, la entidad o persona que promueva el programa habrá de presentar ante ésta informe emitido por el órgano autonómico competente en materia de protección de menores sobre el programa.</p> <p>2. Los requisitos y exigencias de este artículo se entenderán cumplidos, a los efectos de la concesión del visado, a través del informe</p>
--	---

<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></p>
---	---

<p>3. En todos los casos, si los menores van a ser acogidos por familias o personas individuales, estas deberán expresar por escrito su conocimiento de que la acogida del menor no tiene por objeto la adopción y su compromiso de favorecer el regreso a su país de origen o procedencia.</p> <p>4. La estancia temporal con fines de escolarización se tramitará de conformidad con lo establecido para el régimen de los estudiantes previsto en este reglamento y acabará al finalizar el curso académico, en cuyo momento, salvo que razones excepcionales lo impidan, el menor deberá regresar a su país.</p> <p>En el caso de que desee continuar los estudios por más de un curso académico, se deberá incluir al menor en un nuevo programa.</p> <p>5. Los requisitos y exigencias de este artículo se entenderán cumplidos, a los efectos de la concesión del visado, a través del informe favorable del Subdelegado del Gobierno o Delegado del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, a que se refiere el apartado 1. El informe se referirá al cumplimiento, por parte del programa, de los requisitos y autorizaciones exigibles en España, proporcionados para el fin de la estancia y su duración, tanto en materia sanitaria o de escolarización como de protección jurídica del menor en relación con la finalidad expuesta y de esa duración, que no podrá exceder de un curso académico, en orden a garantizar la ausencia de riesgo de desprotección de este. Asimismo, se habrá de verificar la existencia de compromiso escrito de facilitar el regreso al país de origen de los menores, y el conocimiento de que la acogida del menor no tiene por objeto la adopción, según lo referido en el apartado 3, y que el mencionado regreso no implica coste para el erario público, salvo que dicho coste haya sido asumido expresa y previamente por la autoridad competente.</p> <p>La oficina consular en el país de origen del menor deberá, no obstante, comprobar la autorización expresa de quien ejerza la patria potestad o tutela,</p>	<p>favorable del Subdelegado del Gobierno o Delegado del Gobierno a que se refiere el apartado 1.</p> <p>El informe se referirá al cumplimiento, por parte del programa, de los requisitos y autorizaciones exigibles en España, proporcionados para el fin de la estancia y su duración, tanto en materia sanitaria como de protección jurídica del menor en relación con la finalidad expuesta y de esa duración, en orden a garantizar la ausencia de riesgo de desprotección de éste.</p> <p>Asimismo, se habrá de verificar la existencia de compromiso escrito de facilitar el regreso al país de origen de los menores, y el conocimiento de que el desplazamiento del menor no tiene por objeto la adopción, según lo referido en el apartado 4, y que el mencionado regreso no implica coste para el erario público, salvo que dicho coste haya sido asumido expresa y previamente por el órgano competente.</p> <p>La Oficina Consular en el país de origen del menor deberá, no obstante, comprobar la autorización expresa de quien ejerza la patria potestad o tutela, así como todo lo relativo a los requisitos de los pasaportes individuales o colectivos, salvoconductos u otra documentación de viaje de los menores.</p> <p>3. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Trabajo e inmigración y del Interior coordinarán el desplazamiento y estancia de estos menores, y por este último departamento se controlará su regreso al país de origen o de procedencia.</p> <p>4. En todos los casos, si los menores van a permanecer con familias o personas individuales, éstas deberán expresar por escrito su conocimiento de que el desplazamiento del menor no tiene por objeto la adopción y su compromiso de favorecer el regreso a su país de origen o procedencia.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<i>así como todo lo relativo a los requisitos de los pasaportes individuales o colectivos, salvoconductos u otra documentación de viaje de los menores.</i>	
	<p><b>Artículo 188. Desplazamiento temporal de menores extranjeros con fines de escolarización.</b></p> <p>1. La estancia derivada del desplazamiento temporal de menores con fines de escolarización tendrá naturaleza jurídica de estancia por estudios.</p> <p>2. Al desplazamiento temporal de menores con fines de escolarización en programas promovidos y financiados por las administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras entidades o personas ajenas a quienes ejercen su patria potestad o tutela, le resultará de aplicación el procedimiento establecido en el artículo anterior, debiendo acreditarse que el menor ha sido admitido en un centro de enseñanza reconocido oficialmente en España.</p> <p>3. La estancia acabará al finalizar el curso académico, en cuyo momento, salvo que razones excepcionales lo impidan, el menor deberá regresar a su país.</p> <p>En el caso de que desee continuar los estudios por más de un curso académico, se deberá incluir al menor en un nuevo programa.</p>
	<b>Título XI. Menores extranjeros</b>
	<b>Capítulo III. Menores extranjeros no acompañados</b>

	<p><b>Artículo 189. Definición.</b></p> <p>Lo previsto en el presente capítulo será de aplicación al extranjero menor de dieciocho años que llegue a territorio español sin venir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España</p>
--	--

<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004</b></p>	<p><b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b></p>
	<p>se encuentre en aquella situación.</p> <p>El contenido de este capítulo deberá interpretarse sin perjuicio de la posibilidad de que el menor extranjero no acompañado pueda cumplir los requisitos establecidos en los artículos 59 y 59bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o en la normativa española en materia de protección internacional.</p>

<p><b>Artículo 92. Menores extranjeros no acompañados.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los supuestos en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan conocimiento de, o localicen en España a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, informará a los servicios de protección de menores para que, en su caso, le presten la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor. Con carácter inmediato, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesarias.</li> <li>2. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores.</li> <li>3. Si durante el procedimiento de determinación de la edad el menor precisara atención inmediata, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo solicitarán a los Servicios competentes de Protección de Menores.</li> <li>4. La Administración General del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor, después de haber oído al menor, y previo informe de los Servicios de Protección de Menores, resolverá lo que proceda sobre la repatriación a su país de origen, o a aquel donde se encontrasen sus familiares, o, en su</li> </ol>	<p><b>Artículo 190. Determinación de la edad.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen a un extranjero no acompañado cuya minoría de edad sea indubitada por razón de su documentación o de su apariencia física, éste será puesto a disposición de los servicios de protección de menores competentes, poniéndose tal hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los datos de identificación del menor serán inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.</li> </ol> <p>En el caso de que la minoría de edad de un extranjero indocumentado no pueda ser establecida con seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cuanto tengan conocimiento de esa circunstancia o localicen al supuesto menor en España, informarán a los servicios autonómicos de protección de menores para que, en su caso, le presten la atención inmediata que precise de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor.</p> <p>Con carácter inmediato, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá, en el plazo más breve posible, la determinación de su edad, para lo que deberán colaborar las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesarias.</p> <p>Igualmente, se dará conocimiento de la localización del menor o posible menor al Delegado o Subdelegado del Gobierno competente por razón del territorio donde éste se encuentre.</p>
---	--

**REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004**

**REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011**



<p>defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio del interés superior del menor, la repatriación a su país de origen solamente se acordará si se dieran las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del menor, o para la adecuada tutela por parte de los Servicios de Protección de Menores del país de origen.</p> <p>El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración General del Estado o, en su caso, a propuesta de la entidad pública que ejerce la tutela del menor. El órgano encargado de la tutela del menor facilitará a la autoridad gubernativa cualquier información que conozca relativa a la identidad del menor, su familia, su país o su domicilio, y pondrá en su conocimiento las gestiones que haya podido realizar para localizar a la familia del menor.</p> <p>La autoridad gubernativa pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal todas las actuaciones llevadas a cabo en este procedimiento.</p> <p>La Administración General del Estado, competente para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación desde España de un menor extranjero en situación de desamparo, actuará a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, las cuales solicitarán de la Comisaría General de Extranjería y Documentación la realización de las gestiones necesarias ante las embajadas y consulados correspondientes, para localizar a los familiares de los menores o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país de origen que se hicieren responsables de ellos. Si no existiera representación diplomática en España, estas gestiones se canalizarán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.</p> <p>Una vez localizada la familia del menor o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país, se procederá a la repatriación mediante su entrega a las autoridades de fronteras del país al que se repatrie. No procederá esta medida cuando se</p>	<p>2. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración impulsará la adopción de un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del servicio público de protección de menores y documentación.</p> <p>3. Si durante el procedimiento de determinación de la edad el menor precisara atención inmediata, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la solicitarán a los servicios <b>autonómicos</b> competentes <b>en materia</b> de protección de menores.</p> <p>4. En el decreto del Ministerio Fiscal que fije la edad del menor extranjero se decidirá su puesta a disposición de los servicios competentes de protección de menores, dándose conocimiento de ello al Delegado o Subdelegado del Gobierno competente.</p> <p>En caso de que la determinación de la edad se realice en base al establecimiento de una horquilla de años, se considerará que el extranjero es menor si la edad más baja de ésta es inferior a los dieciocho años.</p> <p>El decreto del Ministerio Fiscal en el que se fije la edad del menor extranjero se inscribirá en el Registro de menores no acompañados de conformidad con lo previsto en el artículo 215 de este Reglamento.</p> <p>5. Tras haber sido puesto el menor a su disposición, el servicio de protección de menores le informará, de modo fehaciente y en un idioma comprensible para éste, del contenido básico del derecho a la protección internacional y del procedimiento previsto para su solicitud, así como de la normativa vigente en materia de protección de menores. De dicha actuación quedará constancia escrita.</p>
--	---

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011



<p>hubiera verificado la existencia de riesgo o peligro para la integridad del menor, de su persecución o la de sus familiares.</p> <p>En el caso de que el menor se encontrase incurso en un proceso judicial, la repatriación quedará condicionada a la autorización judicial. En todo caso deberá constar en el expediente la comunicación al Ministerio Fiscal.</p> <p>La repatriación del menor será acordada por el Delegado del Gobierno o por el Subdelegado del Gobierno y ejecutada por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.</p> <p>La repatriación se efectuará a costa de la familia del menor o de los servicios de protección de menores de su país. En caso contrario, se comunicará al representante diplomático o consular de su país a estos efectos. Subsidiariamente, la Administración General del Estado se hará cargo del coste de la repatriación.</p> <p>5. Transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, de acuerdo con el apartado 2, y una vez intentada la repatriación con su familia o al país de origen, si esta no hubiera sido posible, se procederá a otorgarle la autorización de residencia a la que se refiere el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. En todo caso, el hecho de no contar con autorización de residencia no supondrá obstáculo para el acceso del menor a aquellas actividades o programas de educación o formación que, a criterio de la entidad de protección de menores competente, redunden en su beneficio.</p> <p>El hecho de que se haya autorizado la residencia no será impedimento para la repatriación del menor, cuando posteriormente pueda realizarse conforme a lo previsto en este artículo.</p> <p>En el caso de menores tutelados por la entidad de protección de menores competente que</p>	
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la citada autorización de residencia y hayan participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social, esta podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales, a la que se hará extensivo lo dispuesto en el artículo 40 j) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>6. Si se trata de menores solicitantes de asilo, se estará a lo dispuesto en el artículo 15.4 del Reglamento de ejecución de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.</p>	

	<p><b>Artículo 191. Competencia sobre el procedimiento de repatriación del menor extranjero no acompañado y actuaciones previas.</b></p> <p>1. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán los Centros directivos competentes para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado, previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero y en los Acuerdos bilaterales suscritos por España sobre la materia.</p> <p>La competencia atribuida a la Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno incluirá la práctica de las actuaciones informativas previas y, en su caso, la incoación, tramitación y resolución del procedimiento regulado en este artículo.</p> <p>2. Se considerará Delegación o Subdelegación del Gobierno competente aquella en cuyo territorio se halle el domicilio del menor.</p> <p>El Centro directivo que inicie el procedimiento lo comunicará a la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia donde esté ubicada la entidad que tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda, cuando su domicilio no coincida con el del menor.</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
---	--

	<p>3. La Delegación o Subdelegación del Gobierno solicitará, través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, informe de la representación diplomática del país de origen del menor sobre las circunstancias familiares de éste. En caso de que dicho país no cuente con representación diplomática en España, el informe será solicitado a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios.</p> <p>De cada solicitud y actuaciones posteriores se dará cuenta a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y, en su caso, a la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios.</p> <p>4. Sin perjuicio del informe reseñado en el apartado anterior, la Delegación o Subdelegación del Gobierno requerirá de la entidad que tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda cualquier información sobre la situación del menor. Dicha información será igualmente requerida a la Administración autonómica del territorio en el que el menor tenga su domicilio, así como a aquélla donde está ubicada la entidad que tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda.</p> <p>5. La solicitud de informe responderá a un modelo tipo, a elaborar conjuntamente por las Secretarías de Estado de Inmigración y Emigración y de Seguridad. Se solicitarán, entre otros datos, los relativos a la filiación del menor y a las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen.</p> <p>En la solicitud de informe se hará constar la necesidad de que, de decidir la representación diplomática del país de origen sustituir la información sobre la familia por la relativa a sus servicios de protección del menor, la contestación refleje expresamente el compromiso por escrito de la autoridad competente del país de origen de asumir la responsabilidad sobre el menor.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p><b>Artículo 192. Inicio del procedimiento de repatriación del menor extranjero no acompañado.</b></p> <p>1. El Delegado o Subdelegado de Gobierno competente acordará la incoación del procedimiento de repatriación del menor cuando, según las informaciones recibidas de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, se considere que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen. La incoación del procedimiento deberá grabarse en la aplicación informática correspondiente.</p> <p>En el acuerdo de iniciación se hará constar expresamente la identidad del menor y la existencia de informe de las autoridades competentes del país de origen.</p> <p>2. El acuerdo de incoación del procedimiento será notificado inmediatamente al menor, al Ministerio Fiscal y a la entidad que ostente su tutela legal, custodia, protección provisional o guarda. Asimismo, cualquier actuación o incidencia que se produzca en el curso de procedimiento será comunicada al Ministerio Fiscal a la mayor brevedad posible.</p> <p>Al mismo tiempo, el menor será informado por escrito, en una lengua que le sea comprensible y de manera fehaciente, de los antecedentes que han determinado la incoación del procedimiento y de cuantos derechos le asisten, con especial mención a la asistencia de intérprete si no comprende o habla el idioma español.</p>

	<p><b>Artículo 193. Alegaciones y determinación del periodo de prueba.</b></p> <p>1. Comunicado el acuerdo de incoación del procedimiento se iniciará un periodo de diez días hábiles a computar desde el siguiente a la correspondiente notificación, en el que el menor extranjero, la entidad que ostente su tutela legal, custodia, protección provisional o guarda y, en su caso, el Ministerio Fiscal podrán formular cuantas</p>
--	---

<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</p>
---	--

	<p>alegaciones de hecho o de derecho consideren oportunas, así como proponer las pruebas pertinentes sobre los hechos alegados.</p> <p>Si el menor ha alcanzado la edad de dieciséis años podrá intervenir en esta fase por sí mismo o a través de representante que designe. En caso de que no haya alcanzado dicha edad, será representado por la entidad que ostente su tutela legal, custodia, protección provisional o guarda.</p> <p>No obstante, cuando el menor de dieciséis años con juicio suficiente hubiera manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela legal, custodia, protección provisional, guarda o representación legal, se suspenderá el curso del procedimiento hasta que le sea nombrado defensor judicial. Sin perjuicio de que pueda apreciarse dicho grado de madurez en una edad inferior, se entenderá que el extranjero mayor de doce años tiene juicio suficiente.</p> <p>Corresponderá al Ministerio Fiscal, al propio menor o a cualquier persona con capacidad para comparecer en juicio instar de la autoridad judicial competente el nombramiento de dicho defensor.</p> <p>2. Durante el trámite de alegaciones la Delegación o Subdelegación del Gobierno recabará informe del servicio público de protección de menores sobre la situación del menor en España, así como cualquier información que pueda conocer sobre la identidad del menor, su familia, su país o su domicilio cuando la misma no se hubiera presentado con anterioridad. El informe habrá de ser emitido en el plazo máximo de diez días desde su solicitud.</p> <p>3. Cuando los hechos alegados por el menor, su representante legal o defensor judicial o por la entidad que ostente su tutela legal, custodia, protección provisional o guarda tuvieran relevancia decisiva para la adopción del acuerdo de repatriación, el instructor del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas sean pertinentes.</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>En caso de apertura de un periodo de pruebas a instancia de parte, el instructor del procedimiento podrá suspender el transcurso del plazo para la resolución de éste durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.</p> <p>4. Asimismo, el Ministerio Fiscal emitirá informe, a la mayor brevedad posible, a cuyos efectos el instructor del procedimiento le remitirá la documentación que obre en el expediente.</p>



	<p><b>Artículo 194. Trámite de audiencia y resolución del procedimiento.</b></p> <p>1. Tras la incorporación al expediente de los informes mencionados en los artículos 190 y 191 y, en su caso, el resultado de la prueba practicada, el Delegado o Subdelegado del Gobierno dará inicio al trámite de audiencia. En dicho trámite se garantizará la presencia del menor que tuviera juicio suficiente para que manifieste lo que considere en relación con su repatriación.</p> <p>Al trámite de audiencia serán convocados el Ministerio Fiscal, el tutor y, en su caso, el defensor judicial o el representante designado por el menor.</p> <p>La audiencia se documentará en acta, que será suscrita por los presentes y a la que se incorporarán como anexo cuantos documentos y justificantes se aporten.</p> <p>2. Realizado el trámite de audiencia, el Delegado o Subdelegado del Gobierno resolverá, de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación del menor a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España.</p> <p>La resolución establecerá si la repatriación será realizada en base a la reagrupación familiar o mediante su puesta a disposición de los servicios de protección del menor de su país de origen.</p> <p>La resolución pondrá fin a la vía administrativa y será grabada en la aplicación informática correspondiente para su constancia en el Registro</p>
--	---

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
---	---

	<p>de Menores Extranjeros No Acompañados. Será notificada, en el plazo de diez días, al menor o, en su caso, a su representante. En el mismo plazo, será comunicada al tutor del menor y al Ministerio Fiscal.</p> <p>En la propia resolución o en documento aparte, se hará expresa mención a la necesidad de solicitar, de acuerdo con lo previstos en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita, el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio de éste, en caso de que se decidiera impugnar la resolución en vía contencioso-administrativa.</p> <p>3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio del procedimiento.</p>
	<p><b>Artículo 195. Ejecución de la repatriación.</b></p> <p>1. Sin perjuicio de las funciones del Cuerpo Nacional de Policía en la ejecución de la resolución, el menor será acompañado por personal adscrito a los servicios de protección del menor bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre hasta el momento de su puesta a disposición de las autoridades competentes de su país de origen.</p> <p>2. En el caso de que el menor se encontrase incurso en un proceso judicial y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de repatriación, la ejecución de ésta estará condicionada a la autorización judicial. En todo caso deberá constar en el expediente la comunicación al Ministerio Fiscal.</p> <p>3. La repatriación se efectuará a costa de la familia del menor o de los servicios de protección de menores de su país. En caso contrario, se comunicará al representante diplomático o consular de su país a estos efectos. Subsidiariamente, la Administración General del Estado se hará cargo del coste de la repatriación, salvo en lo relativo al desplazamiento del personal adscrito a los servicios de protección del menor bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre el menor.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

	<p><b>Artículo 196. Residencia del menor extranjero no acompañado.</b></p> <p>1. Una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de repatriación del menor, y en todo caso transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, se procederá a otorgarle la autorización de residencia a la que se refiere el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>2. La Oficina de Extranjería de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que esté fijado el domicilio del menor iniciará, de oficio, por orden superior o a instancia de parte, el procedimiento relativo a la autorización de residencia.</p> <p>En caso de inicio de oficio o por orden superior, la Oficina de Extranjería comunicará al menor el acuerdo de inicio del procedimiento a través del servicio de protección de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, interesando la aportación de la siguiente documentación, que igualmente será la que deberá ser aportada junto a la solicitud en los casos de inicio a instancia de parte:</p> <p>a) Copia completa del pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, del menor. En su caso, este documento será sustituido por cédula de inscripción del menor, en vigor.</p> <p>b) Documento acreditativo de que la persona física que interviene en el procedimiento tiene competencia para ello en representación del servicio de protección de menores.</p> <p>c) Documento acreditativo de la relación de tutela legal, custodia, protección provisional o guarda entre el menor y el servicio de protección de menores.</p> <p>3. La Delegación o Subdelegación del Gobierno resolverá sobre el procedimiento y notificará la resolución al menor en el plazo máximo de un mes. La resolución será comunicada al Ministerio</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	<p>Fiscal en el plazo de diez días desde que se dicte.</p> <p>El representante del menor deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución, y ante la Oficina de Extranjería correspondiente, la Tarjeta de Identidad de Extranjero.</p> <p>4. La autorización de residencia tendrá una vigencia de un año, retrotrayéndose su eficacia a la fecha de la resolución del Ministerio Fiscal por la que se determinó la puesta a disposición del menor del servicio de protección de menores.</p> <p>La autorización de trabajo concedida de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.1.i) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, tendrá la duración de la actividad en relación con la cual haya sido concedida, salvo que ésta exceda del tiempo que reste de vigencia de la autorización de residencia.</p> <p>5. El procedimiento sobre la renovación de la autorización de residencia o de la autorización de residencia y trabajo será iniciado de oficio por la Oficina de Extranjería competente, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de su vigencia. El inicio del procedimiento prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento.</p> <p>Procederá la renovación de la autorización cuando subsistan las circunstancias que motivaron su concesión inicial.</p> <p>La vigencia de la autorización renovada será de un año, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración.</p>

	<p><b>Artículo 197. Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que es titular de una autorización de residencia.</b></p> <p>1. En el caso de menores sobre los que un servicio de protección de menores tenga la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda, que alcancen la mayoría de edad siendo titulares de una autorización de residencia concedida en base</p>
--	--

<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></p>	<p>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</p>
---	--

	<p>al artículo anterior, su titular podrá solicitar la renovación de la misma en modelo oficial, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de su vigencia. La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento.</p> <p>También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.</p> <p>2. La autorización será renovada de acuerdo con el procedimiento para la renovación de una autorización de residencia temporal de carácter no lucrativo, con las siguientes particularidades:</p> <p>a) La cuantía a acreditar como medios económicos para su sostenimiento se establece en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM.</p> <p>b) Podrán ser tenidos en cuenta los informes positivos que, en su caso y a estos efectos, puedan presentar las entidades públicas competentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p> <p>3. Se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española, que será determinado tras la valoración de los siguientes aspectos:</p> <p>a) El respeto a las normas de convivencia en el centro de protección.</p> <p>b) El grado de conocimiento de las lenguas oficiales del Estado.</p> <p>c) La existencia de lazos familiares en territorio español con ciudadanos españoles o extranjeros residentes.</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
	<p>d) El tiempo que haya estado sujeto a un acogimiento, guarda o tutela de hecho por un ciudadano o institución española.</p> <p>e) La continuidad en los estudios.</p> <p>f) La existencia de una oferta o contrato de trabajo.</p> <p>g) La participación en itinerarios de formación.</p> <p>4. La vigencia de la autorización renovada será de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración.</p> <p>5. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución por la que se renueva la autorización, su titular deberá solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero.</p> <p>6. En el momento de su acceso a la mayoría de edad o durante cualquier momento posterior, podrá ser solicitada la modificación de la autorización de residencia vigente de cara a la obtención de una autorización de residencia y trabajo, en los términos establecidos en el artículo 200 de este Reglamento. A los efectos de dicha modificación, podrán ser presentados uno o más contratos de trabajo de vigencia sucesiva.</p>



	<p><b>Artículo 198. Acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que no es titular de una autorización de residencia.</b></p> <p>1. En el caso de menores sobre los que un servicio de protección de menores ostente la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda, que alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia prevista en el artículo 196 de este Reglamento y hayan participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social, ésta podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales.</p> <p>2. Sin perjuicio de lo anterior, y de que la recomendación de la entidad habrá de acompañar</p>
--	--

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004</b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011</b>
	<p>a la solicitud de autorización, ésta será presentada personalmente por el extranjero durante los sesenta días naturales previos o en los noventa días naturales posteriores a la fecha en que cumpla los dieciocho años.</p> <p>Igualmente, habrá de acreditar, alternativamente:</p> <p>a) Que cuenta con medios económicos suficientes para su sostenimiento, en una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM.</p> <p>b) Que cuenta con un contrato o contratos de trabajo de vigencia sucesiva respecto a los que se reúnen los requisitos establecidos en los apartados b), c), d), e) y f) del artículo 64.3 de este Reglamento.</p> <p>c) Que reúne los requisitos establecidos en los apartados a), b) c) y d) del artículo 105.3 de este Reglamento de cara al ejercicio de una actividad por cuenta propia. No obstante, la rentabilidad esperada del proyecto deberá ser, como mínimo, una cantidad para garantizar los gastos relativos a su manutención y alojamiento que represente mensualmente el 100% del IPREM.</p> <p>En caso de concesión de la autorización en base a lo previsto en los apartados b) y c) anteriores, ésta conllevará una autorización de trabajo y su vigencia estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución.</p> <p>3. En el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo anterior.</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004	REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011
TÍTULO X. Documentación de los extranjeros	TÍTULO XIII. Documentación de los extranjeros
Capítulo V. Registro de menores extranjeros no acompañados	CAPÍTULO V. Registro de Menores Extranjeros No Acompañados
<p><b>Artículo 111. Registro de Menores Extranjeros no Acompañados</b></p> <p>1. En la Dirección General de la Policía, existirá un Registro de Menores Extranjeros no Acompañados a los solos efectos de identificación, que contendrá:</p>	<p><b>Artículo 215. Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.</b></p> <p>1. En la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil existirá un Registro de Menores No Acompañados, con efectos exclusivos de identificación, que estará coordinado por la Fiscalía General del Estado, para el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio Fiscal por el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, en el ámbito de su función de garantía y protección del interés superior del menor.</p> <p>El Registro contendrá en asientos personales, individualizados y numerados, los siguientes datos referentes a la identificación de los menores extranjeros no acompañados, documentados e indocumentados, cuya minoría de edad resulte indubitada desde el momento de su localización o haya sido determinada por Decreto del Ministerio Fiscal:</p>

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por REAL DECRETO 2393/2004

REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por REAL DECRETO 557/2011

<p>a) Nombre y apellidos, nombre de los padres, lugar de nacimiento, nacionalidad, última residencia en el país de procedencia.</p> <p>b) Su impresión decadactilar.</p> <p>c) Fotografía.</p> <p>d) Centro de acogida donde resida.</p> <p>e) Organismo público bajo cuya protección se halle.</p> <p>f) Resultado de la prueba médica de determinación de la edad, según informe de la clínica médico forense.</p> <p>g) Cualesquiera otros datos de relevancia a los citados efectos de identificación, incluidos los que puedan facilitar la escolarización del menor.</p>	<p>a) Nombre y apellidos <b>del menor</b>, nombre y <b>apellidos</b> de los padres, lugar de nacimiento, nacionalidad y última residencia en el país de procedencia.</p> <p>b) <b>Tipo y numeración de la documentación identificativa del menor.</b></p> <p>c) Su impresión decadactilar, <b>datos fisonómicos y otros datos biométricos.</b></p> <p>d) Fotografía.</p> <p>e) <b>Datos relativos a la edad indubitada del menor o de la edad establecida por Decreto inicial del Ministerio Fiscal. En su caso, datos modificados por posterior Decreto.</b></p> <p>f) Centro de acogida <b>o lugar de residencia.</b></p> <p>g) Organismo público u organización no gubernamental, fundación o entidad dedicada a la protección de menores <b>bajo cuya tutela se halle.</b></p> <p>h) <b>Traslados del menor entre Comunidades Autónomas.</b></p> <p>i) <b>Reconocimiento de su condición de asilado, protegido o víctima de trata.</b></p> <p>j) <b>Fecha de solicitud de la autorización de residencia.</b></p> <p>k) <b>Fecha de concesión o denegación de la autorización de residencia.</b></p> <p>l) <b>Cualesquiera otros datos de relevancia que, a los citados efectos de identificación, estimen necesarios el Ministerio Fiscal o la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.</b></p>
<p>2. Los servicios competentes de protección de menores a los que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando tengan conocimiento de que un menor se halle en situación de desamparo, deberán comunicar, con la mayor brevedad, a la Dirección General de la Policía, a través de sus órganos periféricos, los datos que conozcan relativos a la identidad del menor conforme lo</p>	<p>2. Los servicios competentes de protección de menores a los que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando tengan conocimiento de que un menor se halle en situación de desamparo, deberán comunicar, con la mayor brevedad, a la Dirección General de la Policía y <b>de la Guardia Civil y a la Secretaría de</b></p>

<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por <u>REAL DECRETO 2393/2004</u></b>	<b>REGLAMENTO de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por <u>REAL DECRETO 557/2011</u></b>
<p>dispuesto en el apartado anterior.</p>	<p><b>Estado de Inmigración y Emigración</b>, a través de las Oficinas de Extranjería, los datos que conozcan relativos a la identidad del menor conforme lo dispuesto en el apartado anterior.</p> <p>3. Para garantizar la exactitud e integridad del Registro, el Ministerio Fiscal podrá requerir a los Servicios Públicos de Protección de Menores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías autonómicas, Policías locales, Instituciones Sanitarias y a cualquier otra entidad pública o privada, la remisión de cuantos datos obren en su poder sobre menores extranjeros no acompañados. Dichos datos serán remitidos a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para la actualización del Registro.</p>

## **CONCLUSIONES**

Es obvio, que el constante y progresivo aumento de los procesos migratorios hacia el continente europeo, especialmente a España, ha sido visto por gobiernos y sociedades, en muchos aspectos, como un problema.

Tal circunstancia, ha llevado a modificar, o adaptar las normas reguladoras de la extranjería en torno a la situación por la que se estaba atravesando, dirigiéndose principalmente hacia las restricciones de la entrada de extranjeros, y a la limitación de sus derechos y libertades, a objeto de preservar determinados bienes jurídicos y evitar conflictos. Sin embargo, la realidad ha superado cualquier tipo de previsión, y en esta materia, la realidad social ha ido en prácticamente en todas las circunstancias por delante del Derecho.

Es menester señalar la imperativa necesidad de reflexionar sobre una cuestión de enorme interés, el Derecho en cuanto sistema de control social, puede y debe desempeñar un papel importante en los procesos de cambio, integración, equilibrio o conflicto dentro de una determinada sociedad. El Derecho puede frenar el cambio, detenerlo, acelerarlo o canalizarlo.

Si el Derecho es contemplado como ordenación social, pero también como criterio para la resolución institucionalizadora de conflictos, constituyendo, por consiguiente un criterio de decisiones estable y generador de seguridad para que los problemas sean resueltos mediante procesos o instituciones, el sistema jurídico de un Estado tiene la obligación de canalizar y solucionar los posibles conflictos que se puedan producir y, en este caso la regulación legislativa de la inmigración debe obedecer a esta obligación. Pero sobre todo, el entramado normativo que regule el fenómeno migratorio, deberá respetar la visión constitucional sobre el Derecho de extranjería, y no olvidar la realidad social en la que queda encuadrado.

Una vez analizado y reflexionado sobre el panorama legislativo de la materia investigada, y una vez comparado el actual Reglamento con su inmediatamente predecesor, proponemos las posibles siguientes soluciones.

**1-. Permisos de trabajo.** El hecho de dificultar la posibilidad real de acceder a una autorización de trabajo, en el fondo provocará previsiblemente el incremento de economía sumergida y la precariedad de las condiciones que los extranjeros que se encuentran en España. Como hemos indicado en el cuerpo de esta Tesis, esa legislación tendente a la limitación del acceso al trabajo a los ciudadanos extranjeros no es mas que una utopía, pues no por ello el inmigrante irregular va a dejar de trabajar, alimentarse, alimentar a los suyos, que están aquí o los ha dejado en su país, o vestirse. En resumen, subsistir él y los suyos. Por ello, a ese ciudadano le quedaran dos posibilidades, la economía sumergida, con el daño económico e impositivo que ello conlleva a la sociedad, o la delincuencia, pues a falta de poder ganarse la vida honradamente, y estando acorralado, no tendrá mas remedio que acudir a ese camino. Ambas alternativas, no impiden que finalmente pudiera ser victima de discriminación, xenofobia, explotación laboral, trafico ilícito de mano de obra, inmigración ilegal, tráfico de seres humanos o laboral.

Esta rigidez en el sistema que venimos observando en la practica de nuestro día a día profesional de unos años atrás al momento actual, en los que hemos llegado a una situación en la que es prácticamente imposible obtener un permiso de trabajo, principalmente por el sistema utilizado, el catalogo de puestos de difícil cobertura, esta dando lugar al movimiento ilícito de personas y a la proliferación de mafias dedicadas al trafico de seres humanos; es patente que , tanto la legislación anterior como la actual no van a evitar el cese de la entrada irregular de emigrantes ilegales, debido esencialmente al ineficaz funcionamiento de estas políticas, que en lugar de ordenar la situación, lo que hacen es intentar que desaparezca la inmigración, de espaldas a la realidad social.

Conexo a la rigidez legislativa, nos hemos encontrado con un estancamiento en cuanto a las modalidades de permiso de trabajo, que no han ido acordes al desarrollo de la sociedad.



**2-. La Relación especial del servicio domestico.** Entendemos que el legislador debe tener en cuenta que esta vinculación ha de regularse como puesto de confianza con la preferencia que ello conlleva, no teniendo en cuenta la situación nacional de empleo.

**3-. La autorización para trabajar por cuenta ajena.** Nos encontramos que aunque el contrato de trabajo lo es a media jornada no así lo serán los ingresos del extranjero: se le exige una remuneración más elevada que aquella que percibiría un nacional en la misma situación laboral. Observamos en consecuencia un supuesto de discriminación que impone una carga más pesada al extranjero por el hecho de serlo y sin duda va en contra de la LOEX y una interpretación armónica y sistemática del artículo 13.1 de la Constitución.

**4-. Catalogo de puestos de difícil cobertura y autorización de trabajo.** Con el objeto de regular el mercado nacional de empleo, el Reglamento prescribe el señalamiento de contar con el catalogo de puestos de difícil cobertura, para que un extranjero pueda acceder a una vacante de empleo. Es una practica generalizada y, hasta cierto punto racional, que el empleado justifique detalladamente porque no es posible que ese puesto vacante de trabajo lo venga a desempeñar u ocupar un nacional. Sin embargo debemos hacer una observaciones de fondo de todo lo anterior.

En nuestra opinión, el uso de la situación nacional de empleo, para denegar solicitudes legítimas para el ejercicio del derecho al trabajo de que gozan los extranjeros según la LOEX es un error, máxime cuando nos encontramos hoy en día con que los puesto ofertados en el catalogo son prácticamente inaccesibles, dándose además una circunstancia, y es que curiosamente los mismos no varían prácticamente a lo largo de todo el año.

A modo de ejemplo enunciamos aquí cual es el catalogo de puestos de difícil cobertura para Madrid en el tercer trimestre de 2012.

- Frigoristas navales
- Jefes de máquinas de buque mercante
- Maquinistas navales
- Mecánicos de litoral
- Mecánicos navales

- Pilotos de buques mercantes
- Sobrecargos de buques
- Deportistas profesionales
- Entrenadores deportivos oficiales
- Radioelectrónicos de la marina mercante
- Cocineros de barco
- Auxiliares de buques de pasaje
- Camareros de barco
- Mayordomos de buque
- Caldereros (maestranzas)
- Engrasadores de máquinas de barcos
- Bomberos de buques especializados
- Contra maestres de cubierta (excepto pesca)
- Marineros de cubierta (excepto pesca)
- Mozos de cubierta

En definitiva, solo se puede contratar en Madrid, ciudad sin mar ni tradición naviera, personal para buques mercantes o deportistas y entrenadores deportivos profesionales, sobre los últimos nos podemos imaginar la razón.

No obstante, el retroceso que han sufrido los flujos migratorios a nivel cuantitativo como consecuencia de la crisis económica, y con ésta la variación en la demanda del mercado de trabajo, afectará también a las futuras concreciones legales que deberán sumar esfuerzos para la acomodación a todos los niveles de la población inmigrante.

Es necesario que aprendamos a coordinar las acciones de los agentes implicados, a darles capacidad de decisión en la agenda y a apostar por optimizar los elementos de la dimensión positiva del fenómeno migratorio, que son claves para sostener esperanzas de mejora. Todo ello insistiendo en que la claridad en las normas como imperativo de la seguridad jurídica, sin el sacrificio de los derechos y sus garantías, ha de ser el necesario punto de partida para la integración. Dado que como hemos expuesto en la Tesis, en numerosas ocasiones la interpretación de las normas en materia de extranjería en muchas ocasiones es tan abierta que lleva a interpretaciones totalmente injustas.

Sin duda, en materia de extranjería, el legislador ha improvisado en numerosas ocasiones, lo que ha supuesto el continuo solapamiento de normas (en lugar de optar por el mecanismo de la derogación como se ha hecho, por ejemplo, en el caso del asilo y la protección subsidiaria), y por otra parte, ha llevado en ocasiones a declaraciones de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional y de nulidad por parte del Tribunal Supremo.

Las numerosas regularizaciones de ciudadanos extranjeros han sido muestra de lo anterior, y quizás la solución no sea una regularización más; la solución quizás debería pasar por establecer un mecanismo real y efectivo que permita al ciudadano extranjero hacer uso de su derecho al trabajo

Algunas de las disposiciones legales se han concretado pensando en el intento de evitar el abuso de la norma para acabar consagrando como regla lo que debería ser la excepción. La preocupación por la seguridad y la progresiva laboralización de la inmigración han sido dos de los pilares de la normativa que han servido para apuntalar restricciones de los derechos y limitaciones de las garantías, y como decimos, tratando de evitar el abuso de ciertas figuras, se ha llegado a la impracticabilidad del Derecho.

Es necesario entender que integración cultural y jurídica implica integración laboral. La integración social es efectiva si se cuenta con los instrumentos jurídicos y materiales para disfrutar del derecho al trabajo. Cerrar la puerta al ejercicio del derecho al trabajo a los extranjeros es mutilar y fragmentar el Estado Social y conculcar derechos conexos. La crisis del Estado Social es la desaparición de la realidad y en la práctica de los mecanismos para ejercer efectivamente esos derechos.

La opinión pública impulsada por los medios de comunicación, está presentando una imagen deteriorada del sentido social del trabajo de los extranjeros. En los últimos dos años se ha promovido, por pasiva y por activa, que los extranjeros retornen a sus países de origen. No es momento ahora de hacer una valoración moral de este hecho, sino dejar patente sus síntomas: la crisis económica en que se encuentra sumergida España y Europa hacen pensar, a algunos sectores de la sociedad, que el origen de los males económicos son los extranjeros, pues quitan puestos de trabajo a los nacionales. Nada más lejos de la realidad y de la Historia. A lo largo del siglo anterior grandes

flujos migratorios nacionales, primero a América Latina, luego al centro de Europa han atestiguado la importancia de ser conscientes del ciclo que estamos viviendo. Así las cosas, esta crisis económica nos permite revalorar el papel de los extranjeros en España y el sentido social de su integración, no debemos orientar nuestra legislación a la utopía de que el endurecimiento de las normas harán que los inmigrantes retornen a sus países o que no quieran venir.

En nuestra opinión, la reinterpretación jurídica adecuada del derecho de extranjería expresado en la Constitución, la LOEX y el Reglamento de Extranjería haría posible el acceso universal al derecho al trabajo de los extranjeros en España que permita que su efectiva integración social sea la participación activa en el proceso de recuperación económica. El deber y el derecho de trabajar, compete por igual a nacionales y extranjeros. Hoy más que nunca la ciencia jurídica con sus posibilidades de interpretación del ordenamiento jurídico en vigor, permitiría acelerar dicha recuperación de la economía en beneficio de toda la sociedad.

España, tiene actualmente, en el año 2012, aproximadamente cinco millones de personas sin empleo. Una parte importante de esa población económicamente inactiva son extranjeros. Creemos que hace falta invertir el modelo general del derecho de extranjería respecto al derecho al trabajo de los extranjeros: es necesario y deseable que el trabajo de los extranjeros en las actuales circunstancias de España, no esté sujeto a más autorización que la necesaria para residir legalmente.

El derecho humano al trabajo, debe de gozar de mayor protección para los extranjeros y no dejarlo a la discrecionalidad de las autoridades administrativas. Lo que no es posible, en una palabra, es que un extranjero viva efectivamente en España y no pueda trabajar ni contribuir al desarrollo de la actividad económica y social. El extranjero, lo aceptemos o no, que ya se encuentra en el territorio de España, tiene el derecho y el deber de trabajar. Condicionar en las actuales circunstancias económicas a una autorización previa el derecho y el deber de trabajar, en nuestra opinión, va a representar que la recuperación sea aun más lenta.

El extranjero debería de adquirir la condición de trabajador, de la misma forma que la adquiere el nacional, por la existencia de un contrato de trabajo (aspecto jurídico-

material), no porque tenga una autorización para trabajar, que no es mas que un requisito administrativo (aspecto jurídico-formal).

**5-. La reagrupación familiar.** Es importante señalar que el éxito de cualquier política integradora pasa por una concepción amplia de la reagrupación familiar.

En este sentido, es de destacar el tratamiento poco flexible que algunos consulados españoles en países de fuerte emigración tienen de los procedimientos de reagrupación con incumplimiento de plazos y resoluciones poco respetuosas con el fundamental derecho a la vida en familia de los extranjeros extracomunitarios residentes en nuestro país.

El supeditar el derecho a la reagrupación familiar a un tiempo previo de residencia y a otros requisitos, perjudica a la institución familiar de los residentes extranjeros en España, que no cuenta con el nivel de protección que se otorga a las familias españolas en nuestro Ordenamiento Jurídico. Esta desconsideración trae como consecuencia prácticas administrativas que frustran a diario multitud de reencuentros familiares, lo que desemboca en multiplicidad de conflictos personales, cuando no desencadenan procesos de inadaptación y marginalidad.

Del mismo modo es necesario destacar que el tratamiento que hacen los consulados con respecto a la reagrupación familiar, es en muchas ocasiones dispar, lo que origina una inseguridad importante en el administrado. Así existen informaciones contradictorias en las Pagina Web de los diferentes consulados españoles (por ejemplo los de Buenos Aires, Caracas, México DF y La Habana), que contiene una enumeración de requisitos que excede en algunos casos de forma abierta y flagrante el contenido de la normativa aplicable.

En esta misma línea, cabe resaltar las nuevas exigencias en cuanto a la reagrupación familiar de ascendientes, de forma y modo que se exige que el ascendiente tenga al menos 65 años, y que el reagrupante tenga la tarjeta permanente. Estos requisitos hacen que de “facto” la reagrupación familiar de ascendientes sea prácticamente imposible. Con la consiguiente merma en los derechos que hasta ahora venía disfrutando el extranjero, el derecho a estar con los “suyos”.

Problema aparte y conexo con lo expuesto anteriormente es el de los ascendientes de españoles. En este ámbito, conviene señalar que la no posibilidad de regularizarse el ascendiente de un menor de nacionalidad española conlleva una situación absolutamente injusta, y que es preciso denunciar. El dejar marginado, en la irregularidad, a ese padre o madre lo que produce, en primer lugar, es una lesión a los derechos del menor que deben estar, por el principio del “*favor filii*”, por encima de cualquier otra consideración, máxime cuando expresamente nuestro Código Civil en el artículo 154 establece que los padres deben velar, alimentar y procurar una formación integral a los hijos, y tenerles en su compañía. En definitiva, a quien se perjudica con esta rígida postura es al menor español.

Respecto a la reagrupación familiar de menores entendemos que la edad de 18 años como máximo, para poder reagrupar a un hijo no es en absoluto acorde con la realidad en la que vivimos hoy en día, en la que prácticamente el cien por cien de nuestros hijos a los 18 años sigue dependiendo económicamente de sus padres. Por ello, quizás sería adecuada una modificación en este sentido, orientada a armonizar esa situación, de forma que el reagrupante pueda reagrupar a su hijo siempre y cuando se demuestre la dependencia económica o en su defecto, se amplíe la edad mas allá de los 18 años que no consideramos real.

**6-. Sanidad publica.** Otro punto a destacar a los efectos de esta Tesis en la constatación del retroceso en esta materia respecto a los extranjeros. Con la nueva modificación efectuada al Reglamento se ha establecido su inaccesibilidad de “facto” al sistema sanitario español, suponiendo ello una merma en los derechos de los extranjeros en España, derecho, que hasta ahora venían disfrutando, y que se consideraba como una “conquista” social.

**7-. La Nacionalización de los extranjeros en España.** Creemos conveniente realizar algunas reflexiones.

En primer lugar, existe un grave problema de desbordamiento de los Registros Civiles ante las peticiones de nacionalidad cursadas, en el ejercicio de sus derechos, por los ciudadanos extranjeros, en los últimos años, lo que hace que un ciudadano

extranjero que quiera solicitar su nacionalidad una vez haya cumplido todos sus requisitos tenga todavía que esperar mas de tres años después de efectuada su solicitud.

Igualmente, las oficinas registrales han quedado desfasadas, por falta de medios y de personal, resultando desde este punto de vista positiva la reforma de la Ley de Registro Civil que debería suponer, entre otras cosas, una modernización del actual sistema, además de un profundo cambio en su estructura. Esto se esta llevando ahora a cabo por medio de la utilización de los registradores de la propiedad para tareas que venían encomendadas al Registrador Civil, estando por ver la efectividad de la medida.

Como indicamos en el texto de la Tesis, se esta imponiendo un examen para calibrar el grado de integración en nuestra sociedad del ciudadano extranjero. Lo que ha llevado a la polémica surgida por los exámenes de cultura general que algunos Jueces de los registros están pidiendo a los solicitantes, extralimitándose del mandato normativo. Por lo que a tal efecto seria necesaria una instrucción clara y precisa sobre la materia que estableciera los límites que no deben sobrepasarse en las entrevistas, e instaurar un modelo o marco de entrevista, siguiendo como ejemplo el modelo estadounidense.

Por lo anterior, los requisitos impuestos, que aparecen formulados en nuestro Ordenamiento Jurídico mediante conceptos jurídicos vagos e indeterminados: «buena conducta» o «suficiente integración», deberían estar fijados con mayor claridad y exactitud. Las conductas reprochables cuando no están claramente especificadas, el solicitante desconoce de antemano si cumple o no la exigencia. Otro tanto cabe decir respecto a la razonable o suficiente integración. En ambos casos hay que aunar criterios para evitar situaciones excesivamente subjetivas. En los últimos tiempos, como decimos, algunos encargados de los registros civiles no solo comprueban si se habla, lee y escribe con corrección en nuestra lengua, sino que están haciendo, sin amparo legal, verdaderos exámenes de historia y cultura española. Estas pruebas existen en muchos ordenamientos, incluso en países de nuestro entorno. Sin embargo, España no las tiene decretadas, por lo que la realización de un test de esas características, para poder llevarse acabo, debería ser incorporado, con carácter previo, en el ámbito legal. En su caso, se debería regular nítidamente qué vamos a exigir a los inmigrantes para poder adquirir la nacionalidad española.

Sería igualmente deseable que los Juzgados de Familia informasen de las consecuencias del divorcio/nulidad del matrimonio entre ciudadano de la unión y de terceros países, cuando solicitasen dicha nulidad o divorcio. Por cuanto la disolución del matrimonio afecta a su situación administrativa y al régimen general de extranjería. En resumen, a su estatus como extranjero en España. Incidiendo directa y negativamente en sus solicitudes de nacionalidad española, e incluso en el régimen de residencia, puesto que el extranjero que se divorcia por ejemplo, lo hace en muchas ocasiones sin saber que debe informar de esa modificación de su estado civil, y que la misma en ocasiones puede conllevar la extinción de su residencia o denegación de su nacionalidad.

**8-. El Registro del matrimonio de español/a y extranjero/a.** Consideramos que deben tomarse medidas urgentes en tanto que la situación actual atenta contra el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles y al derecho a la vida en familia al aplicar limitaciones que los hacen impracticables o los dificultan más allá de lo razonable. Toda vez que nos encontramos que a día de hoy, para proceder a la inscripción, se necesita más de un año desde la solicitud de dicha inscripción, tiempo en el que el cónyuge del español se encuentra desamparado totalmente, como ya hemos expuesto en el capítulo VII de nuestra tesis. Quizás lo lógico sería permitir que el cónyuge de español regularizara aunque fuera temporalmente y a la espera de la efectiva inscripción de su matrimonio en el registro correspondiente, su situación, y bastase únicamente con el resguardo de solicitud de inscripción para proceder a su documentación.

**9-. Los denominados “matrimonios conveniencia”.** Son una realidad en creciente aumento en nuestro país. Se trata enlaces matrimoniales donde lo que se pretende es exclusivamente facilitar la entrada y estancia en territorio español de súbditos extranjeros.



Las instrucciones dadas por el Ministerio de Justicia al personal de los Registros Civiles para detectar estos “matrimonios de conveniencia” no dejan de ser medidas de sentido común, pero que en ocasiones se tornan en medidas desproporcionadas para atajar este fenómeno. Desmesuradas en el sentido de que son los Encargados de los Registros Civiles –órganos administrativos– quienes deciden sobre la conveniencia o no de un matrimonio, su celebración, inscripción y validez, pudiendo sus decisiones ser recurridas, una vez terminada la vía administrativa ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en vía judicial, lo que nos lleva de nuevo a la imposibilidad del ejercicio del Derecho, pues en el momento actual, el ciudadano que quiera hacer uso de la jurisdicción contenciosa tendrá que esperar mas de tres años para obtener una resolución.

Si el Juez Encargado del Registro Civil, llega a la convicción de que los interesados están actuando en fraude a la ley, beneficiándose de las consecuencias legales del matrimonio, ante la falta de verdadero consentimiento matrimonial, dicho matrimonio será declarado nulo por simulación, y al extranjero, en cuestión, se le aplicará la sanción correspondiente, prevista en la legislación de extranjería.

La proliferación de estos matrimonios, que son un fraude de ley evidente, aunque difícilmente detectable, son igualmente una muestra de la ineficacia de nuestra legislación en materia de extranjería, pues son en muchas ocasiones el único camino para la regularización del extranjero en nuestro país.

**10-. El Arraigo.** Esta figura, que en sus distintas variantes, ha pasado de ser una excepción a convertirse en la principal vía de regularización de los inmigrantes irregulares en España, es sin duda, una institución fundamental en el entramado del Derecho de Extranjería, pues mal que bien, va dando salida a la irregularidad en la que se encuentran numerosos ciudadanos extranjeros en nuestro país. Por ello, hemos de abogar por su mantenimiento, pese a que no son pocas las voces que empiezan a criticarlo y pedir su eliminación. Ello conllevaría dejar en la más absoluta marginación a los extranjeros que se encuentren en nuestro país de una forma irregular.

## BIBLIOGRAFIA

- ABARCA JUNCO, A.P., ALONSO-OLEA GARCÍA, B, MARTÍN DÉGANO, I. y VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, M.: *Inmigración y extranjería*, Colex, Madrid, 2008.
- ABARCA JUNCO, A.P.: *Derecho Internacional Privado*, 5ª edición, Uned, Madrid, 2004.
- ADAM MUÑOZ, M.<sup>a</sup> D. y BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, I.: *Nacionalidad, extranjería y ciudadanía de la Unión Europea*, Colex, Madrid, 2005.
- AGUELO NAVARRO, P. y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A.: *Curso práctico de derecho de extranjería*, 10ª edición, Lex Nova, Valladolid, 2009.
- AJA, E.: “Veinte años de doctrina del tribunal constitucional sobre los derechos de los inmigrantes”, VV. AA., *La democracia constitucional: estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente*, vol. 1, Congreso de los Diputados, 2002.
- AJA, E., ARANGO, J. y OLIVER ALONSO, J.: “*La inmigración en la encrucijada*”, Anuario de la Inmigración en España, Barcelona, 2008.
- ALÁEZ CORRAL, B.: “*Nacionalidad y ciudadanía: Una aproximación histórico-funcional*”, Revista Electrónica de Historia Constitucional, nº 6, 2005, disponible en <http://hc.rediris.es/06/articulos/html/Numero06.html?id=02>.
- ALARCÓN REQUEJO, J.: *Derechos políticos de los latinoamericanos en España y participación en elecciones locales*, “*Migración y participación política*”, Escrivá, A., Bermúdez, A. y Moraes, N., CSIC, Madrid, 2009.
- ALVAREZ, A., “*La transposición de las directivas de la UE sobre inmigración: las directivas de reagrupación familiar y de residentes de larga duración*”, Documentos CIDOB, nº 8, 2006.
- ANDRÉS, H.: “*El derecho de voto de los extranjeros en el mundo*”, *Revista de Derecho Migratorio y Extranjería*, nº 18, 2008.
- AÑÓN, M. J.: “*Igualdad y especialidad en el procedimiento administrativo de extranjería*”, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, nº 14, 2006.
- “*Integración: una cuestión de derechos*”, *Arbor*, nº 744, julio-agosto 2010.
- APARICIO, M.: “*La última reforma de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 14/2003): un análisis crítico a la luz de su falta de eficacia y de eficiencia*”, *Revista de derecho migratorio y extranjería*, nº 6, 2004.

- ARANGO, J.: *“Inmigración, cambio demográfico y cambio social”*, ICE: Revista de Economía, nº 815, 2004.
- ASÍN, M.A., *“Los acuerdos bilaterales suscritos por España en materia migratoria con países del continente africano: especial consideración de la readmisión de inmigrantes en situación irregular”*, Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 10, 2008.
- BACAZZO, E.: *“Los derechos políticos de las personas inmigradas y la lógica de la reciprocidad”*, nº74 (20 marzo-2 abril 2008), disponible en [http://diagonalperiodico.net/spip.php?article5660&var\\_recherche=Edoardo%20](http://diagonalperiodico.net/spip.php?article5660&var_recherche=Edoardo%20).
- BENHABIB, S.: *Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos*, Gedisa, Barcelona, 2005.
- CACHÓN, L.: *“España y la Directiva 2000/43: de la «ocasión perdida» a una legislación general sobre igualdad de trato”*, Tiempo de paz, nº 73, 2004.
- *“La integración de y con los inmigrantes en España: debates teóricos, políticos y diversidad territorial”*, Política y Sociedad, volumen 45, 1, 2008.
- *La «España inmigrante»: marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración*, Anthropos Editorial, Barcelona, 2009.
- CARBAJAL GARCÍA, P.: *“El arraigo como circunstancia excepcional para poder residir y trabajar legalmente en España”*, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería nº29, 1er cuatrimestre 2012.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: *Curso de nacionalidad y extranjería*, 2ª edición, Colex, Madrid, 2008.
- CONDE-PUMPIDO, C., CÓRDOBA, D., DE MATEO, F. y SANZ, J.D.: *Tratado práctico de los procesos de extranjería*, vol. 3, Bosch, Barcelona, 2002.
- COVAS, C.: *“Los planes de las Comunidades Autónomas para la integración social de las personas inmigrantes”*, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, 2003.
- CHUECA SANCHO, A. y AGUELO NAVARRO, P.: *“El derecho de voto de los extranjeros en España en perspectiva europea”*, Documentos CIDOB Migraciones, nº. 19, 2009.
- DE LUCAS MARTÍN, J.: *“Una política de inmigración que no llega: las sinrazones de la contrarreforma de la L.O. 8/2000”*, Tiempo de Paz, nº 16, 2001.
- *Ciudadanía, Extranjería y Derechos*, “Constitución y derechos fundamentales”, Betegón, J., De Páramo, J.R., Laporta, F.J. y Prieto, L. (coord.), , CEPC, Madrid, 2004.

- *La integración de los inmigrantes: la integración política, condición del modelo de integración*, “La integración de los inmigrantes”, CEPC, Madrid, 2006.
- DE LUCAS MARTÍN, J. y AÑÓN ROIG, M<sup>a</sup>. J. y otros: *Los derechos de participación como elemento de integración de los inmigrantes*, Fundación BBVA, Bilbao, 2008.
- DELGADO GODOY, L.: “*La inmigración en Europa: realidades y política*”, Unidad de Políticas Comparadas, CSIC, Documento de Trabajo 02-18, 2008, disponible en <http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0218.pdf>.
- DÍEZ DE VELASCO, M.: *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 13<sup>a</sup> edición, Tecnos, Madrid, 2003.
- DURÁN MUÑOZ, R. y MARTÍN MARTÍNEZ, M.: *La integración política de los inmigrantes. La vía de sufragio*, Dykinson, Madrid, 2008.
- DURÁN MUÑOZ, R., MARTÍN MARTÍNEZ, M. y RODRÍGUEZ, A.: *La participación política de los extranjeros: estado de la cuestión*, Documento de Trabajo Serie Jurídico-Político JP2007/01, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2007.
- ESPINAR VICENTE, J. M<sup>a</sup>.: *La nacionalidad y extranjería en el sistema jurídico español*, Cívitas, Madrid, 1994.
- *Extranjería e inmigración en España: análisis crítico de su regulación jurídica*, J.M. Espinar, Madrid, 2006.
- ESPLUGUES MOTA, C.: *Comentarios a la Ley de Extranjería* (coordinador), Tirant lo Blanch.
- ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G. y LORENZO SEGRELLES, M.: *Nacionalidad y extranjería*, 3<sup>a</sup> edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
- ESTEBAN DE LA ROSA, G.: “*La nueva directiva de retorno en el contexto de la actual política comunitaria de inmigración*”, Revista de Estudios Jurídicos, n° 8, 2008.
- ESTEVE, F.: “*Igualdad y no discriminación racial tras la transposición en España de la Directiva 2000/43*”, Noticias de la Unión Europea, n° 267, 2007.
- FAJARDO, T.: *Los acuerdos de readmisión de los inmigrantes en situación irregular celebrados por España*, “Migraciones y Desarrollo”, II Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales, Montevideo, 25, 26 y 27 de octubre de 2006, Aldecoa, F. y Sobrino, J.M. (coord.), Marcial Pons, Madrid, 2007.
- “*La Directiva sobre el retorno de los inmigrantes en situación irregular*”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, año 13, n° 33, 2009.

- FLORES JUBERÍAS, C. y TENT ALONSO: *La extensión del derecho al sufragio de los extranjeros en España: ¿reforzando la igualdad o reinventando la ciudadanía?*, “Inmigración, integración, medicación intercultural y participación ciudadana”, dirigido por Conejero Paz, E. y Ortega Giménez, A., Editorial Club Universitario, Alicante, 2010.
- FONT FÁBREGAS, J.: *Instrumentos y mecanismos para la participación ciudadana*, Alfa Delta Digital, Valencia, 2006.
- GANUZA FERNÁNDEZ, E.: “*La participación ciudadana en el ámbito local europeo*”, Revista de Estudios Europeos, nº 38, 2004.
- GARCÍA JUAN, L.: “*La STC 31/2010, de 28 de junio. Punto y final en materia de competencias en inmigración*”, Revista Catalana de Dret Públic, nº 42, 2010.
- GARCÍA SORIANO, M.V.: “*Sobre la viabilidad de la participación política de los extranjeros en las elecciones municipales*”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 60-61, 2007.
- IBÁÑEZ MACÍAS, A.: “*El derecho de sufragio de los extranjero*”s, Cuadernos Bartolomé de las Casas, nº 46, Madrid, 2009.
- IGLESIAS, S.: *La inmigración: el reto del siglo XXI*, Dykinson, Madrid, 2007.
- ILLAMOLA, M.: *La directiva 2003/109 relativa al estatuto jurídico de los residentes de larga duración y su trasposición al ordenamiento jurídico español*, “Los Tratados de Roma en su cincuenta aniversario: perspectivas desde la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales”, Aldecoa, F. (coord.), Marcial Pons, Madrid, 2008.
- IZQUIERDO, A.: *La inmigración inesperada: la población extranjera en España (1991-1995)*, Trotta, Madrid, 1996.
- LA SPINA, E.: “*La protección del derecho a la vida familiar de los extranjeros por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas*”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 14, 2006.
- LÓPEZ-MUÑIZ, GOÑI, M.: *La nueva Ley de extranjería. Guía práctica y jurisprudencia*, 3ª edición, Colex, Madrid, 2005.
- MARTÍNEZ DE LIZARRONDO, A.: “*La incidencia del Fondo de Apoyo y el PECEI en las políticas autonómicas de integración de inmigrantes*”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 85, 2010.
- MARTÍNEZ PUJALTE, A.L.: *Los sistemas electorales españoles: Evaluación y propuestas de reforma*, Dykinson, Madrid, 2010.

- MASSÓ GARROTE, M.F.: *Los derechos políticos de los extranjeros*, Colex, Madrid, 1997.
- “Aspectos políticos y constitucionales sobre la participación electoral de los extranjeros en el Estado nacional”, *Revista de Estudios Políticos*, nº 97, 1997.
- MENDOZA, N. y CABEZA, J.: *Tratamiento Jurídico de la Inmigración*, Bomarzo, Albacete, 2008.
- MOYA, D.: *La evolución del sistema de control migratorio de entrada en España*, “Veinte años de inmigración en España. Perspectiva jurídica y sociológica (1985-2004)”, Aja, E. y Arango, J., (eds.), Fundación CIDOB, Barcelona, 2006.
- “La reforma de la Ley de Extranjería”, *Documentos de Trabajo*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, nº 20, 2009.
- OLIVÁN LÓPEZ, F.: *Constitución y extranjería*, Dykinson, Madrid, 2005.
- ORTEGA GIMÉNEZ, A., HEREDIA SÁNCHEZ, L.S.: “El derecho al voto de los extranjeros en las elecciones municipales españolas. ¿Integración o interés?”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. VIII, 2008.
- ORTEGA GIMÉNEZ, A.: *Formularios de nacionalidad y extranjería*, Grupo Difusión, Madrid, 2008.
- ORTEGA MARTÍN, E.: *Manual de Derecho de Extranjería*, 4ª edición, La Ley, Madrid, 2010.
- *Manual práctico de derecho de extranjería. Obra actualizada al Real Decreto 864/2001, de 20 de julio*, Europea de Derecho, Madrid, 2001.
- PAJARES, M.: *El proceso de regularización de 2005. Sus efectos posteriores sobre la inserción laboral de la población inmigrada*, “La inmigración en España en 2006”, Aja, E. y Arango, J. (eds.), *Anuario de inmigración y políticas de inmigración*, CIDOB, Barcelona, 2007.
- PEÑA PÉREZ, A.: “Inmigrantes ilegales: concepto infame. Responsables y deshonorados”, *Revista de Derecho Migratorio y Extranjería*, nº29, 1er cuatrimestre 2012.
- PÉREZ SOLA, N.: “La directiva de retorno y la involución en la Europa de los derechos”, *Revista de estudios jurídicos*, nº 8, 2008.
- RIUS SANT, X.: *El libro de la inmigración en España. Historia, legislación, política y debate social desde el franquismo hasta nuestros días*, Almuzara, Córdoba, 2007.
- ROIG, E.: “El reglament d’estrangeria”, *Anuari de la Immigració a Catalunya* 2001, Fundació Bofill, Barcelona, 2002.

- ROJO, E.: *Inmigración y mercado de trabajo en la era de la globalización: estudio de la normativa internacional, comunitaria y española*, Lex Nova, Valladolid, 2006.
- RUIZ CAHORRO, L.: *La participación de los extranjeros en la esfera pública*, “Inmigración, Estado y Derecho: perspectivas desde el siglo XXI”, Balardo Ruiz-Gallegos, M. (Dir.), Bosch, Barcelona, 2008.
- SAGARRA, E.: “*Sujeto legitimado, sujeto interesado y sujeto afectado en el proceso de regularización «normalización» de inmigrantes del 2005*”, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, nº 8, 2005.
- “*Los derechos políticos de los extranjeros en España: Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales*”, Inmigración, Estado y Derecho, dirigido por Manuel Balado, Bosch, Barcelona, 2008.
- SÁNCHEZ JIMÉNEZ, M<sup>a</sup>.A.: *Derecho de Extranjería. Un análisis legal y jurisprudencial del Régimen Jurídico del extranjero en España*, Murcia, 2005.
- *El impulso del reconocimiento del derecho de sufragio de los inmigrantes a través de la vía legislativa*, “La integración de los extranjeros: un análisis transversal desde Andalucía”, Sánchez Lorenzo, S. (ed.), Barcelona, 2009.
- SANTOLAYA MACHETTI, P.: *Los inmigrantes en situación irregular: derechos, expulsión y regulación (1990- 2004)*, “Veinte años de inmigración en España. Perspectiva jurídica y sociológica (1985-2004)”, Aja, E. y Arango, J., (eds.), Fundación CIDOB, Barcelona, 2006.
- “*La gestión de la inmigración en la VIII legislatura (2004-2008)*”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 80, 2009.
- SANTOLAYA MACHETTI, P. y DÍAZ CREGO, M.: *El sufragio de los extranjeros. Un estudio de Derecho comparado*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.
- SANTOLAYA MACHETTI, P. y REVENGA SÁNCHEZ, M.: *Nacionalidad, extranjería y derecho de sufragio*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.
- SARTORI, G.: *La sociedad multiétnica*, Taurus, Madrid, 2001.
- SOLANES, A.: “*¿Cómo gestionar los flujos migratorios para potenciar la inmigración legal?. Un análisis jurídico desde España*”, Migraciones Internacionales, vol. 4, nº 4, 2008.

- “*¿Integrando por ley?: de los contratos europeos de integración al compromiso de la Ley Autonómica Valenciana 15/2008*”, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, nº 20, marzo 2009.
- *Informe sobre la necesidad y oportunidad de la ratificación por España de la Convención Internacional de la Organización de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios*, DIM Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria per a la Immigració, Barcelona, 2008.
- VACAS FERNÁNDEZ, F.: “*El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento del Derecho al sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones desde el Derecho Internacional*”, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, nº 20, 2009.
- VIDAL, M.C.: *Constitución y extranjería: los derechos fundamentales de los extranjeros en España*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002.



## WEBGRAFÍA:

- Área de extranjería del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza:

<http://www.reicaz.es/extranjeria>

- BOE:

<http://www.boe.es>

- Consejo de Estado:

<http://www.consejo-estado.es>

- Consejo de Europa:

<http://www.coe.int>

- DOUE:

<http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es>

- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante- Oficina Única de Extranjeros de Alicante:

<http://www.consultor.com/oue/>

- Instituto Nacional de Estadística (INE):

<http://www.ine.es>

- Migrar con Derechos:

<http://www.migrarconderechos.es>

- Ministerio del Interior:

<http://www.mir.es>

- Ministerio de Justicia:

<http://www.mjusticia.es>

- Ministerio de Trabajo e Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración:

<http://extranjeros.mtas.es>

- Observatorio Valenciano de la Inmigración (OVIM):

<http://www.observatorioinmigracion.gva.es>

- Organización Internacional del Trabajo:

<http://www.ilo.org>

- Unión Europea:

<http://europa.eu>

